



**La rivalidad entre los controles político-económico del
mercado y poliárquico-electoral en la toma de
decisiones gubernamentales.**

Análisis y lecciones del caso argentino (1989-2005).

Tesis que para obtener el título de Doctor en Investigación
en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política
presenta:

LUIS DANIEL VÁZQUEZ VALENCIA

Director de tesis: Dr. Dante Avaro

Lectores: Dra. Karina Ansolabehere

Dr. Eduardo Basualdo

México, D.F. julio 2007.

*Esta Investigación fue realizada gracias al apoyo del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)*

SECCIÓN II EL CONTROL POLÍTICO-ECONÓMICO PROVENIENTE DEL MERCADO SOBRE LAS DECISIONES GUBERNAMENTALES EN MATERIA DE POLÍTICA ECONÓMICA.

Esta segunda sección, integrada sólo por el capítulo 4, se dedica al análisis del control político-económico proveniente del mercado sobre las decisiones gubernamentales. Durante toda esta sección se utiliza la reconstrucción histórica de los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner como base empírica de las afirmaciones inductivas de este capítulo.

Si bien durante toda la sección se intenta combinar la teoría existente con los casos empíricos a la par que se genera nueva teoría de la relación decisiones gubernamentales – control del mercado, los primeros tres puntos del capítulo (4.1 – 4.3) se dedican a la elaboración teórica necesaria para entender por que los movimientos del capital, que en principio pudieran obedecer a explicaciones estrictamente económicas, tienen importancia y consecuencias políticas logrando constituirse como recursos políticos en la toma de decisiones gubernamentales.

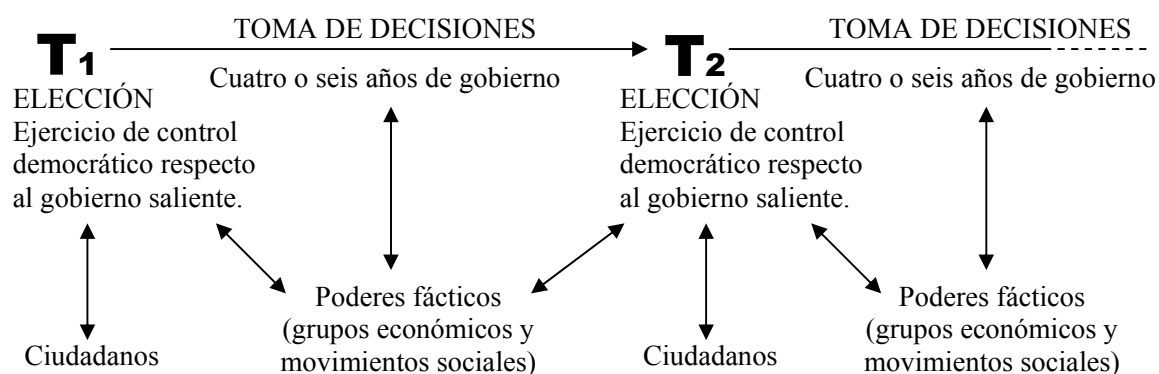
En los siguientes tres puntos (4.4 – 4.6) se analizan las expresiones del capital como recursos políticos: la entrada, no entrada y salida de capitales, la dependencia estatal al capital y la dependencia social al capital. Estos tres recursos políticos del capital, si bien son ejercicio de poder estructural (no hay necesariamente cabildeo de por medio), se encuentran dentro de las expresiones de la primera dimensión del poder, es decir, se trata de decisiones observables del capital que conllevan una influencia sobre la toma de decisiones gubernamentales en materia de política económica. En cambio, en el punto 4.7 se estudian los recursos políticos del capital provenientes de la toma de no-decisiones en los términos de la segunda dimensión del poder. Finalmente, en la última de las secciones se revisan los recursos políticos del capital de acuerdo a la tercera dimensión del poder a partir de un concepto que se ha vuelto clave para entender el nuevo orden político-económico: la competitividad.

CAPÍTULO 4.-EL PODER ESTRUCTURAL DEL CAPITAL EN LA LIMITACIÓN DE LAS DECISIONES GUBERNAMENTALES.

4.1. La conflictiva relación entre democracia y capitalismo

Como mencioné en la introducción, el principal interés de este trabajo es analizar la relación mercado–democracia¹. Encararé esta relación desde la distribución de los recursos políticos en la sociedad y la responsabilidad o condicionamiento del gobierno en la toma de decisiones. Esto me lleva a abrir el análisis democrático a puntos que van más allá de la elección y de la relación ciudadano–partidos políticos–gobierno electo para abarcar también a la democracia como forma de gobierno funcionando y tomando decisiones en medio de interacciones con ciudadanos, movimientos sociales y grupos de poder económicos (mi interés se centra en estos últimos) (cuadro 178).

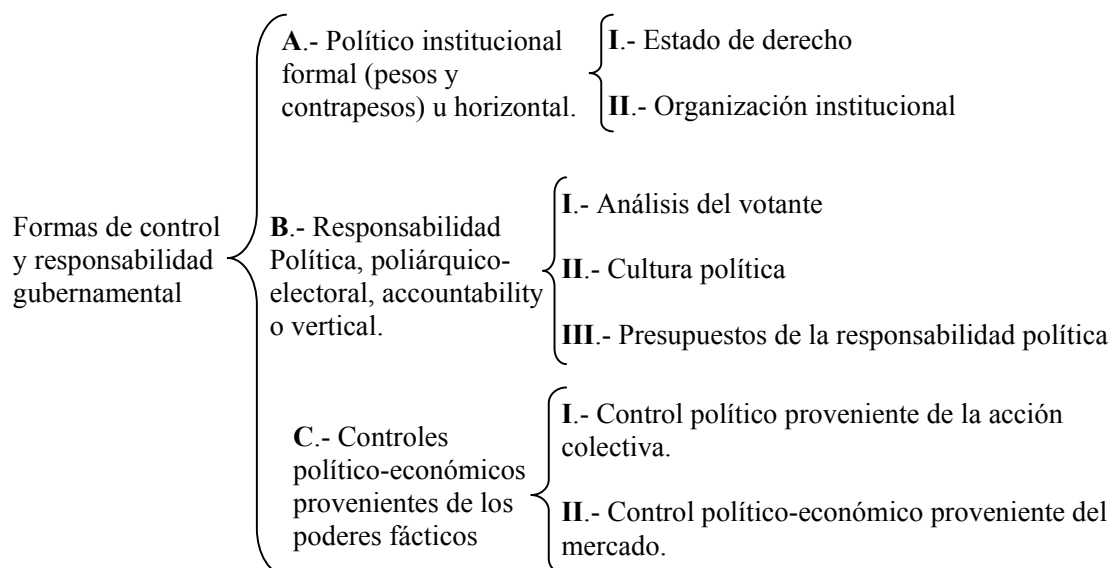
Cuadro 178.- La democracia como método de elección y como forma de gobierno



Despegar la lupa de la elección incluyendo en el esquema democrático tanto a los poderes fácticos como a la toma de decisiones conlleva analizar relaciones de poder que condicionan al gobierno, a estas relaciones les llamo indistintamente formas de control o responsabilidad gubernamental. En el régimen democrático hay al menos tres formas de control gubernamental: el político institucional, el poliárquico-electoral y el proveniente de los poderes fácticos. Del desglose realizado en el cuadro 179 voy a trabajar sobre la relación entre el punto BIII -los presupuestos de la responsabilidad política, control poliárquico electoral o accountability- que serán analizados en el capítulo siguiente, y el CII -el control político-económico proveniente del mercado- al cual le dedicaré este capítulo.

¹ Existe la posibilidad de analizar esta relación de forma inversa (democracia–mercado) en cuyo caso el análisis se centraría en el impacto y consecuencias que la instauración de un régimen democrático tiene en el funcionamiento del mercado, mi interés es la relación contraria, qué impactos y consecuencias tienen las decisiones del mercado en la democracia.

Cuadro 179.- Formas de control y responsabilidad gubernamental



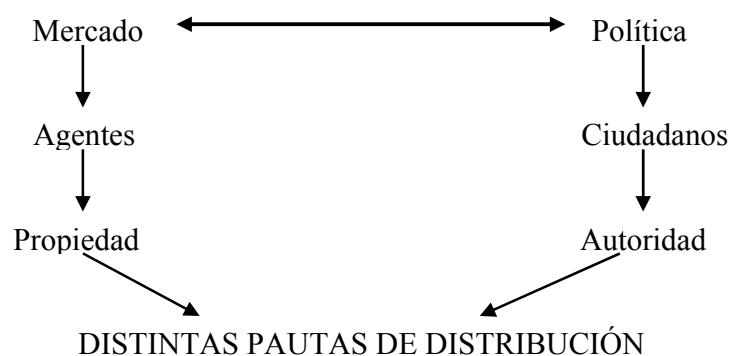
No obstante que el control poliárquico-electoral será analizado a detalle en el capítulo siguiente sirva adelantar que su principal andamiaje institucional está formado por las elecciones periódicas por lo que su objetivo es controlar la toma de decisiones gubernamentales a través del voto siendo su principal portador el ciudadano. De esta forma retomo la propuesta lanzada por Adam Przeworski (1986, 1989, 1990 y 1991) y Charles Lindblom (1977) para analizar la relación mercado–democracia como una constante tensión entre el régimen político y el régimen económico: los individuos son a la vez ciudadanos y agentes del mercado². Se puede establecer un problema en torno a la asignación de recursos ya que la asignación preferida por el ciudadano y la ocurrida por el mercado suelen no coincidir. De esta forma, en la democracia capitalista existe una diferenciación institucional entre la propiedad y la autoridad y, por ende, existen también dos mecanismos de asignación: el mercado y el Estado. El mercado asigna recursos productivos por medio de los propietarios y la distribución a los consumidores resulta de interacciones descentralizadas; mientras que el Estado también distribuye o puede distribuir recursos productivos no sólo mediante impuestos y transferencias sino incluso regulando los costos relativos y los beneficios asociados con las decisiones privadas (Przeworski, 1990: 1 y

² Peor aún, bajo la forma de capitalismo neoliberal, explica Pablo González Casanova (1995: 588), se tiende a debilitar el carácter corporativo del Estado privilegiando la representación electoral frente a la gremial y sindical por lo que muchas de las esperanzas de mejoramiento de la calidad de vida descansan en la responsabilidad política proveniente del voto.

1991: 192). Esto genera una tensión permanente entre la democracia y el capitalismo, entre el mercado y el Estado³. De forma más específica, en la democracia los ciudadanos expresan preferencias acerca de asignaciones de recursos que no poseen a partir de un derecho de voto distribuido equitativamente, es decir, la democracia ofrece a las personas económicamente más desaventajadas la oportunidad de enmendar esta situación a través del Estado: activar la acción gubernamental para remendar las fallas del mercado.

Se generan dos canales de comunicación hacia el Estado: uno proveniente de la responsabilidad política a través de las elecciones y otro proveniente del mercado. Estos dos mecanismos, al ser paralelos, pueden conducir propuestas no sólo distintas sino incluso contradictorias entre sí y presentarlas al mismo tiempo. Esto tiene una importante consecuencia: se podría generar una rivalidad entre el control poliárquico-electoral y el control proveniente del mercado. Ahí donde el mecanismo esté mejor institucionalizado por medio de recursos políticos más eficaces, la balanza se inclinará a su favor (cuadro 180).

Cuadro 180.- Tensión entre el mercado y la política



Explica Carlos Acuña (1995: 231) que durante décadas esta tensión entre democracia y mercado se presentó en la Argentina como si se tratara de regímenes irremediablemente excluyentes, con una clase capitalista argentina que percibía en la democracia una amenaza para sus intereses ya que los partidos de derecha se mostraban incapaces de llegar al poder mediante elecciones frente a sindicatos y organizaciones populares poderosas y militantes. Incluso, sigue Acuña, pese a las victorias electorales de partidos identificados con la izquierda, lo cierto es que la institución de la propiedad

³ Para Adam Przeworski (1991: 192) pese a la preferencia del ciudadano y la existencia de todas las condiciones materiales necesarias para hacer realidad estas preferencias, la asignación democráticamente elegida resulta inalcanzable bajo el capitalismo.

privada no se vio amenazada a diferencia de la tasa de ganancia, el poder del mercado como asignador de recursos y el control del proceso productivo a nivel de plantas. Sin embargo, la experiencia de la dictadura de 1976-83 modificó la percepción empresarial de costos y beneficios entre dictadura y democracia. Esta percepción de que los costos de vivir en democracia eran mejores que vivir en dictadura para la formulación de negocios se consolidó debido a: 1) la victoria en las elecciones de 1983 del partido radical que representaba a la derecha frente al partido justicialista-peronista, 2) la neutralización del riesgo de que algunas organizaciones empresariales fueran desplazadas de la actividad político-empresarial, 3) el reconocimiento de la hegemonía de la UIA sobre la adversaria CGE-CGI y 4) el enfrentamiento del gobierno con organizaciones sindicales por temas como las paritarias o el control de las obras sociales (Acuña, 1995: 270). Pese a que para los empresarios argentinos la democracia dejó de ser percibida como una amenaza, la tensión entre las expectativas de distribución generadas por un régimen democrático y la distribución realizada por el mercado se mantuvieron.

Con la explicación de cómo entiendo y analizo a la democracia, cuáles son las formas de control gubernamental que hay y anunciando que me interesa estudiar la conflictiva relación del control poliárquico electoral y el control político económico proveniente del mercado vamos ahora al análisis de los recursos políticos del mercado.

4.2. La teoría democrática, los poderes fácticos y la primera dimensión del poder.

Tanto Joseph Schumpeter en *Capitalismo, socialismo y democracia* (1942) como Anthony Downs en *Teoría económica de la democracia* (1957) incluyen en su modelo a los grupos empresariales aunque con papeles sumamente residuales. Por ejemplo, Joseph Schumpeter (1942: 368-376) sabe que existen los poderes fácticos que generan presiones a los gobiernos e intenta solucionar este hecho mediante la autodisciplina democrática. De acuerdo con esta condición de éxito del método democrático los partidos de oposición deben resistir la tentación de derribar o poner en apuro al gobierno cada vez que tengan ocasión y los poderes fácticos deben respetar la división del trabajo, abstenerse de dar instrucciones al gobierno y no tener ninguna ingerencia en la actividad de sus representantes. En el modelo construido por Anthony Downs hay cuatro actores principales: 1) el gobierno que trata de maximizar su base de apoyo político para conseguir

la reelección, ya del individuo, ya del partido; 2) la oposición cuyo objetivo es conseguir el poder político en la siguiente elección; 3) el votante que busca maximizar su bienestar a través del voto; y 4) los grupos de intereses que son líderes empeñados en que el gobierno adopte alguna medida concreta que le beneficia haciendo ver que representan a los votantes. Debido a los conflictos de información Downs concluye que el régimen democrático terminará beneficiando a los productores sobre los consumidores (hecho en el que profundizaremos en el capítulo siguiente). El punto que ahora me interesa resaltar es que dos de los textos fundantes del análisis del modelo elitista-procedimental de la democracia toman en consideración la existencia de poderes fácticos como parte del modelo democrático, mientras que fallidamente Joseph Schumpeter intenta eliminarlos con la autodisciplina democrática como condición de éxito, en el caso de Downs aparecen en el modelo pero como actores residuales.

Luego de los conflictos que ambos autores enfrentan para explicar a los poderes fácticos en el régimen democrático y principalmente para explicar el correcto funcionamiento de la democracia pese a los conflictos de información (en Downs) o racionalidad (en Schumpeter) dos son las corrientes principales que abrevan de esta discusión: el institucionalismo y el pluralismo⁴. La primera retoma la tendencia de los dos textos para analizar a la democracia a partir de los jugadores políticos institucionales formales sin dar espacio a los poderes fácticos y, particularmente el institucionalismo de la acción racional, deja de lado los conflictos de información, racionalidad y formación de preferencias tomándolas como dadas. En cambio, la corriente pluralista, encabezada por Robert Dahl, retoma la idea de la democracia como método pero no está contenta con analizar sólo a los jugadores institucionales formales en la democracia, para los pluralistas el poder proviene desde la sociedad, a partir de poderes fácticos y considerando la distribución de los recursos políticos. Este será uno de los principales marcos de análisis⁵.

⁴ Debo comentar que el pluralismo nace en 1908 con el texto *The process of government* de Arthur Bentley, por ello si bien su desarrollo académico es anterior a la publicación del libro de Schumpeter, lo cierto es que uno de los principales exponentes -Robert Dahl- sí es un lector y continuador de la idea de democracia como procedimiento de elección.

⁵ Si bien el pluralismo entendido como primera dimensión del poder es uno de los marcos fundantes del análisis, no paso por alto que ha sido complementado por una segunda y tercera dimensión del poder a la par que dialoga y confronta al elitismo (particularmente al de Wrigth Mills) y al corporativismo.

El pluralismo parte de los siguientes supuestos: el poder es competitivo, se encuentra fragmentado en una sociedad y por ello es difuso; toda la gente tiene algún poder; el gobierno es una máquina regulada por el equilibrio de los intereses en competencia; y, por ende, ningún gobierno puede dejar de responder tarde o temprano a los deseos y exigencias de los distintos intereses concurrentes. Los pluralistas crean un método que implica seleccionar una serie de decisiones clave a partir de conflictos observables, identificar a las personas que tomaron o se involucraron en la toma de esa decisión, observar las conductas de estos actores y analizar la salida del conflicto. Hay poder cuando A participa con éxito en la toma de decisiones que afecta a B (Dahl, 1961). En este sentido, el poder es identificado como el ejercicio con éxito de los recursos políticos en la toma de decisiones donde el recurso político es “un medio mediante el cual una persona puede influir en el comportamiento de otras personas; los recursos políticos incluyen, por lo tanto, el dinero, la información, los alimentos, la amenaza de aplicar la fuerza, trabajos, la amistad, la categoría social, el derecho de legislar, de votar y una gran multitud de otras cosas” (Dahl, 1963: 23)⁶.

4.3. Los recursos políticos del mercado y el poder estructural del capital.

En un régimen económico capitalista muchas de las variables clave para un gobierno son delineadas en buena parte por decisiones privadas empresariales. Por esta razón tanto Charles Lindblom (1977) como Kevin Farnsworth (2000) observan que los actores capitalistas juegan un importante papel en la toma de decisiones, tienen eficientes recursos políticos para ello, influenciando a los decisores públicos y participando directamente dentro de las instituciones estatales. En el capitalismo las decisiones de producción y distribución, la tecnología industrial nacional, los patrones de organización, la localización industrial, la estructura del mercado, la asignación de recursos y compensaciones y el estatus ejecutivo quedan en manos de los empresarios (Lindblom, 1977: 171). De la misma forma, importantes indicadores de repercusión social dependen del capital como el

⁶ El pluralismo admite que hay una desigual o irregular distribución de los recursos políticos. El punto principal a distinguir es si la desigualdad de recursos políticos es de tipo acumulativo o no acumulativo. El caso clásico de recursos acumulativos son las sociedades agrarias donde la tierra de un hombre determina no sólo su riqueza sino también su categoría social, sus oportunidades de educación y sus habilidades políticas, administrativas y militares (Dahl, 1963: 102). Puede haber sociedades donde la desigualdad de recursos sea no acumulativa extendiendo la esfera decisional y haciendo entrar a una mayor variedad de partidos e intereses de forma tal que la gente que se encuentra en desventaja con respecto a un recurso sea compensada por el control de otro recurso.

crecimiento económico, el empleo, el nivel salarial, la inflación, etc. y de repercusión directamente estatal como la deuda, las tasas de interés, la recaudación, el déficit fiscal, etc. A partir de las facultades que en un régimen capitalista quedan en manos de los inversores privados, y por el peso que las mismas tienen en la conducción y desarrollo social, se debe hacer patente que hay una interconexión entre la responsabilidad gubernamental y la actividad productiva a partir de materias reguladas por el Estado como la fiscal, monetaria, comercial, patentes y marcas, transporte, etc. En este sentido, todo gobierno acepta la responsabilidad de hacer lo necesario para asegurar un mínimo de empleo y crecimiento que, en un orden capitalista, depende de la inversión privada (Lindblom, 1977: 174). Así, todos los gobiernos, independientemente de los partidos de los cuales procedan, necesitan contar con el apoyo y “confianza” de los grupos de industriales, de comerciantes y de inversionistas extranjeros y nacionales para lograr cierta inversión y crecimiento económico en sus Estados, lo que hace que esta posición privilegiada de los hombres de negocios no sea compartida por ningún otro grupo.

Estas variables son fundamentales en los niveles de aceptación del gobierno ya que son parte de lo que es visto por los ciudadanos como algunos de los principales problemas del país. En efecto, como se observa en el cuadro 181 entre 1987 y 1999 de 36 problemas a mencionar (3 por cada encuesta, 12 encuestas en total) 29 son económicos (desempleo, bajos salarios, inflación, jubilados y deuda externa) y 7 político-sociales (seguridad, corrupción o educación). Especialmente el desempleo y los bajos salarios se mantienen como dos de los principales problemas.

Cuadro 181.- Menciones de los principales problemas del país												
	Mar 87	Ene 89	Ago 90	Ago 91	Jul 92	May 93	Dic 94	May 95	Nov 96	Dic 97	Feb 98	Abr 99
Desempleo	43	46	53	54	55	74	73	85	78	82	71	85
Bajos Salarios	45	42	39	40	49	44	42	47	39	31	23	26
Inflación	40	48	36	20	11	5	3	3	2	2	2	3
Jubilados	0	0	0	0	0	27	31	35	28	19	17	18
Deuda	40	26	23	14	12	2	3	3	2	3	2	2
Seguridad	22	25	26	27	19	33	23	18	18	33	34	30
Corrupción	--	--	--	40	32	26	28	16	29	23	27	25
Educación	23	24	35	37	43	23	24	27	19	23	24	25

Fuente.- Mora y Montoya, 1999: 81.

Cuadro 182.- Relación inflación –imagen en Menem 1989 – 1993			
		Cambios en el nivel de inflación de un mes al siguiente	
Cambios en la imagen positiva de Menem		BAJA	SUBE
	BAJA	4	6
	SUBE	9	1
Fuente.- Mora y Araujo, 1993: 312.			

Incluso entre 1989 y 1993, cuando la inflación se encontraba dentro de los problemas apremiantes del país, los cambios en la imagen positiva y negativa de Carlos Menem estaban sumamente ligados al aumento o disminución de la

inflación. En 9 ocasiones que bajo la inflación mejoró la calificación de Menem mientras que en 6 ocasiones que subió la inflación bajó la imagen positiva presidencial (cuadro 182).

Esta incisión del mercado en el desarrollo cotidiano del gobierno genera un mejor andamiaje del control político-económico proveniente del mercado que le da prioridad sobre el control poliárquico-electoral y donde la toma de decisiones se realizaría pese “al costo político” que la misma pueda tener para con el electorado (Lindblom, 1977: 190). Así, tenemos –en materia económica- **dos grupos o líderes que afectan las decisiones y consecuencias del mercado, el gobierno y el empresariado, pero sólo un control político deficiente sobre el gobierno.** Más aún, es posible que los recursos políticos provenientes del mercado no sean percibidos por la ciudadanía; por ejemplo nos explica Gerardo Adrogué (nov, 2000) que a la pregunta de por qué no crece Argentina, el grueso de los encuestados se congregó en tres líneas: por la corrupción de acuerdo con 4 de cada 10 argentinos; el segundo lugar lo ocupó el déficit intelectual de las clases dirigentes que incluyó la falta de preparación y capacidad y el tercer lugar lo ocuparon factores externos con 2 de cada 10 argentinos aduciendo esta causal. El punto llamativo es que frente a la inexistencia del crecimiento, es decir, de la voluntad de los empresarios de no invertir, su responsabilidad es pasado por alto por los encuestados. Sin embargo esto no siempre es así. Durante el año 2000 los ciudadanos identifican –con más del 60% de los encuestados- a quienes tienen mucha responsabilidad de la situación económica entre los que se encuentran: las empresas multinacionales, los bancos internacionales, los organismos internacionales de crédito, los partidos políticos y el congreso (cuadro 183).

Cuadro 183.- Nivel de responsabilidad atribuida a distintas instituciones en la problemática económica actual				
	MUCHO	ALGO	NADA	NS-NC
Empresas multinacionales. Abril 2000	66.0	21.4	5.6	7.0
Empresas multinacionales. Sep. 2000	69.2	19.6	6.0	5.2

Bancos internacionales. Abril 2000	58.4	25.4	5.8	10.4
Bancos internacionales. Sep. 2000	69.1	18.8	5.9	6.2
Bancos nacionales. Abril 2000	35.1	38.9	11.4	14.6
Bancos nacionales. Sep. 2000	40.3	34.0	18.7	7.1
Organismos internacionales de crédito Abril 2000	66.5	15.1	5.1	13.3
Organismos internacionales de crédito Sep. 2000	69.9	18.2	3.6	8.3
Partidos políticos. Abril 2000	60.9	24.9	7.2	7.1
Partidos políticos. Sep. 2000	67.4	23.0	4.6	5.0
Medios de comunicación social. Abril 2000	29.2	37.3	23.9	9.6
Medios de comunicación social. Sep. 2000	30.1	40.4	21.2	8.3
Sindicatos. Abril 2000.	57.4	22.4	13.5	6.7
Sindicatos. Sep. 2000	49.3	33.8	10.1	6.7
Congreso. Abril 2000	60.5	26.3	6.1	7.1
Congreso. Sep. 2000	69.5	17.3	5.9	7.3
Poder judicial. Abril 2000.	55.3	27.9	8.0	8.9
Poder judicial. Sep. 2000	58.0	27.8	6.9	7.2
Empresarios nacionales. Abril 2000	50.3	33.1	8.6	8.0
Empresarios nacionales. Sep. 2000	42.0	42.9	7.8	7.4
Empresas privatizadas. Sep. 2000	55.0	27.3	10.8	6.9
Fuente.- Encuestas de OPSM realizadas en Capital Federal.				

En principio, el cabildeo se ha establecido como una forma cotidiana de hacer llegar las demandas a los decisores y de expresar, explicitar y clarificar las posturas de los poderes fácticos. Sin embargo, las capacidades de realizar un cabildeo fructífero dependen de los recursos políticos que el poder fáctico en cuestión tenga para amagar la negociación, es decir, no sólo juega el argumento más convincente sino el recurso político más eficaz. No obstante, los recursos políticos con que cuenta el capital pueden también expresarse de forma estructural. **La habilidad estructural aparece cuando el capital puede ejercer influencia en la toma de decisiones sin ejercer presión de forma directa a través del cabildeo** (Farnsworth,2000: 101). Lo cierto es que el poder de agencia y el poder estructural usualmente se interrelacionan en su aplicación.

Ahora bien, las grandes empresas transnacionales cuentan con recursos políticos para actuar en la economía sobre otras empresas y en la política sobre el gobierno. Nos centraremos sobre estos últimos a partir de tres grupos: 1) la entrada, no entrada y salida de capitales que conlleva 2) la dependencia estatal al capital (recaudación y deuda) y 3) la dependencia social al capital (empleo, inflación, salario y pobreza). Asimismo observaremos las tres dimensiones del poder, la distribución de los recursos políticos para cada dimensión y la aplicación del poder estructural del mercado.

No debemos pasar por alto que hay distintos tipos de capitalismo y en cada uno los recursos del capital serán gradualmente diferentes. Haciendo un exceso de simplificación tenemos tres patrones capitalistas: el neoliberalismo, la tercera vía y el keynesianismo, que junto al capitalismo desarrollado o subdesarrollado nos permiten construir la siguiente matriz de 2 x 3 (cuadro 184).

Cuadro 184.- Distintos tipos de capitalismo.			
	Keynesianismo	Tercera Vía	Neoliberalismo
Desarrollado	Noruega, Suecia, Alemania, Inglaterra (pre Thatcher).	Estados Unidos (Clinton); Inglaterra (Blair)	Estados Unidos (Reagan, y Bush). Inglaterra (Thatcher).
Subdesarrollado	Populismo en América Latina (1930-1970).		Planes de ajuste en América Latina (1970 en adelante).

Incluso dentro de cada casilla hay diferencia en la forma que cada país adopta al modelo en cuestión: las diferencias entre los Estados de bienestar alemán, noruego o sueco; entre el populismo cardenista y peronista; entre el neoliberalismo adoptado por México, Argentina o Centroamérica, etc. Esto hace variar el grado de los recursos políticos del capital pero la existencia del recurso político y del control gubernamental proveniente del mercado se mantienen. Así, el gobierno tiene cierta autoridad sobre las actividades empresariales pero limitada por sus posibles efectos adversos a los negocios que implicaría desempleo u otro tipo de efectos inaceptables para el gobierno como un bajo crecimiento y un retraso industrial o comercial.

En Argentina entre 1989 y el 2001 el modelo económico que imperó es el capitalismo neoliberal. De hecho nos encontramos precisamente frente a la formación e institucionalización de ese modelo⁷. De acuerdo con Robert Boyer (1989: 21) para entonces la reactivación keynesiana por medio del presupuesto y la política monetaria expansiva había sido superada. De hecho, el principal flagelo de la transición del keynesianismo al neoliberalismo -la inflación- fue precisamente moderado mediante el control de la emisión monetaria, pero además de la inflación se redujo la producción, se aumentó la desocupación y se generaron efectos disuasivos en la inversión industrial. Así, la política monetaria actuó tanto sobre los precios como sobre la producción y el empleo. En cambio, entre el 2002 y el

⁷ Para algunos Argentina se vuelca al neoliberalismo en 1976 con el golpe de Estado, para otros el inicio lo marca la reforma financiera de 1977, sin embargo ni la junta militar ni el primer gobierno democrático a cargo del radicalismo llevan a cabo un proceso de reformas estructurales tan acabado como sucedió en el gobierno de Menem.

2005 encontramos ciertos cambios en la política económica que nos ubican en un nuevo patrón de acumulación que si bien mantiene algunas continuidades también presenta importantes rompimientos.

4.4. La entrada, no entrada y salida de capitales.

Uno de los elementos que distinguen al capitalismo es que la inversión es financiada principalmente por la ganancia a la par que el capital cuenta con la capacidad de decidir el lugar y momento de la inversión y la salida de la misma; el derecho de propiedad supone la capacidad jurídica para invertir en el país y en la empresa que nos plazca a partir de los réditos que la misma ofrezca y supone también la capacidad de retirar la inversión en cualquier momento así como cambiarla a dólar, euro o cualquier otra moneda. Esto otorga tres posibilidades de acción del capital:

Cuadro 185.- Posibilidades de acción del capital

entrada \longleftrightarrow **No entrada** \longleftrightarrow **salida**

Lo primero a mencionar es que cuando digo que la inversión es un recurso político del capital no quiero decir que los inversores necesariamente 1) sean conscientes de ello y 2) inviertan a partir de criterios estrictamente políticos. El proceso de entrada / no entrada / salida de capitales puede variar por razones económicas, políticas y por una combinación de ambas⁸. Podemos suponer que cuando en el poder se encuentran gobiernos proclives al capitalismo neoliberal las variaciones de inversión tendrán su principal razón en causas económicas como: la falta de competitividad inherente al propio Estado que no empata la tasa de ganancia esperada con las expectativas del inversor o por causas económicas y externas (cambios de flujos de capital que encontraron mejores refugios) como sucedió a Carlos Menem y a Fernando de la Rúa. En cambio, cuando se trata de gobiernos adversos al capitalismo neoliberal uno podría suponer que las razones de variación de la inversión son político-económicas como: generación de riesgo a la inversión total o generación de riesgo a la tasa de ganancia como medianamente aconteció con Kirchner. El punto a

⁸ No debo pasar por alto la economía tiene reglas y lógicas inherentes al propio mercado, en este sentido distintos autores dan diversas razones desde la economía para explicar la internacionalización de la inversión como son: el *resource seeking*, *market seeking*, el *efficiency seeking* y el *strategic asset seeking* (Chudnovsky, 1999). A la par que hay múltiples factores que explican y determinan la inversión tanto de competencia entre empresas como de infraestructura, mercados cercanos y mercado interno del país receptor (Chudnovsky, 1999 y Kosacoff, 1999).

subrayar es que **mi análisis se centra en las consecuencias de la entrada / no entrada / salida de capitales en la toma de decisiones gubernamentales independientemente del motivo por el cual el inversor decidió entrar, mantenerse o salir.**

En torno a la salida de capitales, el primer problema al que nos enfrentamos es su conceptualización. La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre Fuga de Divisas de la Argentina (2005: 17) diferencia entre una salida normal de capitales y una fuga de divisas. Las primeras ocurren a raíz de la expansión de la actividad económica de sus residentes, lo que incluye: el financiamiento de los residentes para propósitos de exportación, los activos mantenidos por las empresas y bancos en el exterior con fines operacionales y las inversiones directas en el exterior realizadas con el fin de ampliar la capacidad productiva, mejorar la prestación de servicios o conquistar nuevos mercados. En cambio, el término fuga de capitales se aplica cuando los residentes enfrentan expectativas crecientes de pérdidas substanciales sobre los activos domésticos elevando la tasa de riesgo y provocando un cambio significativo en su cartera de inversiones de los activos domésticos hacia los externos.

El punto es que el capital puede determinar ciertas medidas para decidirse a invertir y puede establecer ciertos requisitos para mantener ese nivel de inversión amagando con reducirlo a cero. La quiebra de un país por salida masiva de capitales o por una negativa sistemática a la inversión y al préstamo no es un acto merecedor de un apercibimiento administrativo y mucho menos un acto penal. Por el contrario, una de las actuales tendencias que forman parte de la competitividad es la desregulación para dar mayor velocidad y poner menos obstáculos a este tipo de recursos políticos. La principal fuente de inversión en el modelo capitalista es la ganancia, de aquí un punto interesante que destaca tanto Adam Przeworski (1989: 46) como Julio Sevares (2005: 126): si bien la obtención de ganancia es una de las premisas necesarias para la inversión, el allegarse de ganancia no es suficiente para que un país asegure su fuente de inversión ya que la ganancia puede ser acumulada, consumida, exportada o mal invertida. De hecho, un intento de obligación de reinversión conlleva una regulación estatal que garantice la reproducción del capital que, en el marco de la competitividad global, es contraria a la libre movilidad de capitales. Si no podemos obligar a los inversionistas a invertir, a los empresarios a emprender, entonces es necesario convencerlos. Tan pronto como la decisión de la inversión es privada, un

elemento del capitalismo que se exagera en el esquema neoliberal es la actividad del Estado para llevar a cabo las modificaciones necesarias que generen un “mayor atractivo” a la inversión⁹. Toda la serie de garantías a los inversionistas constituyen la categoría conocida como competitividad –que analizaremos más adelante- concepto que es sumamente útil puesto que, en efecto, los diversos Estados nacionales compiten por el acceso a los capitales inversores y es por esta competencia que la entrada y salida de capitales se convierte en un recurso político.

La movilidad de los capitales en la era global: la internacionalización del comercio y la producción.

Si bien la inversión como recurso político es inherente al capitalismo como régimen económico de propiedad privada, se debe mencionar que con la movilidad de capitales en la era global, la internacionalización del comercio y de la producción y la formación de grandes empresas transnacionales se ha apuntalado este recurso político no sólo por la facilidad de la movilidad del capital, la concentración del mismo y el aumento de los montos en movimiento sino también por la des-identificación del capital con el Estado en el cual se invierte.

Si bien existen muchos tipos de grupos empresariales, los que cuentan con la inversión, no inversión y salida de capitales como recurso político son sólo aquellos que tienen capacidad de movilización de un territorio nacional a otro, es decir, las empresas transnacionales o multinacionales¹⁰. Desde principios del siglo XX las empresas transnacionales son protagonistas de la modernización y segmentación de la estructura productiva, del aumento en la productividad y de los cambios en los patrones organizacionales; más aún, una de las principales particularidades de estas empresas es que

⁹ El atractivo consiste en mantener seguras, en principio, y mejorar al máximo las tasas de utilidad de los inversionistas a través de diversas medidas como son: el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, la estabilidad financiera del Estado a través de sus ingresos fiscales y su manejo de deuda, el establecimiento de medidas fiscales preferentes para los inversionistas, la flexibilización de la relación laboral, la desregulación administrativa, el establecimiento de un régimen de propiedad intelectual, el mejoramiento constante de la infraestructura, la apertura a nuevas áreas de inversión que implican tasas de utilidad seguras y posibles monopolios u oligopolios naturales como son la electricidad, la industria petrolera, el sistema bancario, los medios de comunicación y vías satelitales, la industria carretera, etc.

¹⁰ Pueden existir grupos empresariales conformados por la pequeña y mediana industria junto con agrupaciones campesinas que tengan influencia en la toma de decisiones gubernamentales a través del cabildeo, incluso estas agrupaciones pueden utilizar como recurso político el de no inversión llevando sus ganancias a bancos internacionales y provocando también una salida de capitales, pero las capacidades de movilización y uso de los recursos políticos mencionados son muy menores en comparación con las grandes empresas transnacionales.

tienen acceso fluido al financiamiento en los mercados internacionales de capitales y, por ende, están en condiciones de invertir a largo plazo. Particularmente las empresas transnacionales han variado su forma organizacional de tipo U o jerárquica a una de tipo H para pasar posteriormente a una de tipo M o integración simple finalizando en la conocida empresa red o de integración compleja a principios de la década de los 90¹¹. Así, estas empresas han tomado la forma de conglomerados o grupos económicos conceptuados por Daniel Chudnovsky (1999: 40) como: “un conjunto de firmas que operan en distintos mercados bajo un control empresarial y financiero común”. De este capital transnacional, algunos segmentos tendrán mayor capacidad de movimiento y otros menos; por ejemplo, el capital productivo de alta tecnología –como el farmacéutico- tiene requerimientos industriales de mano de obra y de instalaciones tales que hacen muy difícil una salida de capitales, aunque puede mantener como recurso político la variación en los niveles de flujos de inversión¹². Por lo que hace al capital productivo de baja tecnología –como las maquiladoras- la posibilidad de movimiento del capital es mucho más sencilla debido a los requerimientos de mano de obra no calificada y a la sencillez de las instalaciones o talleres. Finalmente, el más ágil de los capitales es el financiero que se puede mover en grandes cantidades y en muy poco tiempo.

El método más frecuente usado por las empresas transnacionales para ingresar en Latinoamérica ha sido la adquisición de firmas ya instaladas tanto públicas como privadas (como observamos durante el recuento histórico). Por ende, muchas de las firmas domésticas, particularmente las pequeñas y medianas, frente a sus dificultades para adaptarse a las nuevas reglas de la competencia no han tenido mayores opciones que vender sus activos por falta de recursos financieros o tecnológicos suficientes. Sin embargo, también hubo empresas que soportaron la competencia y acumularon capacidades gerenciales, tecnológicas y financieras que les permitieron mantenerse en el mercado. En su trayectoria evolutiva realizaron alianzas con empresas transnacionales, ganaron nuevos

¹¹ Distintos autores han dado cuenta de esta transformación como son: R. H. Coase, Alfred Chandler, Robert Reich, Oliver Williamson y Manuel Castells. Incluso la ONU, en sus reportes de inversión mundial, analizó este proceso.

¹² Para un análisis de este tipo de industria y el uso de sus recursos políticos véase Vázquez, 2004; donde se analiza como la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica mexicana pone en duda tanto los 400 mdd de flujo anual de inversión como el desarrollo tecnológico de las medicinas de última generación en caso de que se aprobará la explotación pública de las patentes médicas para enfermedades graves como el SIDA.

mercados de exportación e incluso se convirtieron en emisoras de inversión extranjera (Chudnovsky, 1999: 8).

Con este proceso de transnacionalización, que en el caso argentino se dio durante la década de los 90 tanto a través de las privatizaciones de empresas públicas como mediante la compraventa de grandes empresas privadas, se incorporó tanto a la estructura económica como a la toma de decisiones políticas a nuevos actores socioeconómicos cuyo poder era mayor a la simple suma de sus activos. Al respecto explica Ricardo Sidicaro (2002: 181) que muchas de las empresas transnacionales eran simples filiales de empresas establecidas en países desarrollados que contaban con el apoyo de sus Estados aumentando su capacidad de negociación con el débil aparato gubernamental particularmente de Argentina. Este hecho se hizo evidente durante la crisis del 2001-2002 cuando, de acuerdo con los actores gubernamentales entrevistados, el ministerio de economía se convirtió en la pasarela de múltiples embajadores.

Asimismo, se debe destacar que en las empresas transnacionales, tan pronto como su principal objetivo es la maximización de ganancias a escala mundial, se genera una progresiva separación de sus intereses con los que encarna el Estado-nación. Al respecto afirma Raúl Ornelas (1995: 404) que "...la continuidad de su expansión y la racionalidad de sus operaciones tienden a chocar cada vez más con las necesidades que se sintetizan en la acción del Estado y de los capitales en el nivel nacional". Y en el mismo sentido observa Castells (1996: 116) que "... Al integrar a los países en una economía global, los intereses políticos específicos del Estado en cada nación se vinculan directamente con el destino de la competencia económica de firmas que no son nacionales ni están ubicadas en el territorio del país". Esta diferenciación de los objetivos de la inversión extranjera, la inversión local y el Estado se observó también en la formación de dos proyectos de nación en Argentina después de la crisis de 1995 y el abierto choque inicial entre el gobierno de Eduardo Duhalde con el capital financiero, los organismos internacionales de crédito y las empresas privatizadas que fue continuado por Néstor Kirchner. Sin embargo, es importante mencionar que para el caso argentino lo que fue beneficiado por el nuevo modelo económico y que podría llamarse capital local o doméstico en realidad también se encontraba sumamente transnacionalizado.

Además de este proceso de transnacionalización del comercio y la producción también se ha gestado un proceso de globalización financiera¹³. Así, el promedio de las operaciones diarias en el mercado mundial de divisas pasó de 15 mil mdd en 1973 a 1.3 billones en 1995; en 1980 las compras y ventas transfronterizas de activos financieros no alcanzaban el 10% del PIB de EU mientras que en 1993 llegaban al 135%; desde 1980 hasta el 2000 la economía de los países industriales creció a un 2.5% anual pero en ese mismo tiempo la liquidez internacional –a partir de las reservas internacionales de cada país- se multiplicó por más de 15, las operaciones cambiarias crecieron 30% anual y las emisiones de bonos y títulos de deuda 10% (Sevares, 2005: 110). Paralelamente los fondos especulativos mueven actualmente entre 600 mil y un billón de dólares diarios lo que equivale a 50 veces el valor del comercio mundial, mientras que en 1970 el movimiento de divisas equivalía a 6 veces el valor del comercio mundial (Sevares, 2005: 110-111). Todos estos hechos, de acuerdo con Theotonio Dos Santos (2004: 172), dieron paso al movimiento financiero mundial que originó el actual proceso conocido como globalización¹⁴: “El movimiento de capitales mundiales pasa cada vez más por las deudas públicas. La especulación cambiaria, antes relacionada con fenómenos de comercio, se asoció con flujos de capitales, el aumento de las remesas de ganancia, el pago de servicios técnicos y otros, el crecimiento del turismo y, finalmente, el pago de intereses, que pasaron a dominar las balanzas de pago de muchos países”. Explica Rosemary Thorp (1998: 218) que para América Latina la principal consecuencia de la globalización financiera ha sido el elevado grado de separación entre la finanzas, por un lado, y el comercio y la inversión, por el otro: el aumento en las utilidades financieras no tiene un paralelo en la inversión.

¹³ De acuerdo con Rosemary Thorp (1998: 217) la estructura financiera sufrió importantes cambios en la década de los setenta a partir de: 1) la fuerte competencia internacional que colocó a los bancos estadounidenses a la cabeza del auge de la banca internacional; 2) la subida del precio del petróleo que generó importantes excedentes que los bancos internacionales se vieron en necesidad de reciclar generando una expansión masiva en el movimiento internacional de recursos financieros; y 3) las inversiones en acciones y cartera se dispararon sostenidas por innovaciones financieras que tenían por objeto reducir el riesgo de los inversores. Se deben hacer notar algunos otros elementos clave como son: los avances tecnológicos en telecomunicaciones y computación que aceleraron la realización de operaciones e intercambio de información a nivel global; el rápido crecimiento de formas seguras de financiamiento, como los bonos y la aparición de inversores institucionales como los fondos de pensiones, seguros y fondos mutuales (Griffith-Jones, Marr y Rodríguez, 1994: 82). Por su parte, Griffith-Jones (2000: 13) expone la hipótesis de que la mayor inestabilidad de los flujos de capital se debe a este avance tecnológico.

¹⁴ En este mismo sentido opinan Robert Solomon y Manuel Castells. Para este último la informacionalidad, la productividad, la competitividad, la globalidad y la formación de organizaciones en redes son las características de la nueva organización tanto social como política y económica.

Asimismo América Latina ha aumentado sus tasas de interés para retener el capital financiero lo que ha disuadido la inversión productiva.

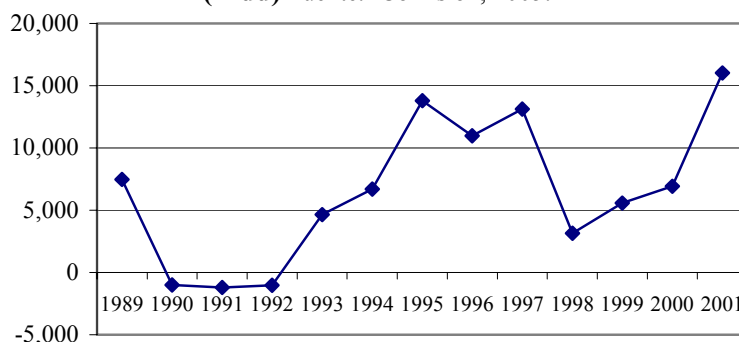
La inversión como recurso político en Argentina

El indicador de mayor importancia para analizar la inversión como recurso político es la fuga de capitales. Como se observa en los cuadros 186 y 187 Argentina viene de una estrepitosa salida de capitales en 1989 para tener capitales que regresan a suelo argentino entre 1990-1992 y reactivar después la salida de capital de forma incesante con años donde la salida se agudiza como 1995-1997 y el 2001.

Cuadro 186.- Fuga de capitales (mdd). Medición Basualdo-Kulfas		
AÑO	Variación Anual	Capital local en el exterior
1989	7481	43078
1990	-991	42431
1991	-1190	41241
1992	-1031	40210
1993	4650	44860
1994	6697	51557
1995	13791	65348
1996	10982	76330
1997	13126	89456
1998	3140	92596
1999	5567	98163
2000	6 933	105 096
2001	16026	121 122

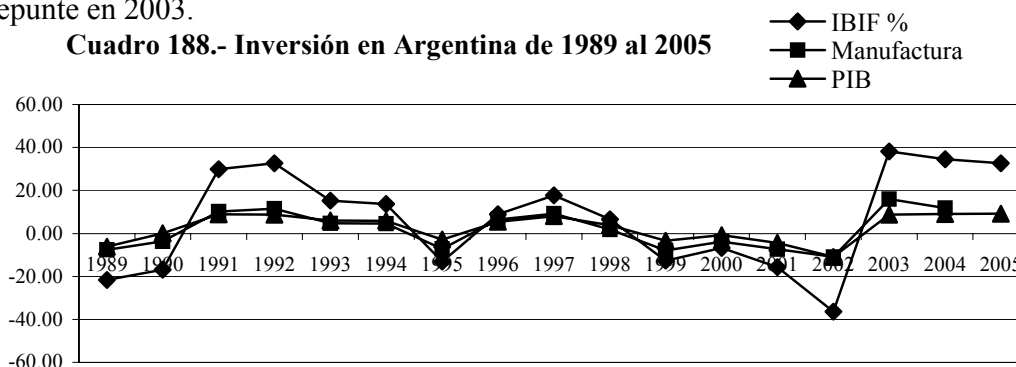
Fuente: Comisión, 2005: 21 – 23.

Cuadro 187.- Fuga de Capitales 1989-2001 (Mdd) Fuente.- Comisión, 2005.

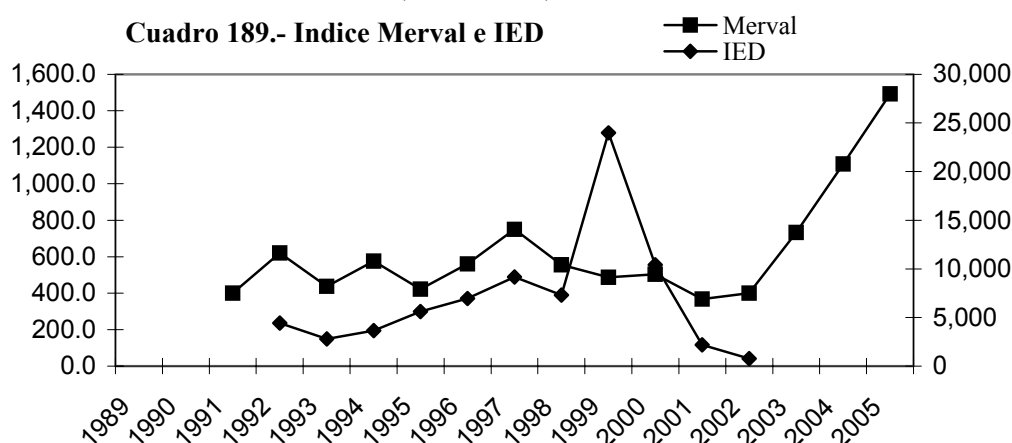


Como se observa en el cuadro 188, la inversión bruta interna fija (IBIF), la manufactura y el crecimiento del PIB entre 1989 y 1995 se encuentran muy relacionados, particularmente el IBIF es extremo en los picos tanto altos como bajos. Se observa en los tres indicadores una caída estrepitosa entre 1989 y 1990, una tendencia creciente entre 1990 y 1992 para comenzar una decreciente de 1993 a 1995, volver a crecer entre 1996 y 97 para decrecer nuevamente de 1998 al 2002 logrando un fuerte repunte en 2003.

Cuadro 188.- Inversión en Argentina de 1989 al 2005



En cambio, la IED y el índice Merval tuvieron tendencias distintas. Mientras que el índice Merval es errático –aunque acompaña la tendencia decreciente entre 1998 y 2001 y la recuperación del 2003- la IED muestra una tendencia creciente desde 1993 hasta 1997 con una ligera recaída en 1998 y un punto outsider en 1999 cuando pasó los 23 mil mdd con una fuerte caída del 2000 al 2003 (cuadro 189).



La salida de capitales se mantiene durante todo el periodo analizado con excepción de 1990-1992, con años donde la salida se magnifica rebasando los 10 mil mdd (1995-1997 y 2001). De hecho tanto de 1993 a 1997 como en el 2001 la salida de capitales es superior a la IED. El IBIF, la manufactura y el PIB muestran normalidad frente a los cambios del flujo de capital observados en la crisis de la deuda de finales de los 80, la crisis del Tequila en 1994-95 y las crisis asiáticas y rusa de 1998 y 1999 (respecto de esta última crisis incluso el índice Merval se engancha). El único indicador que muestra tendencias distintas es la IED. Tan pronto como nuestro interés es observar el impacto del mercado en las decisiones gubernamentales y, a partir de este impacto, la posible confrontación con el control poliárquico electoral, no me interesa explicar la fuente de estos cambios en la inversión sino sus consecuencias en las decisiones gubernamentales (cuadro 190).

Cuadro 190.- La inversión y el poder del mercado	
PERIODO	PODER ESTRUCTURAL DEL CAPITAL
1989-1990	Salida masiva de capitales.
	IBIF, manufactura y PIB.- caída estrepitosa.
1991-1992	Reingreso de capitales.
	IBIF, manufactura y PIB.- tendencia creciente.

1993-1995	Salida menor de capitales.
	IBIF, manufactura y PIB.- tendencia decreciente con caída en 1995.
	Disminución de la IED que cambia la tendencia en 1995.
1996-1997	Salida masiva de capitales.
	IBIF, manufactura y PIB.- tendencia creciente.
	Tendencia creciente de la IED.
1998-2002	Salida menor de capitales que se incrementa en el 2001.
	IBIF, manufactura, PIB e índice Merval.- tendencia decreciente con fuerte crisis en 2001 y 2002.
	Tendencia errática de la IED con años de mucha inversión (1999-2000) y años de nulidad (2001-2002).
2003-2005	IBIF, manufactura, PIB e índice Merval.- tendencia creciente.

Carlos Menem llegó al gobierno en 1989 cuando crece la idea de la competitividad como medio para atraer inversiones justificando la necesidad de la inversión privada por la ineficiencia de la inversión pública junto a las fallas del modelo económico keynesiano para reactivar la economía. Al lado de jugadores empresariales que antes habían demostrado su poder de veto frente al expresidente Raúl Alfonsín, Carlos Menem llevó a cabo un nuevo modelo económico que incluyó: ajuste fiscal, reformas estructurales (privatizaciones, apertura económica, desregulación, flexibilización laboral y reforma fiscal) y estabilidad macroeconómica que conformaron un “ambiente amigable” a la inversión para generar la confianza empresarial que se reforzó con un acercamiento a la derecha argentina (histórica enemiga política del peronismo) y con el respaldo norteamericano (en este sentido véase Mora y Araujo, 1991: 166 y Gerchunoff, 1996: 735). Al respecto coinciden tres integrantes del gobierno de Carlos Menem (Amalia Martínez (22/may/06) –asesora de la secretaria de programación económica de 1991 a 1996-, Jorge Baldrich (2/jun/06) –subsecretario de programación económica de 1994 a 1996- y Daniel Marx (12/may/06) –subsecretario de la deuda de 1988 a 1992) en que la reactivación económica en Argentina se logró gracias a un plan de estabilización, ciertas reglas claras en un contexto internacional muy favorable para la afluencia de capitales hacia la Argentina y las privatizaciones de las empresas públicas que fue uno de los principales atractivos para la inversión. Incluso la negociación de la deuda en el Plan Brady durante 1992 tuvo como principal objetivo apresurar el arreglo con los acreedores y hasta pagar una sobre tasa a fin

de que la deuda no obstaculizara la reactivación económica. No obstante, lo cierto es que la reactivación económica comienza a verse hasta dos años después de iniciado el gobierno menemista.

Con el IBIF, la manufactura y el PIB en números negativos no es extraño que pese a una campaña interna y presidencial de corte populista (aunque con una plataforma política ecléctica) una vez en el poder Carlos Menem y su equipo económico hayan decidido dejar de lado la tradición peronista y acercarse al neoliberalismo primero por medio de los capitanes de la industria y luego con el capital financiero. Con este cambio el equipo económico logró tasas de inversión, crecimiento del PIB y de las manufacturas entre 1991 y 1994 y de la IED entre 1993 y 1999 (año en que la IED muestra un pico provocado por la venta de Repsol) (cuadros 189 y 190).

La reformulación del modelo económico hacia el neoliberalismo por Carlos Menem en 1989 es lograda por el capital mediante el uso del poder estructural del mercado, si bien seguramente hay negociaciones sobre ciertos puntos, el cambio de modelo en general no es parte de una negociación cara a cara específica con recursos políticos detrás y por medio del cabildeo sino una reformulación que por voluntad propia fue echada a andar por el gobierno. Sin embargo, paralelamente al control estructural del mercado diversos actores hicieron uso de sus recursos políticos en negociaciones específicas, el más claro de los ejemplos es la forma en que se hicieron las privatizaciones. Como observamos en el recuento histórico la negociación con las empresas privatizadas tuvo como resultado el otorgamiento de reglamentos *ad hoc* e incluso se perdonaron muchas de las violaciones a dichos reglamentos mediante promesas de inversión.

Asimismo es importante destacar **la capacidad del Estado para generar autonomía con respecto a la ciudadanía y al mandato otorgado**. En efecto, el poder estructural del Estado se desdobló por medio en dos dimensiones y sobre dos sujetos: a través de la entrada, no entrada y salida de capitales así como a través de la dependencia social al capital actuando tanto sobre el Estado como sobre la población. Así, el mercado contó con los recursos suficientes para virar al Estado hacia el neoliberalismo y ayudar a que el gobierno tuviera la autonomía suficiente para echar por la borda el mandato electoral a fin de reordenar la situación económica hiperinflacionaria. Asimismo, el Estado contó, en

principio, con la autonomía suficiente para intentar una salida negociada con un sector del empresariado: “los capitanes de la industria”. Sin embargo medio año después se acercará aún más al capital financiero.

Pese a la existencia de un cambio en el modelo económico generando un “ambiente amigable” a la inversión, se observa una caída en los indicadores de la IBIF, el PIB y la manufactura en 1995 (lo cual es atribuido a razones estrictamente económicas: el efecto Tequila). Frente a esta caída de la inversión explica Eduardo Amadeo (9/may/06) – secretario de desarrollo social 1994-1999- que la vocación del gobierno de Carlos Menem de enfrentar la crisis desde el enfrentamiento era cero. En ningún momento ni Domingo Cavallo ni el presidente plantearon la salida de la crisis del tequila o post-tequila desde la base de un enfrentamiento sino de la búsqueda de conseguir que los organismos multilaterales le prestaran a Argentina. Préstamo que se logró mediante un nuevo ajuste fiscal y la formulación de una política económica restrictiva.

Tenemos que en los dos gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) tanto el poder estructural como los recursos políticos del mercado resultaron fructíferos para los actores del mercado y medianamente fructíferos para el gobierno de Menem. Los primeros consiguieron un marco económico favorable a la movilidad de capitales y a la producción (pese a un mandato electoral y una tradición peronista contrarias a ese marco), incrementaron su tasa de ganancia mediante la desregulación (incluyendo la liberalización de los precios) y adquirieron, en condiciones favorables, activos tanto estatales como privados. El gobierno de Carlos Menem logró altas tasas de crecimiento del PIB, manufactura, IED y de IBIF de 1991 a 1994 y de 1996 a 1998 (aunque estas no repercutieron de forma directa en el bienestar de la población como se observó en el recuento histórico y como veremos adelante). No debemos dejar de mencionar que si bien en el primer trecho hubo una entrada de capitales, luego de la crisis de 1995 y pese a los años de crecimiento económico de 1996 a 1998 se mantiene una salida de capitales superior a los 10 mil mdd anuales entre 1995 y 1997 (cuadro 191).

A Fernando de la Rúa la inversión lo trató de forma muy distinta. El primer punto importante a mencionar es que a la llegada de Fernando de la Rúa el acuerdo que se había generado entre los dos grandes bloques del capital –los acreedores del Estado y la

oligarquía diversificada- a través de la reactivación de la economía, la generación y repartición de un mayor excedente social y la venta de los activos estatales, ese acuerdo ya no existía más. Desde 1995 se habían hecho notar las diferencias entre estos dos bloques con el modelo económico y para 1999 ya había dos facciones bien definidas: quienes estaban por la dolarización y quienes buscaban una devaluación. Pese a que no fue un tema relevante en la campaña, los dos principales contendientes a la presidencia en 1999 – Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa- sabían que Argentina estaba en recesión desde el segundo semestre de 1998 y que las condiciones externas no eran favorables. De esta forma, una vez ganadas las elecciones, el mandato que asumió el gobierno de la Alianza fue mantener la convertibilidad, buscar modificaciones en políticas fiscales, educación y salud para generar cierta redistribución de la riqueza, conseguir que el sistema internacional siguiera financiando la convertibilidad mientras se trataba de ordenar la macroeconomía y esperar mejores condiciones internacionales para fomentar la inversión y el crecimiento.

El IBIF, la manufactura, el PIB y el índice Merval tienen una ligera mejoría entre 1999 y el 2000, sin dejar los números negativos, para volver a caer en el 2001 y tocar fondo en el 2002. En el caso de la IED, el punto outsider de 1999 se convierte en una estrepitosa caída entre el 2000 y 2002 (cuadros 188 y 189). De hecho no sólo no hubo una mayor inversión sino que además se incrementó la salida de capitales que llegó a más de 16 mil mdd en el 2001. El mantenimiento de la convertibilidad –la decisión de no devaluación- sin pasar a la dolarización supuso un intento de recomponer el gran acuerdo social que existió en Argentina entre 1991 y 1994 pese a las condiciones tanto externas como internas totalmente diversas. Así, el gobierno de Fernando de la Rúa lo mismo trataba de atraer capital financiero asegurando su capacidad de pago mediante ajustes fiscales y acuerdos de respaldo del FMI que mejorar la tasa de ganancia con nuevas reformas de flexibilidad laboral. Luego de la llegada de Domingo Cavallo al ministerio de economía en marzo del 2001 nuevamente el intento por reconstruir el consenso económico del modelo se acentuó con medidas tendientes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras (renegociaciones de deuda y convertibilidad ampliada) y medidas tendientes a bajar el costo de la inversión (ley de competitividad). Una vez más el capital no respondió a la reacción gubernamental, las inversiones nunca llegaron a la Argentina entre 1999 y 2001 pese a los múltiples mensajes enviados de orden macroeconómico, ajuste fiscal (reforma fiscal de

diciembre de 1999, múltiples ajustes fiscales y dos renegociaciones de deuda) y bonanza financiera (blindaje de noviembre del 2000) así como de mayor competitividad mediante una reforma de flexibilización laboral y, posteriormente, los diversos planes de competitividad para disminuir el costo de inversión en Argentina.

El hecho de que el gobierno de Fernando de la Rúa no avanzara hacia el bloque de los acreedores estatales o hacia el de la oligarquía diversificada hizo que ninguno de las dos facciones del capital apoyara con entrada de capitales la reactivación de la economía. En este momento ambos bloques económicos están haciendo uso del poder estructural del mercado para conseguir modificaciones en direcciones opuestas (devaluación–dolarización) y ambos bloques económicos están estrangulando tanto al gobierno (dependencia estatal al capital) como a la población argentina (dependencia social al capital) que desembocará en la crisis de diciembre del 2001. Este uso del poder estructural del mercado es interpretado como una falta de confianza o credibilidad de los inversores frente al gobierno que tenía una historia de crisis hiperinflacionaria. En cambio, en el año 2002, especialmente durante los primeros tres meses, el poder del mercado se desplegará tanto en su modalidad de poder estructural como a través del uso del cabildeo y de recursos políticos específicos que incluyeron las promesas de inversión, el adelanto de la recaudación o la capitalización bancaria como se verá en el análisis de las crisis.

Para cuando Néstor Kirchner llegó al poder en mayo del 2003 las condiciones son totalmente distintas. En principio uno de los presidentes de transición –Adolfo Rodríguez Saá- ya ha tomado una de las decisiones que significó el primer golpe a los acreedores del Estado: declaró el default aunque se negó a avanzar en torno a la devaluación o a la convertibilidad. Otro de los presidente de transición –Eduardo Duhalde- avanzó en este segundo punto y declaró una devaluación que llegó al 200% a la par que pesificó todo el sistema financiero argentino cerrando por completo la puerta a la dolarización propuesta por los acreedores del Estado y el bloque financiero. Junto a la decisión gubernamental de acompañar al bloque económico productivo-exportador que se convirtió en el principal sector inversor de la Argentina en su recuperación económica de 2003-2005, Néstor Kirchner se vio beneficiado con el aumento de los precios internacionales de dos productos básicos para la exportación Argentina: el petróleo y la soya. Con un fuerte aumento de la IBIF acompañado del incremento en la manufactura y el PIB el gobierno de Néstor

Kirchner pudo echar mano del capital doméstico para reactivar la capacidad ociosa y, por la devaluación y debido a que no hubo un traslado del aumento del dólar a los precios argentinos, se conformó una relación de precios que permitió una reactivación económica mediante un ligero proceso de sustitución de importaciones que permitió reavivar la economía y mejorar las reservas internacionales. Con una economía andando y un amplio apoyo popular luego de la crisis de diciembre del 2001 y el terrible año 2002, la capacidad de negociación de Néstor Kirchner frente a los organismos internacionales y los acreedores externos aumentó. De esta forma, el poder estructural del mercado –en este caso la inversión y reactivación económica- por una parte del bloque económico permitió al gobierno una mayor capacidad de acción y negociación sobre la parte opositora del bloque.

4.5. La dependencia estatal al capital: recaudación y deuda

De la inversión y reactivación económica depende, en parte, la recaudación estatal¹⁵. Junto a esta tenemos el acceso a capitales a través de la adquisición de deuda ya sea mediante emisión de bonos, contratando deuda con la banca internacional o mediante empréstitos de organismos multilaterales o de otros Estados. Uno de los elementos que forman parte de la deuda es la tasa de interés. Tanto la recaudación como la deuda determinan los ingresos y, con ellos, mucho de la capacidad de acción del Estado. De esta forma, la recaudación y la deuda son dos importantes recursos políticos del capital que pueden ser utilizados tanto de forma estructural como junto con el cabildeo.

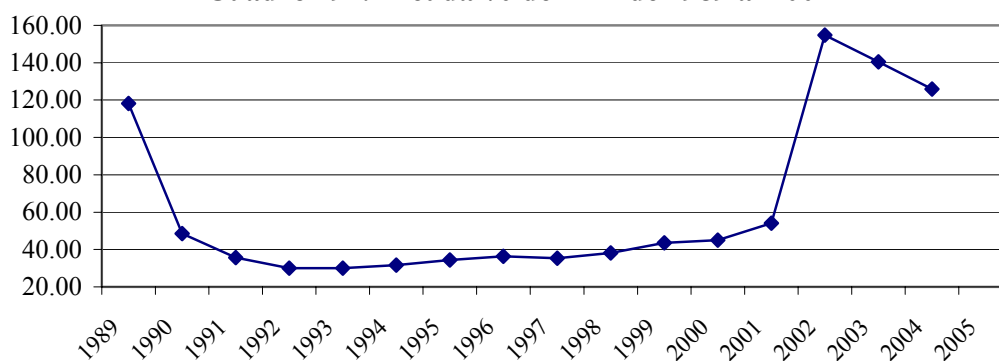
En cuanto a la deuda cabe decir que hay dos enfoques en torno a su relación con la fuga de capitales, uno que trata estas dos variables con una relación estructural donde la deuda es una variable independiente y la fuga de capitales una dependiente donde la expansión de la primera permite la continuidad de la segunda. El otro enfoque afirma que no hay relación entre estas dos variables siendo la deuda un fenómeno permanente y la fuga de capitales uno circunstancial. El suscrito tiene afinidad por el primer enfoque. Debido a la formación de la globalización financiera durante los 70, y con ella al cambio del patrón de acumulación dando por terminado el de sustitución de importaciones, el endeudamiento privado, encabezado por las grandes empresas oligopólicas, dejó de tener por objetivo el

¹⁵ La capacidad de recaudación incluye muchos otros factores como la organización estatal para el cobro impositivo, la capacidad de supervisión e incluso la estructura impositiva, elementos que en este análisis no nos interesan.

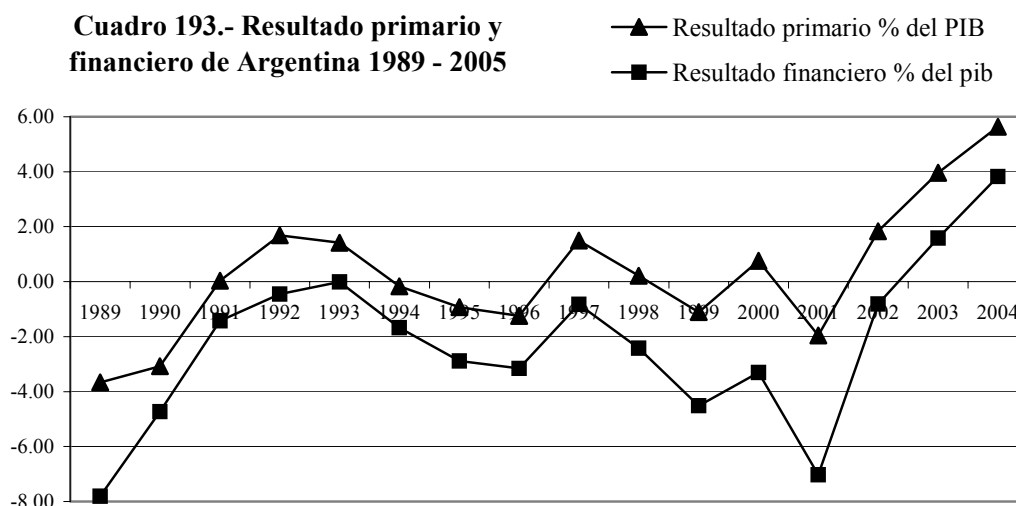
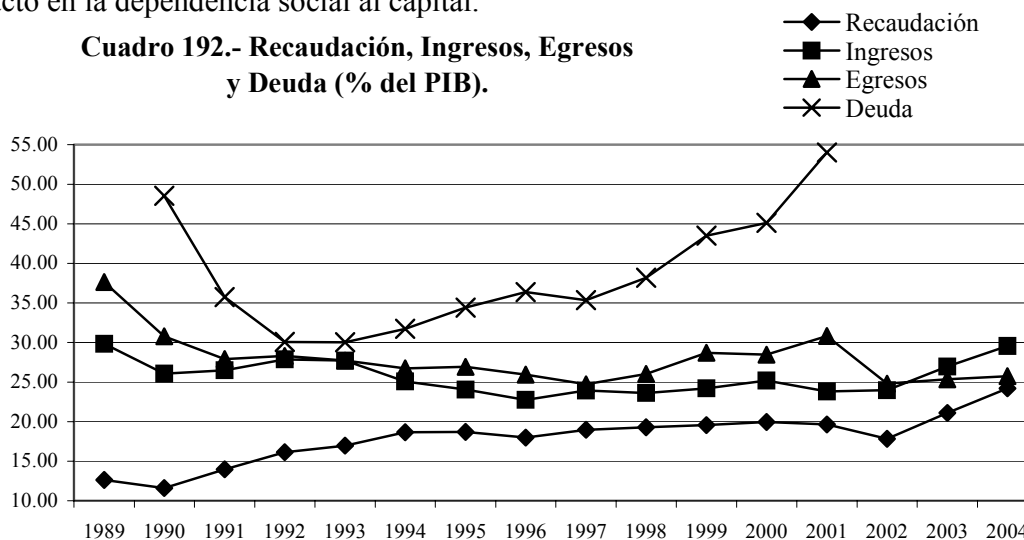
financiamiento para la inversión y comenzó a concentrarse en la obtención de ganancias financieras. Más aún, tan pronto comenzó a crecer el endeudamiento privado, el endeudamiento estatal tuvo que subordinarse a las pautas del primero, con la consecuente transferencia del Estado de la capacidad de decidir las pautas crediticias de la economía (Basualdo^D, s/f: 1). Este proceso en Argentina empezó a observarse desde 1976. Tan pronto como el objetivo del endeudamiento y de la adquisición de deuda estatal ya tiene fines específicamente rentístico-financieros, la deuda externa se relaciona de forma directa a la fuga de capitales ya que los activos financieros eran mantenidos en el mercado doméstico con el objetivo valorizarlos, en el momentos específicos eran cobradas las rentas y fugadas al extranjero y, en momentos en que la tasa internacional era superior a la doméstica o existía el peligro eminente de un default, los activos financieros eran totalmente fugados al exterior con una salida masiva de capitales (Basualdo^D, s/f). Claramente cualquiera de estas posibilidades requiere de un cambio en el régimen económico que desregule la entrada y salida de capitales permitiendo la libertad cambiaria y financiera.

En torno a la deuda argentina hay dos grandes picos, uno que se observa en 1989 donde la deuda llega al 118.22% del PIB y otro más en 2002 donde la deuda llegó al 154% del PIB. En ambos casos se declaró un default por los altos niveles de la deuda frente a la crisis económica reflejada en la tasa de crecimiento del PIB pero mientras que en la crisis de 1989 para el año siguiente la deuda ya sólo significaba 48% del PIB y siguió bajando hasta llegar en 1992 y 93 a 30% (debido, en buena parte, al proceso de privatización que aceptó los bonos estatales como medio de pago por las empresas públicas), en la crisis del 2002 la deuda se mantuvo por encima del 100% del PIB durante 2003 y 2004 (pese a la recuperación económica de alrededor 9% del PIB en esos años) mientras que en 2005 – luego de la renegociación con los bonistas- la deuda aún se mantiene en un alto 70% del PIB (cuadro 191).

Cuadro 191.- Deuda % del PIB de 1989 al 2004



Otro hecho que se suma a la deuda tiene que ver con el pago de intereses. Explica Eduardo Basualdo (C, s/f: 2) que entre 1975 y 2001 los intereses pagados se expanden 16% anualmente alcanzando al final del 2001 los 117 mil mdd, monto que supera el PIB del 2002. Este pago de interés junto con la salida de capitales paralela a la deuda, son dos procesos que restringieron la posibilidad de crecimiento económico con el consecuente impacto en la dependencia social al capital.



A partir de los indicadores de deuda, recaudación, ingresos totales, gastos totales, resultado primario y resultado financiero pueden identificarse los siguientes periodos (cuadros 192 y 193):

Un primero periodo de 1989 a 1991 caracterizado por una grave aunque descendente crisis de deuda (de 118 a 35% del PIB), una baja pero ascendente recaudación

(10-15% del PIB) y niveles de ingresos (25-30% del PIB), altos y descendentes niveles de gasto (37-30% del PIB) y un alto y descendente déficit financiero (7-1% del PIB). La combinación de alta deuda, baja recaudación e ingresos, altos gastos y alto déficit primario y financiero funcionaron como recursos estructurales de poder del capital para realizar las modificaciones estructurales que permitieran al gobierno echar a andar la economía y aumentar con ellos su recaudación y su ingreso disminuyendo el déficit y la deuda. Es precisamente en estos tres años donde se concentran la mayor parte de las reformas que constituyen el viraje del peronismo al neoliberalismo¹⁶. Más aún, estos problemas de déficit fueron el principal argumento para llevar a cabo una las dos rondas de privatizaciones de empresas públicas (1989 y 1991) mediante las cuales el Estado se allegó de recursos para disminuir la brecha ingreso-gasto a la par que argumentaba que privatizando las empresas se desprendía de los fuertes déficits con las que las empresas funcionaban.

Otro elemento a subrayar es la relación existente entre recaudación e ingresos, déficit público, ajuste y capacidad de intervención. Frente a un proceso hiperinflacionario como el de 1989 y con caídas en las recaudación y los ingresos y, en consecuencia, aumentos del déficit público la medida llevada a cabo por Carlos Menem fue establecer una política monetaria restrictiva disminuyendo el gasto público (que pasó del 37 al 27% del PIB en estos tres años y que de hecho nunca más fue superior al 30% del PIB) a través de la sistemática realización de ajustes fiscales (estos ajustes incluían medidas como el recorte del gasto público o el aumento de tarifas e impuestos siendo las más dura la confiscación de los depósitos bancarios de enero de 1990). La realización de ajustes va de la mano con las privatizaciones y ambos delimitan las nuevas fronteras del Estado haciendo perder su capacidad de intervención en la economía.

Muy relacionada con la deuda, y ahora mediante el uso directo de recursos políticos del capital, tenemos a las reformas estructurales que fueron llevadas a cabo en este periodo. En efecto, tan pronto como en 1988 el presidente Raúl Alfonsín declaró el default de la deuda, Argentina quedó automáticamente expulsada de la comunidad financiera

¹⁶ Los capitales de la industria al ministerio de economía y los cambios en ese ministerio en torno a una mayor conjunción con el capital financiero, la Ley de Reforma del Estado, la Ley de Emergencia Económica, el proceso de apertura comercial, la reforma fiscal regresiva de enero de 1990, la entrega de la política monetaria al capital financiero mediante la convertibilidad en marzo de 1991, el decreto desregulatorio del 31 de octubre de 1991 y la flexibilización laboral de noviembre de 1991.

internacional. La forma de regresar a esa comunidad fue el Plan Brady de 1992, pero, como vimos en el recuento de hechos, la posibilidad de entrar al Plan Brady estaba estrechamente ligada a la realización de ciertas modificaciones que fueran entendidas por los jugadores financieros en dos sentidos: otorgar posibilidades de crecimiento económico sostenido a Argentina para renegociar la deuda a largo plazo a la par que esas reformas serían vistas como pruebas de “buena voluntad” del gobierno Argentino para la negociación de la deuda: las reformas estructurales cubrieron el primer perfil y la venta de las empresas estatales el segundo juntas fueron el boleto de entrada de Argentina a la renegociación de su deuda en 1992.

Hay un segundo periodo que va de 1992 a 1993 caracterizado por la estabilidad en la deuda (30% del PIB), incremento y estabilidad en la recaudación (16% del PIB), un cierre de brecha ingreso-gasto con superávit primario (1.69 y 1.42% del PIB) y bajo déficit financiero (0.45 y 0.01% del PIB). En este periodo hay una mayor estabilidad fiscal en la cual se desarrolla la negociación del Plan Brady y la reforma al sistema previsional de 1993. En este momento el mercado no ejerce ningún tipo de poder ni estructural ni directo por medio del cabildeo (incluso las tasas de interés bajan de 10.4% en 1991 a 7.76% en 1993), el principal cúmulo de reformas ya se ha llevado a cabo y se viven los “años dorados” de la convertibilidad que generan el más álgido momento de consenso social.

Un tercer periodo corre de 1994 a 1996 y es caracterizado por un aumento en la deuda (30-36% del PIB) y en las tasas de interés (de 7.76% en 1993 a 9.4% en 1996), incremento y estabilidad en la recaudación (18% del PIB) e incremento en la brecha ingreso-gasto con generación de déficit primario y aumento del déficit financiero. El primer punto a resaltar en este periodo es la desconexión entre la recaudación y la brecha ingreso-gasto ya que pese a que la primera se incrementa de 16 a 18% del PIB y se mantiene estable en estos tres años la brecha ingreso-gasto se incrementa por la caída del ingreso total (del 27% en 1993 a 22% del PIB en 1996) que es superior a la caída del gasto (de 27% en 1993 a 25% del PIB en 1996). En este periodo Argentina sufre el primer cambio de flujos de capital del nuevo modelo a través de la crisis del Tequila a la par que se hace evidente la inestabilidad del crecimiento sostenido y de los ingresos estatales frente a este tipo de cambios. Aquí se observa también una aplicación del poder estructural del mercado que se manifiesta, de forma interesante, en la caída de los ingresos totales del gobierno más no en

la caída de la recaudación. A esta aplicación estructural del poder respondió el gobierno menemista con un ajuste fiscal en marzo de 1994 que incluyó un recorte al gasto público, a los salarios y una reforma fiscal junto con el inicio de negociaciones para conseguir nuevos préstamos por parte del FMI. El principal objetivo de la apertura de esta línea de crédito era dejar claro que, a diferencia de México, Argentina tenía dólares suficientes para cumplir con sus obligaciones y mantener la convertibilidad. De hecho, parte de las negociaciones entre el gobierno y el FMI se centraron precisamente en los puntos a favor y en contra de la convertibilidad –recordemos que el FMI entre 1991 y 1995 no se había sentido cómodo con este régimen cambiario-, y una vez que se acordó la continuidad de la convertibilidad la discusión se centro en la necesidad de que Argentina contara con la fluidez financiera suficiente para garantizarla.

Entre 1989 y 1994 se han llevado a cabo una serie de reformas fiscales que limitan el nivel de recaudación posible a partir de la afectación de tres sectores específicos: la privatización de las empresas públicas, las rebajas de aportes del capital y las transferencias de los aportes jubilatorios. De esta forma, explica Eduardo Basualdo (e, s/f: 3) que entre 1994 y el 2000 los recursos transferidos a las fracciones dominantes locales mediante la reducción de los aportes patronales fue de poco más de 16 mil mdd, que sumados a las restantes reducciones vinculadas al mercado de trabajo -como los aportes al sistema de obras sociales- totalizan casi 30 mil mdd. Sumados a los aportes jubilatorios transferidos por el Estado a las AFJP totalizan 52,332 mdd (cuadro 194).

Cuadro 194.- Impacto de los ingresos por privatización de las empresas públicas, las rebajas de aportes al capital y la transferencia de los aportes jubilatorios a las AFJP, 1994-2000 (millones de pesos del año 2000)							
	Déficit financiero con los ingresos por la privatización de las empresas estatales	Ingresos no percibidos y transferidos al capital oligopólico local					Déficit financiero incluidas las privatizaciones y los ingresos transferidos al capital oligopólico local
		Reducción de aportes patronales	Otras reducciones de cargas patronales vinculadas al mercado de trabajo	Subtotal	Aportes jubilatorios transferidos a las AFJP	Total	
	1	2	3	4 = 2 + 3	5	6 = 4 + 5	7 = 1 + 6
1994	-4.708	958	1.016	1.974	804	2.778	-1.930
1995	-8.241	958	1.033	1.991	2.302	4.293	-3.948
1996	-8.927	2.102	1.832	3.934	3.004	6.938	-1.989

1997	-3.112	2.451	2.110	4.561	3.632	8.193	5.081
1998	-7.217	2.305	2.604	4.909	4.093	9.002	1.785
1999	-12.753	3.093	2.627	5.720	4.280	10.000	-2.753
2000	-9.657	4.189	2.681	6.870	4.257	11.127	1.470
Total	-54.615	16.057	13.903	29.960	22.372	52.332	-2.283

Fuente.- Basualdo^o, s/f: 2-3.

Este proceso de translación de recursos que en principio eran estatales hacia el capital oligopólico local tendrá como consecuencia un acelerado proceso de endeudamiento que se hará manifiesto a partir de 1997.

Un cuarto cambio de dirección se observa en 1997 e incluye la disminución de la deuda (35% del PIB) con la estabilidad de la tasa de interés (9.22%), estabilidad en la recaudación (18.96%) y cierre de la brecha ingreso-gastos con superávit primario y bajo déficit financiero. Este cambio de dirección de los indicadores que constituyen la dependencia estatal al capital es la consecuencia directa de la aplicación del poder estructural del mercado entre 1994-1996 con la incidencia del FMI mediante la cual se bajó el nivel de gasto mejorando los niveles de ingresos y manteniendo los niveles de recaudación.

Un nuevo quinto cambio en la tendencia de estos indicadores se observa entre 1998 y el 2001 que es caracterizado por un sistemático aumento en la deuda (35-54% del PIB) con aumento también en la tasa de interés especialmente en 2000 y 2001 (10 y 15%) estabilidad en la recaudación (19% del PIB) e incremento en la brecha gasto-ingreso con erráticos movimientos del resultado primario y crecimiento del déficit financiero (de 0.82 a 7.03% del PIB). Es en este momento cuando Carlos Menem luego de un fallido intento de reelección deja el poder en 1999 y llega Fernando de la Rúa. También es en este momento cuando en el mundo se observa un nuevo cambio de flujo financiero frente a la crisis asiática y de Rusia que nuevamente hace evidente la inestabilidad y dependencia del nuevo modelo. Si bien desde 1998 existe la aplicación del poder estructural del mercado cuyo principal objetivo era avanzar, por parte de uno de los bloques del capital, hacia la dolarización y, por parte de otro de los bloques del capital, hacia la devaluación; Carlos Menem mediante el “piloto automático”, la llave abierta de los flujos financieros para el Estado y el respaldo del FMI logró desatender este poder estructural. Tardíamente en marzo de 1999 intentó un recorte fiscal en educación que luego fue echado para atrás, en julio se

acordó la continuación del respaldo del FMI y en agosto se promulgó la Ley de Equilibrio Fiscal. Finalmente esta confrontación de bloques de capital finalmente explotó en las manos de Fernando de la Rúa.

El nuevo presidente tuvo que confrontar para el 2000 la necesidad de remontar un déficit financiero de 4.51% del PIB a la par que debía mandar la señal de solvencia para mantener los flujos financieros hacia el Estado. Por ello, Fernando de la Rúa decidió iniciar su gobierno con un acuerdo de préstamo con el FMI y un ajuste fiscal a través del aumento de impuestos en ambos casos con el objetivo de asegurar al capital financiero que contaría con los recursos suficientes para pagar sus obligaciones. Sin embargo no desatendía al capital productivo con el objeto de reactivar la economía y mejorar la recaudación a través de una reforma laboral para bajar los costos de inversión. La reacción gubernamental al poder estructural del mercado no tuvo eco en el capital. El poder estructural del mercado mediante la dependencia del Estado se mantuvo durante todo el gobierno de Fernando de la Rúa sin que ninguna de las medidas del gobierno tomadas entre 2000 y 2001 y tendientes a recomponer la alianza social tuviera efecto alguno sobre la inversión, aumento de recaudación, aumento de ingresos o disminución del déficit que, por el contrario, llegó a 7.03% en 2001. Peor aún, la ley de competitividad generó una disminución de los ingresos (del 25% en 2000 al 23% del PIB en 2001) a la par que los gastos aumentaban (del 28% en 2000 al 30% del PIB en 2001) generando un déficit primario y aumentando el déficit financiero.

Uno de los actores del mercado que jugó un papel directo y preponderante en este periodo fue el FMI que a cambio de su apoyo institucional y financiero negoció en septiembre de 1999 un ajuste fiscal de 1,800 mdd para el presupuesto del 2000 y la reforma laboral que incluyó la flexibilización de las relaciones de trabajo y la disminución de las indemnizaciones fiscales. En noviembre del 2000 demandó a cambio del blindaje la desregulación de las obras sociales, una nueva reforma al sistema previsional, la disminución del déficit provincial y la eliminación del impuesto a los intereses. El blindaje tuvo por objeto, y así fue leído por la opinión pública argentina, dar la señal de que habría dólares suficientes para hacer frente a las obligaciones argentinas. Así, el principal actor que planeaba hasta ahora la agenda era el capital financiero. Una vez que la estrategia seguida por Domingo Cavallo para reactivar la economía no da ningún fruto, el FMI junto

con el capital financiero vuelven a encabezar la agenda desmantelando cada una de las medidas que forman parte de la ley de competitividad. Para diciembre del 2001 el FMI demanda, para obtener nuevos préstamos y renegociar los pagos venideros, una reforma fiscal profunda, abandonar la conversión y establecer una política monetaria clara, dejar el esquema preferente del MERCOSUR ampliando el comercio a Europa y EU y ordenar la política fiscal y monetaria. Se llega al rompimiento de diciembre del 2001.

Además del FMI el capital financiero también es clave en este periodo. Explica Alejandro Bonvecchi (2002: 176) que durante la gestación de la crisis económica que explotó en diciembre del 2001 el modelo económico otorgó bajos costos de transacción a los fondos mutuales y especulativos así como a los bancos comerciales, las AFJP y los inversores directos. Los primeros al estar institucionalmente constituidos para buscar rápidas ganancias de corto plazo mediante instrumentos financieros de intercambio y con analistas que les permiten reducir los problemas de información imperfecta lograron maniobrar sobre el gobierno alineándolo de acuerdo a la compraventa masiva de los bonos argentinos que modificó los indicadores de riesgo y las tasas de interés al endeudamiento público a la par que consiguió decisiones gubernamentales en torno a garantizar el pago de las obligaciones estatales argentinas. Para este sector económico –sigue Bonvecchi- el blindaje, la convertibilidad ampliada y el plan de competitividad lanzado por la Alianza fueron contrarios a las expectativas de ajuste fiscal que veía poco probable la reactivación económica a corto plazo por lo que el endeudamiento con estos programas aumentaría paralelamente a la tasa de interés llevando al país a un irremediable default. El masivo desprendimiento de bonos de estos actores generó burbujas especulativas que contribuyeron a la masiva salida de capitales del 2001 así como a las corridas bancarias que magnificaron el default. Por su parte, los bancos comerciales, las AFJP y los inversores directos tuvieron también una importante influencia en la toma de decisiones económicas gracias a sus posiciones en el mercado de capitales local e incluso en la economía real. Sin embargo, el hecho de que existiera sobre estos actores una mayor capacidad de regulación estatal que sobre los fondos especulativos (en torno al rendimiento de cuentas y la orientación de sus inversiones) moderó su libertad de acción y su capacidad de negociación. La estrategia que siguieron –explica Bonvecchi- fue de “ojo por ojo”: a cada medida gubernamental que afectó el valor de sus inversiones respondieron incrementando el costo

de préstamos al sector público. Es llamativo que el gobierno de la Alianza se resistió sistemáticamente a hablar de default de la deuda pública para utilizar esos fondos en la reactivación económica pese a vagos intentos de una de las principales figuras del radicalismo: Raúl Alfonsín, y a las críticas al modelo de varios actores radicales y frepasistas entre los que sobresale Rodolfo Terragno y más tarde el exvicepresidente Carlos Álvarez.

Un sexto cambio en los indicadores que integran la dependencia estatal al capital se observó en el 2002, año en que la deuda pasó del 54 al 154% del PIB, se tiene una caída de la recaudación que fue del 19 al 17% del PIB, pese a la caída de la recaudación hay un importante cierre de brecha ingreso-gasto remontando un déficit primario de 1.96% en 2001 para conseguir un superávit primario de 1.84% del PIB mientras que el déficit financiero pasó de 7.03 a 0.81% del PIB. Durante este periodo se mantiene el poder estructural de las dos facciones del capital, la diferencia es que primero Rodríguez Saá –a través de la declaración festiva del default- y luego Eduardo Duhalde -mediante la pesificación de la economía y la devaluación- han tomado partido a favor del bloque productivo del capital. Con el default pronunciado en diciembre del 2001 se logra neutralizar el aumento de la deuda como % del PIB lo mismo que las tasas de interés. No obstante, el bloque ahora perdedor interpósita el FMI consigue influir en el recorte de los gastos estatales que va del 30 al 24% del PIB consiguiendo un superávit primario y un muy bajo déficit financiero. Sin embargo, algunas medidas establecidas sobre el bloque ganador como los impuestos y retenciones a la exportación permitirán al gobierno con su nueva alianza económica seguir andando.

Es precisamente en 2002 cuando los recursos políticos del mercado aplicados de forma directa tienen primacía, particularmente los relacionados con la dependencia estatal. En torno a la deuda, igual que en 1989, se generan una serie de peticiones tendientes a permitir la entrada de Argentina a la comunidad financiera internacional, de dónde había salido luego de declarado el default. Uno de los principales interlocutores en este espacio es el FMI, apuntalado por el resto de los organismos multilaterales, los gobiernos de los países desarrollados e incluso los del resto de América Latina que supeditan cualquier posibilidad de acuerdo al consenso previo con el FMI. En la negociación con el FMI la agenda es

variada¹⁷. Además del FMI los propios jugadores del mercado utilizan sus recursos políticos directos tratando de negociar con el Estado la entrega anticipada de recursos recaudatorios a cambio de no establecer el nuevo arancel a la exportación de hidrocarburos.

El séptimo y último de los cambios en los indicadores analizados se da entre el 2003 y 2004 cuando tenemos una deuda sumamente alta aunque descendente que pasó del 154% al 125% del PIB (llegó al 72% del PIB en 2005 luego de la renegociación de la deuda) junto con una tasa de interés descendente que ronda entre el 5 y el 8%, un fuerte aumento de la recaudación que llegó a 24% del PIB en 2004 (5 puntos arriba del máximo conseguido durante los 90) y se logró un punto de inflexión inédito en torno a la brecha ingreso-gasto en todo el periodo: los ingresos totales son superiores a los gastos totales lo que genera un superávit primario de más del 5% del PIB y un superávit financiero de más de 3% del PIB en 2004. En este periodo existe un recurso de poder estructural del mercado: la deuda. Sin embargo, con la alianza generada entre el gobierno y el bloque de capital productivo tanto la recaudación como los ingresos aumentan incluso por encima de los gastos totales que se mantienen en 25% del PIB. Con este equilibrio fiscal y la declaración del default el gobierno tiene una menor dependencia de la deuda que le otorga mayor capacidad de negociación frente al capital financiero.

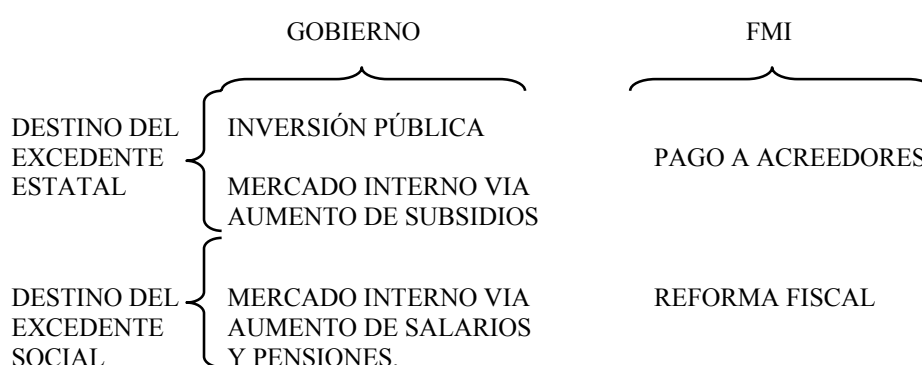
Durante este periodo el FMI nuevamente tiene una serie de peticiones¹⁸ donde la principal disputa en torno a la deuda se da en el destino que tendrá el excedente estatal y

¹⁷ Diciembre 2001.- ordenar política fiscal y monetaria; febrero 2002.- mejorar la administración tributaria, resolver la política fiscal, establecer una relación financiera sana con las provincias y reestructurar la deuda externa; marzo 2002.- debate entorno al impuesto a la exportación de hidrocarburos, recorte del déficit de las provincias (60%), modificación de la Ley de Concursos, eliminación de la Ley de Subversión Económica y normalización del sistema financiero, caída superior a la pronosticada del PIB en el presupuesto del 2002 y la erradicación de los bonos pagaré provinciales; mayo 2002.- volver a la Ley Bonex a fin de que los bancos no firmen los bonos que se entregarán a los ahorristas; agosto 2002.- superávit fiscal primario 0.8% del PIB para 2002; noviembre 2002.- aumento de tarifas de los servicios privatizados, un mayor ajuste fiscal para el 2003 y superávit fiscal primario de 2.5 reduciendo el gasto de las provincias y aumentando la recaudación, frenar los amparos de los ahorradores, sanear la banca pública con capitales privados y ejecutar las deudas hipotecarias y las reglas de pago de deudores morosos; y, finalmente, en enero del 2003.- el FMI objeta la política monetaria.

¹⁸ Septiembre 2003.- el aumento de las tarifas de los servicios públicos, la compensación a los bancos por los efectos negativos de la devaluación de la moneda local y la definición del superávit primario para el 2004 y 2005; enero 2004.- reforma fiscal para aumentar el superávit primario; febrero 2004.- mayor porcentaje del presupuesto destinado al pago de la deuda y mejorar el ofrecimiento a los tenedores de bonos; marzo 2004.- otorgar trato preferencial al comité global de tenedores de bonos argentinos, que la reestructuración se apruebe sólo si la aceptan 80% de los acreedores privados, que los bancos asesores de Buenos Aires no puedan retirarse hasta que las negociaciones den frutos, un rendimiento adicional a los tenedores de bonos del 15% por el repunte de la economía e incluir el aumento del 8.7% del PIB de 2003 en los cupones de los títulos

social. Mientras que Kirchner busca una renegociación de la deuda que le permita invertir los excedentes estatales y sociales en la producción y aumentar el consumo interno acompañado del logro de que las empresas privatizadas acepten regulaciones y una tasa de ganancia inferior; el FMI busca aumentar las condiciones de ganancia de las empresas privatizadas mediante el aumento de tarifas y de los acreedores argentinos destinando los excedentes estatales a tal efecto a la par que propone la realización de una reforma fiscal que absorba el excedente social para destinarlo también al pago de las obligaciones fiscales.

PUNTOS DE CONFLICTO:



Lo cierto es que el gobierno de Kirchner, y antes el de Eduardo Duhalde, tiene la capacidad negociadora para desvincular su política de las propuestas del FMI e incluso para pagar lo adeudado a dicho organismo dejándolo con un poder de influencia casi nulo. Dentro de los elementos que posibilitan esta acción tenemos al aumento de recaudación e ingresos estatales junto con un equilibrio fiscal a lo que se suma la existencia de reservas internacionales altas, la reactivación económica y la fuerte legitimidad gubernamental.

Con los elementos que anteceden podemos hacer el siguiente cuadro:

Cuadro 195.- Periodos de deuda y fiscal y uso del poder estructural y directo del mercado						
	Deuda	Tasa de interés	Recaudación	Ingreso-gasto y resultado primario	Poder estructural	Cabildeo y recursos políticos
A) 1989-	Alta y descendente	Alta	Caída y recuperación	Alto déficit con cierre	Sí, logra reformas	Sí, Plan Brady y

que serían emitidos a cambio de los viejos que están en default; abril 2005.- resolver la situación del 24% de los acreedores que no entraron al canje; julio 2005.- aumentar el superávit fiscal, la libre flotación del peso, otorgar un aumento de tarifas a las empresas e incluir en el canje a los bonistas rebeldes; diciembre 2005.- llegar a un acuerdo con los bonistas rebeldes, subir el tipo de cambio, aumentar las tarifas de los servicios públicos e incrementar la tasa de interés para combatir la inflación.

1991				de brecha	estructurales.	privatizaciones
B) 1992-1993	Estable	Descendente	Estable y ascendente	Cierre de brecha con superávit	No.	No. Se logra la reforma previsional
C) 1994-1996	Ascendente	Ascendente	Estable y ascendente	Aumento de brecha con déficit	Sí, se logran ajustes fiscales y reelección.	Sí, a través del FMI.
D) 1997	Descendente	--	Estable y ascendente	Cierre de brecha con superávit	No.	No.
E) 1998-2001	Ascendente	Ascendente	Estable	Aumento de brecha con resultados erráticos	Sí, medidas de ajuste y bajar costo de inversión.	Sí, a través del FMI.
F) 2002	Alta	--	Caída	Cierre de brecha con superávit	Sí, debate en torno a dos modelos	Sí, para evitar medidas de pesificación.
G) 2003-2004	Alta y descendente	Descendente	Ascendente con record	Cierre de brecha con superávit primario y financiero.	Sí, pero hay una mayor capacidad de negociación del gobierno.	Sí, para mejorar la posición del capital financiero

El primer punto a resaltar es que el poder estructural del mercado desplegado en la dependencia estatal al capital normalmente logra su objetivo cuando hay un solo bloque dominante empresarial, la deuda es alta¹⁹ y los ingresos estatales son bajos limitando la capacidad de acción del gobierno²⁰. El más claro ejemplo de este despliegue de poder se da

¹⁹ El acuerdo de los acreedores en la negociación suele venir después de un proceso de reformas y adecuación de las cifras macroeconómicas. Al respecto explica Daniel Marx (12/may/06) -subsecretario de la deuda y secretario de finanzas- que cuando se tiene un problema de deuda en realidad es porque ésta se hace insostenible por lo que el gobierno debe tomar decisiones de manera que los acreedores puedan ver como se garantizará su pago; tan pronto como el tema de la deuda es apostar al futuro, algún tipo de futuro tiene que haber. La principal garantía proviene de los cambios que aseguren la reactivación económica y mejoras en la situación fiscal para que la posibilidad del pago de la deuda tienda a aumentar. El ejemplo más claro de esta situación nuevamente es la crisis de 1989 donde se tuvieron que dar muestras de cambio estructural para lograr entrar al Plan Brady. El segundo gran pico de la deuda argentina se da en 2002 y nuevamente se hacen cambios institucionales previos a la negociación con los acreedores, aunque en esta ocasión los cambios fueron contrarios a las expectativas del bloque financiero y a favor del sector productivo por lo que la renegociación se dio con mayores niveles de confrontación que lo sucedido en 1992. El principal problema para que los acreedores del Estado confrontaran la eficacia de los cambios hechos en 2002 era que finalmente dieron resultado, se reactivó la economía y se consiguieron los tan ansiados superávits primario y financiero garantizando la liquidez, aunque a corto plazo, de la Argentina para pagar.

²⁰ En torno al equilibrio fiscal es importante mencionar que, como explica Oscar Cetrángolo (11/may/06) – subsecretario de relaciones con provincias- y Roque Fernández (10/may/06) –ministro de economía-, el margen de formulación y cambio del presupuesto es mínimo ya que entre el 90 y 95% de los ingresos se encuentra previamente destinados. El gasto público de un país como Argentina normalmente son sueldos por lo que tener que amortizar un fuerte pago de deuda con recursos fiscales implicaría no pagar el sueldo a la gente. Este poco margen de acción estatal frente a los gastos aumenta la dependencia del Estado a los

entre 1989 y 1991 y hay un despliegue semejante en el periodo de 1994-1996. Este poder estructural del mercado funciona distinto si en lugar de un bloque empresarial dominante hay dos facciones encontradas. Es el caso del periodo 1998-2001 donde si bien existió el poder estructural del mercado utilizado por uno de los bloques a través de la deuda y por otro de los bloques mediante el ingreso, el hecho de que el gobierno no tomara partido por alguno de los dos bloques económicos implicó que pese a la reacción del gobierno para tratar de satisfacer las demandas de ambos bloques no logró modificar la actitud del capital. El poder estructural fue eficiente en el sentido de obtener reacciones que implicaron beneficios para los bloques empresariales, pero fue insuficiente porque al no tomar partido por uno de los bloques no logró modificar la tendencia de la deuda o del equilibrio fiscal. Finalmente el tercer escenario a subrayar se da cuando el gobierno ha tomado partido por uno de los dos bloques empresariales (el productivo en este caso) y a partir de él recompone una de las dos fuentes económicas del Estado: la recaudación y los ingresos totales obteniendo incluso superávits primario y financiero que se afianzan con el default. Así, si bien hay un intento de utilizar el poder estructural del mercado vía la deuda, este uso resulta inoperante gracias al aumento de la capacidad de negociación del gobierno apuntalado por el otro bloque económico.

4.6. La dependencia social al capital: el empleo, los salarios y la estabilidad económica (o la existencia de crisis).

La dependencia social al capital: la explicación del recurso.

De la misma forma en que existe una dependencia estatal al capital mediante la recaudación y la deuda, hay también una dependencia social al capital que nace en la inversión y se transforma en empleo, salarios y estabilidad económica. Tomaremos como guía para analizar la dependencia social al capital el continuo estabilidad-crisis y su afectación en la toma de decisiones gubernamentales. Lo primero a mencionar es que aún se encuentra en debate el papel de las crisis en la toma de decisiones políticas. Dos son los puntos que me

ingresos. La poca movilidad fiscal del gobierno incrementa también el poder estructural del mercado a través de la deuda. Si no se tiene un mercado de capitales profundo con actores domésticos que sea posible regular, encarar un vencimiento de deuda de miles de mdd sin capacidad de refinanciar parte de esa deuda en el mercado de capitales mediante la emisión de un nuevo bono implica tener que pagar la deuda con medidas fiscales, aumentando los impuestos o bajando el gasto, lo cual es muy difícil a la par que conllevan un fuerte costo social. Algo semejante sucedió a Fernando de la Rúa quien a través de diversos recortes fiscales se propuso mandar la señal al capital financiero de que se contaba con el equilibrio fiscal suficiente y los dólares necesarios para hacer frente a las obligaciones de deuda.

interesa resaltar: la utilización de la crisis económica (con todas sus externalidades) como generador de consensos de fuga hacia delante (la crisis hiperinflacionaria de 1989) y los momentos de crisis como ambientes donde los poderes fácticos provenientes del mercado utilizan de forma directa sus recursos políticos junto con el cabildeo dejando de lado el poder estructural del mercado (la crisis fiscal y financiera del 2001).

Para analizar el primer punto es importante hacer notar que la relación mercado-democracia en el advenimiento latinoamericano de la tercera ola democrática se ha estudiado en tres fases. La primera analiza esta relación a partir de los procesos de transición explicando la necesidad de que los primeros gobiernos posteriores a la transición fueran de derecha moderada a fin de afianzar el proceso democrático frente a los poderes fácticos tendientes al golpismo aunque esto supedita los procesos distributivos (Kaufman, 1986; O'Donnell, 1979; Przeworski, 1986) –históricamente estaríamos frente a la salida de la dictadura militar en 1983 y la llegada al poder del partido Unión Cívica Radical con Raúl Alfonsín a la cabeza partido de derecha moderada que ganó las elecciones a los peronistas, esta etapa histórica está fuera de nuestro análisis.

En una segunda fase comenzó a estudiarse la relación mercado–democracia a partir de las reformas estructurales siendo el principal hito, más no el único, el análisis de la intertemporalidad, efecto túnel o valle de transición²¹. Además de esta explicación de la relación democracia–mercado en el cuadro siguiente se esbozan algunas otras teorías al respecto:

Cuadro 196.- Explicaciones sobre la relación mercado – democracia			
DENOMINACIÓN	MECANISMOS	OBJECIONES	AUTORES
Intertemporalidad, efecto túnel o valle de transición.	Homogeneidad social. Consenso dado por la maximización intertemporal.	La crisis lleva a una heterogeneidad social creciente y al cortoplacismo.	Hirschmann y Przeworski.
Segmentación	Crisis de identidad Consenso antisolidario	No hay consenso, sino que puede suponer el disenso.	Claus Offe Taylor-Gooby

²¹ Este tema fue tratado por múltiples investigadores. Tal vez el primero en ponerlo en la mesa precisamente como intertemporalidad mediante el efecto túnel fue Hirschmann (1973), aunque el más conocido de los investigadores en este tema fue Adam Przeworski (1991) junto con Luiz Carlos Bresser Pereira y José María Maravall (1993) y sumando los análisis que Przeworski realizó para el caso polaco y mexicano con Susan Stokes y Jorge Buendía. Sobre la aprobación/desaprobación de las reformas y la intertemporalidad en el caso argentino tenemos a Carlos Acuña (1994), Mario Navarro (1995) y Vicente Palermo (1994 y 99).

Conversión ideológica	Aceptación resignada o pragmática.	Argumentación ad hoc Señalamientos de validez muy parcial.	Minujin y Kessler Mora y Araujo
Manipulación política	Cambio intencional en la relación costo-beneficio de la acción colectiva.	Supone gradualidad y capacidades no ordinarias al gobierno.	Tironi y Lagos
Consenso de fuga hacia adelante	Administración astuta del capital político Consenso de no retorno	El uso del capital político no es consistente con las demás estrategias. El consenso sobre el no retorno no implica consenso hacia adelante.	Palermo y Torre
Crisis de representación	Anomia y heterogeneidad sociales	Incompatibilidad con la situación de apatía política.	Portantiero, Sergio Zermeño
Fuente.- Navarro, 1995: 462.			

Una tercera fase del análisis de la relación mercado-democracia se genera luego de más de 10 años de aplicación de las reformas estructurales con el objetivo de observar el impacto que el mercado ha tenido para con el régimen democrático. En esta tercera fase se encuentra esta tesis. Pero permanezcamos por un momento en la segunda fase del análisis de la relación mercado-democracia con las reformas estructurales como objetivo y la crisis hiperinflacionaria en Argentina como ambiente. Este marco supone que en los primeros años de aplicación de las reformas estructurales habría un proceso de concentración de la riqueza, que se sumaría al deterioro de los intereses que se encontraban previamente protegidos, un estallido inflacionario y la subutilización del capital con un consecuente aumento del desempleo (Przeworski, 1991: 253). Lógicamente los primeros años de aplicación de las reformas económicas iban a generar un repudio social y un impacto negativo en los gobiernos y posiblemente en el régimen democrático. Es por ello que Adam Przeworski recomienda introducir simultáneamente todas las medidas de reforma neoliberal a fin de que los efectos transitorios sean breves (la píldora amarga). Suponiendo que vendría luego un segundo momento de estabilidad económica y un tercero de reactivación donde la capacidad ociosa y la concentración del capital se volcaría en un nuevo periodo de inversión y, con él, de derrame económico para generar un proceso sostenido de crecimiento que debía reducir el malestar social y político del sector afectado. El punto a analizar para el caso argentino es que tanto la crisis hiperinflacionaria, con todos los efectos que ya fueron descritos, primero obligó a Carlos Menem a realizar el viraje del populismo al neoliberalismo y luego le otorgó la autonomía suficiente para institucionalizar este nuevo

modelo económico entre 1989 y 1991. Así, aquí vemos dos casos interesantes, por un lado, el ejercicio del poder del mercado sobre el gobierno y, por el otro, la generación de autonomía del gobierno frente a los ciudadanos.

En principio explica Mario Navarro (1995: 445) que debido a que la mayoría difícilmente de forma voluntaria suscribiría programas económicos que generan desempleo, concentración de la riqueza o reducción de las ayudas sociales se supondría que en el régimen democrático la tolerancia popular es anómala. Incluso uno puede presumir que las preferencias de los ciudadanos son contrarias a los ajustes económicos por lo que sería incompatible la realización de dichos ajustes en un régimen democrático sin que el gobierno pague en las siguientes elecciones por ello. El hecho de que se impusieran los planes ortodoxos de salida de la crisis de 1989 sobre las preferencias de las mayorías y el sufragio popular fue visto en América Latina en general y en Argentina en particular como una expresión de la tensión mercado–democracia donde la economía vencía a la política (Acuña y Smith, 1994). Por su parte, Adam Przeworski (1997: 39) identifica cuatro tipos de respuestas frente al proceso de reformas neoliberales y sus consecuencias, en todos los casos los votantes observan pérdidas pero responden distinto respecto de las expectativas de futuro y los culpables de sus pérdidas: los votantes económicos que infieren que el deterioro continuará y culpan al gobierno por ello; los votantes intertemporales infieren que la prosperidad está próxima y confían en el gobierno; los votantes antidotistas que infieren la continuidad del deterioro pero culpan a los opositores al gobierno y apoyan las reformas como antídoto frente al deterioro y los votantes distributivos que infieren una pronta mejoría pero consideran que ellos están sufriendo más que el resto y culpan de ello al gobierno.

La crisis de 1989 como recurso político del mercado.

En Argentina las reformas estructurales llevadas a cabo por Carlos Menem se echaron a andar en un ambiente de crisis hiperinflacionaria con 2 mil y 3 mil por ciento de inflación en 1989 y 1990 y pese a que Menem ganó las elecciones con una campaña populista y una plataforma electoral ecléctica. La relación entre inflación y su uso político tiene una larga discusión. Para Albert Hirschmann (1984) se puede hacer un uso político de la inflación para avanzar en la construcción de reformas económicas; en cambio, para Javier Corrales

(1999) el uso político de la inflación en las reformas estructurales es menor. A este debate entra Vicente Palermo (1999) argumentando la necesidad de diferenciar los procesos inflacionarios de los hiperinflacionarios y especificando que para el caso argentino la crisis de 1989-90 fue de mucha utilidad para llevar a cabo las reformas estructurales. En este mismo sentido explica Juan Carlos Torre (24/may/06) que existen tres razones para explicar el viraje de Carlos Menem en 1989: 1) La crisis y sus efectos sobre los libretos económicos existentes, 2) la crisis y la potenciación de la capacidad de veto de los grandes jugadores económicos locales e internacionales y 3) la crisis iluminando un problema de credibilidad para un nuevo líder emergente. En sentido semejante opina la Fundación Konrad Adenauer (1999: 19-20) que la hiperinflación de 1989 y 1990 funcionó como fuerte disciplinador de las expectativas de la población.

Incluso tanto para la Fundación Konrad Adenauer (1999) como para Marcos Novaro (10/may/06) y para Carlos Acuña (24/may/06) las reformas neoliberales fueron atadas en el discurso a la búsqueda de estabilidad. Para la Fundación las reformas se implementaban utilizando argumentos referidos a la crisis, la urgencia y la carencia de alternativas para justificar algunas de las medidas más resistidas como la privatización de Entel. Explica Marcos Novaro que con la crisis el mensaje que Menem da es: “hay que hacer cualquier cosa que contenga la crisis independientemente de nuestra historia, de lo que hubiéramos preferido, de lo que el peronismo podría haber hecho en otras circunstancias, hay que ser pragmáticos.” Y para Carlos Acuña la forma de legitimar las reformas estructurales en argentina fue ligándolas a una promesa de estabilidad y de parar la crisis hiperinflacionaria (asegurando que el control de los precios esté a cargo del capital privado); así, una de las particularidades que ocurrió fue que las reformas estructurales, que por definición son reformas de impacto a mediano o largo plazo, quedaron directamente atadas a lo que era una necesidad de corto plazo, particularmente de controlar la inflación. Ya en el capítulo primero explicamos como se conjugaron la hiperinflación, los empresarios como jugadores de veto, los asesores con ideas neoliberales, la derrota de los duros al interno del peronismo y el hecho de que por la urgencia muchas fueran decisiones que vislumbraban el corto plazo para entender el viraje neoliberal del peronismo en 1989.

Así, la crisis hiperinflacionaria, los malos resultados macroeconómicos, la crisis fiscal del Estado y la incredibilidad política fueron los cuatro elementos que enfrentaba el

menemismo y son estos elementos los que también dieron el capital político para permitir la realización de las reformas neoliberales debido a la tolerancia pública al ajuste a partir de la aguda emergencia económica, el descrédito de las instituciones económicas existentes y el propio capital político de Carlos Menem como líder justicialista (Gerchunoff, 1996: 737). En sentido semejante explican Mario Navarro (1995: 453) y Manuel Mora y Araujo (1991: 166) que la tolerancia al ajuste se fundamenta en la voluntad de la ciudadanía para colaborar en la lucha contra la inflación a través del recorte del déficit fiscal. Para Mora y Araujo la crisis fiscal unifica las prioridades de millones de personas lo que significa dos cosas: política antiinflacionaria y privatizaciones.

Debo destacar que la crisis hiperinflacionaria no se había hecho sentir en los niveles de desempleo y de subempleo que estaban entre el 7 y 8% del PEA en 1989 (cuadro 197). En cambio la crisis hiperinflacionaria se hizo evidente, además de los índices de 2 mil y 3 mil por ciento de inflación, en el aumento de la pobreza que fue de 39% en 1988 a 56% de la población del GBA (cuadro 199); en la caída del consumo (5.4% con respecto al año anterior) (cuadro 200) y en la caída de caída del 23% del salario que desde 1974 venía a la baja (cuadro 198).

En principio la crisis hiperinflacionaria permitió tanto echar a andar las reformas neoliberales como mantener quietas las expectativas redistributivas pese a las consecuencias en la concentración de la riqueza de las propias reformas. Como explican Gerchunoff y Torre (1996: 737): “luego de haber sufrido los efectos devastadores del vértigo inflacionario, aún la sola perspectiva de la estabilización trae tal sensación de alivio en la población que neutraliza las consecuencias distributivas de los políticas de reforma”. Esta demanda de estabilización respaldada por un apoyo social a partir de una fuerte crisis hiperinflacionaria generó, de acuerdo con Ludolfo Paramio (2004: 37), la necesidad de orden y previsibilidad en la ciudadanía. Ahí donde la crisis genera altos grados de inestabilidad la demanda de orden impera y dónde se logra establecer cierta estabilidad el respaldo al orden establecido se traduce en votos y elecciones ganadas como sucedió en Argentina en las elecciones intermedias de 1991, 1993 y la reelección presidencial de Menem en 1995 en donde uno de los principales temas que decidieron la elección fue la continuidad para consolidar la estabilidad frente al cambio con un nuevo trasfondo de crisis externa: el efecto Tequila. La demanda de orden –sigue Paramio- genera votantes

plebiscitarios distintos a los votantes económicos que otorgan una mayor capacidad de acción a los gobernantes elegidos siempre que mantengan el orden social. Este es el caso de Carlos Menem quien luego de la elección legislativa de octubre de 1991 emite un decreto por medio del cual desregula la economía desapareciendo órganos estatales de control del mercado y en noviembre de ese mismo año consigue en el Congreso una reforma de flexibilización laboral y emite un decreto para realizar una segunda ronda de privatizaciones. Asimismo, antes de la elección de octubre de 1993, en septiembre, lleva a cabo la reforma previsional que privatiza los fondos de pensiones a la par que en 1994 y 1995 lleva a cabo fuertes ajustes económicos.

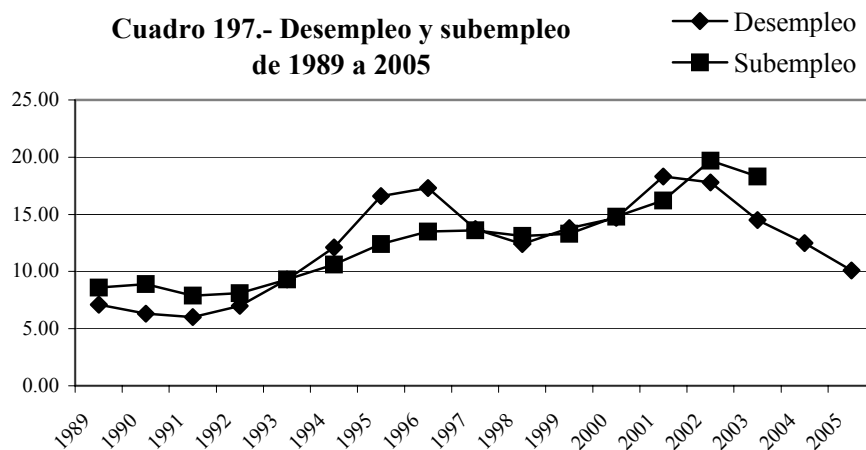
Los límites de la búsqueda de estabilidad.

Valga ahora mencionar dos puntos importantes: la capacidad de movimiento del capital y la tolerancia social a las decisiones gubernamentales cuando la estabilidad es la demanda principal. Explica Navarro (1995) que la demanda de estabilización tiene un periodo corto de tolerancia que para el caso Argentino se observa de 1989 a 1995 a la par que las reformas estructurales sólo tendrían éxito a futuro si el país retoma el crecimiento con niveles estables y moderados de inflación (Przeworski, 1990 y 1991). Asimismo, la capacidad de movilidad del capital para decidir donde invertir, cerrar una planta y abrir otra y utilizar esta capacidad como recurso político no es paralela a la posibilidad de que los trabajadores decidan entre trabajar o no puesto que su manutención depende de ello: el trabajo, a diferencia del capital, difícilmente puede ser utilizado como un recurso político. Esta distinción entre el trabajo y el capital permite al último de los mencionados definir las condiciones de producción (flexibilidad laboral), la cantidad y calificación de sus empleados y los montos del pago.

Los dos puntos anteriores son importantes ya que si sólo se estudia la entrada y salida de capitales y sus consecuencias como un mecanismo casi de reloj y se deja de lado el hecho de que se trata de decisiones privadas que pueden funcionar como recursos políticos se daría por hecho, y de forma errónea, que necesariamente luego de un proceso de reformas vendría el crecimiento sostenido con derrama económica, no fue así. Solía aceptarse, como lo hace Gosta Esping-Andersen (1996: 523), que durante el paso del keynesianismo al neoliberalismo habría un intercambio entre el aumento del empleo y la

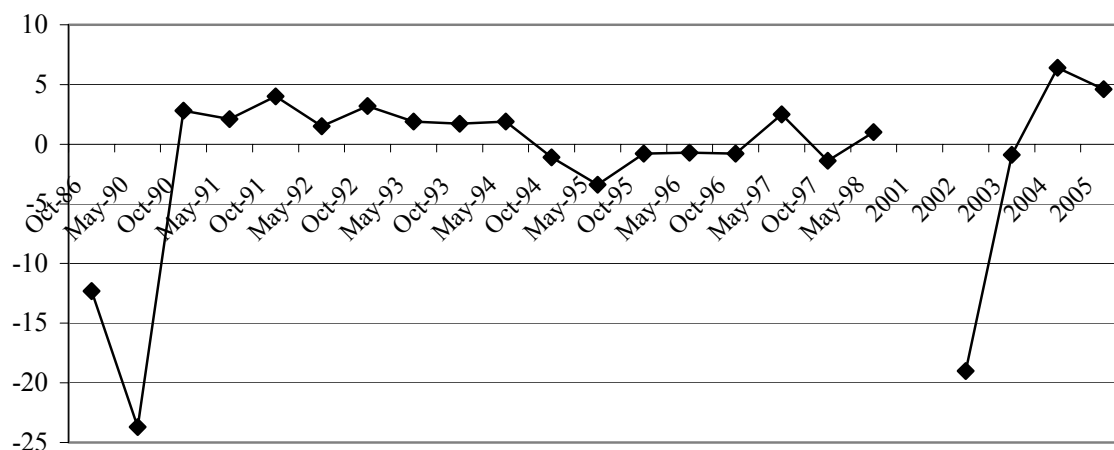
protección social igualitaria y generosa. De esta forma, los altos impuestos y contribuciones sociales, los salarios altos y rígidos así como los derechos laborales serían borrados en el nuevo modelo, por sus características inflexibles, a fin de generar mas empleos. Se presentaría una decisión dilemática: adoptar una estrategia radical de liberalización del mercado laboral para aumentar las plazas aunque en condiciones precarias o mantener importantes normas de protección laboral con altas tasas de desempleo. Esta situación dilemática no existe más y el caso argentino lo demuestra. Como observamos anteriormente en la crisis hiperinflacionaria de 1989 el único indicador que no se encontraba en situación crítica fue precisamente el desempleo. En cambio, en los años de consolidación del nuevo modelo y de mayor consenso social (1991 – 1994) el desempleo aumentó del 6 al 12.1% del PEA (cuadro 197) pese al nuevo modelo económico y al proceso de flexibilización laboral observado principalmente en 1991. Así, las plazas existentes en Argentina se precarizaron y las nuevas plazas precarizadas fueron insuficientes. No es raro que dos de los tres principales problemas que los argentinos observan en su país entre 1989 y 1999 son precisamente el desempleo y los bajos salarios.

Si bien la hiperinflación e incluso la inflación logró controlarse, sólo hubo crecimiento económico entre 1991 y 1994, año en el que se desaceleró la tasa, con números negativos en 1995 para crecer de nuevo en 1996 y 97 desacelerándose en 1998 y con número negativos de nuevo en 1999–2002. Más grave aún es que el crecimiento económico se desvinculó por completo de indicadores sociales básicos como: A) el empleo que luego de 1994 siguió subiendo hasta llegar a 17.3% del PEA en 1996, mantenerse entre 12 y 13% hasta 1999, llegar a 18.3% en 2001 y comenzar a bajar nuevamente para alcanzar el 10.1% en 2005 (cuadro 197).



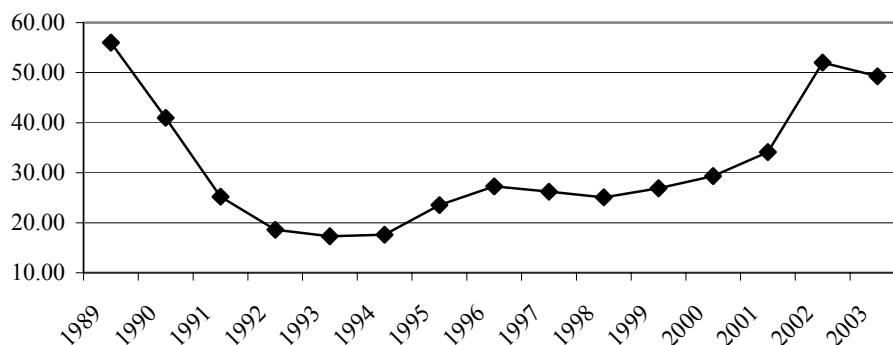
B) El ingreso salarial promedio del GBA que tiene dos grande picos de caída, uno entre 1986-90 y otro en 2001-02. Este indicador muestra aumentos siempre inferiores al 5% entre 1990 y 1994 (todos estos aumentos no logran recuperar el trecho perdido por el salario desde 1974); con número negativos de octubre de 1994 a octubre de 1996 y luego cambios de tendencia hasta 1998 (cuadro 198).

Cuadro 198.- Variación salarial de 1986 al 2005.



C) La pobreza en el GBA que tuvo una importante mejoría entre 1989 y 1992, un estancamiento entre 1992 y 1994 y un mantenimiento de la pobreza inclusive en los años de crecimiento económico de 1996 a 1998 para tener un nuevo pico en la crisis del 2001 y 2002 (cuadro 199). Explica Juan Javier Balsa (2001: 239) que durante los años del consenso social con el nuevo modelo la recuperación económica permitió a muchas familiar repositionarse frente a la hiperinflación. Sin embargo, y comparando con los 80, durante los 90 aumentó la pobreza por falta de ingreso destacándose el rápido incremento de los nuevos pobres: antiguas familias de la clase media y pobres que habían logrado salir temporalmente de esta condición.

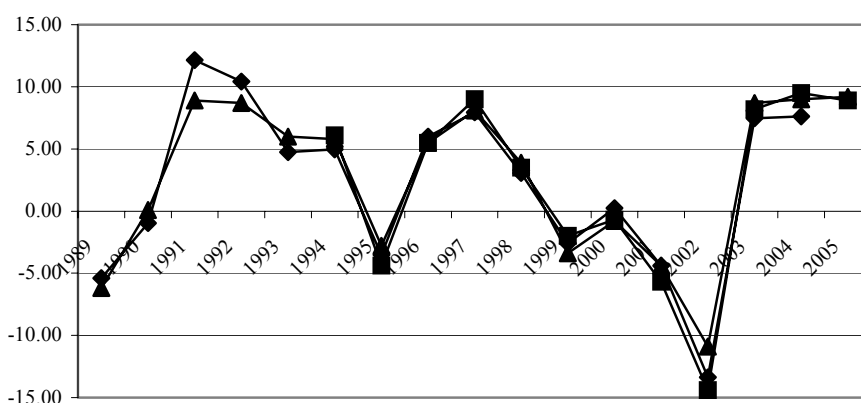
Cuadro 199.- Pobreza en GBA 1989 - 2003



D) Finalmente un indicador que, a diferencia del resto, si tiene un paralelo con el crecimiento del PIB, y con las inestabilidades del crecimiento del PIB, es el consumo total del país y el consumo de hogares. El crecimiento del PIB entre 1990 y 1992 es seguido de forma paralela por el consumo, lo mismo que la desaceleración de 1993-94, la caída de 1995, la recuperación entre 1996 y 98, la nueva caída entre 1999 y el 2001, el precipicio del 2002 y la recuperación del 2003 al 2005 (cuadro 200).

Cuadro 200.- Consumo y PIB de 1989 a 2005

- ◆ Consumo total %
- Consumo de los hogares con IVA
- ▲ PIB



Es importante subrayar que la inestabilidad en el crecimiento, con la consiguiente inestabilidad en los indicadores sociales, junto a la desvinculación de la pobreza, el salario y el desempleo con el crecimiento económico no se debe más a la transición de la institucionalidad económica, como los analistas de la relación democracia-mercado en el tema de la transición establecieron, sino a las nuevas reglas del juego que hicieron a Argentina más dependiente a los cambios de los flujos de capital financiero habiendo tres fuertes cambios: 1995, 1998 y 1999.

Así, si la crisis hiperinflacionaria funcionó entre 1989 y 1991 para aceptar el cambio del modelo económico estableciendo como principal demanda la estabilidad, esta más que un fin es un medio y una vez que esta se ha logrado se generan nuevas demandas que en Argentina particularmente fueron económicas fundadas en la mejoría de los empleos, los salarios, la educación y los problemas de corrupción y seguridad²² (Mora y Araujo, 1993: 323-324). Recuperó los puntos con los que inicié esta sección: la inversión y sus esperadas consecuencias positivas no funcionan bajo reglas específicas como un mecanismo de reloj,

²² Ver al inicio cuadro 185.

se trata de decisiones privadas que pueden ser utilizadas, por sus consecuencias, como recursos políticos por lo que era previsible que la instauración de un modelo económico neoliberal con una política amigable al mercado no sería suficiente para generar inversión. Más aún, habiendo inversión está se desvinculó de indicadores sociales básicos. Si bien la dependencia social al capital puede llevar a la ciudadanía a aceptar el cambio de un modelo económico, es necesario que el nuevo modelo rinda frutos puesto que la tolerancia generada por la demanda de estabilidad tiene límites que, para el caso argentino, llegaron hasta la reelección presidencial de Carlos Menem en 1995 y gracias a una crisis externa, la mexicana.

Crisis de 1989 y del 2001: análisis comparado.

En las elecciones que se llevan a cabo en medio de procesos de crisis, la oposición puede aprovechar la visión retrospectiva sin hacer hincapié en la prospectiva logrando ampliar su autonomía política, incluso para hacer lo contrario a lo que se esperaba. El problema en estos casos se da en las expectativas que se levanten, qué tan profunda fue la crisis (como aparece en el imaginario colectivo) y en cuánto tiempo se logre estabilizar la situación.

Lo que observamos en 1989-1991 es la llegada de Carlos Menem en un ambiente de alta crisis y fuerte pérdida de las expectativas futuras que le otorga una mayor autonomía para actuar en el gobierno que se consolida entre 1991 y 1994 cuando logra estabilizar la economía, tener mayor crecimiento económico, aumentar salarios (sin llegar al salario de los 70 que había venido cayendo desde entonces) y reducir la pobreza. Así, el viraje no le costó políticamente nada al presidente, por el contrario, pese al viraje logró victorias electorales en 1991, 1993 y la reelección presidencial de 1995. La magnitud de la crisis hiperinflacionaria no sólo ayudó al funcionamiento de la crisis como factor político de aquiescencia frente a las reformas neoliberales sino que alargó el periodo de tolerancia por más de 6 años incluyendo una reelección presidencial. Sin embargo, la tolerancia no estaba fundada en un acuerdo respecto de lo que se estaba haciendo y la formulación de expectativas de prosperidad a futuro sino en la urgencia de huir del presente, lo que Vicente Palermo (1999) ha denominado consenso de fuga hacia delante y que Ludolfo Paramio (2004) presenta como un acuerdo en torno al orden y la estabilidad –votantes plebiscitarios más que económicos- más no en torno al neoliberalismo. Este hecho es importante porque

hace evidente que lo que se hizo en el pasado para salir de la crisis hiperinflacionaria no necesariamente era parte de un consenso y, por ende, tampoco tendría que ser aceptado y

	1985	1989	1992	1994	1998	2000	2002
ESTATISTA	43	26	22	29	45	51	64
PRIVATISTA	57	74	68	71	55	49	36

Fuente.- Mora y Araujo, 1991: 75 – 82; y 2002: 36 – 37.

sostenido en el futuro. Por eso frente a las fallas del modelo para realizar la última fase de crecimiento y derrame

económico entre 1995 y 2001 hay una tendencia a reforzar las actitudes estadistas de la ciudadanía junto con una creciente desaprobación al modelo económico y a la situación actual de la Argentina (cuadros 201 y 202).

	Sep* 1999	Oct* 1999	Abr** 2000	Sep** 2000	Dic** 2000	Feb* 2001	Feb* 2002
Muy de acuerdo / De acuerdo	16.1	14.3	22.6	22.3	18.9	10.7	31.5
No tengo posición	15	15.2	16.9	12.6	18.2	18.3	--
Poco / Nada de acuerdo	65.4	66.5	57	64.6	59.6	67.6	62.2
No sabe.	3.5	4	3.6	0.5	3.3	3.4	6.4

Fuente: IBOPE-OPSM. * Nacionales. ** Capital Federal

La crisis de diciembre del 2001 es distinta a la de 1989 en un punto fundamental: la intensidad de la crisis en un lapso de tiempo corto. Mientras que la de 1989 es una crisis de alto impacto, la gestación de largo plazo de la crisis de diciembre del 2001, pese a su erupción en ese mes, la caracteriza como una crisis de bajo impacto para quien vivió su gestación: Fernando de la Rúa. Explica Theotonio Dos Santos (2004: 173-174) que los desequilibrios económicos se agravaron durante los 90 debido a las políticas de sobrevaluación de las monedas locales que generaron enormes déficits comerciales. A partir de estos déficits comerciales se elevaron las tasas de interés locales justo cuando los centros financieros internacionales bajaban las tasas incrementando la desaceleración económica. Con pocas reservas internacionales, habiendo vendido las empresas estatales y con déficits comerciales no queda más remedio que llevar a cabo una devaluación que normalmente viene acompañada de una recesión y reducción del ingreso para disminuir importaciones y generar superávit cambiario, en el caso de Argentina esta devaluación con recesión y empobrecimiento de la gente se retrasó varios años hasta llegar al 2001.

Mientras que la hiperinflación de 1989 fue vivida como una desarticulación instantánea de la sociedad, la crisis de diciembre del 2001 comenzó a gestarse desde 1994, cuando dos de las tres principales demandas de los argentinos eran el desempleo y los bajos salarios. Continúa su formación en el segundo semestre de 1998, cuando al cambiar los flujos de inversión hay un punto de inflexión en la tendencia creciente del PIB para mantenerse en número negativos hasta el 2002, y tiene como un importante factor de gestación la victoria de la Alianza en las elecciones presidenciales de 1999, llegando al poder una coalición que se presentaba como de centro-izquierda (aunque no era tal en su plataforma electoral) que si bien tenía como uno de sus principales mandatos el mantenimiento de la convertibilidad también generaba fuertes expectativas de cambio en su política económica y mejoría en sus indicadores sociales.

El programa político-económico de la Alianza se encontraba lejos de las expectativas formadas por los ciudadanos argentinos y más lejos aún estuvo la capacidad de acción del gobierno federal que tras una reforma fiscal, un ajuste económico, una reforma de flexibilidad laboral y un escándalo de corrupción perdió en tan sólo 10 meses todo su capital político. Los siguientes intentos de sus tres ministros de economía, Luis Machinea, Ricardo López Murphy y Domingo Cavallo, no estuvieron muy lejos del modelo económico establecido por Carlos Menem. Sin embargo no deja de ser llamativo que, pese a las expectativas de cambio, la evocación de figuras del pasado como la contratación de Domingo Cavallo en marzo del 2001 fue bien recibida por la ciudadanía con índices de hasta el 70% de aceptación. No obstante, frente a una crisis de bajo impacto donde la estabilidad no era la principal demanda sino la redistribución, el tiempo que le dieron a Domingo Cavallo para solucionar las principales demandas económicas fue muy poco (9 meses) en comparación con el apoyo otorgado en 1989 a Carlos Menem durante la introducción de las reformas estructurales con pobres resultados (dos años, 1989-1990).

Una vez que la crisis llegó a su punto clímax en diciembre del 2001 dos elementos son interesantes a subrayar: durante los siguientes tres meses, cuando se realizaron modificaciones al modelo económico argentino (default de la deuda, fin de la convertibilidad y devaluación, pesificación de las tarifas, contratos, depósitos, deudas, etc. y establecimiento de impuestos y retenciones a las exportaciones entre otras), el capital dejó de lado el poder estructural del mercado y activó sus recursos políticos directos que

incluyeron el cabildeo (no sólo de los empresarios sino incluso de los embajadores y presidentes de los países originarios del capital), la amenaza de subir precios y generar inflación y de despedir gente, la oferta de traer dinero fresco a Argentina para devolver los depósitos bancarios y la oferta de adelantar recursos recaudatorios a cambio de múltiples demandas como mantener dolarizadas las tarifas de los servicios públicos, no establecer impuestos a la exportación de hidrocarburos, privatizar la banca pública, etc. El segundo elemento a subrayar es que no fue un gobierno electo por los ciudadanos quien “administró” la crisis sino el gobierno de Eduardo Duhalde, el segundo gobierno elegido por el congreso (luego de Adolfo Rodríguez Saá).

Explica Eduardo Ratti (9/may/06) –secretario de coordinación técnica de enero a abril del 2002- que el gobierno fue recibido con terribles expectativas de futuro: “todo aquel que se veía afectado por la situación hoy suponía que mañana le iba a ir peor y no mejor eso generaba una situación de incertidumbre y angustia...” Si bien el gobierno en ese momento podía tener claro hacia donde iba, el resto de los ciudadanos (e incluso de los políticos) no tenía por qué creerlo, hecho que se reforzaba por la falta de credibilidad que había generado la autoridad anterior. Así, quien se hizo cargo del grueso de la incredibilidad del gobierno (“que se vayan todos”), la incertidumbre y la ausencia de futuro no fue Néstor Kirchner sino Eduardo Duhalde que jamás supero el 23% de aprobación en su gestión. En cambio, a la llegada de Néstor Kirchner la parte más dura de la crisis ya había sido sobrellevada, se había realizado la devaluación y prácticamente solucionado el corralito bancario e incluso comenzaba a echarse a andar la economía. Más aún, las expectativas generadas por Néstor Kirchner eran de continuidad y de nivel medio ya que llegó a la presidencia en segundo lugar, detrás de Carlos Menem, y sin una segunda vuelta a la par que la pérdida de credibilidad en los gobiernos bajaba el nivel de expectativas de los mismos. Esto último implicó que una de las principales demandas (tras el “que se vayan todos”) era la representación política, la reconstrucción del lazo político-social entre los ciudadanos y el gobierno electo, lo cual generó capacidad de acción a Néstor Kirchner para elaborar un discurso de confrontación con los organismos internacionales y las empresas privatizadas cuando nada se esperaba de ellos puesto que la principal fuente de inversión que ocupaba la capacidad ociosa de la economía argentina era doméstica (2003-2004).

Todos estos elementos explican los altos índices de aprobación que logra y mantiene Néstor Kirchner.

El punto que me interesa recalcar es que mientras Carlos Menem recibe en 1989 una Argentina con una crisis de alto impacto, donde la principal demanda es la estabilización que le otorga una mayor autonomía de acción; Fernando de la Rúa recibe una Argentina con una crisis en gestación, de bajo impacto, donde la principal demanda es la redistribución que le da una menor autonomía de acción; y Néstor Kirchner recibe una Argentina con una crisis que estalló en manos de otro, donde una de las principales demandas es la reconstrucción de la representación política que le da niveles medios de acción que Néstor Kirchner supo utilizar mediante un discurso de confrontación con cierta parte del capital (cuadro 203).

Cuadro 203.- Crisis económicas y consecuencias políticas 1989 – 2005.			
	Crisis de Menem	Crisis de De la Rúa	Crisis de Kirchner
Oposición/continuidad	Oposición	Oposición	Continuidad
Expectativas	Altas	Altas	Medias
Tipo de crisis.	De alto impacto	De bajo impacto	En proceso de solución.
Principal demanda	Estabilidad	Distribución	Representación
Autonomía de acción	Mucha	Poca	Media
Elaboración propia.			

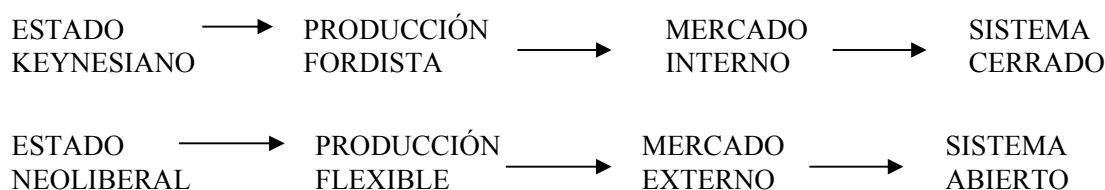
4.7. La segunda dimensión del poder: el mantenimiento de las instituciones necesarias

Hasta ahora hemos puesto hincapié en el poder estructural y la aplicación directa de los recursos políticos del mercado a partir de la primera dimensión del poder (o pluralismo). Sin embargo, la teoría del poder fue complementada por una segunda dimensión proveniente del texto de Bachrach y Baratz (1962). Si bien es cierto que el poder se manifiesta mediante la participación en la toma de decisiones, ésta no es su única expresión. También hay un ejercicio del poder cuando A gasta energía para crear o reforzar los valores políticos y sociales o las prácticas institucionales que limitan la agenda de los temas políticos, es decir, limitan el alcance de la adopción de decisiones a problemas relativamente inocuos, esta segunda dimensión del poder es excluida por Dahl. La formulación de no decisiones se logra a través de sanciones positivas o negativas o por la invocación de tendencias o reglas de juego existentes. En consecuencia, se deben analizar

tanto la toma de decisiones como de no-decisiones: “Si B no actúa porque prevé la reacción de A, entonces no ocurre nada y tenemos un no evento, que es susceptible de verificación empírica en que las llamadas no decisiones, que restringen el alcance de la adopción de decisiones, son a su vez, decisiones (observables)” (Lukes, 1974: 14). La decisión es la adopción entre varios modos de acción alternativos mientras que la no decisión es la frustración o supresión de un reto latente o manifiesto a los valores o intereses de quien adopta la decisión. En este segundo caso, las demandas de cambio y beneficio son incluso sofocadas antes de ser articuladas y representan conflictos observables encubiertos porque fueron impedidos de actualizarse.

La segunda dimensión del poder analiza “las reglas del juego”, es decir, los problemas existentes y potenciales referidos a conflictos observables -abiertos o encubiertos- por lo que se constituye sobre la lógica institucional como una forma de expresión del poder y de los recursos políticos de poder. En este sentido el principal recurso de las transnacionales se establece en el planteamiento de un orden institucional capitalista fundado en la propiedad privada de los medios de producción como principal vía generadora de no-decisiones, es decir, la no mutabilidad de este orden institucional o la no generación de acciones contrarias a este orden institucional son recursos de poder que aparecen como no-decisiones. Se hace notar que la capacidad de las transnacionales de ejercitar recursos directos en la toma de decisiones depende del tipo de capitalismo que institucionalmente se instaure: keynesiano, tercerviísta o neoliberal. Ahora bien, cabe preguntarse: ¿Qué es lo nuevo del nuevo modelo político-económico? Y podemos responder a partir de cuatro categorías muy amplias conformadas por diversas políticas públicas: un empequeñecido Estado neoliberal, una forma de producción flexible, una tendencia al mercado externo como generador del crecimiento y el desarrollo de la economía en un sistema abierto.

Cuadro 204.- Pautas de los modelos económicos capitalistas keynesiano y neoliberal



Así, a través del poder estructural del mercado junto con instrumentos propios de la primera dimensión del poder -elementos que ya hemos analizado- se lleva a cabo el cambio institucional del modelo económico entre 1989 y 1991. El hecho de que la decisión se diera entre el mantenimiento de un modelo económico keynesiano o el establecimiento de uno neoliberal anulando la posibilidad de decisión de algún modelo no-capitalista (estableciendo una no-decisión) es la primer expresión del poder estructural del mercado en los términos de la segunda dimensión del poder. Posteriormente hay una modificación en el modelo económico en los primeros meses del 2002 y ciertas modificaciones en el gobierno de Néstor Kirchner. Pese a que es el capitalismo el modelo imperante, lo cierto es que hay dos tendencias, una observada en los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa y otra en el de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. El mantenimiento de ciertos aspectos del modelo heredado forma parte de una no-decisión de modificarlo y, por ende, una expresión del poder estructural del mercado (en este caso, de una parte del mercado: la oligarquía diversificada) para mantener fuera de la agenda los puntos que podrían lesionar sus intereses (cuadro 205).

Cuadro 205.- Modelos económicos en Argentina, 1989 – 2006.	
Modelo económico de Menem y De la Rúa	Modelo económico de Néstor Kirchner
Directrices:	Directrices:
Realización de reformas estructurales:	Mantenimiento de las reformas estructurales con pocas excepciones:
Privatizaciones ventajosas para los compradores en el centro del modelo.	Ligera revisión a las privatizaciones, no hay aumento de tarifas.
Apertura económica bajando o desapareciendo aranceles.	Se mantiene la apertura económica, se establecen más impuestos a la exportación.
Desregulación económica.	Se mantiene la desregulación económica.
Flexibilización laboral.	Cambios a la política laboral.
Reforma fiscal regresiva.	Se mantiene el régimen fiscal.
Control de la inflación vía demanda.	Control de la inflación vía oferta y acuerdos de precios.
Menor intervención del Estado en Economía.	Mayor intervención estatal (intervención monetaria, mayor inversión).
Ajustes económicos, política monetaria rígida.	No más ajustes económicos, política monetaria menos rígida.
Alto déficit fiscal al inicio y al final de este periodo.	Se logra superávit fiscal durante el gobierno.
Posición amigable con los organismos internacionales de crédito y el capital financiero.	Mayor confrontación con los organismos internacionales de crédito y el capital financiero.
Convertibilidad 1 a 1.	Tipo de cambio flotante.
Inflación nula.	Inflación baja.

Salarios a precios internacionales altos.	Fuerte caída del precio internacional salarial.
Globalización financiera:	Globalización financiera:
Libertad de movilidad de capitales.	Libertad de movilidad de capitales.
Tipo de cambio fijo, dólar bajo.	Tipo de cambio flotante, dólar alto.
Política monetaria exógena.	Política monetaria endógena.

Lo cierto es que, pese a que se sigue jugando dentro del capitalismo, hay un importante cambio en el modelo económico que significa, con el fin de la convertibilidad, el agotamiento de un patrón de acumulación específico que beneficiaba a un sector del capital: el financiero. El cambio relativo de precios posterior a la convertibilidad junto con las bajas tasas de interés generaron no sólo una fuerte y sostenida expansión económica entre 2003 y 2005 sino incluso una expansión superior de los productores de bienes con respecto al crecimiento económico, y muy por encima del sector servicios, a diferencia de lo que había sucedido durante el menemismo (Basualdo^b, sf). Sin embargo, es importante resaltar que, como parte de esta transformación, mediante la devaluación realizada durante todo el 2002 se llevó a cabo una fuerte pérdida del poder adquisitivo del salario recomponiendo también la tasa de ganancia en el sector productivo.

Así, la segunda dimensión del poder se manifiesta bajo la forma de no-decisiones a través de los temas que quedan fuera de la agenda porque su inclusión podría lesionar los intereses del poderoso, en este caso el mercado. De esta forma, la agenda se construye con aquellos temas que o son inocuos para el poderoso o son importantes porque benefician los intereses del poderoso. El mantenimiento de las opciones en dos de tipo capitalista en la crisis hiperinflacionaria de 1989 es una expresión del poder estructural del mercado. El mantenimiento de las opciones gubernamentales en distintos modelos todos capitalistas se mantiene entre 1995 y el 2002, cuando nuevamente se ponen en tela de juicio algunos de los elementos del modelo. Para el 2002 se discuten dos modelos capitalistas que mantienen muchas semejanzas (privatizaciones, libertad de capitales, apertura económica), haciendo evidente la generación de mayores restricciones a las decisiones gubernamentales o, visto de otra manera, la disminución de la agenda por la toma de no-decisiones; pero que guardan también importantes diferencias. De aquí un punto importante: puede haber una sociedad que esté pluralmente organizada en su toma de decisiones pero sea elitista o dictatorial en su toma de no-decisiones. No obstante, es importante mencionar que, si bien Néstor Kirchner ha generado autonomía con respecto al capital financiero y gracias al apoyo de la

oligarquía diversificada, en la recta final del periodo analizado comenzó a generar autonomía (mediante su política antiinflacionaria) incluso con respecto del bloque económico que es su aliado.

4.8. La tercera dimensión del poder: la competitividad como valor de cohesión social.

Finalmente la tercera dimensión del poder analiza la toma de no decisiones mediante la apropiación de la manifestación de cualquier conflicto. Para los pluralistas los intereses siempre son observables, de hecho rechazan la idea de que las personas puedan estar equivocadas acerca de sus propios intereses o ser inconscientes de ellos. El enfoque bidimensional avanza en este punto cuando observa una posibilidad de ejercicio del poder en las no decisiones, pero sigue estando apegada al análisis del comportamiento efectivo a partir de la asociación del poder con el conflicto observable (Lukes, 1974: 19 y 22). Sin embargo, puede haber situaciones en donde no haya un conflicto observable, como la manipulación y la autoridad, pero de cualquier forma haya un ejercicio del poder y la vulneración de intereses reales. Así, para Lukes A ejerce poder sobre B influyendo en sus necesidades genuinas, modelándolas o determinándolas a través del control de la información, de los medios de comunicación y de los procesos de socialización e incluso este ejercicio del poder puede ser tanto consciente como inconsciente. Entonces, A ejercerá poder sobre B cuando A afecta a B de manera contraria a sus intereses reales en cualquier forma (Lukes, 1974: 23 y 67).

La idea de intereses reales puede ser observada mediante dos factores: a) la existencia de inequidades manifiestas en la distribución de valores reconocidos por los actores del sistema y b) que esas inequidades no ocasionen intentos de mejorar la influencia por aquellos que consiguen menos de esos valores. Esto implica la necesidad de especificar los medios por los cuales A ha actuado, o se ha abstenido de actuar de forma tal que prevenga que B piense o actúe distinto, y justificar que B podría haber pensado y actuado diferente²³. Esta tercera dimensión del poder, explica John Gaventa (1980), sugiere que el

²³ John Gaventa encuentra las siguientes posibilidades de conflictos latentes por ejercicio de poder tridimensional: 1) B tiene quejas contra A pero desiste de desafiarlo porque las concepciones de B le indican que accionar contra A es inapropiado. 2) B reconoce quejas y quiere resolverlas pero no reconoce a A como el agente responsable por toda la mistificación y legitimación que lo envuelven. 3) B reconoce quejas contra A y quiere actuar pero se ha creado en B un principio de inmutabilidad del orden por lo que no hay

ejercicio de éste no solo se limita a las acciones bajo condiciones de inequidad sino que el poder sirve incluso para moldear las concepciones de los “sin-poder” sobre la naturaleza de las mismas inequidades.

La tercera dimensión del poder analiza problemas existentes y potenciales a partir de conflictos observables -abiertos o encubiertos- y latentes. Aquí, la conformación de ideas y figuras legitimadoras que encubren el conflicto y pueden generar falsos consensos es el elemento principal. El poder difícilmente puede ejercerse desencarnadamente, es necesario un valor que lo legitime, así, la tercera dimensión del poder se centra en la posibilidad de crear marcos de interpretación dentro de los cuales los poderes fácticos se relacionan entre sí y con el Estado. Estos marcos pueden ser aprobados y seguidos tanto de forma consciente como de forma inconsciente. Como vimos anteriormente las inversiones son decisiones privadas y de las inversiones dependen muchos de los indicadores que importan al gobierno (dependencia estatal y social al capital) a la par que los inversores establecen pautas conductuales racionales con carácter estratégico, es decir, “los global players... buscan insaciablemente de maximizar sus ganancias y los activos sociales que le permiten controlar los procesos económicos...” (Avaro, 2000). Para ello requieren de individuos e instituciones que resignifiquen / produzcan / adopten la hegemonía semántica (Avaro, 2000). Esto último se logra estableciendo como principio rector de la sociedad a la competitividad, en este sentido la competitividad es tanto un fenómeno económico como político e incluso cultural²⁴.

Para analizar la aplicación de la tercera dimensión del poder en el caso argentino vale la pena retomar las pautas de los modelos económicos capitalistas que se encontraban en disputa en 1989 y, particularmente, los valores que cada uno generaba. El modelo keynesiano volcado al mercado interno y poniendo énfasis en el trabajo y el aumento de demanda para disparar la oferta generaba cierta distribución que sólo era posible en un sistema cerrado (sin gran apertura económica) que diseñaba un valor de cohesión social ya

alternativas posibles. 4) B reconoce quejas y actúa pero sus quejas están mal concebidas, son dirigidas contra un blanco equivocado y con estrategias erróneas.

²⁴ En este sentido, la competitividad no se analiza como una categoría fáctica sino simbólica. Se presenta a la competitividad frente a la sociedad como un valor de cohesión social que desplaza a la satisfacción de las necesidades básicas como la salud, la alimentación, la vivienda y la educación. La competitividad sirve como fundamento para formular la teoría de la justicia y determinar el monto y distribución del excedente social. Quien no sea competitivo no debe tener parte del excedente social. Las teorías de la justicia de Robert Nozick y David Gauthier son un ejemplo de esto.

que la industria estaba volcada a la demanda interna y el pleno empleo junto con salarios suficientes permitían aumentar la demanda interna y, con ello, la tasa de ganancia. En cambio, el valor que construye la legitimación del modelo neoliberal es la competitividad. De acuerdo con Daniel Chudnovsky (1990: 10) cuando se habla de competitividad se hace referencia tanto a las firmas domésticas como al gobierno ya que la política macroeconómica determina variables clave como el tipo de cambio, la política de ingresos o la inflación que influyen en la microeconomía. Así, el sujeto competitivo lo es tanto el Estado como las propias firmas por lo que el fenómeno de la competitividad involucra diversas acciones voluntarias tanto del gobierno como de los agentes económicos a través de las cuales se construye la estructura de la economía. El Estado nación se convierte en Estado en competencia (por las inversiones y el crecimiento económico) donde el papel fundamental es aplicar una política orientada a la satisfacción de las necesidades del capital global a la par que se promociona en los asalariados en particular y en la ciudadanía en general la cultura de la flexibilidad y la competencia²⁵ (Wannöffel: 1995). Los elementos que se analizan en los índices de competitividad son varios pero todos destinados al aumento de la tasa de ganancia con la expectativa de generar una mayor inversión pese a no tener ningún medio de coerción que asegure ni esta inversión ni la reinversión de las utilidades. La competitividad incluye: estabilidad política y social, ritmo de crecimiento económico, tamaño del mercado doméstico, disponibilidad de recursos naturales, nivel del tipo de cambio, calidad y costo de la fuerza laboral, características de la política fiscal y de la política comercial, reglamentación sobre los flujos de capital, infraestructura física y tecnológica, localización geográfica, densidad del tejido industrial doméstico, incentivos específicos, etc (Chudnovsky, 1999: 19).

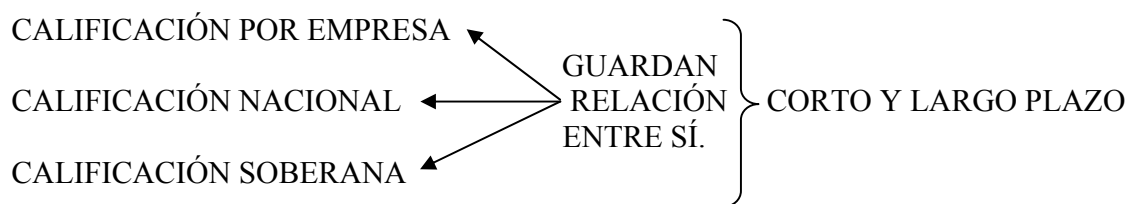
La competitividad fue el valor social dominante en Argentina luego de 1989 al realizar el cambio de modelo el cual, como explica Marcos Novaro (10/may/06), se apuntala con la gran popularidad que en ese momento tenía la visión que sostiene que los empresarios son actores con legitimidad propia en la economía y en la vida social a la par

²⁵ Esta es sólo una de las formas en que se ha entendido y analizado a la competitividad, sin embargo no es la única. De acuerdo con Daniel Chudnovsky (1990: 50) para el Instituto de Economía Industrial de la Universidad Federal de Río de Janeiro la competitividad internacional es la capacidad de una industria a una empresas de producir mercaderías con patrones de calidad específicos, requeridos por mercados determinado, utilizando recursos en niveles iguales o inferiores a los que prevalecen en industrias semejantes en el resto del mundo durante un cierto periodo. Esta definición acentúa el papel de la tecnología en la producción.

que son presentados como exitosos y obligados a distribuir esa enseñanza (“mostramos el camino para ser exitosos”). De esta forma, y con gran apoyo de los medios de comunicación, en la clase media se fue generando una visión pro-empresaria (“si a los empresarios les va a ir bien, a nosotros nos va a ir bien”) lo cual explica inclusive que pese a la crisis del gobierno saliente en 1989 el candidato oficialista Eduardo Angeloz haya obtenido el 32.45% de los votos.

Paralelamente al establecimiento de la competitividad como valor de ordenación social se ha formado una compleja red institucional de revisión y vigilancia a través de instituciones financieras ya conocidas como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional a las que se han sumado instituciones como el Foro Económico Mundial que se complementan con nuevas organizaciones denominadas “calificadoras” entre las cuales están: Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s, JP Morgan, Goldman Sachs, Merrill Lynch y Fitch-IBCA entre otras. Estas empresas miden qué sociedad es competitiva, cuál no lo es y qué debe hacer para convertirse en competitiva: determinan la buena y la mala política generando también un valor social. Con la mediación de estos organismos la competitividad se transforma en un valor ordenador que pasa de la abstracción a la concreción en medidas políticas y decisiones gubernamentales concretas.

Por ejemplo, para Moody’s Investors Service la calificación a escala nacional incluye: la posibilidad de inestabilidad política que podría llevar a un repudio generalizado de las deudas o a un cambio del marco regulatorio, el riesgo de una guerra, de terrorismo o de anarquía, la fortaleza o confiabilidad del sistema legal/jurídico y el riesgo de disfunción en el sistema financiero. A estos la calificadora Fitch-IBCA suma el riesgo de transferencia y convertibilidad, es decir, el riesgo de que se impongan controles de cambio y capital por parte de las autoridades soberanas que podrían impedir la habilidad del sector privado de convertir moneda local a extranjera y transferir a acreedores no residentes. Estos indicadores integran la calificación nacional a lo cual se suma la calificación soberana (análisis de la deuda pública), la calificación por empresa y la calificación de los depósitos bancarios en moneda extranjera y en moneda nacional todo ello a corto y largo plazo.



Una de las graduaciones de las calificaciones se observa en la siguiente tabla:

Cuadro 206.- Grados de inversión en enero del 2002		
CALIFICACIÓN	SIGNIFICADO	PAÍSES
	Grado de inversión	
AAA	La más alta calidad crediticia.	EU, Francia, Alemania, Inglaterra.
AA	Muy alta calidad crediticia.	Canadá, España, Japón e Italia.
A	Alta calidad pero cambios en las condiciones económicas pudieran afectar su capacidad de pago oportuno.	Chile, Grecia, China y Hungría.
BBB	Adecuada calidad crediticia pero cambios en las condiciones económicas pudieran afectar su capacidad de pago oportuno.	México, Egipto, Tailandia, Uruguay, Sudáfrica y Croacia.
	Especulativa	
BB+	Calidad crediticia vulnerable y cierto grado de incertidumbre.	Brasil, Bulgaria, Perú y Venezuela.
B	Altamente especulativa con margen limitado de seguridad.	Rusia, Rumania, Turquía e Indonesia.
CCC / CC / C	Riesgosa. Las obligaciones dependen exclusivamente del desarrollo favorable y sostenible en el entorno económico.	
D	Incumplimiento. El país ha caído en default.	Argentina.
E	Calificación Suspendida. No hay información gubernamental adecuada.	

Fuente: Oviedo, *Reforma*, 16/ene/02.

Uno de los principales elementos de coacción de esta dimensión del poder se da por medio de la dependencia estructural del Estado al capital ya que estos organismos establecen indicadores que determinan las condiciones en que se conceden y renuevan los préstamos a los gobiernos en el mercado internacional. La calificación soberana es el análisis de la deuda estatal de bonos y títulos públicos tanto en moneda extranjera como nacional a largo y corto plazo. A esto se suma el conocido riesgo país que se refiere a la sobretasa que paga un Estado acreedor en la emisión de bonos en relación con la tasa que paga Estados Unidos. Este indicador se expresa en puntos básicos donde cada 100 unidades equivalen a 1% de sobretasa. Como observa Federico Anzil (2005) el hecho de que estos

organismos generen este tipo de indicadores que determinan el costo del endeudamiento tiene dos importantes implicaciones: al aumentar el riesgo país aumenta el costo del endeudamiento, disminuye la llegada de fondos junto con la maniobrabilidad de la política económica y, con esto, se aumenta el riesgo de incumplimiento elevando nuevamente el riesgo país. Asimismo al elevarse el riesgo país y disminuir los flujos de fondos también aumenta la tasa de interés general por lo que no sólo se eleva la tasa de endeudamiento gubernamental sino también la empresarial con la consecuente depresión de la tasa de crecimiento. Este círculo vicioso se observa en el caso de la crisis de 2001 en Argentina.

Cuadro 207.- Riesgo país 1998 – 2006. J. P. Morgan

	Argentina	Brasil	México	Venezuela
21-ago-98	991	1187	902	2127
24-ago-98	1023	1199	894	1997
10-sep-98	1450	1734	1135	2425
03-ene-00	509	618	355	798
23-Abr-01	1284	898	402	878
29-Oct-01	2003	1191	396	1038
24-Dic-01	5083	898	308	1156
01-Jul-02	7030	1599	327	1134
06-Jun-03	5049	727	228	970
30-Mar-04	4829	550	175	653
19-Abr-05	6123	457	193	481
10-Jun-05	6603	428	172	488
13-Jun-05	910	422	170	482
30-Jun-05	464	411	169	466
09-Feb-06	382	242	114	242
17-Abr-06	336	239	136	197

Fuente.- Ministerio de Economía.

Para el caso de Argentina las primeras mediciones que tenemos del riesgo país datan de 1995 cuando, por la crisis económica, el riesgo país se encontraba en 875 puntos. Este indicador bajó hasta llegar en 1996 a 494 y se mantuvo en este rango hasta 1998 cuando nuevamente, en agosto, llegó a los 900 puntos. El único momento de caída es enero del 2000, con la llegada del nuevo gobierno de Fernando de la Rúa y la reforma fiscal. Sin embargo el índice volverá a crecer

para rebasar los mil puntos en abril del 2001 y alcanzar cifras record desde diciembre del 2001 cuando superó los 5 mil puntos llegando a los 7 mil en julio del 2002 para mantenerse alto hasta junio del 2005 pese a que 2003, 2004 y 2005 fueron años de recuperación económica.

Es en mayo de 1997 cuando tenemos los primeros datos de calificadoras, particularmente de Fitch, otorgando el grado de inversión BB en moneda extranjera de largo plazo y B en el corto plazo. Durante el 2001 todas las calificadoras fueron bajando paulatinamente las calificaciones de Argentina hasta llegar en octubre del 2001 a CCC- y en diciembre al default. El default se mantuvo hasta junio del 2005 cuando Fitch otorgó B a

la emisión de bonos en moneda extranjera a corto plazo y B- a los bonos en pesos a largo plazo aunque mantuvo en default la emisión de bonos en moneda extranjera de largo plazo. Posteriormente, en marzo del 2006, Standard & Poor's otorgó grados de inversión en los renglones que aún estaban de default y mejoró las calificaciones de los grados de inversión que previamente había otorgado, mientras que Fitch mantuvo en default la deuda en moneda extranjera a largo plazo, aunque la puso en revisión (RD), y mantuvo los grados de inversión que antes había otorgado. El punto interesante es analizar las razones tanto de este cambio en la calificaciones como de los elementos que impiden a Argentina mejorar su calificación. Para S&P (2006) la mejoría de la calificación se respalda en un nivel de deuda decreciente (luego del default y el canje de deuda), el retorno de capitales, mayor desarrollo humano (mejoría de indicadores de educación y salud) mejor infraestructura física y mayor profundidad técnica y gerencial. Para Fitch (2006) la mejoría proviene del crecimiento del PIB, de cierto control a la tasa de inflación, del incremento en los ingresos fiscales y el logró de superávits, el decrecimiento del porcentaje de endeudamiento y el fortalecimiento del peso argentino.

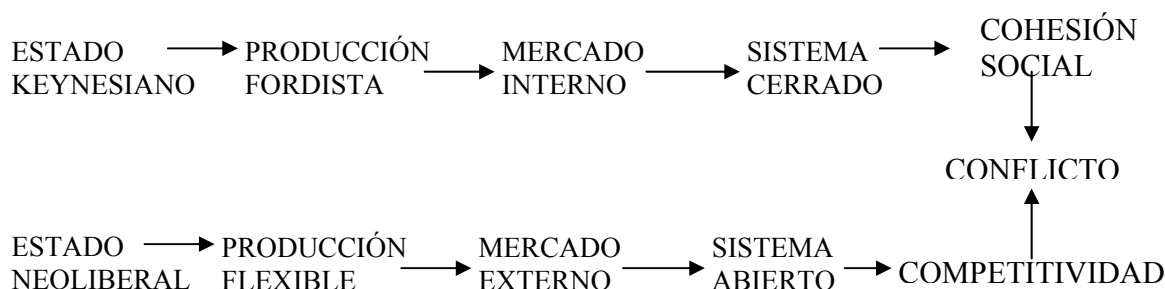
Para S&P (2006) la limitación de la calificación proviene de la debilidad de las instituciones públicas, la incertidumbre legal y regulatoria que afecta las perspectivas de inversión y crecimiento en el mediano plazo, la débil relación del gobierno con las empresas de servicios públicos privatizadas y un nivel de deuda que si bien es decreciente sigue siendo muy alto. Para ambas una señal de alerta y limitación de la calificación proviene de la política antiinflacionaria y monetaria de Néstor Kirchner, Fitch (2006) lo pone en los siguientes términos: "... el gobierno argentino ha utilizado controles de precios y persuasión moral, en lugar de política monetaria y mecanismo de mercado, para contener presiones sobre los precios". Ambas calificadoras argumentan que la intervención en mercados no regulados con el fin de controlar los precios puede limitar la inversión privada y el crecimiento del PIB a mediano plazo a la par que la política monetaria orientada a promover el crecimiento del PIB incrementa la posibilidad de una inflación alta. Así, dos de las principales políticas que hacen distinto el modelo neoliberal de Kirchner del ortodoxo seguido por Menem y De la Rúa son motivo de veto para mejorar la calificación de Argentina.

En lo que hace a los acreedores del Estado que no entraron al canje hay dos posturas distintas. Para S&P hay un menor riesgo de problemas económicos a partir de los acreedores que rechazaron la oferta de renegociación e incluso este es un factor que intervino en el mejoramiento de la calificación. Para Fitch la calificación de los bonos a largo plazo en moneda extranjera se mantienen en default, pese a la revisión, ya que una porción de la deuda sigue en default e incluso Fitch señala que si Argentina no logra un acuerdo satisfactorio con estos acreedores difícilmente saldría de la actual categoría de RD y mejorarían el resto de las calificaciones. Interesantemente para el gobierno argentino era tan importante el “visto bueno” de estos organismos que precisamente contrató a Fitch y a S&P para que calificaran el bono que tenían planeado emitir a mediados del 2006.

Ahora bien, el principal problema en torno a la competitividad como valor de ordenación social se centra en su capacidad legitimadora. Tan pronto como el Estado nacional es una forma de organización del poder y del ejercicio de la dominación en el Estado se observa tanto un aparato institucional como una relación social. Así, y siguiendo a Charles Tilly (1990), el Estado nacional es el resultado de un proceso de lucha por la redefinición del marco institucional que incluye una red de relaciones económicas, sociales y políticas que pueden ser de colaboración o confrontación. En este actuar diario el Estado puede interpretar papeles de actor, de arbitro o de arena pero requiere externar cierta autonomía que le otorgue legitimidad. Tan pronto como un conjunto de jugadores, en este caso el capital, adquiere mayores y mejores recursos políticos que funcionan tanto de forma directa como estructural limitando las posibilidades de acción del gobierno²⁶ es necesario generar una nueva fuente de legitimidad de ese nuevo orden, el conflicto ahora proviene de si la competitividad puede funcionar como “minima moralia”, es decir, como consenso moral autofundante de la sociedad política.

²⁶ Algunos autores, como Jean-Marie Guéhenno (1993), ponen énfasis en que la modernidad económica ataca el fundamento de la modernidad política: la territorialidad. Sin embargo me parece que el punto central no se basa en la territorialidad y transnacionalización como conflicto central de la modernidad política, sino en la disminución de la capacidad de autogobierno y autodecisión que son dos de los pilares de la legitimidad democrática.

Cuadro 208.- Conflicto entre valores sociales de los modelos económicos



Al romperse el continuo territorial de producción, acumulación y distribución también se rompió la lógica del sistema cerrado del modelo keynesiano y, con ello, la posibilidad de establecer lazos obligados de colaboración en la distribución que podían generar algún tipo de consenso social. Si los impuestos podían ser una medida de solidaridad política de tipo distributivo cuando se convertían en bienes colectivos en un sistema cerrado, en un sistema abierto el impuesto pierde este sentido y, por el contrario, la disminución del mismo se convierte en un principio de competitividad. Para el caso argentino vimos que el periodo dorado de la convertibilidad se da entre 1991 y 1994 cuando la crisis hiperinflacionaria formó un consenso de fuga hacia delante que se vio complementado –pese al nivel de concentración de la riqueza a través de la compraventa de las empresas estatales y de las empresas de capital doméstico- con una disminución de la pobreza, un aumento del salario y cuatro años de estabilidad y crecimiento económico posteriores a la crisis que había profundizado la caída de todos estos indicadores Sin embargo, tan pronto como el nuevo modelo económico dejó de distribuir recursos y, por el contrario, comenzó a elevar el nivel de concentración (o a mejorar la tasa de ganancia) mediante el aumento de las tarifas de los servicios públicos pese a tasas de inflación cercanas a cero, a través de la precarización del trabajo vía flexibilidad laboral y pérdida de poder adquisitivo del salario, aumento del desempleo y subempleo y aumento de la pobreza –todo esto entre 1995 y 2002- era de esperarse que la competitividad como valor de organización social no sólo fuera repudiado, sino que incluso se perdiera la postura de centralidad del Estado –“que se vayan todos”- y se pasara de una cultura política privatista a una estatista con altos niveles de desacuerdo con el modelo económico.

SECCIÓN III

EL CONTROL POLIÁRQUICO-ELECTORAL SOBRE LAS DECISIONES GUBERNAMENTALES EN MATERIA DE POLÍTICA ECONÓMICA.

En esta tercera y última sección, integrada sólo por el capítulo 5, se estudia el control poliárquico electoral sobre las decisiones gubernamentales. Vamos a utilizar el recuento histórico de los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner como base empírica para todas las afirmaciones inductivas realizadas.

En cada uno de los puntos que constituyen el capítulo 5 se intenta hacer confluir la teoría sobre el control poliárquico electoral con los datos empíricos obtenidos. Más aún, se confronta a la teoría existente a la par que se genera nueva teoría en torno a los fallos endógenos y exógenos del mecanismo de representación-responsabilidad democrática.

En el primero de los puntos (5.1) se estudia al control poliárquico-electoral: la forma en que este es instituido, los diversos mecanismos y procesos implícitos y explícitos en su configuración y las diferencias entre el control y el mandato. Los siguientes dos puntos (5.2 y 5.3) son dedicados a los dos principales fallos internos (o endógenos) del control poliárquico electoral sobre decisiones gubernamentales en materia de política económica: las opciones programáticas y los conflictos informativos.

En el punto 5.4 se analizan los fallos externos (o exógenos) del control poliárquico-electoral. Si bien pueden ser múltiples los fallos externos, en nuestro estudio el principal objeto es confrontar el control poliárquico-electoral con el control político-económico proveniente del mercado (analizado en este marco como fallo endógeno del mecanismo de representación-responsabilidad democrático).

Finalmente el último de los puntos (5.5) se dedica al estudio de la irresponsabilidad política de los gobernantes debido a las fallas internas y externas del control poliárquico electoral y a la elaboración de una propuesta de perfeccionamiento del mandato.

CAPÍTULO 5.- LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA-PROCEDIMENTAL Y EL CONTROL POLIÁRQUICO-ELECTORAL

5.1. La representatividad democrática y la responsabilidad política, accountability-responsiveness o el control poliárquico-electoral.

La representatividad democrática: los puntos de partida.

Lo primero que debemos preguntarnos es: ¿qué tipo de democracia fue la que se instituyó en Argentina después de 1983? Respondo: un modelo de democracia procedimental-representativo (DPR). Todo lo que en adelante se diga corresponde al modelo de DPR sin tomar en consideración ahora a otros modelos como el participativo, el deliberativo o el substancial¹. Ahora bien, se considera que la DPR es una forma de división de trabajo donde unos pocos regulan y dirigen el proceso social sin consultar constantemente a los ciudadanos (Manzano, 2002: 1). Tan pronto como la democracia no es directa el primer problema que se plantea es la forma de representación, los resultados de dicha representación y los mecanismos para garantizar la representación: ¿cómo se materializa la relación pueblo–gobierno? o, en palabras de Alain Touraine, “¿en qué condiciones los agentes políticos representan los intereses y los proyectos de los actores sociales?” (1994: 29).

El principal argumento a favor de la democracia es que se trata de un régimen de elecciones periódicas lo que permite el control de las decisiones gubernamentales según la voluntad del pueblo (Fearon, 1999: 170) a partir de un mecanismo o estructura de representación que incluye: 1) gobernantes que son seleccionados por medio de elecciones; 2) ciudadanos que son libres para discutir, criticar y demandar todo el tiempo aunque legalmente no pueden dar instrucciones al gobierno; y 3) gobernantes sujetos a elecciones periódicas (Przeworski, 1999a: 2). Este mecanismo de representación constituye también lo que se conoce como responsabilidad política, responsabilidad poliárquico-electoral o accountability. **La responsabilidad política o control poliárquico-electoral implica la sujeción de los gobernantes a elecciones periódicas donde, de haber elegido políticas**

¹ Los pilares teóricos de este modelo son: Joseph Schumpeter (1942), Anthony Downs (1957), Robert Dahl (1961, 1963 y 1977) y Giovanni Sartori (1987). Para un mayor análisis de modelos de democracia son útiles: el texto de C.B Macpherson (1977) *La democracia liberal y su época*, David Held (1987) *Modelos de democracia* y Vázquez (2004).

públicas contrarias a la ciudadanía, serán sancionados por ésta en las urnas². Un votante racional votará por el partido que, a su juicio, le proporcione mayores beneficios donde cada elección funcionará como indicador y selector del gobierno por parte de los votantes. El votante adoptará su voto “comparando el flujo de renta de utilidad que le proporciona la actividad del gobierno actual con los flujos que en su opinión habría recibido de haber ocupado el poder los distintos partidos de oposición” (Downs, 1957: 53).

Con estos elementos concluye Manzano (2002: 1) que “un gobierno es representativo cuando sus acciones satisfacen del mejor modo posible los intereses de los ciudadanos y, en caso de conflicto de intereses entre los votantes, cuando actúa en el beneficio de la mayoría.” Por ello, este mecanismo de representación-responsabilidad implica que en **la democracia procedimental habrá un constante mejoramiento de los ciudadanos por el sólo funcionamiento de las reglas procedimentales** (sin que para ello sea necesario el establecimiento de un concepto de bien común o de buen gobierno) a la par que **la primacía de la democracia representativa sobre la democracia directa no degenera en nada al principio de gobierno popular cuyo elemento principal es la actuación a favor de los votantes.** Para el caso argentino la relación entre el control político y mejoramiento social a través de la elección existía al menos hasta el 2000. Como observa Adrogué y Armesto (2001) el grueso de los encuestados que se presentan en el cuadro 209 consideran que el voto puede hacer que las cosas sean diferentes en el futuro:

Cuadro 209.- La elección como forma de control político y mejoramiento social						
Fecha	Jun/95	Jun/96	Nov/97	Nov/98	Feb/00	
Casos	1200	1200	1196	1200	1200	
La manera como uno vota puede hacer que las cosas sean diferentes en el futuro.	69	63	73	64	68	
No importa como uno vote, no hará que las cosas sean mejores en el futuro.	23	29	25	31	28	

² Philippe Braud (1991) otorga una función distinta a la responsabilidad política. Para este autor “la responsabilidad política juega el papel de disyuntor para proteger a las instituciones y en sentido más amplio, a todo el orden social... La responsabilidad política es doblemente anestésica: es menos costosa para aceptar... [porque] la única consecuencia es el cese de funciones, no reviste ningún otro carácter deshonoroso... es menos difícil de asumir... [porque] no provoca resentimientos duraderos en una amplia escala social ni tampoco reactiva un ciclo de venganzas” (Braud, 1991: 130-132). “Con la responsabilidad siempre habrá actores y un autor. Como corolario de que el sujeto asume que sabe y controla, existe un chivo emisario ofrecido a la opinión pública en el cual puede descargarse, llegado el caso, la ira de la impotencia, el resentimiento del fracaso, el deseo de encontrar una explicación a la vez salvadora y exorcizante para el futuro...” (Braud, 1991, p. 133). De acuerdo con Braud, la responsabilidad política sirve para hacer personales los conflictos de sistema o de estructura.

NS / NC	8	8	2	5	4
Fuente.- Latinobarómetro citado por Adrogué y Armesto, 2001: 644.					

Viene ahora una de los primeros conflictos que cruzaran este capítulo. Explica Przeworski (1999: 2) que la actuación en interés del representado tiene dos posibilidades: actuar a partir de los deseos de los representados o actuar con el propio juicio de los gobiernos, y posiblemente en contra de los deseos de los representados, suponiendo que la decisión tomada es la mejor para los ciudadanos. En el primer caso el gobierno tiene como punto de partida que los representados saben lo que quieren y son atinados en su juicio causal medios-fines (modelo de representados ilustrados MRI) mientras que en el segundo caso el gobierno se constituye como una élite que funciona como “despotismo ilustrado” frente a la miopía social (modelo de déspotas ilustrados MDI). El MRI es afín a la democracia participativa mientras que el MDI lo es al modelo de democracia elitista. Para nosotros estos dos modelos tendrán una importante repercusión en la formulación del mandato y la responsabilidad frente a su incumplimiento.

En principio el mecanismo de representación-responsabilidad incluye la existencia de al menos tres jugadores: el gobierno, la oposición y los votantes. Siguiendo a Downs (1957) el gobierno trata de maximizar su base de apoyo político para conseguir la reelección, ya del individuo, ya del partido³; la oposición tiene por objeto conseguir el poder político en la siguiente elección; y el votante busca maximizar su bienestar. El principal motivo impulsor de los miembros de los partidos, tanto en el gobierno como de oposición, es el deseo de obtener las ventajas derivadas del poder. La motivación para buscar las posiciones gubernamentales se encuentra en la renta, la celebridad y el poder que se desprenden de dichos puestos y, por ende, los partidos buscan exclusivamente la maximización de sus votos para arribar al poder. En cuanto a los votantes, éstos únicamente tendrán por objeto la maximización de su bienestar y tienen como recurso el voto individual (Downs, 1957: 319). En este modelo todos los actores buscan intercambios de

³ Incluso en los regímenes democráticos donde no hay reelección o ésta es limitada a algunos periodos opera la posibilidad de influir en las decisiones gubernamentales por la presión que los miembros de los partidos políticos que aspiran a mantenerse o llegar a puestos de elección ejercen sobre aquellos que ya ocupan un puesto como observa Susan Stokes (1999) por medio de diversos modelos de análisis de partidos políticos como son: la teoría espacial, la teoría espacial modificada, la teoría direccional, la movilización, las generaciones entrecruzadas, la disparidad curvilínea y la hegemonía del gobernante.

mutuo beneficio y se comportan racionalmente en política⁴. Es lo que se ha denominado modelo económico de la democracia ya que asimila la competencia por el gobierno a través del voto a la competencia en el mercado por el mejor precio⁵.

Ahora bien, como adelantamos en el capítulo anterior, hay un cuarto jugador: los poderes fácticos. Joseph Schumpeter (1942) trata de resolver muy rápidamente el problema de la existencia de este cuarto jugador mediante la autodisciplina democrática que incluye, entre otras cosas, la abstención de los poderes fácticos de participar en política: respetar la división del trabajo. Sin embargo esta condición teórica del éxito de la democracia resulta poco útil para realizar una explicación que pueda ser comparada con la realidad. Por su parte, Anthony Downs (1957) incluye en su modelo la existencia de los grupos de intereses que son líderes empeñados en que el gobierno adopte alguna medida concreta que le beneficia haciendo ver que representan a los votantes. No obstante, en el desarrollo posterior del modelo, Downs da un lugar marginal a estos grupos. Los continuadores del modelo económico de la democracia –los análisis institucional-electorales y el institucionalismo de la elección racional- desaparecen por completo a este cuarto jugador. Este hecho, como he mantenido a lo largo del trabajo, es un grave error puesto que ni la autodisciplina democrática existe ni el papel de los poderes fácticos –particularmente de los provenientes del mercado- es marginal. Por ende, uno de los intentos teóricos de este trabajo es formular una teoría de la democracia que incluya el análisis de los mecanismos de representación-responsabilidad, sus fallos internos y los fallos externos, es decir, la existencia de poderes fácticos que participan en la toma de decisiones gubernamentales.

⁴ El concepto de racionalidad es viejo y ha sido muy discutido. Lo que ahora quiero resaltar es que la racionalidad en política incluye un cálculo estratégico que no está exento de error sin que por ello sea menos racional. Una decisión que para un jugador podría traerle beneficio de acuerdo con la información que tiene y el ejercicio racional que ha hecho puede, en realidad, perjudicarlo ya sea perdiendo votos en el caso del gobierno y la oposición o disminuyendo su nivel de bienestar en el caso de los votantes. Resalto la importancia de la racionalidad limitada.

⁵ A muchos politólogos no les ha gustado que la soberanía popular se quiera transformar en soberanía del consumidor, que las elecciones se lleven a cabo por medio de fuertes impactos mediáticos, que la decisión del voto se realice como una decisión de compra y que la economía intente, con su metodología y sus modelos, explicar procesos simbólicos y no necesariamente racionales –en los términos de la racionalidad económica- que ocupan el espacio de la Ciencia Política (entre ellos cabe mencionar a Pablo González Casanova, Marcos Rotmann Rosenman y Helmut Dubiel).

El control o accountability en las elecciones argentinas.

Dos son las preguntas que ahora se abren: ¿cuáles son los mecanismos que producen la representación en la democracia procedimental-representativa? y ¿son suficientes las elecciones para que el gobierno actúe de forma representativa? Intentemos abundar sobre ellas. Se han establecido dos medios por los cuales las elecciones sirven como mecanismos de representación–responsabilidad: el control (accountability) y el mandato (responsiveness). Nos ocuparemos del primero en esta sección y del segundo en la siguiente.

El control o accountability se refiere a la rendición de cuentas del partido que intenta reelegirse en el momento de la elección. El tipo de votante que se observa es el retrospectivo, se vota de acuerdo al pasado y a la actuación del partido en el gobierno, y el mecanismo es el siguiente: 1) tanto el partido en el gobierno como la oposición se presentan a elecciones; 2) los votantes expresan sus preferencias castigando o premiando al partido en el gobierno y a la oposición; y 3) el partido electo busca el premio del votante en la siguiente elección. Siguiendo a Fearon (1999: 137), quien basa su explicación en la teoría económica de agente-principal, “Se dice que una persona, A, es responsable ante otra, B, si se satisfacen dos condiciones. Primero, la existencia de un acuerdo por el cual A es obligada a actuar de una determinada manera en nombre de B. Segundo, la presencia de instituciones formales o quizá de reglas informales que autoricen a B para sancionar o recompensar a A por su actuación en calidad de agente.” El propio Fearon identifica múltiples problemas en esta relación: un acuerdo que determine las actividades o resultados respecto de los cuales el agente es responsable, los instrumentos de sanción o recompensa del principal, si este sistema de incentivos induce al agente a actuar como el principal lo desea y la presencia de múltiples principales.

Bajo esta lógica los representados deciden y votan con cierto umbral de incertidumbre. Al respecto Downs (1957) construye toda una tipología de votantes a partir de su contexto informativo de la cual vale la pena subrayar dos categorías: a) los votantes susceptibles de influencia que no tienen opinión, que han llegado a decisiones inseguras favorables a algún partido o que han llegado a la conclusión insegura de que no existe diferencia notable entre los partidos actuales o entre el gobierno actual y sus predecesores.

Y b) los votantes no susceptibles de influencia que han llegado a definir su preferencia de voto pero carecen de interés por persuadir a otros votantes, que son indiferentes con respecto a todos los partidos, que siempre votan por el mismo partido o que siempre se abstienen de votar por creer que las diferencias entre los partidos son nulas. El hecho de que existan votantes susceptibles de influencia implica que tanto el gobierno como los partidos de oposición buscarán el cambio de umbral de un tipo de votante a otro. Esto se logra a través de la creación del ambiente contextual que de entrada es incierto. Los partidos presentan medios para arribar a un fin más amplio pero el votante no sabe a ciencia cierta cuál de los medios que le presentan llegará al fin que él pretende. Incluso muchos de los fines económicos que pretenden tanto los votantes como el gobierno y la oposición dependen, en buena parte, de los jugadores del mercado que hasta ahora no han aparecido en el modelo. La incertidumbre y los problemas de información posibilitan el liderazgo entendido como “la capacidad de mover a los votantes a adoptar ciertas opiniones como propias” (Downs, 1957: 93).

Para que exista la responsabilidad política o el control poliárquico electoral es necesario –siguiendo a Adam Przeworski (1999: 40)- que se cumplan dos premisas: 1) el votante vote para retener al gobernante sólo cuando éste actuó en beneficio del votante; y 2) el gobierno haya elegido las políticas necesarias para ser reelecto. Por ejemplo, siguiendo

Cuadro 210.- La reelección			
		Política A	Política B
Condiciones	Buenas	5	3
	Malas	3	1

Fuente.- Przeworski, 1999: 33-34.

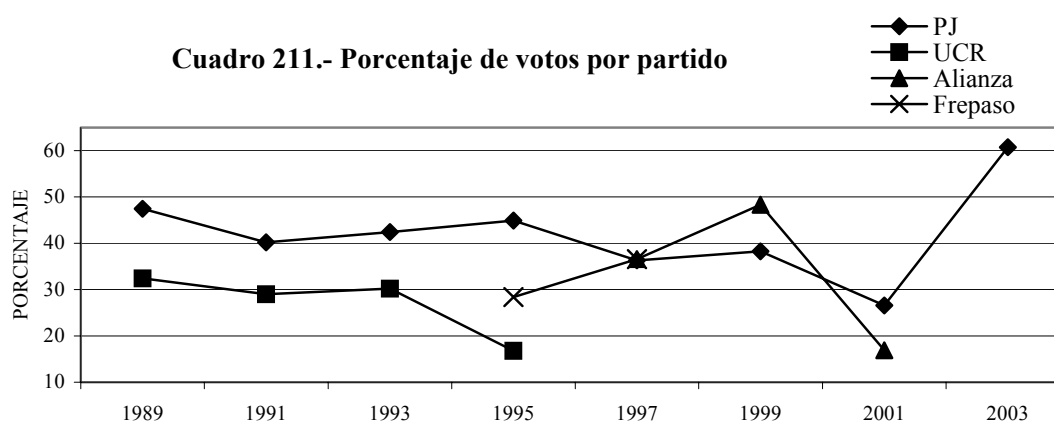
la lógica del votante retrospectivo y suponiendo que el elector tenga un umbral de 3, como se observa en el cuadro 210 si las condiciones son buenas la expectativa de 3

se cumple eligiendo la política B aunque si se hubiera elegido la política A se hubiera logrado un bienestar de 5, en cambio si las condiciones son malas el umbral sólo se cumple si se elige la política A. En los tres casos (Cond. buenas / Pol. A; Cond. buenas / Pol. B y Cond. malas / Pol. A.) se logra la reelección puesto que los tres casos alcanzan el umbral del votante. Sin embargo, sólo en dos casos el gobierno eligió la política adecuada (la política A alcanzando el máximo posible de bienestar con buenas o malas condiciones). En estos dos casos puede hablarse de una representación efectiva, en el tercero no pese a que haya sido reelecto. Con esto otro punto importante: los gobiernos son controlables en la medida en que los votantes son capaces de discernir si estos actúan conforme a sus

intereses y logran sancionarlos o premiarlos apropiadamente (Przeworski, 1999: 32). De aquí un primer problema importante del cual nos ocuparemos más adelante: la información.

Lo que en Argentina observamos es que en la elección de 1989 los votantes optaron por el partido peronista con el 47.49% de los votos. Este gobierno, encabezado por Carlos Menem, fue premiado con victorias electorales en 1991, 93 y la reelección presidencial de 1995, aunque en todos los casos con porcentajes de votación inferiores a los obtenidos en 1989 y se observa, de acuerdo a la distribución del voto, una realineación de los votantes de derecha premiando al PJ mientras que los votantes de izquierda van a la oposición. Con todo, el PJ mantiene una sólida base de voto popular que genera en este periodo una idea de amplia coalición social integrada por la clase baja, una parte de la clase media y una parte de la clase alta. Para la elección presidencial de 1995 la oposición ya está formada por otros dos grandes partidos (con varios minoritarios): la UCR y el Frepaso. Estos dos partidos constituyeron la Alianza y propinaron la primera derrota electoral al peronismo en las elecciones legislativas de 1997 por un escaso margen de 0.3%. Durante todo este periodo la política económica elegida por el gobierno de Carlos Menem era de corte neoliberal integrada por: ajuste económico, reformas estructurales y convertibilidad. La segunda derrota electoral sufrida por el peronismo se da en la elección presidencial de 1999 cuando la Alianza ganó la presidencia con el 48.37% de los votos. Pese a la expectativa de un cambio moderado en la política económica con mantenimiento de la convertibilidad la Alianza no es muy distinta a lo que Carlos Menem venía haciendo y no logra cambiar ni generar una imagen de cambio en las condiciones económicas de vida de los votantes, particularmente en el problema del empleo y el aumento de los salarios. Más aún, a esto se suman los escándalos de sobornos en el senado lo que incluso disminuye la imagen de cambio en el aspecto “moral” de la política. De inmediato, en las elecciones legislativas del 2001 la Alianza recibe una fuerte sanción que disminuye su votación de 48.37 a 16.9% siendo el partido que más votos recibe el peronista con 26.6% de los votos. El mayor aumento se observa en el voto nulo y en blanco.

Cuadro 211.- Porcentaje de votos por partido



Luego de la catastrófica crisis de diciembre del 2001 y la salida de Fernando de la Rúa del cargo llega nuevamente el peronismo al poder en la figura de Eduardo Duhalde quien medianamente logra administrar la crisis, modificar el modelo económico y reactivar la economía. Con la ruptura de la Alianza y la desaparición del Frepaso en las elecciones del 2003 el otro partido que formaba la Alianza, la UCR, se desploma obteniendo sólo el 2.34% de la votación mientras que tres candidatos provenientes del peronismo obtienen el 60.8% de la votación resultando electo Néstor Kirchner luego de una fallida segunda vuelta con Carlos Menem.

El mandato o responsiveness en las elecciones de Argentina

El mandato o responsiveness se refiere al cumplimiento de las políticas ofrecidas en la elección, Susan Stokes (2001: 2) lo conceptúa como: “las expectativas políticas creadas en la campaña acerca de las acciones que van a tomar si ganan”. El tipo de votante es el prospectivo, decide pensando en el futuro a partir de los programas políticos de los partidos, y el objetivo es seleccionar buenas políticas o políticos que están asociados a cierto tipo de políticas (Przeworski, 1999: 19). El mecanismo es el siguiente: 1) los partidos se presentan a la elección con un abanico de políticas públicas, 2) los votantes expresan sus preferencias seleccionando la política pública que más les agrada, y 3) el partido electo aplica la política pública seleccionada por el votante. Nuevamente lo que posibilita la competencia y da sentido a las campañas electorales es la existencia de votantes influenciados a partir de los conflictos de información y la incertidumbre contextual. La responsabilidad-representación existe si: 1) los partidos revelan sus verdaderas intenciones en las campañas electorales y 2) la realización de esas intenciones es la mejor para los votantes bajo las circunstancias dadas (Przeworski, 1999: 21).

Tres puntos a subrayar: a) para que la representación-responsabilidad sea posible es necesario que haya al menos dos propuestas político-programáticas distintas; b) en ningún caso empírico existe la sanción jurídica por incumplimiento del mandato por lo que los mandatos no son obligatorios ni vinculantes para los representantes, la única sanción existente es de tipo político y se da en el voto a favor o en contra en las elecciones siguientes. Y c) consecuencia de lo anterior, la información, al igual que en el control o accountability, juega un papel importante en el mecanismo del mandato tanto para conocer la propuesta político-programática como para sancionar su cumplimiento o incumplimiento. Asimismo, este modelo se complejiza tan pronto como: la representación, como antes vimos, puede ser adoptada por el gobierno a través del modelo de déspotas ilustrados o por el modelo de representantes ilustrados. El modelo de mandato que institucionaliza la democracia procedimental-representativa es el MDI y este es el modelo que se observa en la democracia argentina.

Tan pronto como los mandatos no son vinculantes ni obligatorios para el gobierno el interés por estipular el mandato es sólo referencial a la par que no existen elementos institucionales que lo especifiquen. De aquí que la primera gran complicación para analizar el mandato en la democracia procedimental representativa con un modelo de déspotas ilustrados es su determinación. Se puede abreviar de varias fuentes para tratar de identificar el mandato: la principal es sin duda las plataformas electorales, una más son los discursos de campaña (que incluyen toda la propaganda partidista) y una tercera son las expectativas y representaciones generadas en los votantes. Vayamos por partes.

Tanto las plataformas electorales como los discursos de campaña tienden a ser difusos. En las campañas electorales de la democracia procedimental-representativa los candidatos ofrecen las políticas más populares, muestran sólo la parte más popular de su programa político o presentan su programa político como el más beneficioso para los votantes aunque no sea así. Incluso los partidos políticos pueden hacer discursos de campaña acordes con su plataforma (Eduardo Angeloz-1989, Carlos Menem-1995, Néstor Kirchner-2003), sin tomar en cuenta su plataforma (Bordon-1995, Fernando de la Rúa-1999) o incluso contrarios a su plataforma (Carlos Menem-1989, Eduardo Duhalde-1999). Asimismo, tan importantes como los temas que se tratan en las plataformas electorales y en las campañas son los temas o intenciones que no se mencionan. Se observan tres puntos

importantes: 1) una cada vez menor importancia en las plataformas políticas –que son el principal indicador del mandato-; 2) dichas plataformas contienen elementos muy generales tendientes al objetivo final de la política económica pero sin abundar en los medios (p.e. mejorar el salario, aumentar el empleo, mejorar la seguridad, etc); y 3) las propuestas de política-económica no se ajustan a un modelo en específico sino que tienden a ser eclécticos.

Por su parte, los indicadores que nos permiten observar las expectativas y representaciones generadas en los votantes suelen ser también muy generales (como la identificación de problemas principales o las evaluaciones de la situación actual, prospectiva o retrospectiva) de donde se logra identificar fines pero no medios, es decir, no especifican la política-económica a seguir (tal vez la principal excepción es la cultura político-económica de los votantes). Este tipo de indicadores será minuciosamente revisado en la sección dedicada a la información de los votantes argentinos.

En la elección presidencial de 1989 tanto la UCR como el FREJUPO presentaron plataformas electorales con propuestas ortodoxas y heterodoxas, aunque en la campaña se generó la impresión de que Eduardo Angeloz era un candidato neoliberal y Carlos Menem uno populista-keynesiano. Asimismo, los principales problemas que identificaban los votantes eran los bajos salarios y la inflación, se consideraba que el principal generador de la crisis económica era la política del presidente Raúl Alfonsín (lo que puede ser tomado como un indicador de cambio de rumbo) aunque la tendencia de la cultura político-económica se balanceaba a favor del privatismo. Una vez ganadas las elecciones el peronismo no sólo desechó la figura populista que se había generado en materia de política económica sino que incluso implementó reformas neoliberales que van más allá de las planteadas en su plataforma. Se debe hacer notar que luego de las elecciones del 14 de mayo de 1989 la crisis económica se convirtió en caos social. Así, la nueva situación determinó, para los integrantes del gobierno, la formulación del mandato. Para Amalia Martínez (22/may/06) –quien fue asesora de la secretaría de programación económica y subsecretaría de bancos y seguros de 1991 a 1996- el principal mandato era terminar con la situación de caos social y con la hiperinflación que había roto mucho las relaciones sociales. En sentido semejante opina Orlando Ferreres (21/jun/06) –secretario de política económica en 1989- aunque él observa la estabilidad de precios como una primera fase del

mandato complementada por una segunda etapa para darle continuidad de largo plazo. Así, el mandato de 1989 involucra incluso actos posteriores a la elección y se establece como una orden de parar la hiperinflación. Aquí observamos un desvío y exceso del mandato ya que la expectativa generada en la campaña era de un gobierno de corte populista. Si bien se logra parar la hiperinflación, se hace con técnicas distintas a las expectativas creadas y se genera además toda una serie de políticas que no fueron anunciadas y no necesariamente están relacionadas con la hiperinflación (privatizaciones, apertura comercial, etc.). Sin embargo, un punto importante del análisis es la aceptación de las medidas gubernamentales adoptadas que otorgan victorias electorales al partido peronista entre 1991 y 1995.

Si bien el eclecticismo se mantiene en las plataformas electorales de la elección presidencial de 1995, lo cierto es que la plataforma peronista tiene un mayor número de propuestas ortodoxas frente a las heterodoxas y las terciaristas, la UCR tiene una mayor carga hacia la heterodoxia frente a sus propuestas ortodoxas y terciaristas y, finalmente, el Frepaso presenta muy pocas propuestas de política económica distribuidas en los tres rubros. Funcionarios de la segunda administración menemista (Roque Fernández, Marcos Makon, Eduardo Amadeo y Darío Braun) explican que durante la campaña presidencial de 1995 no sólo la plataforma electoral se cargo hacia la ortodoxia sino que incluso en el discurso, con la crisis mexicana como telón de fondo, Carlos Menem redobló la apuesta no sólo negando la posibilidad de aumento de salarios y pensiones sino que además hubo antes de las elecciones una disminución de salarios y fusiones de bancos provinciales con consecuentes pérdidas de empleo. Así, el mandato asumido por los integrantes del gobierno fue de continuidad en la política económica. Con el cambio de perfil del peronismo no es raro que éste pierda al 33% de votantes peronistas de 1989 y a todos los votantes de la izquierda que obtuvo en 1989 mientras que obtuvo al 14% de votantes de la UCR en 1989 y al 65% de los votantes de la derecha en la elección presidencial anterior. Con esto el PJ constituyó una nueva coalición de votantes cargada hacia la derecha. Sin embargo, los principales problemas mencionados por los ciudadanos eran el desempleo, los bajos salarios y los pensionados a la par que si bien la cultura política económica privatista era mayoritaria, había perdido 20 puntos porcentuales junto con una fuerte caída en la aprobación del gobierno y la política económica de Carlos Menem. Al ganar la elección Carlos Menem continuó con el plan echado a andar desde 1989 –“el piloto automático”-

cumpliendo con las propuestas tanto de campaña como de su plataforma electoral, aunque una de las principales promesas y propuestas de la ortodoxia se rompió: el equilibrio fiscal. Tenemos que el mandato se constituyó por medio de un discurso de posible caos semejante al de la crisis hiperinflacionaria de 1989 frente a una fuerza que se configuraba como de centroizquierda y llegaba pujante –el Frepaso- y una UCR abiertamente crítica al modelo económico, todo esto contextualizado con la crisis económica mexicana. La primera obligación del gobierno –proveniente del mandato- era mantener la estabilidad y el principal problema del mandato se encuentra en la formación de un falso escenario por parte del gobierno ya que si la oferta era la estabilidad entonces la modificación de la convertibilidad era un elemento necesario para cumplir con el mandato. El único que puso este punto en la mesa fue la UCR y quedó en tercer lugar.

En la elección presidencial de 1999 las propuestas ortodoxas dominan las plataformas electorales tanto del peronismo como de la Alianza, ésta incluso no tiene ninguna propuesta heterodoxa. Este hecho dista mucho de las expectativas de cambio-moderado en los votantes y los discursos de cambio en los competidores. En principio las expectativas de los votantes las califico de “cambio-moderado” ya que si bien hay un fuerte nivel de desacuerdo, revisión y corrección del modelo económico, de desaprobación al gobierno de Carlos Menem y un emparejamiento de la cultura política económica privatista y estatista también es cierto que la mayoría de los argentinos aprobaba la continuidad de la convertibilidad (que es sólo uno de los pilares del modelo junto con el ajuste económico y las reformas estructurales). En cuanto a los discursos de campaña, el de Eduardo Duhalde tuvo dos cambios de sentido: el primer y tercer tipo de discurso era más crítico al modelo ortodoxo y más cercano al peronismo tradicional mientras que en el intermedio hubo una fase de discurso ortodoxo que buscaba una alianza con el partido de Domingo Cavallo. Por su parte, si bien Fernando de la Rúa trataba de dar el principal énfasis diferenciador en el tema de la corrupción, lo cierto es que se pronunció en varias ocasiones en sentido distinto al ortodoxo en materia económica (tanto en el recorte presupuestal como en los mecanismos de redistribución de la riqueza y la intervención del Estado en la economía); sin embargo, la propuesta económica de la oposición nunca fue muy distinta a la política económica existente. Una vez ganadas las elecciones por la Alianza, los integrantes del gobierno asumieron como mandato principal la conservación de la convertibilidad y,

paralela a ella, el mantenimiento del resto del modelo económico por el poco margen de acción que –de acuerdo con ellos- la convertibilidad dejaba. La vocación del gobierno se centró en ordenar la macroeconomía dando énfasis al problema del déficit fiscal y la deuda. Si bien se plantearon algunos mecanismos de mayor distribución que los observados en el pasado, como reflejo por el desacuerdo de los votantes con el modelo, estos se referían a algunas medidas fiscales, mecanismos de educación, ciencia y técnica. A partir de lo anterior en las elecciones de 1999 tenemos un doble mandato: 1) expectativas generadas en la gente (más que creadas por la Alianza) sobre un cambio en materia de política económica (sin indicar claramente la dirección del cambio) que involucra el mantenimiento de la convertibilidad, no más ajustes económicos y modificaciones a las reformas estructurales. Y 2) cambio moral o en el liderazgo o ejercicio de la política (éste escapa a los contenidos de la tesis pero es importante mencionar que existe y que también se incumplió). En el desarrollo de su gobierno la Alianza cumple con lo que había establecido en su plataforma electoral pero incumple las expectativas que se habían generado en sus votantes. De esta forma se puede hablar de un desvío del mandato a partir de que pese a la expectativa generada (sin quererlo) de cambio económico se siguen las mismas pautas con los mismos personajes anteriores. No obstante, un punto interesante es que la llegada de Cavallo en marzo-abril del 2001 fue recibida con un 70% de aceptación aunque rápidamente cayó este índice.

Por último, en la elección presidencial del 2003 Carlos Menem presentó una plataforma electoral mucho más cargada hacia el neoliberalismo mientras que Néstor Kirchner formuló una escueta plataforma electoral más cercana al keynesianismo y la intervención estatal. Lo primero a mencionar es que difícilmente se puede hablar de un mandato cuando hay una dispersión del voto como la observada en esta elección. Particularmente los votantes tanto de Kirchner como de Carrió se inclinaban más hacia un gobierno socialdemócrata y de re-nacionalización mientras que algunos analistas centran el mandato en la normalización de la situación institucional y la creación de un liderazgo creíble. En cuanto a los votantes, el desacuerdo con el modelo económico ya es contundente aunque mejora la calificación de Roberto Lavagna frente a la de Luis Machinea y la cultura político-económica estatista ha rebasado a la privatista. Finalmente el elemento interesante es que Néstor Kirchner hace una adecuada lectura del momento

cuando asume como mandato la generación de un liderazgo fuerte, con un discurso de confrontación con el FMI y ciertos sectores del capital (en principio las empresas privatizadas y luego en su intento de controlar la inflación por medios heterodoxos) y una mayor intervención en la economía. Así, de las principales decisiones que involucran al mandato tenemos: la negociación de la deuda y la relación con el FMI, la revisión de los contratos de empresas privatizadas y el control de la inflación mediante la confrontación con privatizadas (tarifas) y sectores empresariales (la carne).

La ocultación de temas durante las campañas existió en todos los casos analizados. En 1989 el propio Carlos Menem afirma que ya tenía planeado hacer el viraje al neoliberalismo pero no lo dijo en campaña porque corría el riesgo de perder las elecciones (aunque historiadores argentinos comentan que en realidad cuando ganó la elección aún no tenía claro hacia donde iba a transitar). En la elección de 1995 uno de los principales debates debió rondar en torno a las limitaciones de la convertibilidad, sin embargo este fue uno de los temas que quedó excluido de las campañas. En las elecciones de 1999 tanto la Alianza como el PJ decidieron excluir diversos temas. La primera decidió no hablar de los problemas fiscales ni de la crisis económica en que se encontraba Argentina aduciendo que esto podría infundir miedo en los votantes cargando la balanza a favor del peronismo. Asimismo, si bien el grueso de los documentos que sirvieron de base al equipo económico encabezado por Luis Machinea se realizaron en la Fundación Argentina para el Desarrollo con Equidad (FADE) y eran públicos, los propios integrantes del equipo económico mencionan que sobre los temas más delicados no hay documentos ya que hay ciertas decisiones en materia de política económica que no se documentan pero se toman. Por su parte, los colaboradores de Eduardo Duhalde en la campaña de 1999 (que luego lo acompañaron en el gobierno en el 2002) explican que una de las medidas que se hubiera tomado de ganar las elecciones era preparar la salida de la convertibilidad, aunque esta decisión no se mencionó en campaña primero porque hubiera restado muchos votos y luego porque hubiera ocasionado una corrida financiera enorme. De hecho, el tema de los límites de la convertibilidad, igual que en 1995, fue de los principales ausentes de la campaña.

Pese a las dificultades de determinación del mandato y a su no obligatoriedad, la idea de mandato proveniente de la elección juega cierto papel en la autocontención gubernamental. Esto se observa especialmente en el caso del gobierno de Eduardo Duhalde

del 2002 proveniente no de las urnas sino de la designación en la Asamblea Legislativa. Los integrantes del equipo económico explican que ellos eran y actuaron como un equipo de transición tomando como punto de partida que nadie los había votado y que lo inmediato era resolver los problemas críticos con las decisiones pertinentes independientemente del grado de aceptación de las mismas.

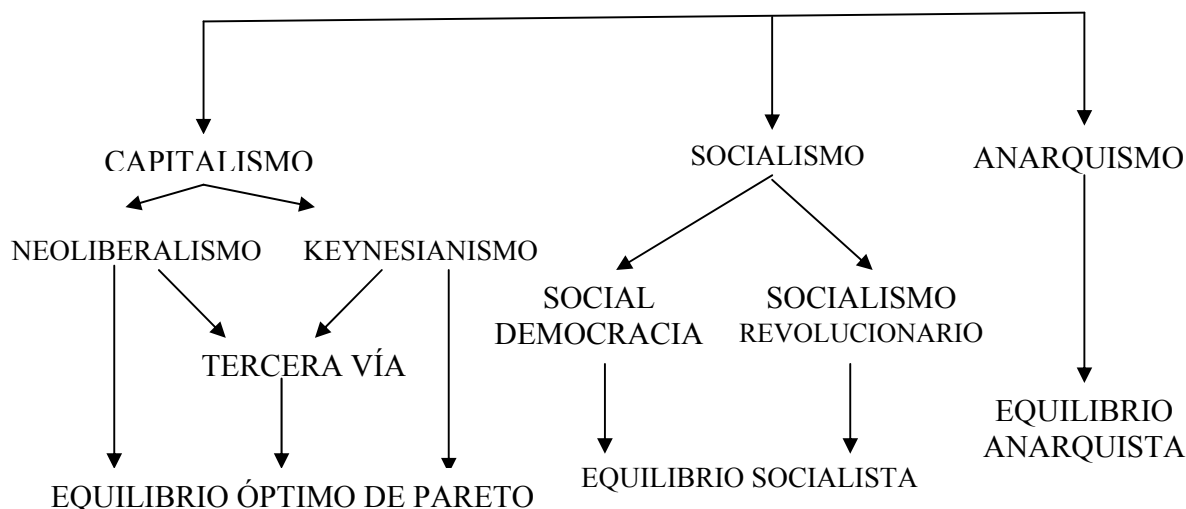
5.2. Los fallos internos del control poliárquico-electoral 1: las opciones programáticas

Hasta aquí tenemos que el principal mecanismo de representación-responsabilidad en la democracia procedimental representativa proviene de las elecciones a través de dos mecanismos: el control (accountability) y el mandato (responsiveness). Ambos mecanismos requieren de tres presupuestos para funcionar: 1) la existencia de dos o más opciones distintas para elegir, ya que no se puede premiar y castigar si todos los partidos políticos ofrecen lo mismo; 2) un votante racional con información suficiente y clara para lograr configurar la relación causal política económica–mayor bienestar; y 3) la existencia de elecciones libres. Tanto la diversidad de opciones como la información son “el talón de Aquiles” de la responsabilidad política constituyendo fallos internos del mecanismo. A estos fallos se suma uno externo: el mayor y más eficiente repertorio de recursos políticos de los poderes fácticos provenientes del mercado. En esta sección analizaremos el conflicto de las opciones programáticas, posteriormente se estudian los conflictos informativos y, finalmente, los fallos externos de la representación-responsabilidad de la DPR.

Para que pueda darse la responsabilidad política es necesario que haya dos o más opciones programáticas a fin de que el votante racional e informado se encuentre en posibilidad de comparar y sancionar al partido que no haya cumplido con sus expectativas. Sin embargo, históricamente las opciones programáticas en materia de política económica han tendido a estrecharse. En materia socioeconómica Arend Lijphart (1999: 85) observa que las diferencias entre la izquierda y la derecha han disminuido desde la década de los sesenta, aunque no hasta el punto de poder decir que esta dimensión ha desaparecido mientras que Kenneth Roberts (2002: 56-57) explica que la globalización económica ha estrechado el ámbito de las opciones políticas a la par que ha privado a los policy makers de las tradicionales herramientas soberanas de la política económica socavando las funciones programáticas e ideológicas de los partidos. Para el caso argentino observamos

que los diversos proyectos ideológicos de política económica en el periodo de estudio jugaron sólo en el campo capitalista (cuadro 212).

Cuadro 212.- Continuo ideológico



Existen diversas teorías que explican este fenómeno⁶: el *caucus system* de Max Weber; la transformación de partidos de cuadro a partidos de masas de Maurice Duverger; la constitución de partidos *catch all* de Otto Kirchheimer; las funciones de reducción ideológica del sistema de partidos en regímenes parlamentarios de C.B. Macpherson y, construida de forma paralela, de Adam Przeworski; la teoría del votante mediano, la teoría espacial de los partidos y el papel y cambio de las ideologías en la teoría económica de la democracia de Anthony Downs y en general del institucionalismo de la acción racional; la reconstrucción ideológica de la socialdemocracia de Adam Przeworski analizada para el caso latinoamericano por Kenneth Roberts; la pérdida de discurso ideológico y programático de los partidos de Norbert Lechner; el ciclo de claudicaciones estudiado por Marcos Roitman y Pablo González Casanova, por mencionar algunas⁷. Pero nuevamente, el punto que me interesa destacar es el estrechamiento de las opciones programáticas y el hecho de que en el caso estudiado todos los proyectos ideológicos jugaron dentro del capitalismo.

⁶ Este punto pasa por una serie compleja de temas que si bien no se analizarán en este trabajo es importante mencionarlos como son: la antigua clasificación de partidos de masas y partidos de cuadros, el proceso de oligarquización de los partidos, la desconfiguración de la ideología partidista, la relevancia de la imagen del candidato sobre los elementos programáticos, la importancia de los medios en las campañas o el cambio de una organización corporativa a una de tipo clientelar, por mencionar algunos puntos.

⁷ Para una rápida revisión de estas teorías véase Vázquez, 2004.

En la elección presidencial de 1989 si bien las plataformas electorales eran eclécticas, la figura de Carlos Menem a la cabeza del Frejupo se presentó como la opción keynesiana-populista mientras que Eduardo Angeloz de la UCR era el candidato neoliberal, ambos dentro del capitalismo. Si bien en las urnas se eligió la opción keynesiana-populista -aunque la cultura político económica de la mayoría era privatista- la política económica que se aplicó fue la neoliberal. El mensaje entonces no fue el mejor: independientemente de la política económica que gane en la elección, la única aplicable es la más cercana posible al neoliberalismo⁸. Un punto interesante es el corrimiento de la idea de coalición de clases, el arreglo entre los económicamente más desaventajados y los empresarios. Después de la segunda guerra mundial el arreglo se estableció en el keynesianismo, y sobre este arreglo, con el comunismo del otro lado del muro, se mantuvieron los países capitalistas. Sin embargo, a partir de 1970 y más claramente después de la caída del muro, el keynesianismo paso de ser un lugar céntrico de consenso a un agresor del liberalismo por lo que el nuevo arreglo se estableció en el llamado liberalismo social o economía popular de mercado (Carlos Menem 1989-1994) que supone la alianza de las clases populares que apoyan al peronismo, los grandes grupos económicos y los centros de poder internacional. Un nuevo “centro” que claramente se corría más a la derecha.

En la elección presidencial de 1995 la bandera neoliberal estuvo a cargo de Carlos Menem y el peronismo mientras que los principales detractores del modelo pertenecían a la UCR con la fórmula Massaccesi-Hernández. El Frepaso si bien se presentaba como una opción de centroizquierda mantenía un discurso de indeterminación en torno a la política económica con la fórmula Bordon-Álvarez. Siendo la UCR el partido que daba mayor diversidad a las opciones programáticas por su discurso contra los peores efectos del neoliberalismo quedó en tercer lugar en la elección mientras que las dos primeras fuerzas – el PJ y el Frepaso- se mantuvieron muy cerca en las opciones de política económica. Nuevamente todas las opciones programáticas se encontraban dentro del capitalismo.

⁸ Esta máxima es aplicable a los sucesos histórico-políticos posteriores a los años 70 (que incluyen la tercera ola democrática): independientemente de que se trate de la caída de una democracia y la instauración de una dictadura militar –como en Chile, Brasil, Argentina o Uruguay durante los 70-; de la caída de una dictadura militar y la instauración de la democracia –Sudamérica en los 80-; de la caída de una dictadura socialista y la instauración de una democracia –Europa Oriental en los 90-; o el paso de un régimen de partido dominante a un régimen democrático –México en los 90-, en todos los casos la política económica era la misma: la más cercana posible al modelo neoliberal.

Si en 1995 hubo poca diferenciación programática de los partidos, la elección presidencial de 1999 fue menos intensa en este punto. Las plataformas electorales de la Alianza y del PJ, los dos principales contrincantes, se cargaban al neoliberalismo. El candidato del PJ, Eduardo Duhalde, trataba -sin lograrlo- de diferenciarse de Carlos Menem manteniendo un discurso alternado antineoliberal y proneoliberal dependiendo del momento y del público mientras Fernando de la Rúa, candidato de la Alianza, centraba su discurso en torno a la corrupción a la par que daba algunos mensajes de repudio a medidas específicas del neoliberalismo –como el ajuste fiscal- pero externaba su apoyo al modelo neoliberal en general. Nuevamente la elección se juega entre dos propuestas capitalistas ahora mucho más estrechas hacia el neoliberalismo.

Finalmente tenemos la elección presidencial del 2003 con dos peronistas a la cabeza: Carlos Menem con una propuesta abiertamente neoliberal y Néstor Kirchner con una propuesta tendiente al nekeynesianismo. Carlos Menem si bien trata de hablar poco de su gobierno durante los 90, cuando hace referencia a éste lo hace defendiéndolo y recordando que en ese entonces Argentina estuvo cerca del primer mundo mientras que, por el contrario, en el discurso Néstor Kirchner fundamentó su campaña en la crítica al neoliberalismo, particularmente al neoliberalismo argentino, y propuso modificar algunos puntos del modelo (revisar las privatizaciones, reformular el papel del Estado, reconstruir la pirámide fiscal de forma progresiva, dar prioridad al Mercosur sobre el ALCA, encauzar el crecimiento económico mediante la inversión pública en infraestructura) dando énfasis a su perfil productivista sin llegar a tener un conjunto de empresas estatales y controles de la economía semejantes a las propuestas por el keynesianismo-populismo peronista de los 40 a la par que mantenía algunas otras características del modelo neoliberal (la apertura económica y la desregulación). Nuevamente la elección se jugó entre dos propuestas capitalistas con ciertas diferencias entre ellas pero muy cercanas ambas al neoliberalismo. De hecho es interesante que la propuesta que ganó en primera vuelta, aunque por 2 puntos porcentuales de diferencia y con sólo el 24.45% de los votos, fue la propuesta neoliberal pese al alto grado de desacuerdo con el modelo neoliberal gestado durante los 90 llegando a su clímax en los primeros años del 2000 y pese a que el grueso de los argentinos tenían un perfil de cultura político económica de tipo estatista.

De todo lo anterior algunas conclusiones: 1) **Si bien hay un estrechamiento de las opciones de política económica tendientes al capitalismo y cercanas al neoliberalismo, esto no quiere decir que las diferencias hayan desaparecido del todo o que el Estado no pueda hacer nada.** En cambio podemos decir que las diferencias son cada vez menores y lo que el Estado puede hacer en torno a la política económica se da dentro del modelo capitalista y guardando algunas reglas del neoliberalismo (como la apertura económica y la desregulación). 2) Es difícil concluir que actualmente no hay opciones programáticas, en cambio se puede decir que: a) en la elección de 1989 la diferencia programática no importó al momento de ejercer el gobierno, b) en las elecciones de los 90 las diferencias programáticas se estrecharon hasta casi desaparecer y c) en la elección del 2003 nuevamente la diferencia programática se amplió aunque se mantuvo dentro del capitalismo y cerca del modelo neoliberal. Y 3) una de las características de la democracia es que se le piensa como un sistema abierto: el partido que logre ganar la elección podrá echar a andar el modelo económico que haya propuesto independientemente de que este sea capitalista, socialista o anarquista. **Lo cierto es que la idea de sistema abierto de la democracia languidece tan pronto como todas las opciones se concentran en un proyecto –el capitalista- y se estrechan en torno a un modelo –el neoliberal- haciendo de la democracia un sistema cerrado.** Más adelante volveremos sobre esta idea.

5.3. Los fallos internos del control poliárquico-electoral 2: la información

La falta de opciones programáticas es uno de los fallos internos de los mecanismos de representación-responsabilidad de la DPR, el otro fallo interno es la información. Los conflictos de información de los votantes pasan por diversos casos: la información incompleta, la información sesgada por los medios de comunicación, la información sesgada por el gobierno y la diferente afectación de los conflictos informativos. Vayamos por partes.

El problema de la información incompleta

Una de las mayores impugnaciones a la teoría de la democracia procedimental representativa de Joseph Schumpeter es que él se esmera en explicar como la irracionalidad del hombre –analizada en las acciones de la masa y en la manipulación a los consumidores- le impide practicar una democracia participativa que arribe al bien común. Se abre un gran

problema: si el hombre es suficientemente irracional para ejercer la democracia participativa y arribar al bien común ¿por qué sería suficientemente racional al momento de votar y elegir al mejor candidato? Este problema de racionalidad se presenta también en el modelo de Anthony Downs. Para que la democracia funcione correctamente, es decir, para que se logre echar a andar el control poliárquico-electoral el modelo supone un mundo donde se dispone de información perfecta y gratuita. Sin embargo, en la proposición 11 de sus conclusiones Downs afirma que “muchos de los ciudadanos que votan y consideran importante la emisión del voto carecen, sin embargo, de suficiente información acerca de las cuestiones en juego en las elecciones” (1957: 321). Posteriormente, la teoría de la elección racional y el institucionalismo de la elección racional echaron por la borda este problema estableciendo como presupuesto que las preferencias están dadas y no importa como se concibieron, hicieron de la formación de preferencias una variable exógena al modelo. Sin embargo, si lo que interesa es el correcto funcionamiento del mecanismo representación-responsabilidad de la DPR las preferencias dadas no son una solución satisfactoria, la formación de las preferencias necesariamente son una variable endógena al modelo como el propio Downs lo observa.

En general se han propuesto tres niveles de representación-responsabilidad política: la individualizada de cada representante, la del partido basada en sus propias acciones y la del partido basada en las condiciones económicas del votante. Veamos qué necesitan saber los votantes para actuar informadamente y lograr responsabilizar políticamente a los partidos. Las tres posibles respuestas se analizan en el siguiente cuadro:

Cuadro 213.- Información necesaria para aplicar el control poliárquico-electoral		
RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL	RESPONSABILIDAD POR PARTIDO BASADO EN ACCIONES	RESP. POR PART. BASADO EN LAS COND. ECON.
1.- Conocer el nombre de los representantes (diputado local, diputado federal, senador, presidente, integrantes del municipio, etc.) a partir del sistema de gobierno en específico. 2.- Conocer el partido al que pertenecen. 3.- Que existan y distinguir las distintas opciones programáticas. 4.- Conocer las diversas decisiones que se tomaron en el órgano en que participó su representante. 5.- Conocer el sentido del voto de su	1.- Conocer el partido que gobierna y cuáles son las acciones que ha tomado. 2.- Que existan y distinguir las distintas opciones programáticas. 3.- Conocer cómo le afectan o le benefician las decisiones tomadas. 5.- Recordar el comportamiento de los partidos opositores en los periodos en que fueron gobierno o saber cómo se comportan en las	1.-Saber si actualmente está mejor o peor que en el gobierno anterior. 2.- Que existan y distinguir las distintas opciones programáticas. 3.- Conocer el programa o plataforma electoral de los partidos que compiten.

representante en cada decisión. 6.- Saber cómo le perjudica y cómo le beneficia cada decisión tomada en particular. 7.- Conocer el nombre de sus opciones en la elección por venir. 8.- Conocer las plataformas partidistas de cada una de las opciones mencionadas.	entidades locales donde sean gobierno en ese momento. 6.- Conocer el programa o plataforma electoral del partido de gobierno y de los partidos de oposición.	4.- Poder discernir cuál de las plataformas electorales le beneficiará más y cuál menos.
---	---	--

Los niveles de información que supone la responsabilidad política a través del control poliárquico-electoral están muy por encima de las condiciones reales de conocimiento de los votantes. Explica Downs que la carencia de información se debe a que “como casi todos los ciudadanos advierten que su voto no es decisivo en las elecciones, es muy escaso el incentivo de la mayoría de ellos para adquirir información antes de votar” (1957: 322), siendo éste un motivo racional de desinformación. Tenemos, entonces, una importante contradicción: “los ciudadanos racionales desean que la democracia funcione bien para conseguir sus beneficios y funciona de manera óptima cuando todos están bien informados pero a nivel individual es irracional estar bien informado y lo más probable es que utilice únicamente el flujo de información gratuita que se recibe con motivo de actividades no políticas” (1957: 264-265).

Por otro lado hay también problemas de información en las relaciones causa-efecto de las políticas públicas y nuestro bienestar. En efecto, el logro con éxito de la responsabilidad política involucra, como observa José Maravall (1999: 159), a las distorsiones en información y monitoreo que aparecen cuando los ciudadanos tienen información incompleta generando dificultades para establecer conexiones causales entre las acciones de los políticos y los cambios en su entorno⁹. Los votantes no siempre son conscientes de lo que el gobierno hace o podría estar haciendo ni necesariamente conocen la relación entre los actos del gobierno y el balance de sus utilidades. Esto nos lleva a un nuevo problema, la necesidad de que los votantes tengan preferencias tanto sobre los resultados (fines) como sobre las políticas (medios), si bien se suelen tener preferencias sobre los resultados (mayor empleo, mejor salario, menor inflación, etc) no suele haber un

⁹ En “Deliberación y dominación ideológica.” (1998, publicado en Jon Elster. *La democracia deliberativa*. España: Gedisa Editorial.) Adam Przeworski distingue el adoctrinamiento de los conflictos de información. El primero tiene su mayor fuerza en la manipulación de las relaciones de causa y efecto. El segundo es, de acuerdo con Przeworski, actualmente el principal factor de dominación ideológica y opera manipulando las expectativas mutuas, es decir, la expectativas que los individuos aislados tienen acerca de las creencias de otros individuos.

debate sobre los medios (política económica neoliberal, keynesiana, terciarista, socialdemócrata socialista-revolucionaria, anarquista, etc) y, por ende, tampoco hay preferencias masivas bien definidas al respecto (Arnold, 1993: 76). Hasta aquí lo que tenemos son problemas de información incompleta, sin embargo el éxito del control poliárquico-electoral se complica aún más cuando la información incompleta se mezcla con la manipulación.

Manipulación 1: información sesgada por los medios informativos

Distinto a la información incompleta tenemos a la información sesgada con el objetivo de manipular. Como ya observaba Joseph Schumpeter (1950: 324-338) la propaganda y los medios de comunicación son elementos que entorpecen la acción racional en política aunado a que, suponiendo que el ciudadano logre discernir sus propios intereses, los actores individuales actuarán para beneficiarse a sí mismos y estarán lejos de conformar el bien común. El problema que aquí Schumpeter plantea es el problema de la manipulación que puede darse entre particulares y del Estado hacia los particulares. Analicemos en este inciso la primera relación y en el siguiente la segunda.

Afirma Downs que “en un mundo incierto, los sujetos racionales de decisión adquieren únicamente una cantidad limitada de información antes de efectuar sus elecciones... [y de la información obtenida] Toda comunicación de información es sesgada, ya que el informador ha de seleccionar para sus clientes únicamente algunos datos disponibles” (1957: 223). La información obtenida y presentada en torno a algún suceso no es puramente objetiva, hay previamente una selección de datos y un análisis de presentación de los mismos. Los métodos de selección dependen de los objetivos de cada uno.

Aunado a esto se debe hacer notar que “los medios de comunicación se hallan en muchas democracias en manos o dominados más por los intereses de los grupos de renta elevada que por los grupos de renta baja, los ciudadanos pertenecientes a estos son los que con mayor probabilidad recibirán datos seleccionados de acuerdo con principios discrepantes de los suyos” (Downs, 1957: 253). En efecto, debido a que la lógica de la industria informativa es una lógica de mercado, la finalidad última es obtener ganancias por medio de la publicidad de marcas y objetos de compra. Así, en principio los medios de

comunicación están dentro de la lógica del capitalismo a la vez que las empresas no comprarán espacios publicitarios en un medio que se muestre renuente o directamente contrario al capitalismo o a los factores reales de poder dominantes en un contexto nacional determinado, de aquí que de la misma manera que no hay opciones programático-electorales distintas al proyecto capitalista, tampoco hay medios de comunicación anticapitalistas y es prácticamente nulo el debate en torno a medios en política económica. Se permite la crítica pero siempre será una crítica acotada que no busque romper el esquema de acción capitalista ni minar los puntos estructurales de los recursos políticos de los actores sociales dominantes.

Todo lo anterior conlleva a la posibilidad de que la información del votante no provenga de contrastar sus intereses reales con las decisiones del gobierno en turno y las plataformas políticas de la oposición, sino de los temas que a partir del manejo de medios y la construcción de campañas se establezcan como principales generando un silencio político elaborado por la estructura de poder que delimita la reflexión ciudadana, lo que Norbert Lechner (1995) denomina “la democracia posible”. Un punto importante es que “Muchos ciudadanos delegan incluso las fases evaluativas de la votación y siguen consejos ajenos al emitir su voto” (Downs, 1957: 322). En efecto, hay costos transferibles e intransferibles en el proceso señalado por Downs como fases de la decisión racional, mientras el votante transfiera más fases a otros individuos o corporaciones, menos costos soportará directamente pero mayor posibilidad habrá de que sus intereses o principios de selección no se relacionen con los utilizados en la determinación de los datos finalmente consultados por una persona o corporación distinta a él¹⁰.

Sólo por dar algunas cifras, de acuerdo con un encuesta realizada por Gallup (Carballo, 1987: 49) sólo el 6% de los argentinos en 1987 decía nunca ver televisión, quienes más tiempo pasaban delante de un televisor eran los menos interesados en política caracterizados por: identificarse en el centro, tener poca instrucción, menor nivel socioeconómico, mayor edad y ser amas de casa. En cambio, quienes más leen periódico son quienes se dicen más interesados en la política, el 85% de los interesados lee un

¹⁰ Sin duda este tema es mucho más complejo. Incluye la forma de asimilar e internalizar la información, la socialización de la misma, los preconceptos y precomprensiones establecidas para saber hasta donde hay o no variación por la sola emisión del mensaje, etc. Lo que aquí hago es sólo exponer brevemente una posible falla del mecanismo de representación-responsabilidad de la DPR.

periódico con asiduidad y 56% de los no interesados lee periódico con asiduidad. El 85% de quienes se identifican con la derecha y 74% de quienes se dicen de izquierda leen el periódico de forma cotidiana.

Cuadro 214.- Segmentos económico - poblacionales		
Posición	Segmento	%
Alto-Alto	A-B-C1	7
Alto	C2	11
Medio-Alto	C3	26
Medio-Bajo	D1	22
Bajo	D2	29
Bajo-Bajo	E	5
Fuente. Mora y Araujo, 2000: 13		

Por su parte Manuel Mora y Araujo (2002: 13-16) identifica seis segmentos económico-poblacionales que se especifican en el cuadro 214. De esos segmentos el 99% del ABC1 cuenta con televisión y sólo el 81% con computadora personal, el 97% del C2 cuenta con televisión y sólo el 57% con computadora personal, el 96% del C3 tiene televisor contra el 26% con computadora, el 94% del D1 tiene televisión con sólo el 12% con computadora, el 90% del D2 cuenta con TV con sólo el 7% con computadora y el 88% del E tiene TV con sólo el 2% con computadora. Con estos datos concluye Manuel Mora y Araujo (2002: 19) que la sociedad argentina está expuesta

Cuadro 215.- Confianza en la televisión		
Institución	Mucho/algo	Poco/nada
Congreso	33	66
Justicia	20	80
Part. Políticos	29	71
Televisión	52	48
Fuente.- Quevedo, 1999: 221		

de forma homogénea a los medios de comunicación de masas uniformando su papel de receptores pero se encuentra desigualmente diferenciada en su potencialidad de constituirse como emisores o sujetos de acción con recursos y capacidades propios. Paralelamente Alberto Quevedo (1999: 221) nos da cifras obtenidas por la encuestadora Mori-Argentina respecto de la confianza que se tiene a diversas instituciones. De entre el congreso, la justicia, los partidos políticos y la televisión esta última es la que tiene mejores índices de confianza (cuadro 215).

Manipulación 2: información sesgada por los gobiernos

Las distorsiones en información generan también información asimétrica que permite a los políticos manipular sus ventajas informativas a partir de los accesos privilegiados a vastas áreas de políticas que opacan a los votantes (Maravall, 1999: 159). En efecto, los políticos pueden influenciar la opinión pública y no sólo responder a ella (Maravall, 1999: 156). En sentido semejante se encuentra la teoría de la movilización elaborada por Susan Stokes (2002: 113). De acuerdo con esta teoría cuando los partidos políticos tienen una estructura interna unificada y su objetivo está más cerca de hacer política que de ganar elecciones las

campañas electorales buscan informar y mover las preferencias de los votantes. El punto a subrayar es que la relación votante–partido no es lineal sino bidireccional.

Los políticos pueden manipular las preferencias ciudadanas y obtener un margen de autonomía en la administración pública que logra construirse a partir de las mediaciones entre la formación del poder público y la implementación de la toma de decisiones. La autonomía gubernamental con respecto a sus votantes se logra mediante diversas estrategias para generar los discursos legitimadores que permitan manipular a la opinión pública y actuar en contravención de sus plataformas electorales, sus promesas de campaña o las directrices constitucionales. Una estrategia es conciliar políticas públicas determinando los contenidos de la agenda y opacando temas a través de acciones o no-acciones. Otra es transformar políticas impopulares en políticas aceptables mediante: la presentación de la política impopular no como una trasgresión sino como una regla de excepción a los mandatos electorales por el cambio en las condiciones; tratar de aparecer como responsable al aplicar políticas que conllevan riesgos electorales; o contrarrestar la impopularidad con justificaciones y políticas de compensación (Maravall, 1999: 177). Otra estrategia consiste en generar la idea de que la ejecución gubernamental no es únicamente atribuible al gobierno, que éste lo hizo lo mejor que pudo y que otros cursos alternativos de acción hubieran tenido un peor desenlace. Al respecto se formulan discursos basados en: “la herencia recibida” donde las políticas impopulares fueron implementadas como antídoto a los errores de la administración anterior”; la “promesa de la luz al final del túnel”; la oferta de compensaciones frente a las políticas impopulares que implica la inserción de estas últimas en un paquete más amplio y atractivo de políticas públicas; la popularidad del gobierno elegido frente a la impopularidad de la oposición donde el descrédito incrementa la autonomía del gobierno y esta imagen es usada como un instrumento simbólico.

Las diferencias de afectación por la falta y el sesgo de la información

Un punto importantes es que los problemas de información y las posibilidades de manipulación no afectan por igual a todos los ciudadanos. Concluye Downs que los ciudadanos mejor informados “son aquellos cuya renta es afectada directamente por ella, es decir, aquellos que obtienen su renta del sector al que afecta la política en cuestión” (1957: 322) ya que estos sectores tendrán mayores incentivos para dedicar más tiempo a

informarse, tendrán mejores contactos informativos con los cuales socializa o internaliza la información y más recursos para sostener los costos de información.

De esta guisa, los grupos de renta más elevada tendrán mayores incentivos y recursos para informarse y actuar de conformidad con sus propios intereses, mejor acceso a los flujos informativos y buscarán influir en más decisiones políticas porque su actividad o maximización de la utilidad depende de la toma de esas decisiones. Por todo esto, Downs veía que era más probable que los productores se convirtieran en influenciadores de la toma de decisiones a la vez que lograrían un mayor nivel informativo y una mejor identificación de sus intereses que los votantes individuales: “el coste de adquirir información y de comunicar las opiniones al gobierno determina la estructura de la influencia política. Sólo quienes pueden permitirse soportar este coste se hallan en situación de ser influenciadores” (1957: 275). Hay, pues, una desigualdad en la división del trabajo que conlleva una desigualdad en la información que implica una desigualdad en la capacidad de influencia y, finalmente, se concreta en una desigualdad del poder político. Esta última es connatural a las sociedades con un régimen capitalista y un modelo de DPR.

Los conflictos de información en la DPR argentina.

Uno de los principales problemas es que no existen indicadores representativos de los conflictos de información incompleta, sesgada por los medios y sesgada por los gobiernos. Esto se debe a la dificultad para determinar primero los intereses reales del votante y, a partir de ellos, la desviación del cumplimiento de sus intereses por medio de los conflictos de información. En el capítulo anterior veíamos que la tercera dimensión del poder intenta solucionar este problema observando la distribución de los bienes socialmente valorados y revisando la existencia de conflictos por las inequidades de la distribución. Sin embargo, aún no se ha puesto hincapié suficiente en la importancia de este tema y de la elaboración de los indicadores correspondientes.

Con este problema como punto de partida comencemos el análisis de la información. En el caso argentino la elección de 1989 fue ganada por un partido con una plataforma electoral ecléctica y con una campaña keynesiana-populista. Pese a las expectativas formadas bajo estos indicadores, pero con una cultura política económica tendiente al privatismo, el gobierno a su llegada realizó un giro hacia el neoliberalismo a

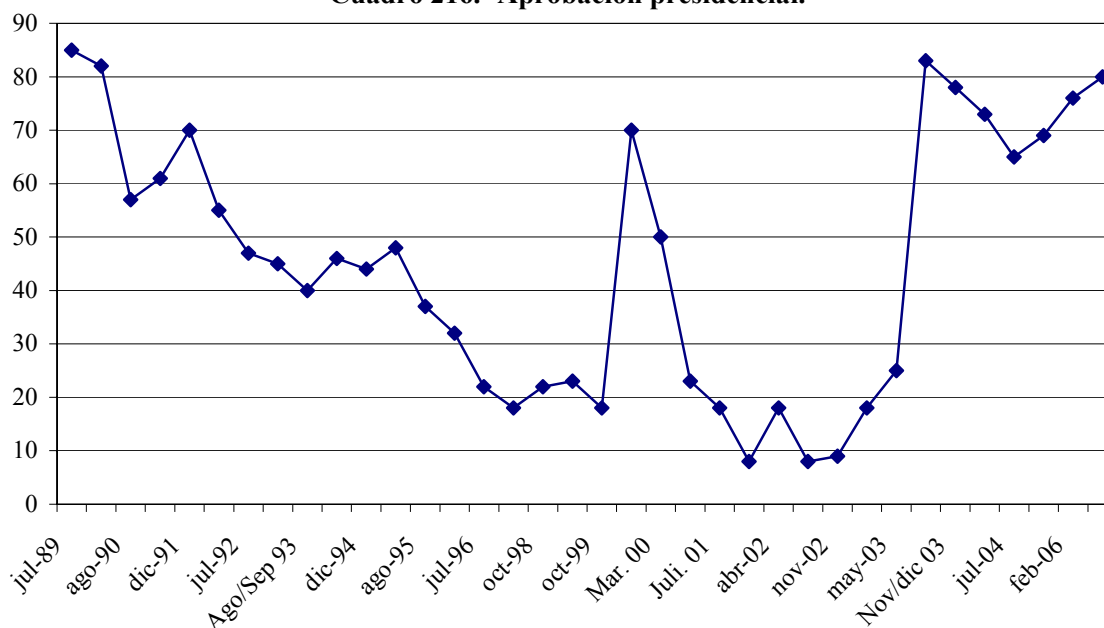
través de diversas técnicas de manipulación estatal señaladas por José María Maravall: la herencia recibida (la crisis en erupción), el único camino posible (no hay otra solución que el cambio del modelo hacia el neoliberalismo pese a las fallas iniciales para contener la inflación entre 1989 y 1991) y la luz al final de túnel (la llegada de la época de oro de la convertibilidad entre 1991 y 1993 y el piloto automático de 1996 a 1999, en este segundo caso la luz sólo fue un reflejo que no llegó). Paralelamente a las estrategias discursivas tenemos la formación de un liderazgo que se apoyó en la sistemática exposición en los medios. Explica Alberto Quevedo (1999: 216) que Carlos Menem comenzó a transmitir en cadena las 24 horas del día utilizando los medios de comunicación y hablando por radio en la mañana, con la prensa escrita en la tarde y apareciendo en los noticieros de la noche y matutinos del día siguiente. Incluso los medios –sigue Quevedo- se empeñaron en construir un nuevo perfil y una nueva imagen para quien sería el conductor de la transformación liberal argentina lo que implicaba no sólo una nueva agenda en el espacio público sino incluso la construcción del sujeto de enunciación del discurso. En sentido semejante nos dice Juan Javier Balsa (2001: 221-222) que el liderazgo constituido desde la campaña justicialista y en la presidencia fue un importante factor para entender el cambio del modelo económico. Se conformó un vínculo personal, real y virtual, a través de la casi permanente presentación televisiva¹¹. Lo cierto es que la sola elaboración del discurso hubiera sido insuficiente, como vimos en el capítulo anterior la crisis hiperinflacionaria de 1989 en mucho ayudó la posibilidad de este giro. El punto a subrayar es la generación de una importante autonomía estatal, con respecto a la ciudadanía, en la toma de decisiones entre 1989 y 1991 para realizar el grueso de las medidas que cambiaron el modelo económico argentino pese a ser contrarias a la campaña y tradición del peronismo.

Un indicador que se utilizó en la reconstrucción histórica de Argentina y que sirve para analizar la información de los votantes es el nivel de aprobación presidencial. Con este indicador podemos observar un fenómeno que resulta muy interesante: la llegada de los nuevos gobiernos suele ser con altos índices de aprobación a los que prosigue una caída. El

¹¹ Incluso al final de su segunda presidencia, el 28 de septiembre de 1999, Carlos Menem legalizó la concentración de los medios de comunicación por medio de un decreto que modificó la ley de radiodifusión pasando de 4 a 24 las emisoras de radio o televisión que podía explotar una persona física o jurídica. Asimismo mantuvo la prohibición proveniente del periodo de la dictadura que impide a las universidades, sindicatos, fundaciones y otras organizaciones no gubernamentales ser propietarias de este tipo de emisoras (Calloni, *La Jornada*, 10/oct/99).

caso de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa son muy claros, tal vez la única diferencia es la lenta pero sistemática caída de Menem mientras que la de Fernando de la Rúa fue estrepitosa. En cambio, la presidencia de Néstor Kirchner inició con poco más del 80% de aprobación, mostró una caída que llegó al 65% en el transcurso de los primeros dos años pero se ha levantado en los dos años siguientes (cuadro 216).

Cuadro 216.- Aprobación presidencial.



El punto que me interesa destacar aquí es que la mala calificación de un presidente saliente contrasta con la buena calificación del entrante lo que hace suponer la existencia de expectativas de cambio o diferencia del nuevo gobierno respecto del anterior generadas en la población, las cuales suelen incumplirse y, por ende, bajar la calificación del nuevo gobierno o cumplirse –o al menos generarse la idea de que se ha cumplido- y mantener o mejorar la calificación. Los votantes argentinos no generaron esta expectativa de cambio en la elección de 1995, por el contrario, se voto por la continuidad frente a la amenaza de crisis. En cambio sí se generó la idea de cambio en 1989, 1999 y en 2003. Con este indicador sólo podemos observar la expectativa de cambio, más no la dirección del mismo.

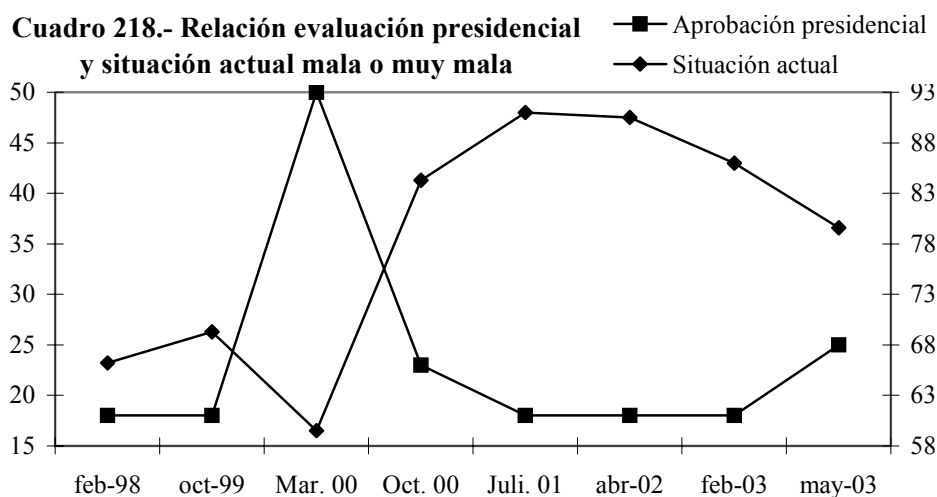
Otros indicadores que generan la idea de cambio son la evaluación de la situación actual, retrospectiva y prospectiva del país. Sin embargo no contamos con indicadores continuos de 1989 a 2005. Para el caso de la evaluación de la situación actual del país

nuestra serie de tiempo va de 1998 al 2003. En todos estos años la calificación de muy mal / mal es mayoritaria (cuadro 217).

Cuadro 217.- Evaluación de la situación actual de Argentina.											
	Feb** 1998	Sep** 1999	Oct** 1999	Abr* 2000	Sep* 2000	Dic * 2000	Feb** 2001	May* 2001	Feb** 2002	Mar* 2003	May** 2003
Mal / Muy mal	66.2	71.1	69.3	59.5	84.3	59.5	75.7	91	90.5	86	79.6
Regular	25.1	17.8	20.7	27.6	11	35.4	20.7	8.2	8.3	10.8	17.4
Bien / Muy Bien	9	9.9	9.6	12.0	4.0	4.2	3.5	0.8	1.2	2.9	3
No sabe	0.4	1.2	0.4	0.9	0.9	0.9	0.2	0	0	0.4	0.0

Fuente: IBOPE-OPSM. * Capital Federal ** Nacional

El punto interesante es que la evaluación de mal / muy mal de la situación actual se encuentra correlacionada con la evaluación presidencial de forma tal que cuando empeoró la percepción de la situación actual entre 1998 y 1999 disminuyó también la aprobación del presidente. Cuando llegó Fernando de la Rúa a la presidencia mejoró la percepción de la situación actual a principios del 2000 y mejoró también la evaluación presidencial. Posteriormente cayó ésta última entre octubre del 2000 y febrero del 2003 y empeoró nuevamente la percepción de la situación actual. Finalmente cuando en mayo del 2003 arribó Néstor Kirchner a la presidencia mejoró la aprobación presidencial y mejoró también el indicador de la situación actual. La expectativa de cambio proveniente de la aprobación presidencial va de la mano de percepción de la situación actual (cuadro 218).



En cuanto a la evaluación retrospectiva tenemos indicadores de 1988-89 y de 1997 al 2003. El primer elemento llamativo es que casi en todos los casos los votantes afirman que las cosas empeoraron y sólo durante el 2000 afirman que las cosas siguieron igual.

Cuadro 219.- Evaluación retrospectiva en los últimos 3 años o desde el cambio de gobierno													
	May# 1988	Mar# 1989	May* 1997	Feb** 1998	Sep** 1999	Oct** 1999	Abr* 2000	Sep* 2000	Dic* 2000	Feb** 2001	May* 2001	Feb** 2002	Mar* 2003
Mejoraron	22	20	12.7	12.8	8.4	10	20.8	6.9	10.7	8.3	3.5	1.2	6.6
Siguen igual	21	21	29.3	25.1	22.4	22.7	65.5	49.4	72.6	40	28.2	8.2	19.5
Empeoraron	53	55	58	60.8	67.8	65.8	12.8	42.7	15.8	50.7	66.9	89.6	73.3
No sabe.	4	4	00	1.3	1.4	1.5	0.9	1	0.9	1.1	1.5	0.9	0.6

Fuente: IBOPE-OPSM. * Capital Federal. ** Nacional. # Fuente.- Braun y Catterberg, 1989: 365 y 366.

En cuanto a la idea de cambio con respecto del gobierno saliente, el hecho de que el grueso de los votantes en 1988 y 1989 nos digan que las cosas en los últimos 3 años han empeorado nos permite suponer que están esperando un cambio por parte del nuevo gobierno, en este caso el de Carlos Menem, aunque nuevamente no hay claridad en torno a la dirección de cambio. Algo semejante sucede entre 1997 y 1999 donde arriba del 60% de los encuestados afirman que las cosas empeoraron en los últimos 3 años. En cambio en los primeros meses del gobierno de Fernando de la Rúa se eleva del 10 al 20% de encuestados que afirman que las cosas han mejorado desde el cambio de gobierno, aunque este porcentaje rápidamente cae en el 2000 y el 2001. Asimismo, durante el primer año de gobierno de la Alianza el grueso de los encuestados se ubica en el sector que cree que las cosas siguen igual desde la llegada del gobierno y a partir del 2001 la mayoría se ubica entre quienes creen que las cosas han empeorado. El punto a subrayar es la generación nuevamente de la idea de cambio ahora tanto en 1989 como en 1999 y el empeoramiento de los indicadores tan pronto como el cambio no se concreta.

La visión prospectiva sigue la misma lógica que las dos anteriores. En los años electorales la expectativa de mejoramiento futuro aumenta –1989 tiene 63% de expectativas de mejoría, abril del 2000 56.6% y mayo del 2003 53.3%- y conforme avanza el periodo de gobierno esta expectativa de mejoría disminuye (cuadros 220 y 221).

Cuadro 220.- El año que inicia será mejor, igual o peor (a diciembre de cada año)											
	1982	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Mejorarán	34	83	50	38	37	39	63	47	61	46	51
Igual	20	9	28	23	26	23	18	22	23	19	24
Peor	36	2	15	35	27	22	12	19	9	27	17

No sabe.	10	6	7	4	10	16	7	10	7	8	8	
Fuente.- Carballo, <i>La Nación</i> , 4/feb/94.												
Cuadro 221.- Evaluación prospectiva de los próximos 3 años												
	May* 1997	Feb** 1998	Sep** 1999	Oct** 1999	Abr* 2000	Sep* 2000	Dic* 2000	Feb** 2001	May* 2001	Feb** 2002	Mar* 2003	May** 2003
Mejorarán	17.6	31.4	36.8	36	56.5	33.4	34.8	37.1	31.7	46.7	39.5	53.3
Igual	20.8	29.2	29.5	31.9	21.7	23	33.5	32.9	24.0	19.7	29.1	24.4
Peor	41.7	24.4	17.5	15.4	14.6	34.3	22.6	24.1	36.0	23.4	21.3	11.0
No sabe.	19.9	15	16.2	16.7	7.3	9.3	9.1	5.9	8.3	10.2	10.1	11.3
Fuente: IBOPE-OPSM. * Capital Federal. ** Nacional												

Si los anteriores indicadores nos muestran la expectativa de cambio pero no la dirección, tenemos algunos indicadores de información de los votantes que nos dan algún “norte” al respecto. Uno importante son los cambios en la cultura política económica (CPE), uno de los pocos indicadores de largo plazo existentes y públicos. Este indicador nos muestra las tendencias privatistas o estatistas de la sociedad argentina. Tenemos que hasta el primer quinquenio de los 80 la CPE tendía al estatismo pero en el segundo quinquenio la cultura privatista comenzó a ser mayoritaria y mantuvo rangos superiores al 60 y 70% de los encuestados hasta 1997. Es decir, la CPE fue mayoritariamente privatista justamente durante el periodo de gobierno de Carlos Menem quien ganó la elección con una campaña electoral populista (pese a su plataforma ecléctica) cuando ya una mayoría de argentinos tendía al privatismo. Después de 1997 (luego del final de la época de oro de la convertibilidad, la crisis económica de 1995, el aumento del desempleo y la falta de distribución económica pese a que 1996 y 1997 fueron años de crecimiento) la CPE comenzó a variar hacia el estatismo siendo esta la CPE mayoritaria en el 2000 y teniendo su punto clímax en las últimas mediciones públicas en el 2002 (Cuadros 222 y 223).

Fecha	Privatismo	Estatismo
1981*	37	63
1982*	44	56
1986*	42	58
1989*	60	40
Oct 91**	73	27
Abr 92**	83	17
Ago 92**	67	33
Mar 93**	59	41
May 93**	63	37
Feb 94**	72	28
Jul 94**	64	36

De los sectores de la CPE que identifica Manuel Mora y Araujo vemos que cuando el privatismo era mayoría se trataba de un privatismo liberal, es decir, caracterizado por una economía predominantemente privada, antimilitar y antisindicalista mientras que cuando el estatismo es dominante, es un estatismo anticorporativo, es decir, con mayor intervención del Estado en la economía, pero también antisindicalista y antimilitar (cuadro 223).

Ago 94**	73	27
Mar 95**	65	35
Jul 95**	62	38
Ago 95**	63	37
Jul 96**	58	42
Ene 97**	59	41
Mar 97**	51	49
Jul 97**	61	39
Ago 97**	62	38
Sep 97**	62	38
Oct 97**	53	47
Mar 99**	52	48
2002*	65	35

Fuente. * Cheresky, 2004^a: 43-44.
** Mora y Araujo, 1999: 78

Cuadro 223.- Segmentos de preferencias institucionales							
ESTADISTAS	1985	1989	1992	1994	1998	2000	2002
Corporativo	15	9	4	5	7	6	3
Clásico	13	7	3	3	5	6	4
Promilitar	5	4	6	7	7	8	17
Anticorporativo	10	6	9	14	26	31	40
TOTAL	43	26	22	29	45	51	64
PRIVATISTAS	1985	1989	1992	1994	1998	2000	2002
Desarrollista	21	20	12	12	9	5	1
Neoperonista	13	11	8	6	4	4	3
Neopinochetista	10	21	20	19	11	8	8
Liberal	13	22	38	34	31	32	24
TOTAL	57	74	68	71	55	49	36

Fuente.- Mora y Araujo, 1991: 75 – 82; y 2002: 36 – 37.

Cuadro 224.- Acuerdo con las privatizaciones		
1992 ^a	De acuerdo / Muy de acuerdo	59
	En desacuerdo / Muy en desacuerdo	31
	NS / NC	11
1998 ^b	Revisar las privatizaciones	44
	Mejorar el control	30.9
	Continuarlas	4.9
	Ampliarlas y profundizarlas	4.6
	NS / NC	15.6
1999 ^c	Acuerdo con las privatizaciones efectuadas en los 90.	26

a.- Mora y Araujo, 1993: 318
b.- Encuesta Nacional de OPSM. Feb./98
c.- Cheresky, 2004b: 44.

Semejante a lo que pasó en la CPE sucedió en el caso de las privatizaciones. Mientras que en 1992 había un 59% de encuestados que decían estar de acuerdo o muy de acuerdo con las privatizaciones de las empresas estatales, para 1998 el 44% piensa que es necesario revisar las privatizaciones y el

30% opta por mejorar el control sobre las empresas privatizadas. Finalmente para 1999 sólo el 26% de los encuestados están de acuerdo con las privatizaciones realizadas en los 90. En la elección de 1989 los votantes argentinos no votaron por un partido que llevara a cabo un proceso privatizador como el desarrollado por el peronismo, sin embargo, estuvieron de acuerdo con este proceso (aunque se modifica el acuerdo con ciertas privatizaciones en específico y con la manera en que se llevaron a cabo las privatizaciones) y lo reivindicaron en las urnas en 1991, 93 y 95. No obstante, para 1998 las expectativas de modificación en torno a la política de privatización y el trato de las empresas privatizadas, paralelamente con el cambio de la tendencia privatista a la estatista, se transformó. Las expectativas

generadas en los votantes, más que creadas por la oposición, eran en torno a un mayor control de las privatizadas y la anulación de algunas privatizaciones. Sin embargo, la Alianza no cumplió con las expectativas generadas mientras que el discurso de Néstor Kirchner fue muy crítico en este punto acompañado de algunas acciones fuertes (el congelamiento de las tarifas) y otras más simbólicas (reestatización de algunas empresas estatales como correos y aguas argentinas).

Otros dos indicadores relacionados con la información de los votantes y que nos permiten comenzar a dilucidar sobre la dirección del cambio son la evaluación de la política económica y el nivel de acuerdo con el modelo económico. En torno al primer indicador en todos los casos la mayoría de los encuestados evalúa la política económica como pésima, muy mala o mala y en casi todos los casos esta calificación rebasa el 50% de los votantes. Las mejores calificaciones se encuentran al inicio de las gestiones de cada ministro de economía pero con el tiempo comienza el deterioro. Si la evaluación final mayoritaria del ministro de economía saliente es pésima, mala o muy mala y la calificación inicial del nuevo ministro tiende a mejorar, se puede intuir que el votante espera un cambio en los resultados económicos, específicamente que el nuevo ministerio haga algo distinto de lo que venía haciendo el anterior, cambio que no llega por lo que la calificación empeora (Cuadro 225).

Cuadro 225.- Evaluación de la política económica										
	Sourrouille *	Pugliese*	Roque ** Fernández	Luis Machinea**				Domingo Cavallo#	Roberto Lavagna	
	1989	1989	Mayo 1997	Abr 2000	Sep. 2000	Dic. 2000	Feb. 2001	May 2001	Ago 2001	Sep** 2003
Pésimo / Muy mal / Mal / (1-4)	78.6	78.8	45.1	38.7	58.8	67.2	58.5	37.1	78.2	41.7
Regular / (5-6)	16.4	18.1	35	37.2	24.2	20	28.0	13.1	--	33.8
Excelente/ bien /muy bien (7-10)	3.1	2.1	9.5	8.4	5.6	3.7	5.8	48.1	19.3	19.2
NS / NC	1.9	1.0	10.4	15.8	11.5	9.1	7.6	1.7	2.5	5.3

* Fuente.- Fraga, 1989: 86.** Fuente: Diversas encuestas de IBOPE-OPSM realizadas en la Capital Federal.
Fuente.- Analogías. Nacional.

Por otro lado tenemos el acuerdo con el modelo económico vigente. De este indicador sólo tenemos datos de entre 1999 y el 2002, momento en el cual la CPE ya es mayoritariamente estatista y los efectos nocivos del modelo económico se han plenamente

externado. Por ello no es raro que el modelo tenga niveles de desacuerdo de cerca del 60 y 70 % de los encuestados (cuadro 226).

Cuadro 226.- Acuerdo con el modelo económico vigente en el país							
	Sep* 1999	Oct* 1999	Abr** 2000	Sep** 2000	Dic** 2000	Feb* 2001	Feb* 2002
Muy de acuerdo	16.1	14.3	22.6	22.3	18.9	10.7	31.5
De acuerdo	15	15.2	16.9	12.6	18.2	18.3	--
No tengo posición	65.4	66.5	57	64.6	59.6	67.6	62.2
Poco de acuerdo	3.5	4	3.6	0.5	3.3	3.4	6.4
Nada de acuerdo							
No sabe.							

Fuente: IBOPE-OPSM. * Nacionales. ** Capital Federal

Muy cerca de los indicadores de evaluación y acuerdo con la política económica tenemos los principales problemas del país de acuerdo con la percepción de los votantes. Como vimos en el capítulo anterior el grueso de los principales problemas con mayor número de menciones son económicos (particularmente el desempleo y los bajos salarios). Si con los primeros indicadores llegamos a la conclusión de que la llegada de un nuevo gobierno viene siempre acompañada de una expectativa de cambio y con los indicadores de CPE, evaluación de la política económica y acuerdo con el modelo vemos que el cambio va dirigido a hacer algo distinto del modelo neoliberal (aunque con un fuerte apoyo a la convertibilidad), con la percepción de los principales problemas podemos afirmar que el cambio incluía bajar las tasas de desempleo, aumentar los salarios, entre 1987 y 1991 controlar la inflación, y en algunos casos resolver los problemas de los jubilados, seguridad y corrupción.

Cuadro 227.- Menciones de los principales problemas del país												
	Mar 87	Ene 89	Ago 90	Ago 91	Jul 92	May 93	Dic 94	May 95	Nov 96	Dic 97	Feb 98	Abr 99
Desempleo	43	46	53	54	55	74	73	85	78	82	71	85
Salarios	45	42	39	40	49	44	42	47	39	31	23	26
Inflación	40	48	36	20	11	5	3	3	2	2	2	3
Jubilados	0	0	0	0	0	27	31	35	28	19	17	18
Deuda	40	26	23	14	12	2	3	3	2	3	2	2
Seguridad	22	25	26	27	19	33	23	18	18	33	34	30
Corrupción	--	--	--	40	32	26	28	16	29	23	27	25
Educación	23	24	35	37	43	23	24	27	19	23	24	25

Fuente.- Mora y Montoya, 1999: 81.

Resumiendo y agregando con base en el recuento histórico:

A.- En la elección de 1989 se votó por un partido que hizo una campaña populista-neokeynesiana aunque presentó una plataforma electoral ecléctica cuando la CPE ya era mayoritariamente privatista. El nuevo gobierno tuvo la capacidad de generar estrategias discursivas que le otorgaron la autonomía suficiente para realizar un giro al neoliberalismo apoyado en la fuerte crisis hiperinflacionaria y en el uso de medios. Podemos observar en esta elección: a) conflictos de información incompleta, ya que los votantes no pudieron prever con la información que tenían el giro del peronismo (incluso se pensaba por los votantes que la plataforma de Carlos Menem favorecía más a la clase baja, los sindicalistas y a los trabajadores mientras que la de Eduardo Angeloz favorecía a la clase media-alta y a los empresarios). b) Conflictos de información por manipulación de los medios en el uso que el gobierno dio a los medios para formar su liderazgo y legitimar el viraje neoliberal y en la cobertura que los medios decidieron dar a este giro. c) Conflictos de información por manipulación gubernamental con las estrategias que ya fueron detalladas y que le permitieron tener una importante autonomía de acción respecto del mandato otorgado en la elección.

B.- En las elecciones de 1991, 1993 y 1995 también se pueden identificar conflictos de información incompleta del tipo causa-efecto muy cerca de la manipulación estatal. Este conflicto se genera a partir de las expectativas generadas por la llegada del modelo neoliberal (la concentración inicial, el mejor uso de los recursos por los empresarios y el efecto derrama posterior con crecimiento económico sostenido) y sus resultados. Lo cierto es que hubo este proceso de concentración de la riqueza y un cambio de los activos estatales a manos de los empresarios, especialmente transnacionales, y existieron 3 años de crecimiento económico, mejoras salariales y disminución de la pobreza (1991-1993) pero con aumento del desempleo. Posteriormente, luego de 1994, todos estos indicadores se deterioraron ya no por la transición a las nuevas reglas del juego sino por efectos del propio modelo económico neoliberal argentino. Así, el voto de 1989 no fue por este modelo económico, pero los votos de 1991, 1993 y 1995 sí apoyaron al nuevo modelo por lo que se puede hablar primero de, al menos, un problema de información imperfecta por error en la causa-efecto de la política económica.

C.- En las elecciones de 1997 y 1999 con las victorias de la Alianza observamos también conflictos de información incompleta. Dos son los puntos de interés en este caso:

las expectativas de cambio generadas en las elecciones de 1997 y 1999 donde la Alianza resulta ganadora y el incumplimiento de estas expectativas por lo que en septiembre de 1999 (diez meses después de que el gobierno electo había entrado en gestión) ya el 65.4% de los encuestados esta poco o nada de acuerdo con el modelo económico. El segundo punto de interés es el alto nivel de desacuerdo con el modelo pero también el alto nivel de acuerdo con la convertibilidad (sin pasar por alto que el modelo es tripartito: convertibilidad, ajuste fiscal y reformas estructurales). En ambos casos lo que se observa son conflictos de información incompleta. En el primer punto la expectativa de cambio generada en los votantes no era paralela a las propuestas de gobierno de la Alianza y estuvo aún más lejos de la política practicada por la misma. La información insuficiente lo es respecto de la continuación de la política económica que llevaría a cabo el gobierno de la Alianza de 1999 al 2001. El segundo punto da luz sobre el conflicto de información insuficiente de causa-efecto de la convertibilidad. En ambos casos, la posibilidad de discernimiento de la población se complejiza por la manipulación gubernamental.

D.- Tanto en la elección de 1995 como de 1999 observamos un conflicto de información insuficiente conjugado con un conflicto de manipulación gubernamental: un importante tema que no fue tratado por prácticamente ninguno de los partidos de oposición ni por el gobierno fue la convertibilidad. Si bien la salida de capitales y la crisis de 1994 – 1995 se da junto con un cambio de flujos internacionales, lo cierto es que desde 1994 comenzaba a notarse la repercusión del modelo económico en el desempleo y las limitantes financieras en torno a la convertibilidad. El único de los partidos que lo mencionó fue la UCR quedando en tercer lugar en las elecciones de 1995. En cambio, los otros dos contrincantes, el PJ y el Frepaso, borraron por completo el tema en la elección poniendo la atención unos en la posibilidad de volver al pasado con una nueva crisis hiperinflacionaria y los otros en la corrupción. Algo semejante sucede en las elecciones de 1999 cuando ninguno de los partidos competidores se anima a hablar de la crisis económica en la que Argentina se encuentra (con excepción de la última parte de la campaña de Eduardo Duhalde que no es tomada en serio), la dificultad que implicaría remontar el alto déficit fiscal y los límites de la convertibilidad. La decisión de acallar estos temas nos plantean nuevamente dos conflictos informativos: uno tendiente a la información incompleta de los

votantes y otro dirigido a la manipulación estatal al desaparecer de la agenda uno de los principales debates.

E.- Otro interesante caso de manipulación de la información por los medios lo encontramos en los tres primeros meses del 2002. Como se especifica en el recuento histórico la toma de decisiones en materia de política económica por parte del gobierno de Eduardo Duhalde entre enero y abril del 2002 se llevó a cabo con un telón de fondo creado por los medios que proyectaba una crisis hiperinflacionaria semejante a la ocurrida en 1989 y el caos. Sin embargo, este sesgo en la información no afectó las elecciones del 2003 particularmente porque el caos no sucedió y la economía comenzó a recuperarse.

F.- Las preferencias que pueden identificarse con los indicadores que se obtuvieron nos indican las expectativas de cambio (evaluación presidencial, de la situación actual, prospectiva y retrospectiva), de forma indirecta la sensación de hacer algo distinto a lo que había venido haciendo el gobierno anterior (no continuidad con el modelo económico), (cultura político económica, acuerdo con el modelo y evaluación de la política económica) y ciertos resultados esperados como la mejoría del empleo y el aumento del salario (percepción de principales problemas). Como señalamos en los conflictos de información incompleta, no hay un debate suficiente sobre las políticas alternativas (los medios) por lo que tampoco hay indicadores de preferencias al respecto mientras que sí se pueden observar más claramente las preferencias de resultados.

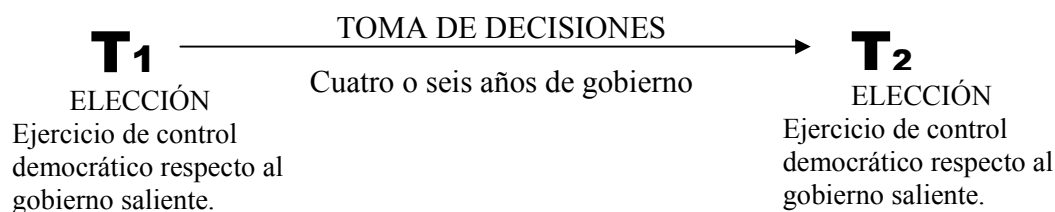
5.4. Los fallos exógenos del control poliárquico-electoral.

Hasta aquí hemos señalado fallos inherentes al mecanismo de representación-responsabilidad de la democracia representativa procedimental. Toca el turno a la revisión de un fallo exógeno a este mecanismo: la existencia de controles rivales de la toma de decisiones gubernamentales que pueden tener una mejor institucionalización, contar con mayores recursos y generar mayor influencia. Analizaremos específicamente el caso del control político-económico proveniente del mercado.

Suponiendo que funcionara correctamente el mecanismo de responsabilidad-representación de la DPR (sin fallos en la elaboración del mandato, con suficientes opciones programáticas y sin conflictos informativos) este mecanismo está constreñido a

sólo dos momentos de aplicación temporalmente determinados por los propios órganos gubernativos y multi-anualmente espaciados como se observa en el cuadro 228.

Cuadro 228.- Momentos de aplicación del control poliárquico-electoral

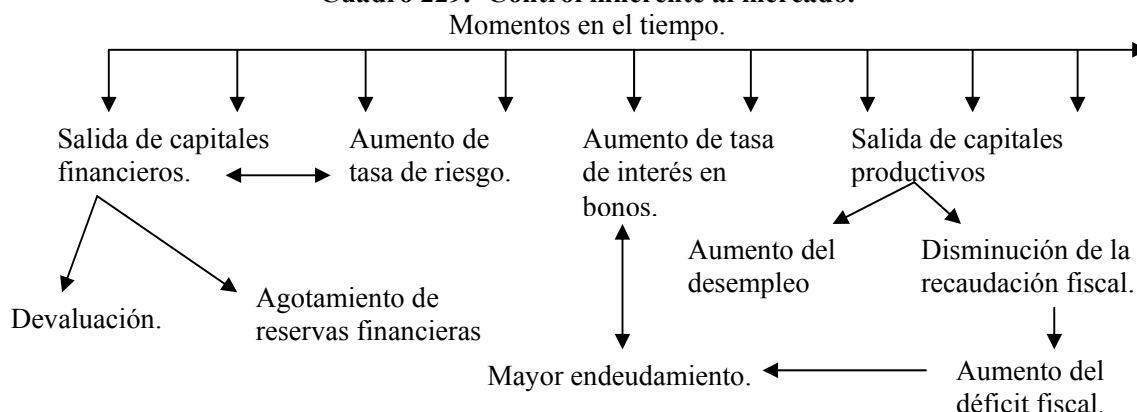


La aplicación del control poliárquico-electoral se da después de todo un ejercicio de gobierno sin oportunidad de ejercer el control antes de la siguiente elección. En algunos casos existe la posibilidad de revocar el mandato pero no en el modelo de DPR argentino. Asimismo, se puede argumentar que las diversas elecciones locales y las elecciones legislativas intermedias son parte del control poliárquico electoral¹². Sin embargo, las lógicas de las elecciones locales no necesariamente están sujetas al funcionamiento del gobierno federal y el momento en el que se juzga por completo la actuación del gobierno saliente es precisamente en la reelección de su cargo. De modo tal que institucionalmente el mecanismo de control poliárquico electoral se caracteriza por: 1) estar reducido a dos momentos temporales, 2) establecidos por los propios gobiernos sobre quienes se supone se ejerce el control, 3) se trata de momentos rígidos y 4) el recurso se aplica en el arribo al cargo mas no en el ejercicio del cargo.

Por su parte, el mecanismo de control político proveniente del mercado en principio apunta a materias que son de vital importancia para cualquier gobierno (crecimiento económico, dependencia estatal y social al capital), esto es, este mecanismo de control afecta al gobierno en el ejercicio diario de la toma de decisiones; su posibilidad de aplicación no está determinada por la ley sino que puede darse en cualquier momento a partir de la iniciativa los propios actores del mercado poseedores del recurso político por lo que es bastante más flexible que el control poliárquico-electoral (cuadro 229).

¹² Extrañamente existe una tendencia en ciertos politólogos a opinar a favor de la concentración de las elecciones locales y federales en fechas específicas para “permitir al gobierno gobernar”. Pareciera que gobernar es sinónimo de tomar decisiones contrarias a los intereses de los votantes, las cuales no se pueden tomar si hay diversas elecciones en varios momentos. Si la principal función de la democracia es controlar la toma de decisiones gubernamentales por medio de elecciones esta propuesta sería, al menos, antidemocrática.

Cuadro 229.- Control inherente al mercado.



A esto se suma el hecho de que los grupos empresariales tienen de su parte una serie de factores como: a) el financiamiento; b) una organización previa de tipo empresarial; c) un mayor acceso a los medios tanto por su poder de convocatoria como por la contratación de publicidad; d) un tamaño más accesible para llegar a acuerdos entre diversos grupos empresariales; e) intereses comunes en lo fundamental (cuando lo fundamental es el mantenimiento del orden capitalista); y f) un acceso especial al sistema estatal desde distintas esferas. Todas estas ventajas facilitan la formación de la acción, el mantenimiento de la misma a lo largo del tiempo y, por ende, la presentación en segundas o terceras oportunidades de las demandas enarboladas.

De esta guisa, el control político-económico proveniente del mercado se encuentra mucho más eficientemente institucionalizado para generar una mayor influencia sobre la toma de decisiones que el control poliárquico-electoral (cuadro 230).

Cuadro 230.- Comparación de los mecanismos de control gubernamental	
Poliárquico-electoral	Control del mercado
Dos momentos en el tiempo	Múltiples momentos en el tiempo
Momentos Rígidos	Momentos Flexibles
Los tiempos de aplicación los determina el gobierno y no los poseedores del recurso político.	Los tiempos de aplicación los determinan los poseedores del recurso político.
El recurso genera control a partir del arribo al poder.	El recurso genera control en el ejercicio del gobierno.

Tomando en consideración que la principal función de la democracia fue la limitación del Estado, se crearon dos sistemas de control político-social: el control poliárquico-electoral y el control político económico proveniente del mercado. En el modelo de democracia procedimental actual, la posibilidad de que los grupos empresariales

tengan capacidades de control sobre la toma de decisiones públicas es visto como una conveniente forma de control político sobre el Estado: el control proveniente del mercado se presenta como una situación deseable para evitar los excesos de un Estado autoritario. De esta forma, se crean dos tipos de conductores de la sociedad: las líderes políticos y los líderes empresariales. Con respecto a los primeros existe la democracia electoral como un mecanismo de control ciudadano; con respecto a los segundos en este momento no hay ningún mecanismo de control social.

5.5. La irresponsabilidad política de los gobernantes y el mejoramiento del mandato

Hasta ahora hemos visto que las elecciones no son un mecanismo suficiente para garantizar la responsabilidad poliárquico-electoral ya que sufre de fallas tanto endógenas como exógenas¹³. La responsabilidad política es un argumento con proposiciones copulativas: **premisa 1.-** hay individuos racionales (y básicamente iguales) que tienen la información suficiente para someter a responsabilidad política a los gobernantes. **Y premisa 2.-** Hay más de dos opciones para elegir. **Y premisa 3.-** Hay un sistema de elección por medio del voto que da una distribución igualitaria a los ciudadanos. **Conclusión.-** hay responsabilidad política. Para que la conclusión sea verdadera las tres proposiciones deben ser verdaderas.

En cuanto al primer presupuesto observamos una tendencia de los partidos políticos a unificar sus ideologías en un claro corrimiento histórico hacia la derecha lo que pone en crisis la existencia de dos o más opciones diferentes. Si bien todas las opciones se mantuvieron dentro del capitalismo, también es cierto que en la elección de 1989 hubo una mayor diferenciación de propuestas (neoliberales-keynesianos) que se desvaneció tan pronto como el peronismo decidió virar al neoliberalismo, en las elecciones de 1995 y 1999 hubo una menor diferenciación de plataformas electorales en materia de política económica y, finalmente, en 2003 hubo una mayor diferenciación político-económica entre Menem y Kirchner que se acentuó de forma discursiva debido a la crisis del 2001 y a la pérdida de legitimidad del modelo neoliberal.

¹³ A semejante conclusión llegó Adam Przeworski (1999: 44) observando que en la representación-responsabilidad de la DPR los políticos tienen sus propios objetivos, intereses y valores, poseen información y emprenden acciones que los ciudadanos no pueden vigilar o controlar a menos que asuman un alto costo.

En lo que hace al segundo presupuesto, la falta de información de los votantes abre paso a la posibilidad de que la decisión del votante se realice no por la identificación de sus intereses reales con el partido en cuestión, sino por el manejo de imagen de los partidos y sus más claros representantes dando paso: 1) al establecimiento de la “política del escándalo” sobre la contrastación de los votantes de sus intereses reales con el actuar del gobierno y las plataformas políticas de la oposición (conflictos de información incompleta); y 2) a la posibilidad de manipulación por el traslado de los costos informativos. La existencia de información incompleta, asimétrica y de manipulación a partir de las fuentes informativas afecta uno de los presupuestos necesarios para que tenga éxito la responsabilidad política: la necesidad de votantes racionales bien informados¹⁴. En torno a estos conflictos informativos Downs explica que “el gobierno sabe que quizá perderá el voto de A si favorece a B, pero también sabe que la colaboración de B maximizará su oportunidad de conseguir el apoyo de los perplejos C y D. En consecuencia está dispuesto a tirar a A por la borda si con ello puede contar con el apoyo de B” (1957: 100), donde A puede ser un elector cualquiera o un movimiento social, B un grupo empresarial y C y D dos electores influenciados. Al respecto explica Charles Lindblom (1977) que a partir de la competencia electoral a través de los medios masivos de comunicación y por medio del financiamiento se logra una coordinación que inclina al control poliárquico-electoral a acomodarse al control político-económico inherente al mercado. Esta posibilidad de elección de los partidos políticos tiene una importante repercusión: la vigilancia del control poliárquico-electoral que se supone en manos del electorado puede quedar en manos de los poderes fácticos¹⁵.

¹⁴ Particularmente los problemas de información de los votantes ponen de relieve un punto esencial: la formación de preferencias de los votantes no es un elemento exógeno, sino endógeno al éxito del mecanismo de responsabilidad política. Más aún, como explica Chantal Mouffe, “Todos los sistemas de relaciones sociales implican, en cierta medida, relaciones de poder puesto que la construcción de una identidad social es un acto de poder. El poder... no debería ser concebido como una relación externa que tiene lugar entre dos identidades preconstituidas, sino que es el poder el que constituye esas mismas identidades” (1993: 191).

¹⁵ Los ciudadanos pueden participar y de hecho participan en la promoción del voto. Sin embargo, incluso en este campo la participación de los empresarios tiene tres ventajas (Lindblom, 1977: 193-194): extraordinarias fuentes de fondos; una organización previa lista para actuar a diferencia de los individuos quienes, si bien pueden organizarse, deben pagar un precio consistente en tiempo, energía y dinero; y acceso especial al gobierno. Aunado a esto, después de la elección, el gobierno dependerá de la inversión privada para el logro de muchas de las metas económicas del Estado como el empleo, el crecimiento, el desarrollo tecnológico, etc., que finalmente son necesarios para evitar caer en crisis y obtener nuevamente el voto de los electores.

De forma paralela a las fallas endógenas del control poliárquico-electoral tenemos a las fallas exógenas. En este caso se analizó la mejor institucionalización del control político-económico proveniente del mercado. El punto crucial aquí es ¿qué ocupa, en el mercado político, el espacio del capital en el mercado económico? La teoría dominante de la democracia supone que la función del capital en el mercado económico es suplido por el voto en el mercado político. Pero, a partir de la posibilidad de persuasión para obtener el voto, la falta de información de los votantes, la posibilidad de manipulación y la necesidad de condiciones económicas favorables, todo parece indicar que el capital en realidad está en el financiamiento de las campañas políticas, el manejo de imagen en los medios y la inversión durante el ejercicio gubernamental para mantener cierta estabilidad. De ser así (de ser el capital en el mercado político la persuasión, la información y la estabilidad económica), desaparece el posible conflicto o contradicción que supondría la existencia de los dos controles (el poliárquico-electoral y el proveniente del mercado) sobre la toma de decisiones gubernamentales ya que el control proveniente del mercado se superpondría en ambos casos debido a que el mercado político lo que hace es registrar y responder únicamente a la demanda efectiva, es decir, a aquella que cuenta con capacidad adquisitiva suficiente para respaldarla. Si, como vemos, la capacidad adquisitiva se encuentra en el manejo de medios, financiamiento de campañas y estabilidad económica, mas no en el primordialmente en el voto, difícilmente el proceso democrático será igualitario tan pronto como hay una importante desigualdad de riquezas y de oportunidades. Siguiendo este argumento, las políticas públicas serían usualmente determinadas y modificadas en respuesta al sistema de control empresarial a la par que serían presentadas como reformas democráticas que suponen una respuesta al control poliárquico-electoral. En el extremo del argumento, en las poliarquías orientadas al mercado los líderes de los mercados son los empresarios a la par que los líderes en el ejercicio del control poliárquico-electoral serían también los empresarios a partir de la enorme y desproporcionada influencia que ejercen (Lindblom, 1977: 199).

Ambas fallas (endógenas y exógenas) hacen de la democracia, que en principio se ha constituido como un sistema abierto de política económica, donde, de ganar las elecciones un partido político socialista, debieran poderse echar a andar políticas económicas socialistas, o de ganar las elecciones un partido político anarquista, pudieran

echarse a andar políticas económicas anarquistas; hacen de la democracia un sistema cerrado donde las políticas económicas posibles se encuentran dentro del capitalismo y alrededor del neoliberalismo. El cierre de este sistema se debe a: 1) la ausencia de medios en las plataformas donde sólo se especifican los fines, junto con una pérdida de importancia de las plataformas mismas. 2) Medios de comunicación privados que se manejan bajo la lógica capitalista (supresión del conflicto bajo la idea de la tercera dimensión del poder). 3) Construcción de indicadores establecidos sobre los resultados y no en torno a los medios. 4) Ausencia de opciones programáticas distintas al proyecto ideológico-capitalista. Y 5) existencia de un mecanismo de control proveniente del mercado sobre las decisiones gubernamentales mejor institucionalizado que el poliárquico-electoral.

La siguiente pregunta que debemos hacernos es: ¿se puede perfeccionar el control poliárquico-electoral para que, en materia de política económica, las decisiones gubernamentales sean más representativas? Me parece que sí, se puede perfeccionar la figura del mandato. Como vimos al principio del capítulo existen, al menos, dos modelos de mandato: el modelo de representados ilustrados y el modelo de déspotas ilustrados. El primero tiene una responsabilidad política a partir del desvío del mandato, el segundo no tiene responsabilidad política por el desvío del mandato. Se da por hecho que las situaciones contextuales pueden modificarse o que la información del gobierno entrante pudo no ser la correcta por lo que se decide dar espacio suficiente a los gobiernos en la toma de decisiones para, incluso, ir completamente en contra del mandato otorgado sin que esto tenga como consecuencia ninguna responsabilidad además de la política: el voto por la oposición en las elecciones siguientes de creerlo conveniente el propio electorado. El modelo de mandato de la democracia procedimental representativa es el déspotas ilustrados.

La ausencia de sanción en el cumplimiento o incumplimiento del mandato mostró ser un incentivo a: 1) la realización de campañas fundadas en la crítica al gobierno saliente, apelando a un voto retrospectivo, sin especificar claramente las líneas gubernamentales futuras ampliando la capacidad de acción gubernamental en caso de obtener el triunfo (Menem 1989 y 1995; Alianza 1999 y Kirchner 2003). 2) El ocultamiento o abierta mentira sobre temas que podrían ser impopulares (PJ y Frepaso en 1995 y Alianza en 1999, no así Eduardo Duhalde o Néstor Kirchner). 3) La contradicción entre las expectativas que se

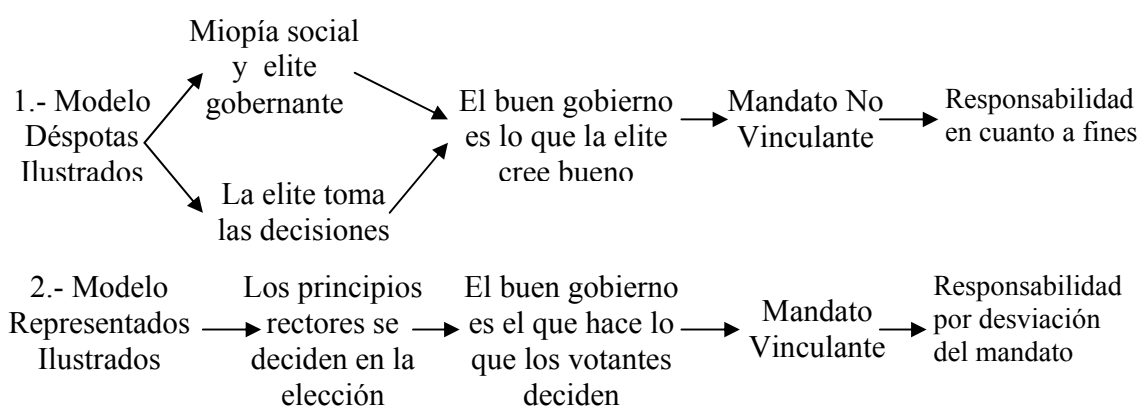
crean y lo que se hace (Menem 1989, 1995 y Alianza 1999). 4) Una cada vez menor importancia en las plataformas políticas y en las promesas de campaña; dichas plataformas contienen elementos muy generales tendientes al objetivo final de la política económica pero sin abundar en los medios (qué políticas van a lograr qué fines) a la par que las propuestas de política-económica suelen no ajustarse a un modelo en específico sino que tienden a ser eclécticos. Y 5) tanto en 1989 como en 1995 y 1999 hubo violaciones al mandato sin que, paralelamente, hubiera ningún tipo de responsabilidad distinta a la política (proveniente del voto). En 1989 hubo una total desvinculación del voto sin cumplir con las expectativas ciudadanas (parar la hiperinflación y echar a andar la economía) en los tres primeros años del gobierno (1989-1991); en 1995 hubo un incumplimiento del mandato y en 1999 hubo mayor cercanía entre los actos de gobierno y la plataforma electoral pero una fuerte lejanía entre dichos actos y las expectativas ciudadanas tanto en la dirección como en los objetivos de la política económica.

Vale hacer otra pregunta: ¿las promesas de campaña y plataformas político-electorales guían las decisiones de los gobiernos? De acuerdo con Dulce Manzano (2002: 11-12) la evidencia empírica no es concluyente ya que por un lado los estudios de Klingemann, Hofferbert y Budge presentan pruebas de que el actuar de los gobiernos puede preverse desde sus campañas; pero por el otro lado Susan Stokes (2002) da constancia de diversas desviaciones del mandato (de hecho para esta autora en la política económica es donde mayores desviaciones se observan). En la DPR con un mandato MDI las campañas electorales suelen basarse en promesas de bienestar y mejoría que dan sentido a la conocida “luna de miel” entre el gobierno entrante y los votantes, hecho que explica los altos índices de aprobación de los gobiernos entrantes y las fuertes expectativas iniciales que genera el nuevo gobierno. Sin embargo, el cumplimiento o incumplimiento posterior del mandato dependerá en todos los casos de los incentivos que tenga el gobierno para desviarse del mismo. En los casos analizados hay tres claros desvíos del mandato: Carlos Menem 1989, Carlos Menem 1995 y Fernando de la Rúa 1999.

La pregunta ahora es: ¿que el mandato no sea vinculante significa que no existe ningún tipo de responsabilidad más que la política para el gobierno? No necesariamente. Asumiendo que la democracia realmente existente es la DPR y que el mandato correspondiente a ese tipo de democracia es el MDI, se puede establecer responsabilidad además de la política

frente a la violación del mandato. En efecto, sin necesidad de que el mandato sea vinculante se pueden hacer las modificaciones institucionales necesarias para que los partidos competidores especifiquen los resultados mínimos a que aspiran llegar con las políticas que piensan aplicar. Si bien la responsabilidad no recaería en la inobservancia de las plataformas electorales o discursos de campaña, sí habría responsabilidad –distinta a la proveniente del voto- por el incumplimiento de las metas señaladas¹⁶. Así, mientras que en el MRI la responsabilidad proviene de la desviación del mandato, en el MDI la responsabilidad provendría del incumplimiento de las expectativas generadas (cuadro 231).

Cuadro 231 .- Modelos de Mandato



Establecer que el mandato no es vinculante junto con la obligación de especificar ciertas metas mínimas que el gobierno debe consumir y que, en caso de incumplimiento, acarrea responsabilidad distinta a la política (proveniente del voto) conllevaría retomar los temas substanciales que en las plataformas y campañas electorales siguen perdiéndose a la par que ayudaría a especificar en qué consiste el mandato y minimizar su inobservancia aumentando, a la vez, la representatividad democrática¹⁷.

¹⁶ Independientemente del diverso establecimiento de sanciones (la revocación del mandato utilizando las elecciones intermedias, sanciones pecuniarias al partido, etc) el punto que ahora me interesa subrayar es que el hecho de que el mandato no sea vinculante no implica la inexistencia de responsabilidad –distinta a la política- de los gobernantes ante el incumplimiento del mandato.

¹⁷ La funcionalidad de una propuesta como la elaborada implica otros dos elementos necesarios para su funcionamiento: 1.- Baja identidad política y más votantes indeterminados, hecho que se observa en Argentina con los fuertes cambios de votación por partido. Y 2) que la decisión final del votante al emitir su voto se tome con base en más información sobre programas políticos donde la figura del candidato sea menos importante, hecho que actualmente no se cumple pero que, con la instauración de la responsabilidad diversa a la política, se busca incrementar.

CONCLUSIONES

En el cuadro 6 expuesto en la introducción de este texto se especifica que la principal relación que se va a observar es la establecida entre el mercado (a través de la inversión / no inversión / salida de capitales, dependencia estatal, dependencia social y competitividad) y la democracia (por medio de la responsabilidad poliárquico-electoral y la información del votante). En ese mismo cuadro se indica que el mercado tiene relaciones con la democracia a través de la influencia que ejerce en torno a la toma de decisiones en materia de política económica (teniendo una mejor estructura institucional para ello que el control poliárquico-electoral) y mediante la formación de las expectativas y niveles de información de los ciudadanos. Veamos que sucedió en los cinco gobiernos analizados.

En **el primer gobierno de Carlos Menem (1989-1995)** el mandato fue parar la hiperinflación. Este mandato se generó posteriormente a las elecciones como producto del cambio de la fuerte crisis económica a un caos hiperinflacionario entre mayo y junio de 1989. No obstante, producto de la campaña electoral, de la desaprobación tanto de los ministros de economía como del propio Raúl Alfonsín a quien se consideraba culpable de la crisis y de la derrota del oficialismo que lleva a un cambio de partido en el gobierno, podemos afirmar que se generan expectativas de cambio con tendencias en política económica de tipo keynesiano-populistas (aunque se debe decir que la plataforma electoral del peronismo era ecléctica y la cultura político-económica tendía al privatismo).

Es importante mencionar que en esta coyuntura histórica el mercado se está enfrentando en dos bloques: los acreedores del Estado y la oligarquía diversificada, ambos bloques tratan de apropiarse del excedente social. Ya Raúl Alfonsín había inclinado la balanza en contra del capital financiero al decretar el default de la deuda y parecía que Carlos Menem haría lo propio al poner en el ministerio de economía a los capitanes de la industria. El punto es que ambos bloques, ejerciendo su poder estructural, realizan una salida masiva de capitales y un proceso de desinversión durante los dos primeros años de gobierno (1989-1990) a la par que solicitan que el gobierno realice los actos necesarios para que sea digno de “confianza”. Este proceso de desinversión tiene como consecuencia una fuerte caída en la recaudación, el ingreso y el gasto estatal así como, a partir de la salida de divisas y el cambio en la cotización del peso, una serie de procesos hiperinflacionarios que

golpean a la sociedad argentina entre 1989 y 1990 a la par que generan grandes capas de pobreza, la caída del nivel de consumo y una fuerte pérdida del poder adquisitivo.

De esta forma, el poder estructural del mercado actúa sobre el Estado con el objetivo de que eche a andar una serie de reformas estructurales que incluyen: 1) la privatización de empresas públicas, 2) la desregulación económica (desaparición de entes reguladores, liberación de precios, quitar las restricciones y regulaciones a la inversión y flexibilización laboral), 3) modificar el papel y tamaño del Estado y 4) realizar una serie de ajustes económicos que garanticen la estabilidad macroeconómica y solvencia suficiente para el pago de la deuda tras una posible renegociación a largo plazo (Plan Brady). Más aún, el poder estructural del mercado también actuó sobre las expectativas y tolerancia de los ciudadanos. En efecto, las principales demandas de los ciudadanos argentinos en la elección de 1989 son de carácter económico: el desempleo, los bajos salarios, la inflación y la deuda, hechos todos que, en un régimen capitalista, dependen, en buena parte, de decisiones privadas. Asimismo, la tolerancia al viraje neoliberal del peronismo -pese a que la principal demanda es parar la hiperinflación y esto no se logra durante los primeros dos años de gobierno- se explica por el propio proceso hiperinflacionario a partir del consenso de fuga hacia adelante.

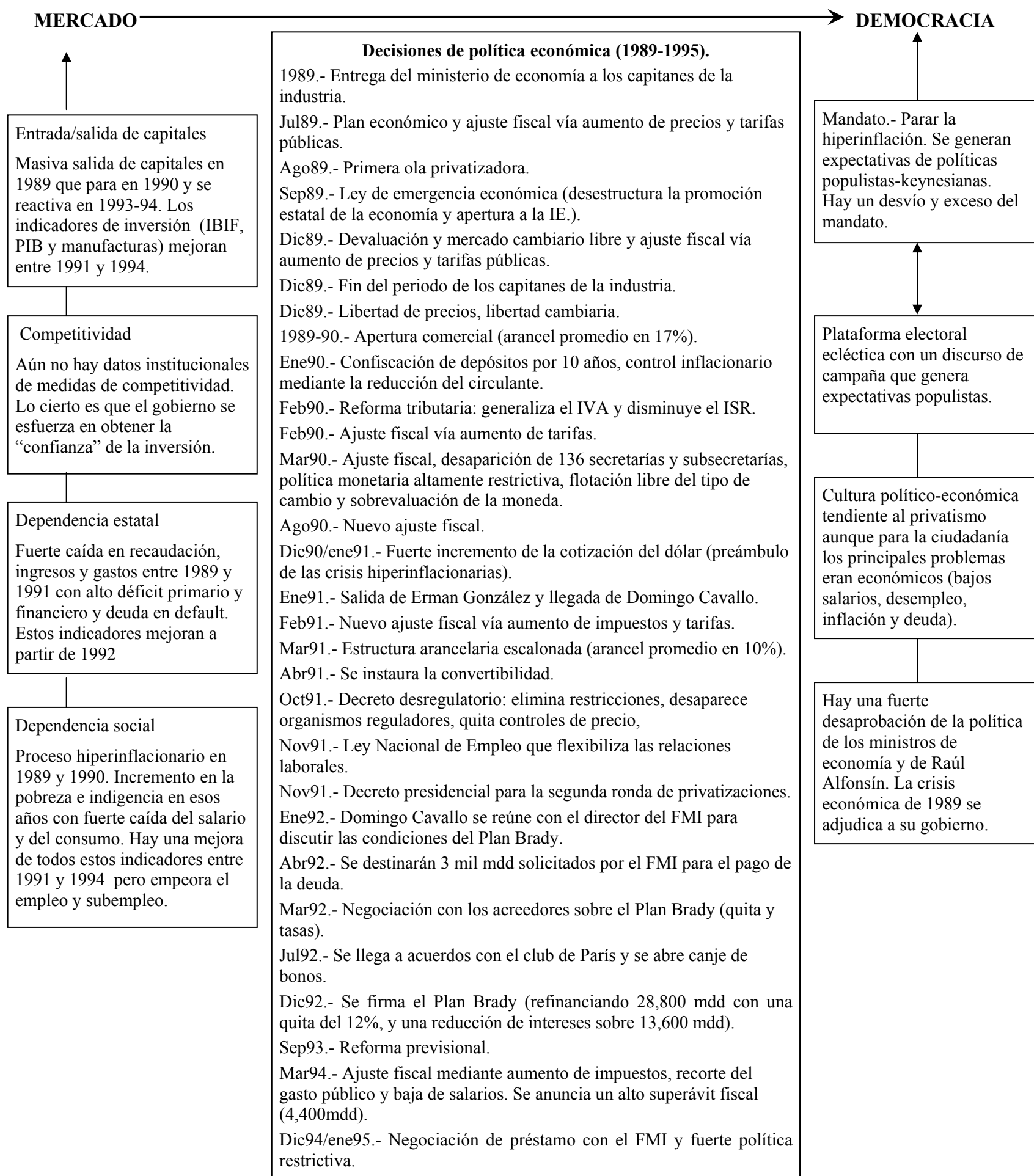
No podemos pasar por alto la existencia de la autonomía estatal. Si bien hay un poder estructural del mercado que busca influir en la toma de decisiones gubernamentales, también es cierto que tanto Carlos Menem como su grupo de asesores más cercanos decide virar hacia el neoliberalismo, renunciar a la aplicación de los recursos político estatales sobre el mercado (regulación y criminalización) y utilizar diversas estrategias discursivas (la luz al final del túnel, la medicina amarga, la única opción) para generar autonomía en torno a sus votantes. Incluso mientras que los votantes de Carlos Menem en 1989 son una coalición de centro-izquierda, 6 años después sus votantes serán una coalición de centro-derecha. Esta misma autonomía estatal permite al gobierno primero tratar de unirse a una parte del bloque económico (los capitanes de la industria) a la par que realiza estrategias de unificación de los intereses del bloque económico a través de los procesos de privatización. Lo cierto es que esta capacidad autónoma se ve reducida con los posteriores procesos hiperinflacionarios que llevan a los cambios en el ministerio de economía tanto a finales de 1989 y de principios de 1990 como a principios de 1991. Estas remociones concluyen con

la llegada de Domingo Cavallo al frente de dicho ministerio y significan un cada vez más claro acercamiento con el capital financiero. Este acercamiento tendrá su punto cumbre cuando, a través de la convertibilidad, se deja en manos de dicho capital al sistema monetario argentino.

Así, entre 1989 y 1991 el menemismo construye lo que será el nuevo régimen económico tripartita: reformas estructurales, ajuste económico y convertibilidad. Este nuevo régimen económico afronta la globalización financiera con un tipo de cambio fijo, libre movilidad de capitales y una política monetaria exógena. De esta forma el poder estructural del mercado logró sus objetivos a la par que el gobierno de Carlos Menem finalmente consiguió parar la hiperinflación y echar a andar la economía en el periodo de oro de la convertibilidad entre 1991 y 1994 con un importante impacto en la disminución de la pobreza, mejoría del poder adquisitivo del salario (sin reparar la pérdida salarial iniciada en los 70) un aumento en el consumo pero también un aumento en los niveles de desempleo y subempleo que marcaron la principal demanda de entonces a la fecha.

Concluyo que en el periodo 1989-1995 hay un desvío y exceso del mandato. Desvío porque si bien se logra parar la hiperinflación (hasta marzo de 1991), se hace con técnicas distintas a las expectativas creadas de corte populista-keynesiano. Exceso ya que si bien en la plataforma electoral había ciertas medidas de corte neoliberal, no eran tan extremas como las aplicadas. Incluso se realizaron una serie de políticas que no fueron anunciadas y no necesariamente están relacionadas con la hiperinflación. El mandato fue violado tanto por fallas endógenas como exógenas a su institucionalidad. Entre las primeras tenemos conflictos de información de los votantes a partir de: a) información incompleta, los votantes no pudieron prever, con la información que tenían, el giro del peronismo; b) información manipulada por los medios, a partir del uso que el gobierno dio a los medios para formar su liderazgo y legitimar el viraje neoliberal y en la cobertura que los medios decidieron dar a este giro; c) información manipulada por el gobierno, con las estrategias que fueron detalladas y que le permitieron una gran autonomía de acción respecto del mandato otorgado en la elección. El viraje del peronismo hacia el neoliberalismo implicó también la práctica anulación de la diversidad programáticas en la elección de 1989. Mientras la UCR (principal competidor) era la opción neoliberal, el peronismo se presentó como la alternativa keynesiana-populista alternativa, su posterior viraje conlleva que la

Cuadro 232.- Relación Mercado – Democracia en el primer gobierno de Carlos Menem



opción de gobierno en 1989 fuera sólo una: el neoliberalismo. En cuanto a las fallas endógenas del mandato tenemos el eficiente poder estructural del mercado que logró, por un lado, una toma de decisiones en materia de política económica tendientes a sus expectativas y, por el otro, la aceptación de la población de esas decisiones gracias al caos hiperinflacionario, hecho que se explicita con las victorias electorales del partido peronista entre 1991 y 1995.

Pasemos ahora al **segundo gobierno de Carlos Menem (1995-1999)**. A diferencia de la primer elección, Menem presentó tanto una plataforma como una campaña electoral de tipo neoliberal. A su izquierda se ubica primero el Frente País Solidario y más crítica aún la Unión Cívica Radical. Con la reelección del oficialismo, una cultura político-económica todavía tendiente al privatismo aunque con una ventaja menos sólida que la observada en 1989, así como una amenaza de crisis económica proveniente de México el mandato que asume Carlos Menem es de continuidad con el objetivo principal de mantener la estabilidad. En efecto, el debate electoral se centró en la convertibilidad y Menem-Cavallo como los dos elementos necesarios para mantener la estabilidad apelando al recuerdo del 89-91. El mandato se materializa en lo que en el ministerio de economía se conoció como “el piloto automático”.

En estos 4 años de gobierno tenemos una constante salida de capital que se hace masiva entre 1995 y 1997. Si bien 1995 es un año recesivo los principales indicadores de inversión y crecimiento se recuperan en 1996 y 1997 para caer de nuevo en 1998 y 1999. Es en este pequeño periodo de recuperación es que se logran los primeros grados de inversión otorgados por las empresas calificadoras a la par que se tiene un riesgo país estable, con excepción de algunos meses en 1995 y 1998 que coinciden con las crisis de México y Rusia. En torno a la dependencia estatal tenemos un nivel de recaudación e ingresos estable, en cambio se observa un mayor nivel de gasto. El principal problema se encuentra en la dependencia social al capital. A diferencia de lo ocurrido entre 1991 y 1994, el crecimiento económico de 1996 y 1997 no tuvo un importante impacto en la disminución de la pobreza generada por la crisis del 95. Si bien el desempleo y el subempleo disminuyen algunos puntos, siguen siendo muy altos a la par que el salario comienza a perder poder adquisitivo. Lejos han quedado ya los años hiperinflacionarios y

su reflejo deja de ser un motivo para mantener bajas las expectativas distributivas de la población. Mientras la crisis hiperinflacionaria de 1989 le dio a Menem el capital político tanto para realizar el cambio de matriz político-económica como para ganar elecciones en 1991, 93 y la reelección de 1995; los efectos del nuevo modelo en concentración de la riqueza, nula distribución, precarización laboral, bajos salarios y desempleo así como la crisis de 1995 colmaron la paciencia de la ciudadanía que comenzó a virar hacia una cultura político-económica estatista a la par que otorga victorias a la Alianza –coalición partidista que se presentó como de centro izquierda- tanto en 1997 como en 1999. Es durante todos estos años que el menemismo empezó a tener problemas para convencer, por un lado, al capital de que el cambio de régimen económico se ha consolidado a la par que deben convencer, por el otro, a los actores sociales de que el nuevo marco económico aún no se consolida por lo que no es el momento de exigir redistribuciones.

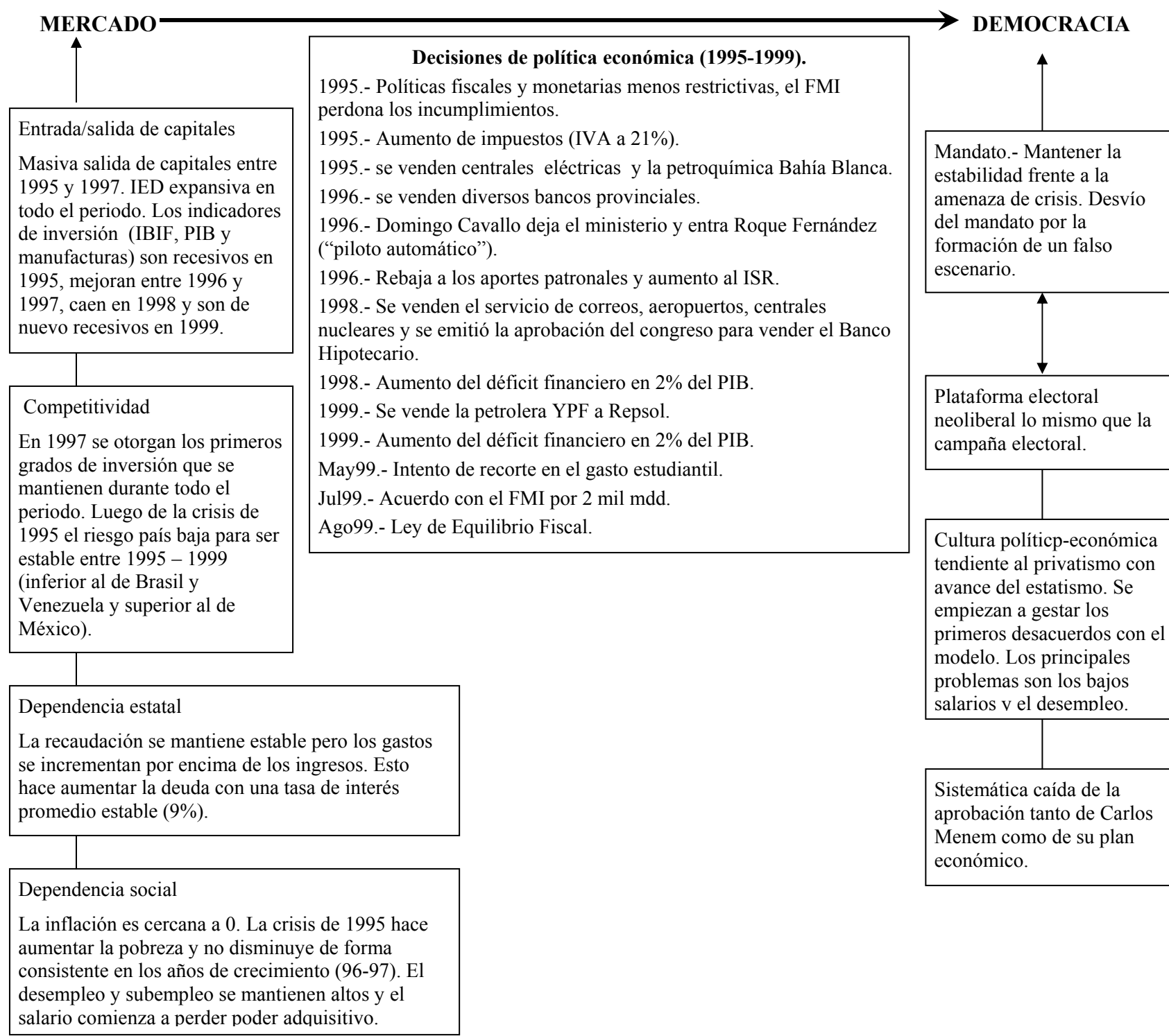
El gobierno decide, primero, no intentar salir de las crisis de 1995 y 1998 por medio del enfrentamiento con el capital y, luego, mantener el modelo tripartita así como su estrategia para insertarse en la globalización financiera. Frente a la crisis económica echa mano de uno de los integrantes del modelo: los ajustes fiscales, que se llevan a cabo por diversos medios: aumento de impuestos, privatizaciones y recortes de gastos. Asimismo tanto en 1995 como entre 1998-1999 incrementó su nivel de endeudamiento con los organismos financieros internacionales (el mensaje es “Argentina tiene dólares suficientes para respaldar su moneda”), hecho que lleva al FMI a ser considerado un garante de la convertibilidad. Lo que el gobierno de Carlos Menem no observó a tiempo fue la doble ruptura que se comenzaba a gestar con su modelo económico. Por un lado la ya comentada desaprobación de la ciudadanía argentina que se hace manifiesta entre 1997 y 1999; por el otro la ruptura entre el bloque económico donde se genera una opción a favor de la dolarización y otra por la devaluación. Esta doble ruptura estalló en la manos de Fernando de la Rúa.

Así, en el segundo gobierno de Carlos Menem se observa un incumplimiento del mandato. Si la oferta era la estabilidad económica entonces el mantenimiento de la convertibilidad, la profundización de la deuda externa y del déficit público violentan el mandato. En este caso no hay un desvío del mandato pero sí un incumplimiento. A diferencia de lo observado en 1989-1995, en este caso los principales motivos de la

violación del mandato son endógenos: problemas de información en el votante y falta de opciones programáticas (las opciones programáticas prácticamente desaparecen en las elecciones de los 90). Es importante mencionar que existía el ejercicio del poder estructural del capital mediante la salida de capitales, la no inversión y sus efectos en la dependencia estatal y social, pero el gobierno de Carlos Menem logró un importante nivel de autonomía que le permitió desatender las peticiones de cambio que se generan entre 1997 y 1999 y que provienen tanto de los ciudadanos como de los dos bloques económicos. Esta autonomía se refuerza tanto con el apoyo del capital financiero como de los organismos financieros internacionales que generan una desconexión de la dependencia estatal al capital vía recaudación.

En el **gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001)** las condiciones de formulación del mandato son distintas. Si bien también estamos en una crisis económica (iniciada en el segundo semestre de 1998), lo cierto es que el impacto y dimensiones de la misma no son ni remotamente parecidas a la crisis electoral y estallido social que se observó en 1989 o en diciembre del 2001. La plataforma política que presenta la Alianza es ortodoxa, planteaba una continuidad en materia de política económica con el menemismo más que una ruptura. Incluso fueron tímidos los intentos de diferenciarse del peronismo en materia económica durante la campaña. En cambio, las expectativas sociales eran muy distintas. En principio se observaba a la Alianza como una opción de centroizquierda, asimismo desde 1997 las expectativas de modificación en torno a la política de privatización y el trato de las empresas privatizadas venían en aumento junto con un incremento de la tendencia estatista sobre la privatista en la cultura político-económica y un aumento en el repudio del modelo económico. Sin embargo, es importante mencionar que la mayoría de los argentinos aprobaba la continuidad de la convertibilidad (que es sólo uno de los pilares del modelo económico tripartita) aunque acordaba en la necesidad de corregir o cambiar el grueso de las políticas económicas. Así, en las elecciones de 1999 tenemos un doble mandato: 1) expectativas generadas en la gente (más que creadas por la Alianza) sobre un cambio en materia de política económica que involucra el mantenimiento de la convertibilidad, no más ajustes económicos y modificaciones a las reformas estructurales; y 2) un cambio moral o en el liderazgo o ejercicio de la política (éste escapa a los contenidos de la tesis pero es importante mencionar que existe y que también se incumplió).

Cuadro 233.- Relación Mercado – Democracia en el segundo gobierno de Carlos Menem



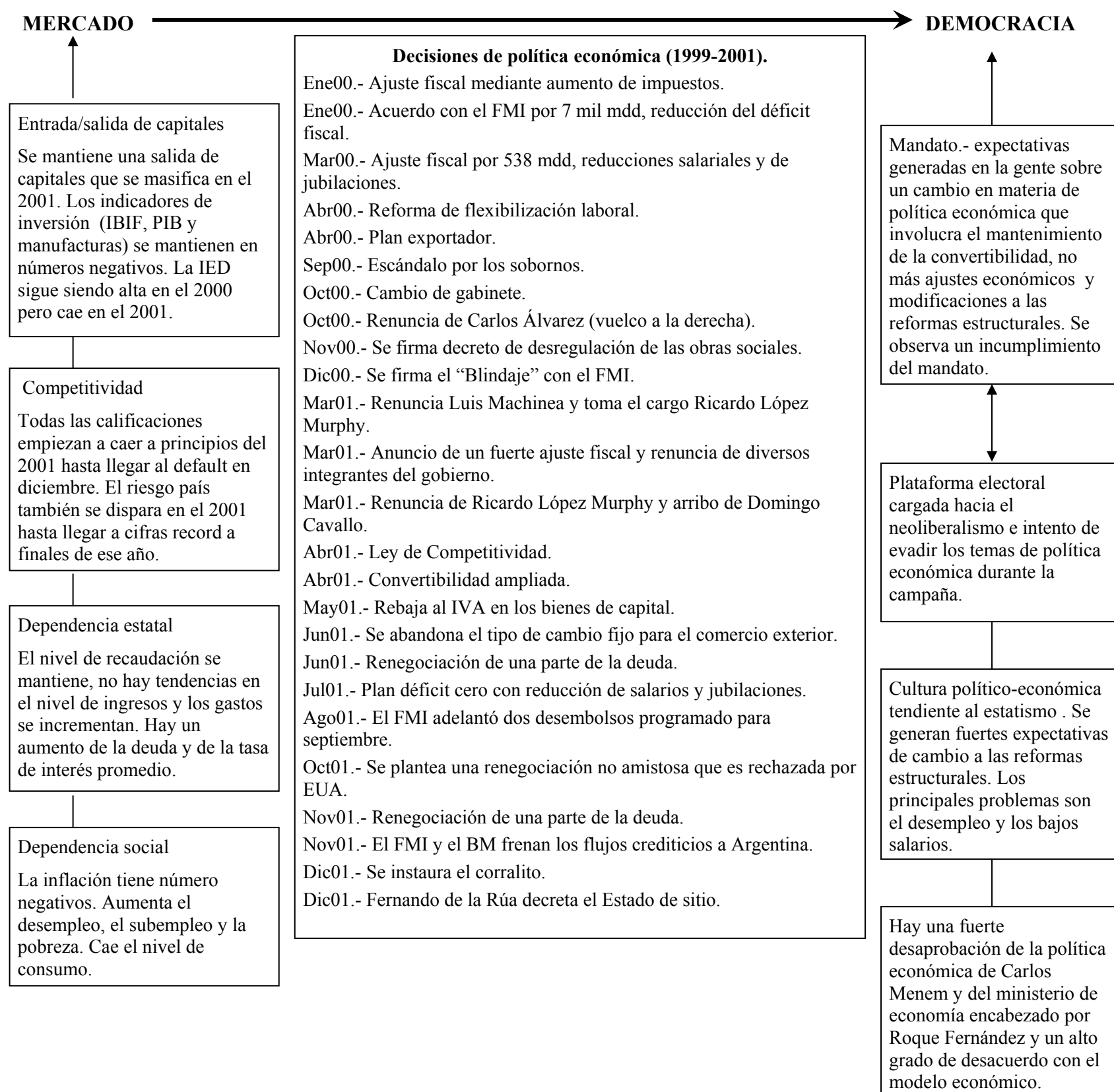
Durante estos tres años (1999-2001) se observa una salida de capitales que se masifica en el 2001 así como un fuerte proceso de desinversión que se hace evidente en la caída de diversos indicadores como el IBIF, el PIB, las manufacturas y una drástica caída de la IED en el 2001. Ambos bloques económicos están haciendo uso de su poder estructural del mercado mediante la no inversión y la salida de capitales para lograr una toma de decisiones hacia uno de los polos planteados entre la dolarización y la devaluación. Este poder estructural tiene importantes consecuencias tanto en la dependencia estatal como social al capital. En la primera si bien se mantiene el nivel de recaudación como porcentaje del PIB, los ingresos mejoran un poco en el 2000 para caer en el 2001 a la par que los gastos se incrementan. Esto conlleva un aumento del déficit fiscal y del nivel de endeudamiento concomitante al incremento de las tasas internacionales de interés. Tan pronto se agrava el nivel de endeudamiento y ninguna de las decisiones tomadas por los tres ministros de economía durante este periodo logran echar a andar el crecimiento, durante el 2001 comenzó a aumentar el riesgo país a la par que bajan las calificaciones de Argentina hasta llegar al default en diciembre del 2001. En lo que hace a la dependencia social si bien la inflación ya no es un problema (ahora incluso tiene números negativos), la gran molestia –como durante todos los 90- siguen siendo las tasas de desempleo y subempleo junto con la pérdida del poder adquisitivo del salario y el aumento de la pobreza. De aquí un interesante cambio en los efectos que la crisis tiene con respecto a los niveles de tolerancia frente a los gobiernos. Mientras que en 1989 la crisis hiperinflacionaria otorgó la autonomía necesaria al peronismo para realizar su viraje neoliberal (dos años para frenar la hiperinflación y tres victorias electorales incluyendo una reelección), en 1999 la crisis no otorgó un nivel semejante de tolerancia en la ciudadanía de forma tal que para octubre del 2000 (luego de la reforma fiscal, el ajuste fiscal de marzo, la nueva ronda de flexibilización laboral y el escándalo de sobornos en el Senado) el gobierno de Fernando de la Rúa había agotado ya todo su capital político. Dos son los puntos a subrayar en esta caso: 1) la crisis hiperinflacionaria de 1989 fue un caos social (crisis de alta intensidad), mientras que la crisis de 1998-2001 fue una crisis de baja intensidad durante un mayor lapso de tiempo; y 2) el peronismo decide virar al neoliberalismo cuando la cultura político económica tendía al privatismo, por el contrario, la Alianza decide mantenerse en el modelo tripartita cuando se ha generado una importante expectativa de

cambio –que se incrementa tan pronto como la oposición gana la elección presidencial- a la par que la cultura político-económica tiende al estatismo.

Otro intento fallido del gobierno proviene de la generación de autonomía con respecto a todos los actores sociales. En lo que hace al bloque económico que exige la dolarización el objetivo de la autonomía es mantener la convertibilidad para lo cual hace una reforma fiscal, una serie de ajustes fiscales, un blindaje financiero, amplía la convertibilidad, echa a andar el plan déficit cero, realiza dos renegociaciones de deuda, obtiene el apoyo de los organismos financieros internacionales y, finalmente, decreta el corralito; todo ello para asegurar al capital financiero que Argentina tiene los dólares suficientes para respaldar su moneda. Busca también autonomía en torno al bloque económico que exige la devaluación igualmente con el objetivo de mantener la convertibilidad. A este segundo bloque le otorga una segunda ronda de flexibilización laboral, un plan exportador, desregulariza la obra social, emite un plan de competitividad y abandona el tipo de cambio para el comercio exterior a fin de mejorar la tasa de ganancia del sector productivo-exportador y aumentar el nivel de inversión. Por último Fernando de la Rúa intenta generar autonomía de los ciudadanos que lo llevaron al poder atendiendo una de las principales demandas –el mantenimiento de la convertibilidad- pero desatendiendo sus principales expectativas –mayor intervención estatal, modificación de las reformas estructurales con re-estatización de algunas privatizaciones y renegociación de otras, no más ajustes económicos y generar una economía que soluciones los dos principales problemas del país: desempleo y bajos salarios. Lo cierto es que no logra una autonomía en ninguno de los tres campos por lo que la no inversión y salida de capitales es una constante junto con la inmediata caída de la aprobación del presidente y de su modelo económico.

En el periodo 1999-2001 observamos un incumplimiento y desvío del mandato. Si bien la Alianza ganó la elección presidencial de 1999 con la promesa de mantenimiento de la convertibilidad, lo cierto es que ésta es sólo una de las tres patas que sostienen al modelo económico. En las otras dos –reformas estructurales y ajuste económico- las expectativas de cambio eran superiores a lo prometido por la Alianza e incluso muy superiores a lo realizado por Fernando de la Rúa. Igual que en las dos elecciones anteriores el incumplimiento y desvío del mandato se debe a fallas endógenas, aquí observamos conflictos de información incompleta que conllevan la desconexión entre lo ofrecido, lo

Cuadro 234.- Relación Mercado – Democracia en el gobierno de Fernando de la Rúa



esperado y lo realizado por la Alianza. En el desarrollo de su gobierno la Alianza cumple con lo que había establecido en su plataforma electoral pero incumple las expectativas que se habían generado en sus votantes. Asimismo observamos fallas exógenas del mandato a partir del poder estructural del mercado que, mediante sus recursos políticos, busca terminar con la convertibilidad ya sea mediante la dolarización o la devaluación a la par que evita que se toquen, en la toma de decisiones en materia de política-económica, los dos elementos del modelo que la ciudadanía está esperando se modifiquen: las reformas estructurales y los ajustes económicos.

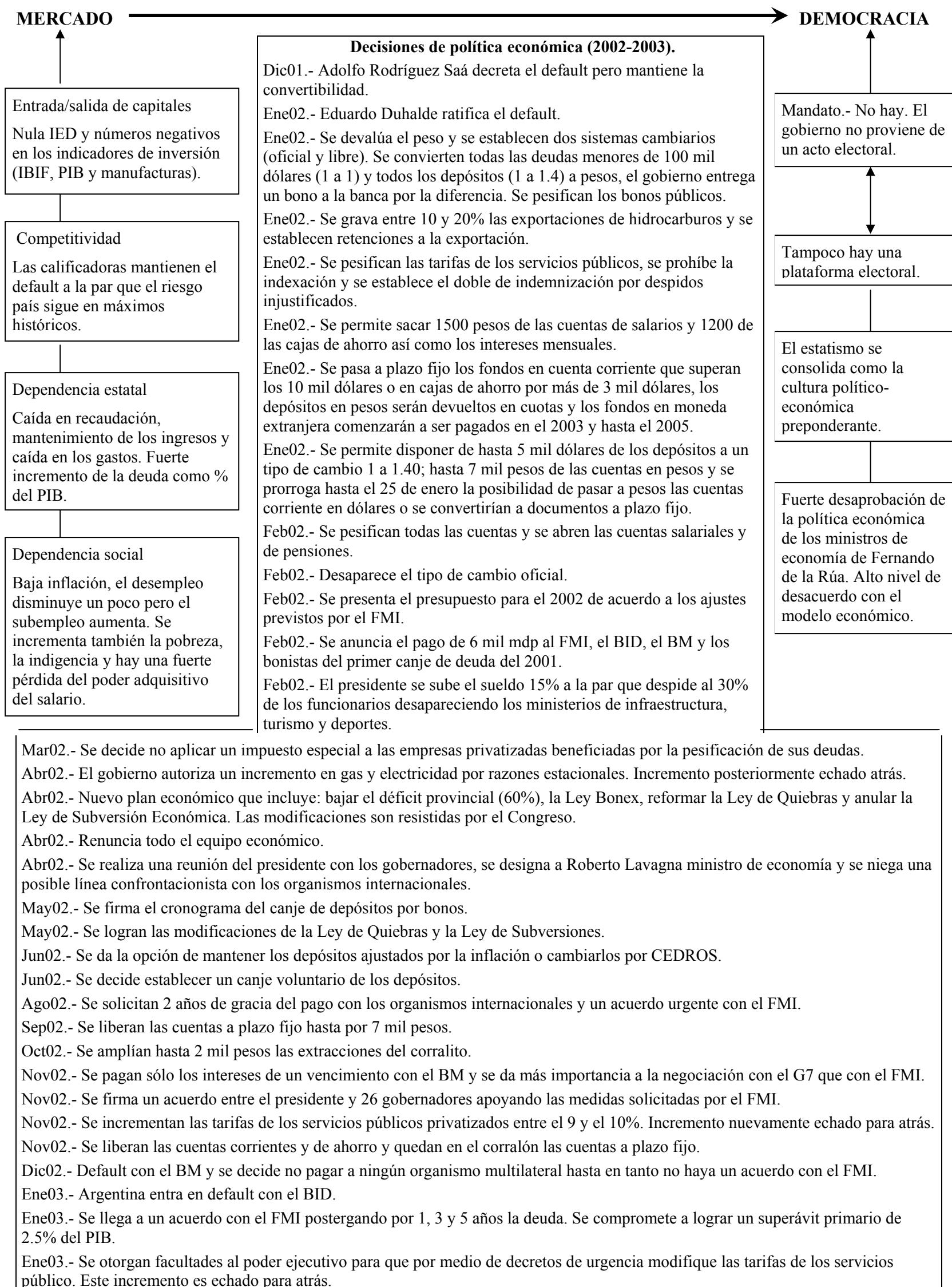
Tenemos ahora al **gobierno de Eduardo Duhalde (2002-2003)**. El primer hecho importante es que su presidencia no proviene de una elección ciudadana sino de una asamblea legislativa que se realiza en medio de un caos social, económico e institucional luego de tener a 4 presidentes en dos semanas –Fernando de la Rúa, Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Camaño. La primer consecuencia es que no hay un mandato democrático puesto que este no es un gobierno elegido en un proceso democrático. Aunque pareciera que este hecho es secundario (sobre todo porque en los casos en que sí hay mandato este puede incumplirse), lo cierto es que el gobierno ahora en funciones lo tiene presente y así lo expresa cuando afirma que dicho gobierno fue designado para resolver los problemas de Argentina independientemente de que la ciudadanía esté o no de acuerdo en la forma en que se solucionan.

Con Eduardo Duhalde en el gobierno es que el mercado deja sentir todo su poder estructural. La salida de capitales de forma masiva se había realizado durante el 2001, en este año y el 2002 hay una decisión de no inversión que se hace evidente en los indicadores del PIB, el IBIF, la IED y las manufacturas. Esta decisión del capital conlleva también duras consecuencias en la dependencia estatal y social al capital. En la primera se observa una caída en la recaudación, un mantenimiento en el nivel de ingresos y una fuerte caída en los gastos –producto de una negociación con el FMI- que limita la capacidad de acción del Estado para reactivar la economía. En la dependencia social hay un fuerte crecimiento de la pobreza y la indigencia, se incrementa el subempleo (aunque el desempleo disminuye un poco) y reaparece un viejo fantasma, una inflación moderada del 25% para el 2002. Frente al poder estructural del mercado su antecesor, Adolfo Rodríguez Saá, ya había decretado el default de la deuda, lo cual comenzó a inclinar la balanza en contra del capital financiero,

sin embargo, Rodríguez Saá mantuvo la convertibilidad. Al asumir Duhalde dejó claro el grupo por el que optó cuando no sólo ratificó el default sino que incluso dio por terminada la convertibilidad, estableció dos tipos de cambio (oficial y libre), decretó una primera devaluación del peso del 40% (que terminará en una devaluación del 300% con la consiguiente pérdida del poder adquisitivo del salario), pesificó todo el sistema financiero local (las deudas 1 a 1 y los depósitos 1 a 1.40 dando un bono a los bancos por la diferencia) y realizó algunas medidas fiscales (el aumento a las exportaciones de hidrocarburos y las retenciones a la exportación) que junto con el discurso de los primeros dos meses llevaron a pensar en un mayor nivel de confrontación con un sector del mercado: el capital financiero y las empresas privatizadas. Es en estos primeros meses (enero-mayo del 2002) cuando el capital pasó del empleo del poder estructural del mercado al ejercicio de recursos políticos directos mediante el cabildeo.

Eduardo Duhalde logró generar cierta autonomía estatal con respecto a uno de los sectores del capital gracias a: 1) una cultura político-económica con tendencia estatista, 2) el hecho de que esos sectores gozaban de poca legitimidad o capital político, 3) había una fuerte desaprobación del modelo económico y 4) lo más importante, gracias al apoyo económico y político de la oligarquía diversificada que pronto, por las medidas económicas tomadas, se alió al gobierno de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner echando a andar la economía en el último trimestre del 2002 con claros niveles de inversión y crecimiento económico en los siguientes años. Uno de los hechos más simbólicos de esta autonomía con respecto al capital financiero es el default en que de forma deliberada incurre Argentina en noviembre-diciembre del 2002 y enero del 2003 con el BM y el BID a fin de lograr un acuerdo de refinanciamiento crediticio con el FMI. Sin embargo, es importante matizar la capacidad autónoma del Estado que logró adquirir Eduardo Duhalde ya que si bien optó por el modelo que buscaba la oligarquía diversificada en contra de las pretensiones del capital financiero internacional y de las empresas privatizadas, también es cierto que aceptó múltiples medidas exigidas por el FMI (incluyendo la derogación de la Ley Subversiones y de las modificaciones a la Ley de Quiebras, las cuales costaron la renuncia del primer equipo económico de Duhalde) a la par que si bien se negó a mantener dolarizadas las tarifas de los servicios públicos privatizados también intentó aumentarlas en diversas ocasiones, incrementos que fueron revertidos por el poder judicial.

Cuadro 235.- Relación Mercado – Democracia en el gobierno de Eduardo Duhalde



Finalmente tenemos al **gobierno de Néstor Kirchner (2003-2006)**. En lo que hace a la formulación del mandato nos enfrentamos a un primer problema: la dispersión del voto y el hecho de que no se haya realizado la segunda vuelta. No obstante, hay algunos elementos que nos permiten identificar la dirección del mandato: se había consolidado ya la cultura político-económica estatista junto con el fuerte desacuerdo tanto con el modelo económico en general como con el funcionamiento de las privatizaciones en particular así como con la política económica desplegada por los tres ministros de economía de Fernando de la Rúa. Asimismo tanto los votantes de Kirchner como de Elisa Carrió se inclinaban más hacia un gobierno socialdemócrata que incluyera una mayor intervención y un proceso de re-nacionalización de la economía.

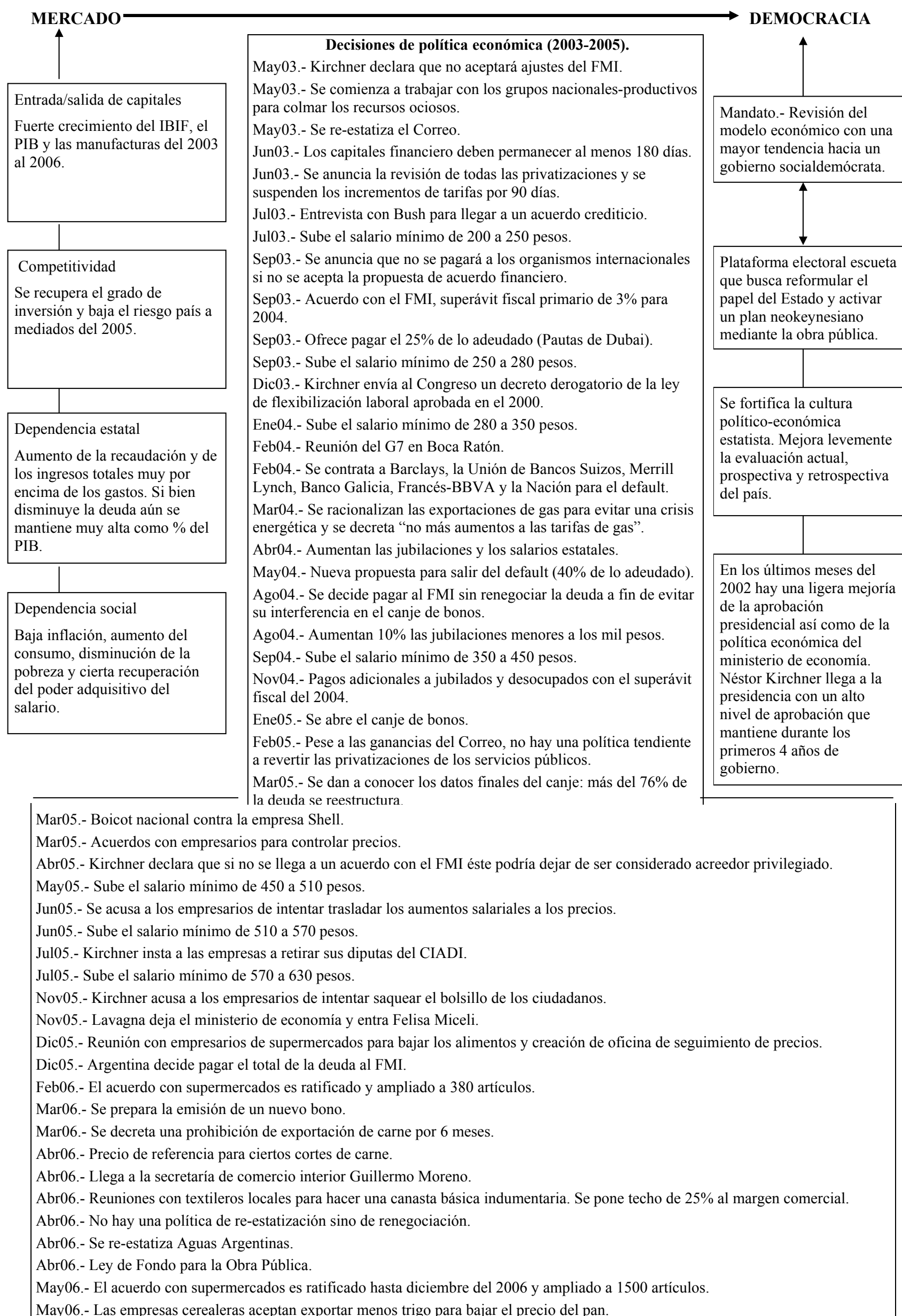
A diferencia del gobierno de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, la alianza del gobierno de Duhalde con la oligarquía diversificada ha aminorado el poder estructural del capital financiero y las empresas privatizadas. Por ende, no se hace patente el ejercicio del poder estructural del mercado en lo que hace a la inversión. Observamos en el 2003 la recuperación de la inversión que se manifiesta en el crecimiento de la IBIF, el PIB y las manufacturas. Esta recuperación repercute en la dependencia estatal y social del capital. En lo que hace a la dependencia social del capital vemos una importante reducción de la pobreza, una baja inflación, un aumento del poder adquisitivo del salario mínimo y una disminución del nivel de desempleo y subempleo. En torno a la dependencia estatal al capital hay una recuperación en la recaudación y en los ingresos totales que permite al gobierno obtener superávits primario e incluso financiero que utilizó para ampliar el mercado interno (en contraposición de la recomendación del FMI que buscaba que ese excedente social se utilizara para mejorar la oferta a los bonistas). En cambio, es precisamente en la deuda donde se mantiene un importante recurso de poder del capital financiero y las empresas privatizadas y donde se presenta la primera fuerte disputa entre el kirchnerismo y ese sector del capital.

Las primeras acciones van dirigidas hacia el capital financiero y las empresas privatizadas: Kirchner declaró que no aceptará mas ajustes del FMI porque Argentina ha probado que puede vivir sin su acuerdo, estableció permanencia mínima a los capitales financieros, anunció la revisión de las privatizaciones, suspendió el aumento de tarifas (que

mantiene hasta el 2006), se entrevistó con Bush para llegar a acuerdos crediticios con el FMI, anunció que no pagaría al FMI si primero no se llega a un acuerdo de reprogramación y lanzó una primer propuesta de pago a sus bonistas de sólo el 25% de cada dólar sin contar los intereses insolutos, todo esto entre mayo y septiembre del 2003. Si Kirchner tiene la capacidad de realizar esta ruptura con el capital financiero y con las empresas privatizadas se debe a que la reactivación de la economía ya está en marcha con el acompañamiento del otro bloque económico. Así, en una segunda propuesta de pago de la deuda en default Kirchner logró reincorporar a Argentina a la comunidad financiera con una importante quita de su deuda. No obstante, luego del acuerdo, la deuda todavía significaba un alto 72% del PIB argentino. Finalmente, algunos meses después Kirchner decidió pagar la totalidad de lo adeudado al FMI para quitarse de encima su supervisión.

Con estas acciones Néstor Kirchner logró mantener un alto nivel de aprobación ciudadana (hecho que no consiguió ni Carlos Menem ni Fernando de la Rúa), que le permitió aumentar su capacidad de autonomía estatal incluso con respecto al sector económico que es su aliado. Si bien desde el 2003 ya se habían dado algunas decisiones que no eran del todo bien vistas por este sector, como el aumento de salario mínimo y la derogación de la flexibilización laboral aprobada en el 2001, luego de la renegociación de la deuda una nueva disputa pondrá a Kirchner frente a la oligarquía diversificada: la inflación. Con el fantasma hiperinflacionario vigente aún en algunas mentes de Argentina, el cambio de inflación cero o en números negativos entre 1995 y 2001 a una inflación de 25% en 2002 y 13% en 2003 se convierte en un enemigo a vencer. El primer enfrentamiento se da en marzo del 2005 con una empresa privatizada, la Shell, cuando Néstor Kirchner llamó a un boicot nacional contra dicha empresa para evitar una suba en el gas y el diesel. Ese mismo mes se llegó a acuerdos con diversos empresarios para controlar precios, hecho que se convierte en una constante durante 2005 y 2006. Sin embargo, el principal punto de enfrentamiento se da en la prohibición de exportación de la carne y la limitación de exportación de los cereales. El hecho más importante es que todos estos casos, incluyendo el no incremento de las tarifas de las empresas privatizadas, conllevan dos elementos: 1) el discurso que lanzó el gobierno es que no importa el gasto de operación sino el nivel de riqueza obtenido durante los 90, si bien puede ser que caiga la tasa de ganancia y que en algunos casos los empresarios pierdan algo, lo cierto es que durante

Cuadro 236.- Relación Mercado – Democracia en el gobierno de Néstor Kirchner



el periodo de la convertibilidad ganaron mucho más dinero del que ahora pudieran perder.

2) El control de la inflación dejó de hacerse bajo una lógica monetaria, es decir, bajo el control de la demanda, y comenzó a hacerse controlando la oferta y, con ello, la tasa de ganancia. Esta es una de las principales diferencias, discursiva y política, con el gobierno de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Ahora son dos las patas que se han roto del modelo tripartita: la convertibilidad y el ajuste fiscal, a la par que algunas de las reformas estructurales se revisan aunque la apertura comercial, la libertad de capitales y la privatización de servicios públicos siguen vigentes.

Hasta ahora, entre lo ofrecido por Néstor Kirchner y las expectativas generadas, todo parece indicar que hay un cumplimiento del mandato que se logró gracias a la capacidad de autonomía que el kirchnerismo consiguió, primero, mediante el apoyo de uno de los bloques económicos en conflicto y, después, incluso con respecto a ese bloque.

Hasta aquí tenemos los siguientes datos respecto al cumplimiento / incumplimiento del mandato y sus causas:

Cuadro 237.- Incumplimiento del mandato y sus causas				
	Cumple el mandato	Causas endógenas		Causas exógenas
		Problemas informativos	Dispersión programática	
Carlos Menem (1)	No	Sí, incompleta y manipulación	No hay y sí afecta el mandato	El poder estructural del capital participa en el incumplimiento del mandato.
Carlos Menem (2)	No	Sí, incompleta y manipulación	No hay, no afecta el mandato	Hay ejercicio del poder estructural del capital pero la autonomía gubernamental lo neutraliza.
Fernando de la Rúa	No	Sí, incompleta y manipulación	No hay, sí afecta el mandato	El poder estructural del capital participa en el incumplimiento del mandato.
Eduardo Duhalde	No hay mandato	--	--	Hay ejercicio del poder estructural del capital pero la autonomía gubernamental logra cierta neutralización.
Néstor Kirchner	Sí.	--	--	Hay ejercicio del poder estructural del capital pero la autonomía gubernamental lo neutraliza.

Tenemos que de cuatro gobiernos electos democráticamente, tres incumplieron el mandato otorgado en materia de política económica y uno lo ha cumplido. En todos los

casos los problemas informativos fueron una causa de incumplimiento endógena a la institucionalización del mandato. Asimismo en dos de esos tres casos la falta de dispersión programática sí fue una causa de incumplimiento del mandato (no en 1995 puesto que el voto tenía un sentido de continuidad, a diferencia de 1989 y 1999). En todos los casos analizados (independientemente del cumplimiento del mandato) tenemos ejercicio del poder estructural del mercado. En dos de los tres casos de incumplimiento del mandato el ejercicio del poder estructural es una causa que participa en la violación del mandato. En los casos donde no se violó el mandato o, habiéndose violado, esto no es imputable al poder estructural del capital, el gobierno logró generar la autonomía gubernamental suficiente para mantenerse ajeno a las peticiones del mercado (o de un sector del mercado) aliándose con otro de los sectores del capital. En el caso de la segunda presidencia de Menem se alió a los organismos financieros internacionales, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner a la oligarquía diversificada. Ahí donde el mandato fue violado y la violación fue causada por el poder estructural del capital, esto se logró debido a la mejor institucionalización de este medio de control de la toma de decisiones gubernamentales con respecto al control poliárquico-electoral. En todos los casos donde hubo violación del mandato no existió ningún tipo de responsabilidad distinta a la política—proveniente del voto.

Si bien en la democracia procedimental representativa se ha establecido un mandato con modelo de déspotas ilustrados, esto no conlleva necesariamente la inexistencia de otro tipo de responsabilidad por la violación del mandato. Esto puede lograrse si, además de la responsabilidad política, se establece otro tipo de responsabilidad proveniente no de la desviación del mandato sino del incumplimiento de los resultados que violan las expectativas de la ciudadanía. Con un mecanismo como estos se mejorarían además las dos fallas endógenas del mandato: la información y las opciones programáticas; a la par que se facilitaría la identificación del mandato.

Hasta aquí tres son los principales aportes de este trabajo: los mecanismos de representación-responsabilidad de la democracia procedimental representativa tienen fallos endógenos y exógenos, estos fallos pueden desarticular la representación y generar la irresponsabilidad institucional de los políticos y, finalmente, la reformulación institucional del mandato puede mejorar los niveles de representatividad.

FUENTES DE INFORMACIÓN

1.- ENTREVISTAS

Entrevistas a encuestadores

- 1.- Dr. Ricardo Rouvier. (26 de marzo 2006) Dir. Ejecutivo de Ricardo Rouvier y Asociados.
- 2.- Dr. Manuel Mora y Araujo. (26 de marzo 2006) Dir. Ejecutivo de Ipsos – Mora y Araujo.
- 3.- Mtra. María Braun. (28 de marzo 2006) Dir. Ejecutivo de Mori y Asociados.
- 4.- Dra. Ana Kukurutz. (29 de marzo 2006) Dir. de Proyectos de Analogías Research.
- 5.- Dr. Gerardo Adrogué. (31 de marzo 2006) Dir. Ejecutivo de Knack, Nun, Adrogué y Carusso.
- 6.- Mtro. Claudio Iglesias. (4 de abril 2006). Dir. de Proyectos de Graciela Romer y Asociados.
- 7.- Dr. Enrique Zuleta. (5 de abril 2006) Dir. Ejecutivo de OPSM-Zuleta Puceiro.
- 8.- Dr. Roberto Bacman. (20 de abril 2006) Dir. Ejecutivo CEOP.

Entrevistas a académicos

- | | | |
|---|------------------------------------|-------------|
| 1.- Marcos Novaro (10 de mayo 2006) | UBA y FLACSO-Argentina | Sociólogo |
| 2.- Ricardo Sidicaro (15 de mayo 2006) | Instituto Gino Germani – UBA. | Político |
| 3.- Daniel Campione (15 de mayo 2006) | Centro Cultural de la Cooperación. | Historiador |
| 4.- Carlos Acuña (24 de mayo 2006) | Universidad de San Andrés. | Economista |
| 5.- Juan Carlos Torre (24 de mayo 2006) | Universidad Torcuato Di Tella. | Sociólogo |
| 6.- Daniel Azpiazu (22 de junio 2006) | FLACSO-Argentina | Economista |
| 7.- Eduardo Basualdo (28 de junio 2006) | FLACSO-Argentina | Economista |

Entrevistas a políticos y asesores

Administración de CARLOS MENEM

- | | | |
|-------------------|---|--------------------|
| Daniel Marx. | Subsecretario de la deuda (3) 1988-1992 | (12 de mayo 2006) |
| Orlando Ferreres. | Secretario de Política Económica (2) Jul-dic 1989 | (21 de junio 2006) |
| Julio Bárbaro. | Secretario de Cultura (1) 1989-1992 | (8 de junio 2006) |
| Darío Braun. | Subsec. de Programación Macroeconómica (3) 1991-1996 | (13 de junio 2006) |
| Marcos Makon. | Subsecretario de Presupuesto (3) 1991-1996 | (13 de junio 2006) |
| Amalia Martínez. | Asesora de la Secretaría de Programación Económica y Subsecretaría de Bancos y Seguros (3) 1991-1996 | (22 de mayo 2006) |
| Jorge Colina. | Asesor del Secretario de Economía Laboral (3) 1991-1996 | (15 de mayo 2006) |
| Jorge Baldrich. | Subsecretario de Programación Económica (3) 1994-1996 | (2 de junio 2006) |
| Eduardo Amadeo. | Secretario de Desarrollo Social (1) 1994-1999 | (9 de mayo 2006) |
| Roque Fernández. | Ministro de Economía (1) 1996-1999 | (10 de mayo 2006) |

Administración de FERNANDO DE LA RÚA.

- | | | |
|-------------------|---|--------------------|
| Daniel Marx. | Secretario de Finanzas (2) 1999-dic 2001 | (12 de mayo 2006) |
| Marcos Makon. | Secretario de Modernización del Estado (2) 1999-nov 2001 | (13 de junio 2006) |
| Roberto Bisang. | Asesor del PAMI (3). 1999-abril 2001 | (4 de mayo 2006) |
| Oscar Cetrángolo. | Subs. de Relación con Provincias (3). 1999-junio 2001 | (11 de mayo 2006) |
| Jorge Colina. | Asesor de Cavallo (2). abril – dic 2001 | (15 de mayo 2006) |
| Jorge Baldrich. | Secretario de Hacienda (2). abril – dic 2001 | (2 de junio 2006) |
| Amalia Martínez. | Dir. del Banco Central (2). Mayo 2001 – Mayo 2002 | (22 de mayo 2006) |
| Mario Sosa. | Negociador de Propiedad Intelectual (4). 1998 – 2004 | (17 de mayo 2006) |

Administración de EDUARDO DUHALDE.

Eduardo Amadeo. Vocero y embajador en EU (1). **Ene2002-mayo2003** (9 de mayo 2006)
Jorge Remes Lenicov. Ministro de Economía (1). **Ene-abril 2002** (4 de mayo 2006)
Eduardo Ratti. Secretario de Coordinación Técnica. (2). **Ene-abril 2002** (9 de mayo 2006)

Administración de NÉSTOR KIRCHNER.

Ricardo Rozemberg. Centro de Estudios para la Producción (3) **2000-06** (20 de junio 2006)
Sebastián Katz. Subsecretario de Programación Política(3)**Feb04–Mar06** (4 de julio 2006)
Alberto Cantero. Diputado justicialista-kirchnerista. **2005-2009.** (16 de mayo 2006)
Martín Abeles. Subsecretario de programación política (3). **2006** (7 de junio 2006)

Otros

Américo García. (11 de mayo 2006) Asoc. Usuarios y Consumidores 1994 a la fecha.
Rubén Giustiniani. (4 de mayo 2006). Diputado y Senador por el PS 1997 a la fecha.
Claudio Loser. (23 de mayo 2006) Jefe del Dep. del Hemisferio Occidental(FMI) hasta 2002.

2.- FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

1. Abal, Juan. (2002). “Elementos teóricos para el análisis contemporáneo de los partidos políticos: un reordenamiento del campo semántico.” en Marcelo Cavarozzi y Juan Manuel Abal Medina. *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal*. Rosario: Homo Sapiens. p. 33-54.
2. Acuña, Carlos. (primera edición en inglés 1994). (1995). “Política y economía en la Argentina de los 90 (o por qué el futuro ya no es lo que solía ser).” en Carlos Acuña. *La nueva matriz política argentina*. Buenos Aires: Ediciones Nueva visión. p. 331-371.
3. Acuña, Carlos. (1995). “Intereses empresarios, dictadura y democracia en la Argentina actual. (o sobre por qué la burguesía abandona estrategias autoritarias y opta por la estabilidad democrática).” en Carlos Acuña. *La nueva matriz política argentina*. Buenos Aires: Ediciones Nueva visión. p. 231-282.
4. Acuña, Carlos y William Smith. (primera edición en inglés 1994). (1996). “La economía política del ajuste estructural: la lógica de apoyo y oposición a las reformas neoliberales.” en revista *Desarrollo Económico*. Vol. 36. No. 141. abril-junio. p. 355-389.
5. Adrogué, Gerardo. (1995). “El nuevo sistema partidario argentino.” en Carlos Acuña. *La nueva matriz política argentina*. Buenos Aires: Ediciones Nueva visión. p. 27-70.
6. Adrogué, Gerardo. (2000). *¿Por qué no crece la economía argentina?* 10 de noviembre. www.knack.com.ar
7. Adrogué, Gerardo. (2002). “Mesa redonda de opinión pública. La opinión pública entre la ética y la economía.” en Horacio Fazio (coord.). *La política en discusión*. Buenos Aires: FLACSO-Argentina / Manantial. p. 225 – 256.
8. Adrogué, Gerardo. (2004). *Deuda: la gente desconoce pero confía*. 3 de noviembre. www.knack.com.ar

9. Adrogué, Gerardo. (2004). *La economía diseña la imagen de Kirchner*. 29 de diciembre. www.knack.com.ar
10. Adrogué, Gerardo. (2005). *Economía: las expectativas pesan*. 15 de diciembre. www.knack.com.ar
11. Adrogué, Gerardo y Melchor Armesto. (2001). “Aún con vida. Los partidos políticos argentinos en la década del noventa.” en revista *Desarrollo Económico*. No. 160. Vol. 40. enero-marzo. Buenos Aires. p. 619-652.
12. Alcántara, Manuel. (1990). “Democracia, alternancia y crisis en Argentina.” en Manuel Alcántara y Carlos Floria. *Democracia, transición y crisis en Argentina*. Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos / Centro de Asesoría y Promoción Electoral. Serie de cuadernos de CAPEL No. 33. p. 11-51.
13. Alianza. (1999). *El gran cambio. Plataforma de la Alianza para las elecciones presidenciales de 1999*. Buenos Aires: Instituto programático de la Alianza. 44 p.
14. Altimir, Ocas y Luis Beccaria (2000). “El mercado de trabajo bajo el nuevo régimen económico en Argentina.” en Daniel Heymann y Bernardo Kosacoff. *Desempeño económico en un contexto de reformas*. Tomo 1. Argentina: Eudeba / CEPAL. p. 331-423.
15. Álvarez, Carlos. (2002). “Gobierno de la Alianza: una oportunidad perdida.” en Horacio Fazio (coord.). *La política en discusión*. Buenos Aires: FLACSO-Argentina / Manantial. p. 35 – 44.
16. Anzil, Federico. (2005). *Riesgo país*. www.econlink.com.ar/definicion/riesgopais.shtml
17. Arnold, Douglas. (primera edición en inglés 1993). (2002). “¿Pueden unos ciudadanos poco atentos a la política controlar a su representantes electos?” en revista *Zona Abierta*. Núm. 100/101. p. 73-98.
18. Avaro, Dante. (2003). *La maldición de Adam Smith. Argentina: ¿una sociedad presa del saber convencional*. Buenos Aires: Zorzal. 173 p.
19. Azpiazu, Daniel. (2003). *Las privatizaciones en la Argentina. Diagnósticos y propuestas para una mayor competitividad y equidad social*. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.
20. Azpiazu, Daniel. Eduardo Basualdo y Miguel Khavisse. (1986). *El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80*. Buenos Aires: Legasa.
21. Bachrach, Peter y Morton Baratz. (1962). “The two faces of power.” en *American Political Science Review*, Vol. 56, tema 4, EUA.
22. Balsa, Juan Javier. (2001). “El Estado democrático y la gobernabilidad. Sus efectos en la sociedad y en la economía.” en Noemí M. Girbal-Blacha. *Estado, sociedad y economía en la Argentina (1930-1997)*. Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. p. 103-247.
23. Balze, Felipe de la. (1993). “Reforma y crecimiento en la Argentina.” en Felipe A. M. de la Balze. (comp.) *Reforma y convergencia. Ensayos sobre la transformación de la economía argentina*. Buenos Aires: EUDEBA. p. 11-136.
24. Basualdo, Eduardo. (sf). *La evolución de la crisis de 1989*. Argentina: Mimeo. 5 p.

25. Basualdo^b, Eduardo. (sf). *La evolución de la economía Argentina en la postconvertibilidad*. Argentina: Mimeo. 2 p.
26. Basualdo^c, Eduardo. (sf). *Acerca de la promoción industrial durante el mandato de Lavagna en el ministerio de economía bajo la presidencia de N- Kirchner*. Argentina: Mimeo. 4 p.
27. Basualdo^d, Eduardo. (sf). *Notas sobre la deuda externa y la fuga de capitales en la Argentina entre mediados de la década de 1970 y el 2001*. Argentina: Mimeo. 14 p.
28. Basualdo^e, Eduardo. (sf). *Notas sobre la relación entre las finanzas públicas y el endeudamiento externo*. Argentina: Mimeo. 6 p.
29. Basualdo, Eduardo. (1999). *Acerca de la naturaleza de la deuda externa y la definición de una estrategia política*. Argentina: Universidad Nacional de Quilmes / FLACSO / Página 12. 96 p.
30. Basualdo, Eduardo. (2000). *Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década de los 90*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes. 263 p.
31. Basualdo, Eduardo. (2001). *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*. Argentina: Universidad Nacional de Quilmes Ediciones / FLACSO / Instituto de Estudios sobre Estado y Participación. 142 p.
32. Basualdo, Eduardo. (2004). *Los primeros gobiernos peronistas y la consolidación del país industrial: éxitos y fracasos*. Argentina: FLACSO / Página 12. 64 p.
33. Basualdo, Eduardo y Claudio Lozano. (s/f). *Coyuntura y perspectivas*. Buenos Aires: Instituto de Estudios sobre Estado y Participación. 10 p. (más anexos).
34. Bensusán, Graciela. (1995). "Los dilemas de la democracia industrial." en *Competitividad internacional versus democracia industrial*. México: UAM / Fundación Friedrich Ebert. 71-98.
35. Bonvecchi, Alejandro. (2002). "Estrategia de supervivencia y tácticas de disuasión." en Marcos Novaro. *El derrumbe político en el ocaso de la convertibilidad*. Argentina: Grupo Editorial Norma. p. 107 – 193.
36. Boyer, Robert. (1989). *La teoría de la regulación: un análisis crítico*. Argentina: editorial humanitas. 179 p.
37. Boyer, Robert. (1999). "Dos desafíos para el siglo XXI: disciplinar las finanzas y organizar la internacionalización." en *Revista de la CEPAL*. No. 69. Diciembre. p. 33 – 51.
38. Braud, Philippe. (primera edición en francés 1991). (1993). *El jardín de las delicias democráticas*. Argentina: Fondo de Cultura Económica. 279 p.
39. Braun, María y Edgardo Catterberg. (1989). "Las elecciones presidenciales argentinas del 14 de mayo de 1989: la ruta a la normalidad." en revista *Desarrollo Económico*. Vol. 29. No. 115. Octubre-diciembre. Buenos Aires. p. 361-374.
40. Calloni, Stella. (2002). *Argentina. De la crisis a la resistencia*. México: La Jornada. 451 p.

41. Calvo, Ernesto y Marcelo Escolar. (2005). *La nueva política de partidos en la Argentina. Crisis política, realineamientos y reforma electoral*. Buenos Aires: Fundación Pent / Prometeo Libros. 389 p.
42. Carballo de Cilley, Marita. (1987). *¿Qué pensamos los argentinos? Los valores de los argentinos de nuestro tiempo*. Buenos Aires: ediciones El Cronista Comercial. 203 p.
43. Castells, Manuel. (primera edición en inglés 1996). (2002). “1. La revolución de la tecnología de la información.” y “2. La economía informacional y el proceso de globalización.” en *La era de la información. Economía, sociedad y cultura*. Vol. 1. La sociedad red. México: Siglo XXI. p. 55-178.
44. Castillo, José y Mabel Thwaites. (1995). “¿Jaque económico a la política?” en revista *Realidad Económica*. 16 de mayo-30 de junio. No. 132. Buenos Aires. p. 13-27.
45. Catterberg, Edgardo. (1989). *Los argentinos frente a la política. Cultura política y opinión pública en la transición argentina a la democracia*. Buenos Aires: Planeta. 159 p.
46. Cavarozzi, Marcelo y Esperanza Casullo. (2002). “Los partidos políticos en América Latina hoy: ¿consolidación o crisis?” en Marcelo Cavarozzi y Juan Manuel Abal Medina. *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal*. Rosario: Homo Sapiens. p. 9-30.
47. Ceceña, Ana Esther y Andrés Barreda. (1995). “La producción estratégica como sustento de la hegemonía mundial. Aproximación metodológica.” en *Producción estratégica y hegemonía mundial*. México: Siglo XXI. p. 15-55.
48. Ceceña, Ana Esther. (1998). “Superioridad tecnológica, competencia y hegemonía.” en Ana Esther Ceceña (coord.). *La tecnología como instrumento de poder*. México: IIE-UNAM / El caballito. p. 17 – 22.
49. CEPAL. (2003) *Panorama social de América Latina*. Chile.- CEPAL. 391 p.
50. Comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados sobre fuga de divisas de la Argentina durante el año 2001. (2005). *Fuga de Divisas en la Argentina*. Buenos Aires: FLACSO / Siglo XXI. 164 p.
51. Cheresky, Isidoro. (1999). *La innovación política. Política y derecho en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Eudeba. 173 p.
52. Cheresky, Isidoro. (2003). “Las elecciones nacionales de 1999 y 2001. Fluctuaciones del voto, debilitamiento de la cohesión partidaria y crisis de representación.” en Isidoro Cheresky y Jean-Michel Blanquer. *De la ilusión reformista al descontento ciudadano. Las elecciones en Argentina, 1999-2001*. Buenos Aires: Homo Sapiens / UBA. p. 19-51.
53. Cheresky, Isidoro. (2004). “Elecciones fuera de lo común. Las presidenciales y legislativas nacionales del año 2003.” en Isidoro Cheresky y Jean-Michel Blanquer (comp.) *¿Qué cambio en la política Argentina? Elecciones, instituciones y ciudadanía en perspectiva comparada*. Argentina: Homo Sapiens / UBA. p. 21-54.
54. Cheresky, Isidoro. (2004a). “De la crisis de representación al liderazgo presidencialista. Alcances y límites de la salida electoral de 2003.” en Isidoro Cheresky e Inés Pousadela

- (comp.). *El voto liberado. Elecciones 2003: perspectiva histórica y estudio de casos*. Buenos Aires: Editorial Biblos. p. 35-65
55. Cheresky, Isidoro e Inés Pousadela. (2004). “La incertidumbre organizada. Elecciones y competencia política en Argentina (1983-2003).” en Isidoro Cheresky e Inés Pousadela (comp.). *El voto liberado. Elecciones 2003: perspectiva histórica y estudio de casos*. Buenos Aires: Editorial Biblos. p. 13-33.
56. Chudnovsky, Daniel y Fernando Porta. (1990). *La competitividad internacional. Principales cuestiones conceptuales y metodológicas*. Uruguay: Centro de investigaciones para la transformación. 77 p.
57. Chudnovsky, Daniel. (1999). *Las multinacionales latinoamericanas: sus estrategias en un mundo globalizado*. Argentina: FCE. 396 p.
58. Dahl, Robert. (primera edición 1961). (1963). *Who Governs?: Democracy and power in an american city*, New Haven: Yale University Press. p. 355.
59. Dahl, Robert. (primera edición en inglés 1963). (1968). *Análisis sociológico de la política* (traducción de *Modern political analysis*), España: editorial Fontanella. p. 144.
60. Dahl, Robert. (primera edición en inglés 1971). (1990). *La poliarquía. Participación y oposición*. España: Tecnos. 228 p.
61. Dos Santos, Theotonio. (2004). *Economía mundial. La integración latinoamericana*. México: Plaza & Janés.
62. Downs, Anthony. (primera edición en inglés 1957). (1973). *Teoría económica de la democracia*. Madrid: Editorial Aguilar. 339 p.
63. Escolar, Marcelo, Ernesto Calvo, Natalia Calcagno y Sandra Minvielle. (2002). “Últimas imágenes antes del naufragio: las elecciones del 2001 en la Argentina”. en revista *Desarrollo Económico*. No. 165. Vol. 42. abril-junio. Buenos Aires. p. 25-44.
64. Esping-Andersen, Gosta. (1996). “Después de la edad de oro: el futuro del Estado benefactor en el nuevo orden mundial.” en *Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales*. No. 142. Vol. 36. Jul-sep. Argentina: Instituto de Desarrollo Económico y Social. p. 523 – 553.
65. Estudio Broda. (2005). *Carta Económica*. Argentina. Julio. Informe no. 250.
66. Farnsworth, Kevin. (2000). “The enhanced structural power of capital: a review and assessment.” en Ian Gough. *Global capital, human needs and social policies. Selected essays, 1994-99*. Gran Bretaña: Palgrave. P. 77-102.
67. Fearon, James (primera edición en inglés 1999). (2002). “Control electoral y control de las políticas: la selección de buenos tipos frente a la sanción del mal gobierno.” en revista *Zona Abierta*. Núm. 100/101. Madrid. p. 137-188.
68. Ferrajoli, Luigi. (primera edición en italiano 1977). “¿Existe una democracia representativa?” en *Democracia autoritaria y capitalismo maduro*. Barcelona: El viejo topo. p. 21-82.

69. Ferrajoli, Luigi. (2001). "Derechos fundamentales." en Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello (editores) *Los fundamentos de los derechos fundamentales*. España: Trotta. Colección: estructuras y procesos. Serie: Derecho. p. 19-56.
70. Ferrajoli, Luigi y Michelangelo Bovero. (2001a). *Teoría de la democracia. Dos perspectivas comparadas*. México: IFE. Colección: temas de la democracia. Serie: Conferencias magistrales. 80 p.
71. Ferreira, Delia y Matteo Goretti. (1996). "Cuando el presidente gobierna solo. Menem y los decretos de necesidad y urgencia hasta la reforma constitucional." en revista *Desarrollo Económico*. No. 141. Vol. 36. abril-junio. p. 443-474.
72. Ferreres, Orlando. (2005). *Dos siglos de economía argentina*. Argentina: Fundación Norte y Sur / El Ateneo. 692 p.
73. Fitch Ratings. (2006). *Fitch calificará nuevo bono del gobierno argentino*. Comunicado de prensa del 21 de marzo. www.fitchratings.com.ar
74. Fraga, Rosendo. (1989). *Claves de la campaña electoral 1989*. Buenos Aires: Editorial Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría. 159 p.
75. Frente País Solidario. (1995). *Plataforma electoral 1995*. Buenos Aires: Secretaría Electoral de la Capital Federal. s/n.
76. Frente Para la Victoria. (2003). *Plataforma electoral 2003*. Buenos Aires: Secretaría Electoral de la Capital Federal. s/n.
77. Fundación Antea y Ricardo Rouvier & Asociados. (2003). *Crisis y estado anímico de la población*. (2001/2002/2003). Buenos Aires: Ediciones Corregidor. 74 p.
78. Fundación Konrad Adenauer. (1999). *Trastienda de una elección. Campaña presidencial Argentina 1999*. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial. 188 p.
79. Gasporini, L. (1999). "La evidencia empírica." en *La distribución del ingreso en la Argentina*. Argentina: Fundación de Investigaciones económicas Latinoamericanas. p. 35-78.
80. Gaventa, John. (1980). *Power and powerlessness: quiescence and rebellion in an Appalachian Valley*. Chicago: University of Illinois press.
81. Gerchunoff, Pablo y Juan Torre. (1996). "La política de liberalización económica en la administración de Menem." en *Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales*. No. 143. Vol. 36. oct-dic. Buenos Aires: Instituto de Desarrollo Económico y Social. p. 733-767.
82. Gerchunoff, Pablo y Lucas Llach. (2003). *El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas*. Buenos Aires: Ariel. 527 p.
83. Giddens, Anthony. (2001). *La tercera vía y sus críticos*. México: Taurus.
84. Girbal-Blacha, Noemí. (2001). "Unidad 1. Planteos, definiciones y problemas." en Noemí M. Girbal-Blacha. *Estado, sociedad y economía en la Argentina (1930-1997)*. Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. p. 11-26.
85. González Casanova, Pablo. (1995). "La democracia en México: actualidad y perspectivas" en Pablo González Casanova y Marcos Roitman. *La democracia en*

- América Latina: actualidad y perspectivas*. México: CIICH-UNAM / La jornada ediciones. p. 587 – 610.
86. Grandona, Mariano. (1995). “Tenemos que aprender a vivir sin Menem.” en *La Maga*. miércoles 17 de mayo. Año 4. No. 174. Buenos Aires. p. 2-4.
87. Griffith-Jones, Stephany. (2000). *International capital flows to latin america*. Serie reformas económicas. No. 55. CEPAL. 30 p.
88. Griffith-Jones, Stephany. Ana Marr y Alicia Rodríguez. (1994). “Private capital returns to Latin America.” en Bird y Helwege. *Latin America’s economic future*. EUA: Academic Pres. p. 81-107.
89. Guéhenno, Jean-Marie. (primera edición en francés 1993). (1995). *El fin de la democracia. La crisis política y las nuevas reglas del juego*. España: Paidós. 138 p.
90. Held, David. (primera edición en inglés 1987). (1992). *Modelos de democracia*. México: Alianza Editorial. 435 p.
91. Heymann, Daniel. (2000). “Políticas de reforma y comportamiento macroeconómico.” en Daniel Heymann y Bernardo Kosacoff. *Desempeño económico en un contexto de reformas*. Tomo 1. Argentina: Eudeba / CEPAL.
92. Instituto de Estudios sobre Estado y Representación. (1994). *Ajuste y consenso en la era menemista. Un nuevo mapa electoral*. Buenos Aires: IDEP. 60 p.
93. Katz, Claudio. (2005). “La inflación del modelo.” en revista *Realidad Económica*. No. 213. 1 de julio – 15 de agosto. Argentina. p. 30-37.
94. Kirchheimer, Otto. (1966). “The transformation of the western Europe party systems.” en LaPalombara Joseph y Myron Weiner. *Political parties and political development*. New Jersey: Princeton university press. p. 177 – 200.
95. Kosacoff, Bernardo. (1999). “El caso argentino.” en Daniel Chudnovsky. *Las multinacionales latinoamericanas: sus estrategias en un mundo globalizado*. Argentina: FCE. p. 65-164.
96. Kulfas, Matías y Martín Schorr. (2003) *La deuda externa argentina. Diagnóstico y lineamientos propositivos para su reestructuración*. Argentina: Fundación OSDE / CIEPP.
97. Levitsky, Steve. (1997). “Crisis, adaptación partidaria y estabilidad del régimen en la Argentina. El caso del peronismo, 1989-1995”. en *Revista de Ciencias Sociales*. No. 6. septiembre. Universidad Nacional de Quilmes.
98. Lechner, Norbert. (1995). “La democracia entre la utopía y el realismo.” en *Revista Internacional de Filosofía Política*. Núm. 6. Madrid. diciembre. p. 104 – 115.
99. Lechner, Norbert. (1996). “Las transformaciones de la política.” en *Revista Mexicana de Sociología*. Vol. 58. No. 1. p. 3 – 16.
100. Lechner, Norbert. (1996). “¿Porqué la política ya no es lo que fue?” en *Leviatán*. Núm. 63. Madrid. p. 63 – 73.
101. Lindblom, Charles. (1977). *Politics and Markets. The world’s political – economic systems*. EUA: Basic Books. 403 p.

102. López, Artemio. (1996). *Y a éste, ¿Quién lo voto? Desocupación abierta, población NBI y clientelismo político en la construcción de consenso electoral*. Buenos Aires: IDEP / ATE. Cuaderno 38. Marzo. 55 p.
103. Lozano, Claudio. (2001). “Comentario”. en Eduardo Basualdo. *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*. Argentina: Universidad Nacional de Quilmes Ediciones / FLACSO / Instituto de Estudios sobre Estado y Participación. p. 123 – 142.
104. Lukes, Steven. (primera edición en inglés 1974). *El poder. Un enfoque radical*. México: siglo XXI. 85 p.
105. Manzano, Dulce. (2002). “Introducción: ¿son las elecciones un mecanismo efectivo de representación?” en revista *Zona abierta*. 100/101. Madrid. p. 1-18.
106. Manin, Bernard. (1995). “La democracia de los modernos. Los principios del gobierno representativo.” en revista *Sociedad*. Abril. No. 6. FCS-UBA. p. 13-38.
107. Maravall, José María. (1999). “Accountability and manipulation.” en Adam Przeworski, Bernard Manin y Susan Stokes. *Democracy, accountability, and representation*. EUA: Cambridge university press. p. 154-196.
108. Martirena, Ana. (1998). “Burbujas especulativas, noise traders e hiperinflación.” en Miguel Teubal. *Teoría, estructura y procesos económicos*. Argentina: Eudeba. p. 141 – 161.
109. Mills, Wright. (primera edición en inglés 1956). (1978). *La elite del poder*. México: Fondo de Cultura Económica. p. 378.
110. Mora y Araujo, Manuel. (1991). *Ensayo y error. La nueva clase política que exige el ciudadano argentino*. Argentina: Planeta. 190 p.
111. Mora y Araujo, Manuel. (1993). “Las demandas sociales y la legitimidad de la política de ajuste.” en Felipe A. M. de la Balze. (comp.) *Reforma y convergencia. Ensayos sobre la transformación de la economía argentina*. Buenos Aires: EUDEBA. p. 301-334.
112. Mora y Araujo, Manuel y Paula Montoya. (1999). “La agenda pública argentina.” en revista *Contribuciones*. Año XVI. No. 2. Argentina. p. 69 – 83.
113. Mora y Araujo, Manuel. (2002). *La estructura social de la Argentina: evidencias y conjeturas acerca de la estratificación actual*. Chile: Cepal. Serie Políticas Sociales. No. 59 43 p.
114. Mora y Araujo, Manuel. (2003). *La Argentina: una victima de si misma: débil gobernabilidad y bajo consenso social*. Argentina: La crujía / Instituto Torcuato Di Tella / PNUD. 59 p.
115. Mouffe, Chantal. (primera edición en inglés 1993). (1999). “La política y los límites del liberalismo.” en *El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical*. España: Paidós. p. 183–208.
116. Mustapic, Ana María. (2002). “Del partido peronista al partido justicialista. Las transformaciones de un partido carismático.” en Marcelo Cavarozzi y Juan Manuel Abal Medina. *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal*. Rosario: Homo Sapiens. p. 137-162.

117. Navarro, Mario. (1995). “Democracia y reformas estructurales: explicaciones de la tolerancia popular al ajuste económico.” en revista *Desarrollo Económico*. Vol. 35. No. 139. Octubre-diciembre. Buenos Aires. p. 433-466.
118. Nielsen, Guillermo. (2006). “La verdad de la crisis financiera de Argentina.” en revista *Euromoney*. Marzo. Londres. p. 1-10.
119. Novaro, Marcos. (1999). “Crisis y renovación de los partidos. Una perspectiva comparada sobre los años del menemismo.” en *Entre el abismo y la ilusión. Peronismo, democracia y mercado*. Argentina: Grupo Editorial Norma. P. 63 – 158.
120. Novaro, Marcos. (2002). “Lo evitable y lo inevitable de la crisis.” en *El derrumbe político en el ocaso de la convertibilidad*. Argentina: Grupo Editorial Norma. P. 9 – 30.
121. Novaro, Marcos. (2002a). “La Alianza, de la gloria del llano a la debacle del gobierno.” en *El derrumbe político en el ocaso de la convertibilidad*. Argentina: Grupo Editorial Norma. P. 31 – 105.
122. Nun, José. (1994). “Populismo, representación y menemismo.” en revista *Sociedad*. Octubre. No. 5. FCS-UBA. p. 93-121.
123. O’Donnell, Guillermo. (primera edición en inglés 1979). (1985). “Las tensiones en el Estado burocrático autoritario y la cuestión de la democracia.” en David Collier. *El nuevo autoritarismo en América Latina*. México: Fondo de Cultura Económica. p. 289 – 321.
124. O’Donnell, Guillermo. (2001). “El impacto de la globalización económica en las estrategias de reforma institucional y normativa.” en Fernando Carrillo Flórez (editor). *Democracia en déficit. Gobernabilidad y desarrollo en América Latina y el Caribe*. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo.
125. O’Donnell, Guillermo. (2003). “Democracia, desarrollo humano y derechos humanos.” en Guillermo O’Donnell, Osvaldo Lazzetta y Jorge Vargas Cullell (comp.). *Democracia, desarrollo humano y ciudadanía*. Argentina: Homosapiens ediciones / Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. p. 25 – 149.
126. Ornelas, Raúl. (1995). “Las empresas transnacionales como agentes de la dominación mundial capitalista.” en Ana Esther Ceceña y Andrés Barreda. *Producción estratégica y hegemonía mundial*. México: Siglo XXI.
127. Ornelas, Raúl. (2002). “Las empresas transnacionales y el liderazgo económico mundial. Balance y perspectivas.” en Ana Esther Ceceña y Emir Sader. *La guerra infinita. Hegemonía y terror mundial*. México: CLACSO / ASDI. p. 97-112.
128. Ornelas, Raúl. (2002a). “Globalización y hegemonía: elementos para una crítica del pensamiento dominante.” en José Luis Calva. *Política económica para el desarrollo sostenido con equidad*. Tomo 1. México: UNAM. p. 21-41.
129. Ornelas, Raúl. (2004). “Las empresas transnacionales y las tecnologías de la información y la comunicación. La competencia en telecomunicaciones e Internet.” en Delia Covi (coord.). *Sociedad de la información y el conocimiento. Entre lo falaz y lo posible*. Buenos Aires: UNAM / La crujía. p. 223-252.

130. Palermo, Vicente. (1999). “¿Mejorar para empeorar? La dinámica política de las reformas estructurales argentinas.” en *Entre el abismo y la ilusión. Peronismo, democracia y mercado*. Argentina: Grupo Editorial Norma. P. 159 – 270.
131. Paramio, Ludolfo. (2004). “Inseguridad económica y frustración política.” en revista *El Debate Político*. Año 1. No. 1. p. 36 – 46.
132. Partido Justicialista. (1989). *Plataforma electoral 1989*. Buenos Aires: Oficinas federales del Partido Justicialista.
133. Partido Justicialista. (1995). *Plataforma electoral del partido justicialista para las elecciones del 14 de mayo de 1995. Aprobada por unanimidad por el Consejo Nacional en sesión ordinaria del 6 de abril de 1995*. Buenos Aires: Oficinas federales del Partido Justicialista.
134. Partido Justicialista. (1999). *Para una Argentina mejor. Plataforma electoral 1999*. Buenos Aires: Oficinas federales del Partido Justicialista.
135. Partido Justicialista. (2003). *Plataforma electoral Menem-Romero 2003*. Buenos Aires: Oficinas federales del Partido Justicialista.
136. Pousadela, Inés. (2003). “La oposición progresista frente al consenso neoliberal. Ensayo acerca de la relación entre política y economía en la argentina de los años 90.” en Isidoro Cheresky y Jean-Michel Blanquer. *De la ilusión reformista al descontento ciudadano. Las elecciones en Argentina, 1999-2001*. Buenos Aires: Homo Sapiens / UBA. p. 117-155.
137. Pries, Frank. (2001). “Elecciones en Argentina. Triunfo de la oposición, elevado número de abstenciones y de votos anulados o gobierno si base propia, incertidumbre sobre el futuro.” en revista *Contribuciones*. No. 4. Año XVIII. Buenos Aires. p. 219-240.
138. Przeworski, Adam. (primera versión en inglés 1980 en revista *New Life Review*, no 122). (1988). “La socialdemocracia como fenómeno histórico.” en Adam Przeworski. *Capitalismo y socialdemocracia*. Madrid: Alianza Editorial. p. 17 – 60.
139. Przeworski, Adam. (1986). “Algunos problemas en el estudio de la transición hacia la democracia.” en Guillermo O’Donnell, Philippe Schmitter y Laurence Whitehead (compiladores). *Transiciones desde un gobierno autoritario. Vol. 3 Perspectivas comparadas*. Argentina: Paidós.
140. Przeworski, Adam y Michael Wallerstein. (1989). “El capitalismo democrático en la encrucijada”. en Maria Herminia Tavares. *¿Hacia un nuevo Estado del malestar?* Cuaderno de Ciencias Sociales No. 27. Nov. Costa Rica: FLACSO. p. 29-48.
141. Przeworski, Adam. (1990). *The State and the economy under capitalism*. Gran Bretaña: Harwood Academic Publishers. 126 p.
142. Przeworski, Adam. (1991). *Democracia y mercado. Reformas políticas y económicas en la Europa del Este y América Latina*. Gran Bretaña: Cambridge University Press. 356 p.

143. Przeworski, Adam, Susan Stokes y Jorge Buendía. (1997). “Opinión pública y reformas de mercado. Las limitaciones de la interpretación económica del voto.” en revista *Desarrollo Económico*. No. 145. Vol. 37. abril-junio. p. 31-56.
144. Przeworski, Adam. Bernard Manin y Susan Stokes. (primera edición en inglés 1999) (2002). “Elecciones y representación.” en revista *Zona abierta*. Núm. 100/101. Madrid. p. 19-49
145. Przeworski, Adam. Bernard Manin y Susan Stokes. (1999a). “Introduction.” en Adam Przeworski, Bernard Manin y Susan Stokes. *Democracy, accountability, and representation*. EUA: Cambridge university press. p. 1-26.
146. Quevedo, Alberto. (1999). “Política, medios y cultura en la Argentina de fin de siglo.” En Daniel Filmus (comp.) *Los noventa. Política, sociedad y cultura en América Latina y Argentina de fin de siglo*. Buenos Aires: FLACSO-Argentina / EUDEBA. p. 201-224.
147. Realidad Económica. (2005). En resumidas cuentas. 45 días de noticias.” en revista *Realidad Económica*. No. 215. 1 de octubre – 15 de noviembre. p. 132-155.
148. Reich, Robert. (primera edición en inglés 1991). (1993). *El trabajo de las naciones*. Argentina: Javier Vergara Editor. 314 p.
149. Remes Lenicov, Jorge. Jorge Todesca y Eduardo A. Ratti. (2003). “La política económica de principios de 2002: cambios profundos para superar la crisis provocada por el colapso de la convertibilidad y sentar las bases para el funcionamiento de una economía normal, integrada al mundo.” Mimeo. Argentina. 50 p.
150. Roberts, Kenneth. (2002). “El sistema de partidos y la transformación de la representación política en la era neoliberal latinoamericana.” en Marcelo Cavarozzi y Juan Manuel Abal Medina. *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal*. Rosario: Homo Sapiens. p. 55-76.
151. Rouvier, Ricardo. (2004). *La deuda de la política*. Buenos Aires: Corregidor. 207 p.
152. Sartori, Giovanni. (primera edición en inglés 1987). (1988). *Teoría de la democracia. I. El debate contemporáneo*. Madrid: Alianza Editorial. p. 116-166.
153. Sartori, Giovanni, (primera edición en inglés 1994). (1994). *Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados*. México: Fondo de Cultura Económica. 227 p.
154. Sartori, Giovanni. (primera edición en italiano 1997). (1998). *Homo videns. La sociedad teledirigida*. México: Taurus. 159 p.
155. Schumpeter, Joseph. (primera edición en inglés 1950). (1983). *Capitalismo socialismo y democracia*. Tomo 1. Barcelona: Ediciones Orbis. 512 p.
156. Schvarzer, Jorge. (1998). *Implantación de un modelo económico. La experiencia argentina entre 1975 y el 2000*. Argentina: A-Z editora. 276 p.
157. Sevares, Julio. (2005). “El imperio de las finanzas. Bienvenidos al casino global.” en revista *Realidad Económica*. No. 215. 1 de octubre – 15 de noviembre. Argentina. p. 110-131.

158. Sidicaro, Ricardo. (2002). *Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55, 1973-76 y 1989-99*. Argentina: Siglo XXI. 262 p.
159. Skidmore, Thomas y Peter Smith. “Argentina: prosperidad, estancamiento y cambio”. en *Historia contemporánea de América Latina. América Latina en el siglo XX*. México: Crítica. p. 81 – 126.
160. Solomon, Robert. (2000). *Dinero en Marcha. La revolución de las finanzas internacionales a partir de 1980*. Buenos Aires: Granica.
161. Standard & Poor’s. (2006). *Standard & Poor’s subió la calificación global de Argentina a 'B'*. 23 de marzo. www.standardandpoors.com.ar
162. Stokes, Susan. (primera edición en inglés 1999). (2002). “Partidos políticos y democracia.” en revista *Zona Abierta*. Núm. 100/101. Madrid. p. 99-136.
163. Roberts, Kenneth. (2002). “El sistema de partidos y la transformación de la representación política en la era neoliberal latinoamericana.” en Marcelo Cavarozzi y Juan Manuel Abal Medina. *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal*. Rosario: Homo Sapiens. p. 55-76.
164. Tilly, Charles. (primera edición en inglés 1990). (1992). *Coerción, capital y los Estados europeos, 990 – 1990*. Madrid: Alianza Editorial. 378 p.
165. Thorp, Rosemary. (1998). *Progreso, Pobreza y exclusión. Una historia económica de América Latina en el siglo XX*. Unión Europea: BID.
166. Torre, Juan Carlos. (1999). “El peronismo como solución y como problema.” en Marcos Novaro. *Entre el abismo y la ilusión*. Argentina: Grupo Editorial Norma. p. 41 – 50.
167. Touraine, Alain. (Primera edición en francés 1994). (agosto de 1999). *¿Qué es la democracia?*. Argentina: Fondo de Cultura Económica. 309 p.
168. Unión Cívica Radical. (primera edición 1989). (1990). “Plataforma electoral de la UCR, 1989.” En Osvaldo Álvarez. *Las razones de la libertad. Las plataformas de la UCR (1937-1989)*. Buenos Aires: Lugar Editorial. p. 249-309.
169. Unión Cívica Radical. (1995). *Plataforma electoral para las elecciones presidenciales 1995*. Buenos Aires: Documento reproducido por el departamento histórico de la UCR.
170. Vilas, Carlos. (2001). “Como con bronca y junando. Las elecciones del 14 de octubre 2001.” en revista *Realidad Económica*. No. 83. 1 de octubre – 15 de noviembre. Buenos Aires. p. 6-15.
171. Wannöffel, Manfred. (1995). “¿Democracia industrial vs competitividad internacional?” en *Competitividad internacional vs democracia industrial*. México: UAM / Fundación Friedrich Ebert. p. 9-22.
172. Weber, Max. (1991). *El político y el científico*. México: Premia Editora. 89 p.

3.- PAGINAS DE INTERNET.

www.bolsar.com

Ministerio de Economía.

www.mecon.gov.ar/cuentas/internacionales

www.mecon.gov.ar/cuentas/internacionales/series_anuales.htm

www.mecon.gov.ar/cuentas/internacionales/documentos/inversion_extranjera_directa_arg1992-200.pdf

www.mecon.gov.ar/download/financiamiento/91-00.xls

www.mecon.gov.ar/download/financiamiento/newinf.xls

www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/index.htm

www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/infoeco.html

www.mecon.gov.ar/sip/dniaf/recaudacion_nominal.xls

Ministerio de Industria

www.industria.gov.ar/cep/sintesis/ser%20da%20epoca/sintesis50_diciembre05/p50_anexos.pdf

Ministerio de Trabajo

www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/bel/bel.asp?idCapitulo=8

Indec

www.indec.gov.ar

4.- FUENTES HEMEROGRÁFICAS.

1. Afp, Ap y Reuters. (6/jul/99). “Seguirán las reformas neoliberales: presidenciables”. en *La Jornada*. México.
2. Afp, Ap, Reuters y Dpa. (25/sep/99). “Podría ser desastrosa le elección peronista argentina”. en *La Jornada*. México.
3. Afp, Ap, y Dpa. (6/oct/99). “Eduardo Duhalde alerta contra una posible eclosión social”. en *La Jornada*. México. p. 70.
4. Afp, Ap, y Reuters. (26/abr/01). “Destituye Fernando de la Rúa al presidente del Banco Central.” en *La Jornada*. México.
5. Afp, Ap, y Reuters. (6/ago/01). “Nuevo crédito del FMI a Argentina.” en *La Jornada*. México.
6. Afp, Ap, y Reuters. (23/ago/01). “Reconoce De la Rúa que Argentina estuvo a un paso de declarar la moratoria de pagos.” en *La Jornada*. México.
7. Afp y Reuters. (30/nov/01). “Cautela de De la Rúa ante golpe político del peronismo.” en *La Jornada*. México.
8. Afp, Reuters y Dpa. (15/dic/01). “Cubre Argentina con recursos de jubilación y pensiones servicios de deuda.” en *La Jornada*. México. p. 38.
9. Afp, Ap, y Dpa. (22/dic/01). “Designa Argentina ejecutivo.” en *Reforma*. México.

10. Afp, Dpa y Reuters. (6/ene/02). “Presionan bancos y empresas privatizadas a Duhalde para evitar la pesificación de sus tarifas.” en *La Jornada*. México. p. 21.
11. Afp, Ap y Dpa. (11/ene/02). “Protestan argentinos contra restricciones.” en *Reforma*. México.
12. Afp, y Reuters. (22/ene/02). “Nuevas medidas para la conversión de 46 mil mdd a pesos en Argentina.” en *La Jornada*. México. p. 26.
13. Afp, Dpa y Reuters. (5/feb/02). “Suspende el gobierno argentino las acciones judiciales contra el corralito.” en *La Jornada*. México. p. 20.
14. Afp. (6/feb/02). “Anuncia Duhalde recortes políticos.” en *Reforma*. México.
15. Afp, Dpa y Reuters. (7/mar/02). “Recibió Duhalde a enviado del FMI.” en *La Jornada*. México.
16. Afp y Dpa. (30/abr/02). “Argentina no tiene mejor amigo que Washington, asegura la casa blanca.” en *La Jornada*. México. p. 34.
17. Afp, Dpa y Reuters. (16/jun/02). “Banqueros inconformes por las medidas de flexibilizar el corralito.” en *La Jornada*. México.
18. Afp, Dpa y Reuters. (30/jun/02). “Más de 65 mil mdd perdieron los ahorristas argentinos por la pesificación y la devaluación.” en *La Jornada*. México. p. 23.
19. Afp. (11/ago/02). “Argentina pide prórroga a acreedores.” en *La Jornada*. México. p. 18.
20. Afp. (20/ago/02). “Aumentan depósitos bancarios en Argentina.” en *La Jornada*. México. p. 20.
21. Afp y Dpa. (15/nov/02). “El BM aplicará a Argentina las sanciones previstas para naciones en mora de 30 días.” en *La Jornada*. México. p. 30.
22. Afp, Dpa y Reuters. (16/ene/03). “Argentina en incumplimiento con el BID por 845 millones de dólares.” en *La Jornada*. México.
23. Afp, Reuters y Notimex. (17/ene/03). “Argentina alcanza acuerdo con el FMI.” en *El Financiero*. México.
24. Afp y Dpa. (5/may/03). “Admite Menem que podría perder; las encuestas favorecen a Kirchner.” en *La Jornada*. México. p. 26.
25. Afp y Reuters. (9/sep/03). “Condiciona Argentina el pago de un vencimiento por 2900 mdd.” en *El Financiero*. México. p. 6.
26. Afp, Dpa y Reuters. (12/sep/03). “Pagó Argentina casi 3 mil millones de dólares al FMI tras lograr un acuerdo.” en *La Jornada*. México. p. 35.
27. Afp y Reuters. (23/sep/03). “Ofrece el gobierno argentino pagar únicamente 25 por ciento de su deuda.” en *La Jornada*. México.
28. Afp y Reuters. (29/oct/03). “Rechaza EU el plan argentino para reestructurar la deuda de 88 mil mdd.” en *La Jornada*. México.

29. Afp. (18/ene/04). "Se reaviva tensión entre Argentina y el FMI." en *La Jornada*. México.
30. Afp y Reuters. (10/mar/04). "Argentina evita la moratoria." en *El Financiero*. México.
31. Afp y Reuters. (22/mar/04). "Reafirma Argentina oferta de reducir 75 por ciento su deuda en moratoria." en *La Jornada*. México.
32. Afp. (31/may/04). "FMI y G7 apoyarían oferta argentina para reducir la enorme deuda en mora." en *La Jornada*. México. p. 23.
33. Afp y Ap (14/jun/04). "Iniciará FMI revisión del acuerdo con Argentina." en *El Financiero*. México.
34. Afp y Reuters. (10/ago/04). "Argentina pagará al FMI a fin de año con reservas del Banco Central." en *La Jornada*. México.
35. Afp y Reuters. (24/nov/04). "Argentina reparte excedente fiscal entre jubilados, desempleados y trabajadores." en *La Jornada*. México. p. 29.
36. Afp. (13/feb/05). "Descarta Argentina reestatizar los servicios públicos." en *La Jornada*. México.
37. Afp, Dpa y Reuters. (15/mar/05). "Caen 70% las ventas de Shell en Argentina desde el jueves de boicot." en *La Jornada*. México. p. 24.
38. Afp. (7/abr/05). "Da resultado el boicoteo contra petroleros en Argentina, bajan precios." en *La Jornada*. México. p. 31.
39. Afp. (19/jun/05). "Actúan los empresarios con lógica perversa, acusa el gobierno argentino." en *La Jornada*. México. p. 26.
40. Afp. (18/jul/05). "Buscará Argentina reactivar líneas de ayuda con el FMI." en *La Jornada*. México. p. 25.
41. Afp. (20/jul/05). "Kirchner insta a empresas privatizadas a retirar reclamos contra el gobierno." en *La Jornada*. México. p. 23.
42. Afp. (20/jul/05). "Acusa Kirchner a empresarios de querer saquear bolsillos." en *La Jornada*. México.
43. Ap y Reuters. (25/ago/99). "Crece ventaja de la oposición sobre Duhalde." en *Reforma*. México.
44. Ap. (3/ene/02). "Integran gabinete peronistas y UCR." en *Reforma*. México.
45. Aviles, Jaime. (26/dic/01). "Rodríguez Saá planearía mantener el poder hasta 2003." en *La Jornada*. p. 25.
46. Aviles, Jaime. (27/dic/01). "Hipotecará el gobierno todos los bienes del país para respaldar la nueva moneda, al argentino." en *La Jornada*. p. 24.
47. Aviles, Jaime. (6/ene/02). "Aprueba la Cámara en lo general el paquete de medidas de emergencia." en *La Jornada*. p. 19.
48. Aviles, Jaime. (10/ene/02). "Ofrecen petroleras anticipo al gobierno argentino para dejar sin efecto el impuesto a exportaciones." en *La Jornada*. p. 22.

49. Bermúdez, Ismael. (14/may/06). “Mantendrán la doble indemnización aunque el desempleo baje del 10%.” en *Clarín*. p. www.clarin.com
50. Blanco, Javier. (16/nov/01). “El canje estará en marcha desde el lunes.” en *La Nación*. Argentina. Sección 2. p. 3.
51. Blanco, Javier. (24/nov/01). “El canje de deuda ya se aseguró 12,500 mdd.” en *La Nación*. Argentina. p. 1 y sección 2 p. 3.
52. Blanco, Javier. (29/nov/01). “Llega a los \$35,500 mdd el canje local de la deuda.” en *La Nación*. Argentina. p. 1 y sección 2 p. 1.
53. Bazzan, Gustavo. (4/abr/06). “El gobierno sale a poner límite al reclamo de aumento salarial.” en *Clarín*. Argentina. p. 3.
54. Braga, Paulo. (7/nov/05). “La hora de los excluidos.” en *La Jornada*. Suplemento en la economía. México. p. 6.
55. Calloni, Stella. (12/mayo/99). “Posible marcha atrás de Menem sobre el recorte de educación.” en *La Jornada*. México.
56. Calloni, Stella. (20/mayo/99). “Llega a Buenos Aires marcha contra el ajuste de la educación.” en *La Jornada*. México.
57. Calloni, Stella. (22/jul/99). “Ayuda económica urgente exigen productores agrarios a Menem.” en *La Jornada*. México.
58. Calloni, Stella. (20/ago/99). “Protestas en Argentina contra la política neoliberal de Menem.” en *La Jornada*. México.
59. Calloni, Stella. (7/sep/99). “Revocaría asilo a Oviedo si gana elecciones.” en *La Jornada*. México.
60. Calloni, Stella. (10/oct/99). “Intensifica Menem sus ataques contra la oposición política.” en *La Jornada*. México.
61. Calloni, Stella. (19/oct/99). “Concentrada en Buenos Aires la lucha entre aliancistas y peronistas.” en *La Jornada*. México.
62. Calloni, Stella. (9/dic/99). “En peligro de que no asuman dos ministros designados por De la Rúa.” en *La Jornada*. México.
63. Calloni, Stella. (18/dic/99). “Represión en Argentina: dos muertos.” en *La Jornada*. México.
64. Calloni, Stella. (29/ene/00). “Alcanza Argentina un acuerdo crediticio stand by con el FMI.” en *La Jornada*. México.
65. Calloni, Stella. (15/feb/00). “Destacan analistas los logros gubernamentales en Argentina.” en *La Jornada*. México.
66. Calloni, Stella. (25/feb/00). “Repudian miles de trabajadores la reforma laboral Argentina.” en *La Jornada*. México.
67. Calloni, Stella. (27/abr/00). “Reprimen en Argentina protesta contra la reforma laboral.” en *La Jornada*. México.

68. Calloni, Stella. (30/may/00). "Reducción de 938 mdd en el gasto público: De la Rúa." en *La Jornada*. México.
69. Calloni, Stella. (1/jun/00). "Multitudinaria protesta contra el FMI de trabajadores argentinos." en *La Jornada*. México.
70. Calloni, Stella. (10/jun/00). "Paro general en Argentina." en *La Jornada*. México.
71. Calloni, Stella. (16/jun/00). "Deroga el Senado decretos de De la Rúa sobre recortes de salario." en *La Jornada*. México.
72. Calloni, Stella. (10/ago/00). "Gigantesca marcha contra el ajuste económico de De la Rúa." en *La Jornada*. México.
73. Calloni, Stella. (3/mar/01). "Cayó el ministro de economía de Argentina." en *La Jornada*. México.
74. Calloni, Stella. (18/jul/01). "Confirman todas las centrales sindicales paro general en Argentina para mañana." en *La Jornada*. México.
75. Calloni, Stella. (10/sep/01). "Poco queda de la alianza." en *La Jornada*. México.
76. Calloni, Stella. (15/oct/01). "Triunfo del peronismo en las elecciones para renovar 50% del congreso argentino." en *La Jornada*. México.
77. Calloni, Stella. (17/oct/01). "Caos en Argentina si no se escucha el voto popular." en *La Jornada*. México.
78. Calloni, Stella. (3/dic/01). "De la Rúa pide a Argentina apoyar la dolarización bancaria." en *La Jornada*. México. p. 34.
79. Calloni, Stella. (24/dic/01). "Rodríguez Saá jura como presidente argentino y suspende pago de la deuda." en *La Jornada*. México. p. 25.
80. Calloni, Stella. (11/dic/01). "Desde que asumí vivo apagando incendios dice De la Rúa al cumplir dos años de mandato." en *La Jornada*. México. p. 43.
81. Calloni, Stella. (27/dic/01). "Derogará Rodríguez Saá la rebaja salarial decretada por De la Rúa." en *La Jornada*. México. p. 22.
82. Calloni, Stella. (29/dic/01). "Condiciona Bus ayudar a Argentina vía el FMI." en *La Jornada*. México. p. 19.
83. Calloni, Stella. (31/dic/01). "Renuncia Rodríguez Saá por tanta mezquindad. Argentina en el caos." en *La Jornada*. México. p. 22.
84. Calloni, Stella. (2/ene/02). "Argentina está quebrada, admite el presidente Eduardo Duhalde." en *La Jornada*. México. p. 24.
85. Calloni, Stella. (7/ene/02). "Desaparece la igualdad peso-dólar en Argentina." en *La Jornada*. México. p. 22.
86. Calloni, Stella. (10/ene/02). "Anuncia el ministro de Economía que el corralito será flexibilizado." en *La Jornada*. México. p. 21.
87. Calloni, Stella. (16/ene/02). "Menem, responsable de la crisis argentina, acusa Eduardo Duhalde." en *La Jornada*. México. p. 25.

88. Calloni, Stella. (18/ene/02). "Flexibiliza parcialmente Eduardo Duhalde el corralito bancario." en *La Jornada*. México. p. 27.
89. Calloni, Stella. (1/feb/02). "Nuevos cacerolazos en Buenos Aires; exigen la renuncia de magistrados." en *La Jornada*. México. p. 25.
90. Calloni, Stella. (4/feb/02). "Pesificación total y libre flotación entre las medidas del nuevo plan argentino." en *La Jornada*. México. p. 26.
91. Calloni, Stella. (1/mar/02). "Reprime la policía argentina las protestas de docentes en La Plata." en *La Jornada*. México. p. 26.
92. Calloni, Stella. (10/abr/02). "Más de 65 mil argentinos perdieron su empleo en marzo, según una consultora privada." en *La Jornada*. México. p. 32.
93. Calloni, Stella. (20/abr/02). "Feriado bancario por tiempo indeterminado en Argentina." en *La Jornada*. México. p. 31.
94. Calloni, Stella. (24/abr/02). "Renuncia equipo económico de Duhalde." en *La Jornada*. México. p. 31.
95. Calloni, Stella. (9/may/02). "Ahorristas argentinos redoblan las protestas y crece la tensión." en *La Jornada*. México. p. 40.
96. Calloni, Stella. (16/may/02). "Empresas argentinas a merced de bancos y acreedores extranjeros por la Ley de Quiebras." en *La Jornada*. México. p. 32.
97. Calloni, Stella. (3/jun/02). "La crisis, centro de desvelos de los argentinos." en *La Jornada*. México. p. 33.
98. Calloni, Stella. (15/nov/02). "Argentina entra en mora con el BM, mantiene sus reservas." en *La Jornada*. México. p. 29.
99. Calloni, Stella. (23/nov/02). "Anuncia el gobierno de Argentina la apertura total del corralito." en *La Jornada*. México. p. 26.
100. Calloni, Stella. (14/dic/02). "Argentina anuncia que no pagará al BM 726 mdd por deuda vencida." en *La Jornada*. México. p. 29.
101. Calloni, Stella. (21/may/03). "Kirchner presenta su gabinete." en *La Jornada*. México. p. 34.
102. Calloni, Stella. (22/may/03). "Argentina no aceptará imposiciones del FMI." en *La Jornada*. México. p. 31.
103. Calloni, Stella. (26/may/03). "Propongo una Argentina con todos y para todos: Kirchner." en *La Jornada*. México. p. 32.
104. Calloni, Stella. (30/dic/03). "Kirchner estudia posible derogación de la ley de flexibilización laboral." en *La Jornada*. México. p. 26.
105. Calloni, Stella. (2/feb/04). "Tenedores de bonos de deuda argentina amenazan con embargar bienes del país." en *La Jornada*. México. p. 34.
106. Calloni, Stella. (14/feb/04). "Respaldan en Argentina mora de Kirchner." en *La Jornada*. México. p. 30.

107. Calloni, Stella. (26/mar/04). "Riesgo de crisis energética en Argentina; duras críticas de Kirchner a petroleras." en *La Jornada*. México. p. 37.
108. Calloni, Stella. (13/ene/05). "Lanza Lavagna el canje de la deuda Argentina; de 50% la oferta de quita." en *La Jornada*. México. p. 24.
109. Calloni, Stella. (11/mar/05). "Convoca Kirchner a un boicot nacional contra Shell por encarecer combustibles." en *La Jornada*. México. p. 26.
110. Calloni, Stella. (29/mar/05). "Demanda el FMI a Argentina nuevas reformas estructurales." en *La Jornada*. México. p. 22.
111. Calloni, Stella. (24/oct/05). "Cristina Fernández de Kirchner gana senaduría por Buenos Aires." en *La Jornada*. México. p. 34.
112. Calloni, Stella. (16/dic/05). "Argentina pagará por adelantado su deuda con el FMI: Kirchner." en *La Jornada*. México. p. 22.
113. Candelaresi, Cleidis. (28/abr/06). "Desacuerdos de fondo por la obra pública." en *Página 12*. Argentina. p. 3.
173. Carballo de Cilley, Marita. (4/feb/94). "Perspectivas de los argentinos para 1994." en *La Nación*. Argentina. p. 7.
114. Cason, Jim y David Brooks. (11/ene/02). "Insuficientes aún las medidas adoptadas por el gobierno argentino, estima la casa blanca." en *La Jornada*. México. p. 29.
115. Castro, María. (27/abr/01). "Eliminarán impuestos y aportes patronales." en *La Nación*. Argentina. Sección 2. p. 1 y 2.
116. Colonna, Lucas. (5/abr/06). "Kirchner tratará de contener a Moyano." en *La Nación*. Argentina. p. 7.
117. Cufre, David. (5/mar/02). "Una cuota de la renta que da la devaluación." en *Página 12*. Argentina. p. 2-3.
118. Cufre, David. (16/abr/06). "Moreno empezó a negociar rapidito para bajar el precio de la carne." en *Página 12*. Argentina. p. 8.
119. Dpa y Notimex. (31/ago/02). "Argentina pidió al FMI prórroga por un año." en *La Jornada*. México. p. 31.
120. De la Rúa, Fernando. (19/oct/99). "Tres caminos hacia el poder. La alianza del siglo XXI." en *Reforma*. México. p. 26A.
121. Dos Santos, Theotonio. (11/dic/01). "Aclaraciones sobre la coyuntura." en *Reforma*. México.
122. Duhalde, Eduardo. (19/oct/99). "Tres caminos hacia el poder. Continuidad y renovación." en *Reforma*. México. p. 26A.
123. Ferreres, Orlando (entrevista) (19/ago/89). "El acuerdo de estabilidad regiría hasta fin de año." en *La Nación*. Argentina. p. 10.
124. Gallo, Alejandro. (19/may/06). "Las críticas empresarias a las reformas laborales ya generan un fuerte debate." en *Clarín*. Argentina.

125. García, Carla. (13/jul/01). "Tienen día de pesadilla." en *Reforma*. México.
126. García, Carla y Alejandra Asensio. (7/dic/01). "Califican de positiva la decisión del FMI." en *Reforma*. México.
127. González, Maribel. (30/abr/01). "Reinicia el FMI ayuda a Argentina." en *Reforma*. México.
128. González, Roberto y Jim Cason. (23/abr/04). "Argentina debe reanudar el pago de su deuda externa." en *La Jornada*. México. p. 25.
129. Illiano, César. (14/abr/00). "Apoyo empresarial al plan exportador." en *La Nación*. Argentina. Sección 2. p. 1.
130. Kanenguiser, Martín. (10/abr/00). "Los salarios de \$400 son mayoría." en *La Nación*. Argentina. Sección 2. p. 10.
131. Kanenguiser, Martín. (2/nov/00). "La economía de este año se acerca al estancamiento." en *La Nación*. Argentina. Sección 2. p. 1.
132. Kanenguiser, Martín. (10/nov/00). "El FMI dará una ayuda de US \$10,000 mdd." en *La Nación*. Argentina. p. 1, 7, 8 y 9.
133. Kanenguiser, Martín. (22/abr/01). "Cavallo: se recortará el gasto en 700 millones." en *La Nación*. Argentina. p. 1 y 8-10.
134. Kanenguiser, Martín. (28/abr/01). "Cavallo anunció más recortes y aumentó varios impuestos." en *La Nación*. Argentina. p. 1 y Sección 2. p. 1.
135. Kanenguiser, Martín. (23/nov/01). "El FMI no enviará nuevos fondos antes de fines de año." en *La Nación*. Argentina. Sección 2. p. 3.
136. Krakowiak, Fernando. (31/mar/06). "Si no bajan, de renegociar ni hablemos." en *Página 12*. Argentina. p. 5.
137. Mora y Araujo, Manuel. (1993a). "El 3 de octubre: elecciones en un país que no es el mismo." en *La Nación*. 2 de agosto. Argentina.
138. Montenegro, Maximiliano. (20/may/06) "Empresarios al borde de un ataque de nervios." en *Página 12*. Argentina. p. 3.
139. Muscatelli, Natalio. (15/may/06). "Limitan el margen de ganancia en algunos productos textiles." en *Clarín*. Argentina.
140. Niebieskikwiat, Natasha. (17/jun/03). "Néstor Kirchner aprovecha el bono democrático." en *El Financiero*. México.
141. O'Donnell, María. (1/nov/00). "El FMI dice que la Argentina no necesita dinero extra." en *La Nación*. Argentina. Sección 2. p. 1.
142. O'Donnell, María. (28/nov/00). "El FMI desembolsará 5,000 mdd en forma inmediata." en *La Nación*. Argentina. Sección 2. p. 1.
143. Pairone, Alejandro. (21/dic/01). "Discuten peronistas sucesión." en *Reforma*. México. p. 1A.

144. Pairone, Alejandro. (24/dic/01). "Dirigen a Argentina fuerzas divergentes." en *Reforma*. México. p. 21A.
145. Pairone, Alejandro. (2/ene/02). "Ofrece Duhalde plan de salvación nacional." en *Reforma*. México.
146. Pairone, Alejandro. (20/abr/02). "Confiscan ahorros en la Argentina." en *Reforma*. México.
147. Pairone, Alejandro. (29/abr/02). "Los caceroleros." en *Reforma*. México. p. 8A.
148. Pinal, Norma. (15/dic/01). "Paga Argentina y evita moratoria." en *Reforma*. México.
149. Ponce, Daniel. (15/nov/91). "La Cámara alta sancionó anoche la ley de accidentes de trabajo" en *La Nación*. Argentina. p. 1 y 12.
150. Quiroga, Anabella. (23/nov/02). "Liberan la plata de cajas de ahorro y cuentas corrientes." en *Clarín*. Argentina.
151. Quiroga, Anabella. (17/ene/03). "Argentina pagó y finalmente logró acordar con el FMI." en *Clarín*. Argentina. p. 3.
152. Redacción. (18/ago/89). "Diputados se opuso, pero es ley la reforma laboral." en *La Nación*. Argentina. p. 1.
153. Redacción. (20/ago/89). "Expectativas favorables en la opinión pública por el gobierno de Menem." en *La Nación*. Argentina. p. 6.
154. Redacción. (25/ago/89). "Diputados modificó la Ley de Emergencia." en *La Nación*. Argentina. p. 5.
155. Redacción. (31/ago/89). "Preocupación oficial por las reformas a la Ley de Emergencia." en *La Nación*. Argentina. p. 4.
156. Redacción. (2/sep/89). "Anunciaron estímulos para invertir y exportar." en *La Nación*. Argentina. p. 1, 14, 16 y 17.
157. Redacción. (2/sep/89). "Sanción definitiva en el parlamento para la emergencia económica." en *La Nación*. Argentina. p. 1, 6 y 7.
158. Redacción. (1/feb/90). "Rige el IVA generalizado." en *La Nación*. Argentina. p. 1 y 18.
159. Redacción. (1/feb/90). "Fuertes aumentos en las tarifas públicas." en *La Nación*. Argentina. p. 1 y 12.
160. Redacción. (2/feb/90). "Critica generalizada en los sectores empresariales." en *La Nación*. Argentina. p. 1 y 11.
161. Redacción. (1/nov/91). "El presidente Menem anunció una amplia desregularización económica." en *La Nación*. Argentina. p. 1 y 18-23.
162. Redacción. (13/nov/91). "Privatizarán el gerenciamiento de empresas públicas." en *La Nación*. Argentina. p. 1 y 15.
163. Redacción. (14/nov/91). "El senado sancionó la ley nacional del empleo." en *La Nación*. Argentina. p. 1 y 17-20.

164. Redacción. (3/dic/92). “La deuda pública es de 70,000 millones.” en *La Nación*. Argentina. Sección 2. p. 3.
165. Redacción. (4/dic/92). “UCR: revisará lo actuado en el área energética.” en *La Nación*. Argentina. p. 1 y 6.
166. Redacción. (6/dic/92). “Etapas de una negociación.” en *La Nación*. Argentina. p. 24.
167. Redacción. (6/dic/92). “La Argentina firma su entrada en el Brady.” en *La Nación*. Argentina. p. 1, 24 y 25.
168. Redacción. (9/dic/92). “Cavallo busca fondos en Japón para el Brady.” en *La Nación*. Argentina. Sección 2. p. 1.
169. Redacción. (26/ago/99). “Fue sancionada la Ley de equilibrio fiscal.” en *La Nación*. Argentina. p. 1, 6 y 9.
170. Redacción. (26/ago/99). “Impulsa Duhalde un shock económico.” en *La Nación*. Argentina. p. 1.
171. Redacción. (16/dic/99). “Aprueban reforma impositiva.” en *La Nación*. Argentina. p. 9.
172. Redacción. (30/dic/99). “El gobierno obtuvo el paquete fiscal.” en *La Nación*. Argentina. p. 5-10.
173. Redacción. (27/abr/00). “Aprobó el Senado la flexibilización.” en *La Nación*. Argentina. p. 5-7.
174. Redacción. (6/oct/00). “De la Rúa renovó al gabinete y le dio más poder a Machinea.” en *La Nación*. Argentina. p. 1 y 7-14.
175. Redacción. (7/oct/00). “Álvarez renunció por discrepar con las decisiones de De la Rúa.” en *La Nación*. Argentina. p. 1 y 7-16.
176. Redacción. (11/nov/00). “De la Rúa pidió confianza en el programa económico.” en *La Nación*. Argentina. Sección 2. p. 1 y 2.
177. Redacción. (13/nov/00). “El FMI doblará su presión por el ajuste provincial.” en *La Nación*. Argentina. Sección 2. p. 1.
178. Redacción. (16/nov/00). “Se alcanzó acuerdo con los gobernadores.” en *La Nación*. Argentina. p. 1, 6, 7 y 8.
179. Redacción. (8/dic/00). “Se frenó el blindaje por los cambios en el presupuesto.” en *La Nación*. Argentina. p. 1 y 6.
180. Redacción. (13/dic/00). “Es ley el presupuesto, con los cambios del Senado.” en *La Nación*. Argentina. p. 1, 8 y 9.
181. Redacción. (18/dic/00). “Día fundamental para el gobierno: hoy se anunciará el blindaje.” en *La Nación*. Argentina. p. 1.
182. Redacción. (19/dic/00). “El blindaje es de 39,700 mdd.” en *La Nación*. Argentina. p. 1.

183. Redacción. (19/mar/01). “Crisis en el gobierno luego del anuncio de las medidas de ajuste.” en *La Nación*. Argentina. p. 1, 5-10.
184. Redacción. (22/mar/01). “Cavallo: el país volverá a crecer sin devaluar.” en *La Nación*. Argentina. p. 1, 4-11.
185. Redacción. (30/mar/01). “Confianza en Cavallo para salir de la crisis.” en *La Nación*. Argentina. p. 1 y 10.
186. Redacción. (16/abr/01). “El peso con valor flexible.” en *La Nación*. Argentina. Sección 2. p. 2.
187. Redacción. (27/abr/01). “El gobierno apura el canje de la deuda.” en *La Nación*. Argentina. Sección 2. p. 2.
188. Redacción. (16/jun/01). “Ajusta Argentina paridad comercial.” en *Reforma*. México.
189. Redacción. (18/oct/01). “Ven a Argentina sin avance.” en *Reforma*. México.
190. Redacción. (27/mar/06). “El agua no se toca.” en *Página 12*. Argentina. p. 11.
191. Redacción. (6/abr/06). “En el gobierno brindan con agua.” en *Página 12*. Argentina. p. 7.
192. Redacción. (6/abr/06). “Esperan bajas en el precio de la carne.” en *La Nación*. Argentina. p. 2.
193. Redacción. (12/abr/06). “La baja de precios se hace desear en las carnicerías.” en *Página 12*. Argentina. p. 6.
194. Redacción. (28/abr/06). “El turno de la ropa en el combate a la inflación.” en *Página 12*. Argentina.
195. Redacción. (18/may/06). “El gobierno acordó precios con los autoservicios chinos.” en *Clarín*. Argentina.
196. Redacción. (19/may/06). “Quejas de los empresarios por las reformas a las leyes laborales.” en *Clarín*. Argentina. p. 13.
197. Redacción. (19/may/06). “Las cerealeras aceptaron exportar menos trigo por pedido del gobierno.” en *Clarín*. Argentina.
198. Reuters. (19/nov/01). “Niega el FMI a Argentina nuevos recursos para salvarla del colapso.” en *La Jornada*. México.
199. Reuters. (26/ago/04). “Propuesta más creíble para acreedores, piden a Argentina.” en *La Jornada*. México.
200. Reuters. (6/feb/05). “Aceptan 73.8% de acreedores locales el canje de deuda.” en *La Jornada*. México. p. 24.
201. Rodríguez, Martín. (30/mar/01). “Cavallo ya puede usar los poderes especiales.” en *La Nación*. Argentina. p. 10.
202. Rosales, Jorge. (22/dic/99). “Promesa de los bancos de apoyar al gobierno.” en *La Nación*. Argentina. Sección 2. p. 1.

203. Rosales, Jorge. (18/nov/01). "Cavallo negocia fondos para evitar más recortes." en *La Nación*. Argentina. p. 1 y Sección 2 p. 3.
204. Rosales, Jorge. (18/nov/01). "Cavallo negocia fondos para evitar más recortes." en *La Nación*. Argentina. p. 1 y Sección 2 p. 3.
205. Rossi, Antonio. (18/ene/03). "El gobierno insistirá con los aumentos de luz y gas." en *Clarín*. Argentina. p. 3.
206. Schurman, Diego. (6/abr/06). "Los camioneros lograron un aumento y levantaron la medida de fuerza." en *Página 12*. Argentina.
207. Serra, Laura. (22/nov/01). "Los diputados de la Alianza insisten en subir ganancias." en *La Nación*. Argentina. Sección 2. p. 1.
208. Simone, Eduardo de. (11/nov/91). "Lanzan hoy el plan de privatizaciones." en *La Nación*. Argentina. p. 1 y 13.
209. Simone, Eduardo de. (7/dic/92). "El superávit fiscal es el nuevo desafío" en *La Nación*. Argentina. p. 14.
210. Steinsleger, José. (5/abr/02). "Argentina: destrucción... ¿y después qué?" en *La Jornada*. Suplemento especial. México.
211. The Economist. (31/may/05). "Obtiene la banca Argentina sus primeras ganancias desde 2001." en *La Jornada*. México. p. 23.
212. Vales, José. (7/jul/99). "Cerrarán bancos argentinos." en *Reforma*. México.
213. Vales, José. (13/jul/99). "Tiran rumores a Argentina." en *Reforma*. México.
214. Vales, José. (15/jul/99). "Aumenta riesgo argentino." en *Reforma*. México.
215. Vales, José. (25/jul/99). "Casa tomada." en *Reforma*. México.
216. Vales, José. (28/jul/99). "Tiembla el MERCOSUR." en *Reforma*. México.
217. Vales, José. (2/ago/99). "Critican industriales a Menem." en *Reforma*. México.
218. Vales, José. (30/sep/99). "Intensifican guerra de palabras candidatos rivales en Argentina." en *Reforma*. México.
219. Vales, José. (6/may/00). "Vive Argentina paro general." en *Reforma*. México.
220. Vales, José. (12/oct/00). "Despide De la Rúa polémico asesor". en *Reforma*. México.
221. Vales, José. (10/dic/00). "De la Rúa, un año de polémica." en *Reforma*. México.
222. Vales, José. (17/mar/01). "Entra en crisis el gobierno Argentino.". en *Reforma*. México.
223. Vales, José. (20/mar/01). "Se va López Murphy." en *Reforma*. México.
224. Vales, José. (21/mar/01). "Tiene fría bienvenida." en *Reforma*. México.
225. Vales, José. (22/mar/01). "Triunfa la huelga argentina." en *Reforma*. México.
226. Vales, José. (29/mar/01). "Insta De la Rúa a colaborar en plan de competitividad." en *Reforma*. México.

227. Vales, José. (30/mar/01). “Logran apoyo para gabinete en Argentina.” en *Reforma*. México.
228. Vales, José. (27/abr/01). “Dan confianza a bolsas.” en *Reforma*. México.
229. Vales, José. (4/may/01). “Pide Argentina calma.” en *Reforma*. México.
230. Vales, José. (2/ene/02). “Duhalde preside Argentina; devaluará.” en *El Universal*. México. p. A20.
231. Vales, José. (3/ene/02). “Rechazan oferta para integrar el gabinete.” en *El Universal*. México. p. A16.
232. Vernengo, Andrés. (21/dic/01). “Temen riesgos países vecinos.” en *Reforma*. México. p. 32A.
233. Villosio, María. (29/dic/99). “Los cambios introducidos por el PJ.” en *La Nación*. Argentina. p. 6.
234. Wainfel, Mario. (2/abr/06). “Se acabaron los aumentos indiscriminados de tarifas” en *Página 12*. Argentina. p. 8.